

**MOVIMIENTOS SOCIALES Y SISTEMAS
POLÍTICOS EN AMÉRICA LATINA
CHRISTIAN ADEL MIRZA**

La Colección Becas de Investigación es el resultado de una iniciativa dirigida a la promoción y difusión de los trabajos de los/as investigadores/as de América Latina y el Caribe que CLACSO impulsa a través del Programa Regional de Becas.

Este libro presenta la investigación que el autor realizó en el marco del Concurso de Proyectos para Investigadores Senior *Movimientos Sociales y nuevos conflictos en América Latina y el Caribe* del Programa de Becas CLACSO-Asdi de Promoción de la Investigación Social que se viene desarrollando gracias al patrocinio de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, Asdi.

Mirza, Christian Adel

Movimientos sociales y sistemas políticos en América latina : la construcción de nuevas democracias - 1a ed. - Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, 2006. 304 p. ; 23x16 cm.

ISBN 987-1183-45-3

1. Movimientos Sociales. 2. Sistemas Políticos. 3. Democracia.
I. Título CDD 321.8

Otros descriptores asignados por la Biblioteca Virtual de CLACSO:

Movimientos Sociales / Sistemas Políticos / Democracia / Partidos Políticos / Ciudadanía / Acción Colectiva / Poder Político / América Latina.

COLECCIÓN BECAS DE INVESTIGACIÓN

**MOVIMIENTOS SOCIALES Y SISTEMAS
POLÍTICOS EN AMÉRICA LATINA:
LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS DEMOCRACIAS**

CHRISTIAN ADEL MIRZA



Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

Editor Responsable Atilio A. Boron, Secretario Ejecutivo de CLACSO

Colección Becas de Investigación

Directora de la colección Bettina Levy, Coordinadora del Programa Regional de Becas

Asistentes del Programa Natalia Gianatelli - Luciana Lartigue

Revisión técnica de textos Ernesto Funes

Área de Difusión y Producción Editorial de CLACSO

Coordinador Jorge Fraga

Edición

Responsable: Florencia Enghel | *Equipo:* Ivana Brighenti - Mariana Enghel - María Espósito

Diseño editorial

Responsable: Miguel A. Santángelo | *Equipo:* Marcelo Giardino

Divulgación editorial

Responsable: Marcelo F. Rodriguez | *Equipo:* Sebastián Amenta - Daniel Aranda - Carlos Ludueña

Arte de tapa Diseño: Marcelo Giardino. Foto: cortesía de Marcelo F. Rodriguez, Quito, Ecuador, julio de 2004

Impresión Gráficas y Servicios SRL

Primera edición

Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina.

La construcción de nuevas democracias

(Buenos Aires: CLACSO, junio de 2006)

[ISBN-10] 987-1183-45-3 | [ISBN-13] 978-987-1183-45-6

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Queda hecho el depósito que establece la Ley 11.723.

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Av. Callao 875 | piso 3º | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4811 6588 | Fax [54 11] 4812 8459 | e-mail <clacso@clacso.edu.ar> | web <www.clacso.org>

Patrocinado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional



No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

a Charles Mirza

INDICE

PRÓLOGO		13
PARTE I		
LOS ASUNTOS EN DEBATE		17
CAPÍTULO I		
RAZONES, MOTIVACIONES E IMPULSOS: ¿POR QUÉ ESTUDIAR LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y SU RELACIÓN CON LOS SISTEMAS POLÍTICOS EN AMÉRICA LATINA?		19
CAPÍTULO II		
ACERCA DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA		23
CAPÍTULO III		
LAS DEMOCRACIAS, LOS SISTEMAS POLÍTICOS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL SUBCONTINENTE: CONVIVENCIA, COEXISTENCIA Y CONFRONTACIÓN EN LOS MÁRGENES DE LA ERA MODERNA		39
CAPÍTULO IV		
EL ESTADO DEL ARTE		45

PARTE II	
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LOS SISTEMAS POLÍTICOS EN AMÉRICA LATINA	49
CAPÍTULO I	
LOS MARCOS TEÓRICOS DE INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS	51
CAPÍTULO II	
LOS CASOS EXAMINADOS: MOVIMIENTOS SOCIALES Y SISTEMAS DE PARTIDOS EN ARGENTINA, BRASIL, CHILE, ECUADOR, PARAGUAY, VENEZUELA Y URUGUAY	67
CAPÍTULO III	
SISTEMAS POLÍTICOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES: DOS REALIDADES INTERPENETRADAS	173
PARTE III	
UNA MIRADA EN EL HORIZONTE PRÓXIMO: TENTATIVAS PROSPECTIVAS, ESCENARIOS PROBABLES	199
CAPÍTULO I	
EVOLUCIÓN DE LA REGIÓN EN SU CONJUNTO: EL SUBCONTINENTE Y SUS DESAFÍOS DEMOCRÁTICOS Y SOCIALES	201
CAPÍTULO II	
FACTORES INHIBIDORES Y ESTIMULADORES DEL DESARROLLO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES: BLOQUEOS Y POTENCIALIDADES	209
CAPÍTULO III	
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES: OPORTUNIDADES DE EXPANSIÓN, CONTRIBUCIONES PARA UNA NUEVA DEMOCRACIA DESDE ABAJO	223
CAPÍTULO IV	
CONCLUSIONES FINALES: CINCO TESIS RESPECTO A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, LA DEMOCRACIA Y LOS SISTEMAS POLÍTICOS	251
BIBLIOGRAFÍA	267

ANEXO I

CONFIANZA EN INSTITUCIONES, DEMOCRACIA Y VOTO PARTIDARIO		277
---	--	-----

ANEXO II

PAUTA DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN: PROYECTO CLACSO-ASDI		285
---	--	-----

ANEXO III

PAUTA DE ENTREVISTA A DIRIGENTES SOCIALES: PROYECTO CLACSO-ASDI		289
--	--	-----

ANEXO IV

DIRIGENTES SOCIALES E INFORMANTES ENTREVISTADOS: PROYECTO CLACSO-ASDI		291
--	--	-----

Mirza, Christian Adel. Prólogo. En: Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina: la construcción de nuevas democracias. Programa Regional de Becas CLACSO, Buenos Aires, Argentina. 2006. ISBN: 987-1183-45-3. Disponible en la web: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/mirza/mirza.html>

PRÓLOGO

Fuente: Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de CLACSO

*Acciones y no elecciones
Esta democracia es una desgracia,
a construir la nueva democracia
Que se vayan todos*

ESTAS SON APENAS algunas de las consignas que tiñeron el discurso de los movimientos sociales en América Latina en las postrimerías de la centuria pasada y en los albores del siglo XXI. Se resumen en una idea central: las democracias restauradas han defraudado las expectativas de las grandes mayorías ciudadanas, que tras sufrir el oprobio de las dictaduras en casi toda la región, aspiraban con legítimo derecho a que se les reintegrara la dignidad perdida, y se mejoraran sensiblemente sus condiciones de vida, ya sumidas desde hacía décadas en la pobreza y la desigualdad social. La clase política, si es que la hay como tal, no respondió de la manera que se esperaba y resultó el blanco de las diatribas y acusaciones, muchas de ellas fundadas en denuncias de prácticas clientelares, interpelaciones a políticos envueltos en numerosos casos de corrupción, ineficacia e inoperancia, entre tantas razones que los ciudadanos esgrimieron para ahondar su descreimiento y desconfianza en los partidos políticos y, por extensión, también en la democracia como sistema. La rebelión y la protesta, la revuelta y la movilización de multitudes se caracterizaron por la radicalidad de los reclamos, cargados de hastío y decepción; así se manifestaron en sucesivos levantamientos los indígenas; en piquetes y marchas, los desocupados; en ocupaciones de tierra y movilizaciones, los *sin tierra*; en paros, cortes de ruta y manifestaciones callejeras, los trabajadores y campesinos.

Para muchos de los representantes electos (presidentes, diputados, senadores, intendentes, gobernadores), los representados dejaron de ser votos obtenidos de las canteras cautivas, de los patronazgos o del clientelismo más burdo, o genuinamente a través de procedimientos electorales transparentes y no tutelados; para ser, al menos por algunos “fugaces instantes”, una ciudadanía alzada en rebeldía, con voz propia y sin traductores, un pueblo reconvertido en *sujeto social*, un *sujeto colectivo* que demandaba no sólo ser escuchado, sino, y sobre todo, cambios profundos. Esta voz, por cierto polifónica, expresaba sin dudas un hartazgo de ciertas formas de hacer política, tal vez de la “vieja política”, para reivindicar una manera completamente nueva de vincularse con el poder institucional (el Estado) y con los demás actores sociales de la contienda (porque obviamente hay intereses contrapuestos y contradictorios). El discurso –ahora sí jacobino– de la homogeneidad, de la uniformidad, del pensamiento único como sustento ideológico del fin de las ideologías (menos la suya) “impuso” ideológicamente a las sociedades latinoamericanas la imperiosa necesidad de la sustitución de un modelo por otro (al viejo esquema keynesiano de sustitución de importaciones o la versión vernácula del desarrollismo le cupo una mercantilización casi absoluta en su lugar); así también al Estado de Bienestar le llegó su turno y, en su lugar, se impuso la eficiencia del patrón empresarial capitalista para mitigar y recomponer el estatuto de los más pobres, como portadores de derechos sociales.

Finalmente, el neoliberalismo se instaló en nuestras mentes y en nuestros esquemas interpretativos de los fenómenos socioeconómicos y culturales, lo internalizamos con tal profundidad que, aparentemente, estamos convencidos de que, después de todo, su advenimiento fue necesario, por más que se reconozcan sus efectos perversos (“inevitables”). Pero grande sería nuestro equívoco si pensáramos que los lastres de las economías estancadas, en crisis o en bancarrota, de las democracias interpeladas, de la exclusión social agigantada, fueron exclusivamente producto de externalidades o de vectores ajenos a la voluntad de la sociedad política, en fin, impuestos de manera vertical y autoritaria por agentes foráneos. Precisamente por la convicción de que se trata de un asunto mucho más complejo, y menos unilineal o mecánico, es que intentamos, como lo vienen haciendo muchos más desde hace tiempo, contribuir con algunas ideas que den cuenta de aquella complejidad, en un contexto convulsionado y más propenso a los cambios de envergadura que en épocas de mayor estabilidad. La revisión de las matrices históricas en la configuración del conflicto social, la evaluación de la vigencia del régimen político, el estudio de las relaciones entre sistema político y acción social colectiva, la vinculación entre clivajes sociales y económicos en la constitución de alianzas, antagonistas y actores, la incidencia y los condicionamientos (con frecuencia determinaciones

ineludibles) de la hegemonía imperial serán preocupaciones de nuestro presente análisis. Desde una mirada combinada, informada por la ciencia política y la sociología, por el examen de vectores económicos y culturales, intentaremos formular algunas contribuciones para una mejor comprensión de la acción de los movimientos sociales y la reconstrucción de la ciudadanía, la política y la democracia en la América Latina contemporánea.

¿Es acaso posible repensar la democracia? ¿Cuál es el papel que les cabe desempeñar a los movimientos sociales en la consolidación y, simultáneamente, la transformación de los sistemas democráticos? ¿Cuáles son las limitaciones, restricciones y constreñimientos de los movimientos sociales para su desarrollo autónomo? Estamos absolutamente convencidos de que es necesario y posible renovar profundamente los regímenes políticos en nuestro subcontinente, de que además a fortiori la ciudadanía ha demostrado poseer las capacidades y también las herramientas para hacerlo. Desde una plaza pública o desde una campamento de campesinos, desde una fábrica ocupada y recuperada o desde las experiencias microsociales de solidaridad y cooperación, desde un piquete o desde un estrado callejero, la política es así reapropiada por sus soberanos; ni el presidente, ni los magistrados ni los representantes pueden sustituir el papel central y esencial que les cabe a los ciudadanos, sin excepción alguna. Los rasgos de una democracia procedimental, precisamente cuando son sobredimensionados conllevan de suyo la degradación de la esencia democrática. Y no se trata de refutar los mecanismos que hacen posible la resolución de los conflictos conforme a reglas acordadas de antemano, pero cuando estas se erigen como “texto sagrado” y se reducen a rituales rutinarios, entonces se pierden las referencias sustantivas a una democracia que es ante todo participación en los asuntos públicos del colectivo humano. Es esta esencia democrática la que debe recuperarse; por ello, también, es posible soñar con nuevas utopías, tal como lo hicieron ideólogos, pensadores, ciudadanos de los siglos XVIII y XIX, que se plasmaron en las democracias liberales decimonónicas y se consolidaron en el siglo pasado. ¿Por qué no soñar con nuevas utopías, con nuevos paradigmas democráticos? Tal parece que ya se han corporizado tenue y parcialmente en los ensayos que las sociedades civiles y sobre todo los movimientos sociales han desarrollado en las últimas dos décadas, anunciando nuevas modalidades de entendimiento, de expansión de la ciudadanía, de ejercicio democrático “desde abajo”; son estas aportaciones las que de alguna manera también pretendemos rescatar en este trabajo.

Mirza, Christian Adel. Capítulo I. Razones, motivaciones e impulsos: ¿por qué estudiar los movimientos sociales y su relación con los sistemas políticos en América Latina? Intenciones epistemológicas y compromisos morales. En publicación: Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina: la construcción de nuevas democracias. Christian Adel Mirza. Programa Regional de Becas CLACSO, Buenos Aires, Argentina. 2006. ISBN: 987-1183-45-3. Disponible: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/mirza/cap1.pdf>

Fuente: Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la red CLACSO
<http://www.clacso.org.ar/biblioteca>

PARTE I

LOS ASUNTOS EN DEBATE

CAPÍTULO I

RAZONES, MOTIVACIONES E IMPULSOS: ¿POR QUÉ ESTUDIAR LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y SU RELACIÓN CON LOS SISTEMAS POLÍTICOS EN AMÉRICA LATINA?

INTENCIONES EPISTEMOLÓGICAS Y COMPROMISOS MORALES

¿POR QUÉ INVESTIGAR los movimientos sociales en América Latina? ¿Cuánto hay de nuevo? ¿Qué relación existe entre aquellos y sus respectivas democracias nacionales? ¿Cuánto hay de común entre ellos, y qué papel juegan en el actual contexto sociopolítico y económico del subcontinente? ¿Qué tienen que ver los movimientos sociales con la democracia y los partidos políticos?

Explicitaré, pues, las razones del interés por los movimientos sociales y las posibles contribuciones desde el enfoque de los científicos sociales que de una manera u otra aportan a desentrañar los procesos, complejos por cierto, de construcción de una acción social colectiva; como así también sus correlaciones con los sistemas políticos, y más particularmente con los sistemas de partidos.

En primer lugar, las democracias latinoamericanas emergidas del período autoritario manifiestan todavía importantes debilidades y falencias en términos sustantivos y formales; por un lado, porque en la mayor parte de las naciones sudamericanas aún no consiguen dar cuenta de los problemas sociales de la mayoría de sus respectivas poblaciones y, por otro, porque la inestabilidad ha sido para muchos la impronta de la última década.

Los asuntos vinculados a los modos o modelos de desarrollo de la región y sus efectos directos en la mejora del bienestar de los pueblos, la necesidad de encontrar alternativas económicas y políticas adecuadas a

los desafíos contemporáneos, y la reconstrucción de los mecanismos de convivencia y regulación pacífica de los conflictos constituyen, en definitiva, cuestiones que aún no encuentran respuestas sólidas y estables.

Antes bien, los acontecimientos sociales y políticos de fines del siglo XX y principios de la presente centuria alteran necesariamente la visión de una América Latina que, tras dejar atrás las dictaduras de los setenta y ochenta, iría a reencauzar sus democracias en el marco de formatos estables, asentados y permanentes. La viabilidad de aquellos formatos resultó seriamente interpelada, y fueron los sistemas de partidos la dimensión más vulnerada y visible de la descomposición y la desestructuración política. La democracia fue lesionada y agredida por los regímenes militares en casi todo el subcontinente durante los años setenta; sin embargo, y pocos años más tarde, una vez retomados los caminos de su restauración, la gran mayoría de los partidos con actuaciones seculares en la arena política demostraron su incapacidad para asumir la conducción eficaz de aquellos procesos de restauración democrática post-autoritaria, incluso en aquellas naciones que habían superado los períodos del militarismo vernáculo mucho antes que las del Cono Sur. Así pues, el sistema de partidos colapsó en Venezuela, se fragmentó en Ecuador, sufrió la furia popular en Argentina, por citar los casos tal vez más ilustrativos de un fenómeno que, lejos de ser exclusivamente atribuible a las condiciones internas y peculiares de cada país, reflejó una problemática común y más profunda.

La década del noventa dejó como saldo un deterioro significativo de las condiciones de vida de millones de latinoamericanos, que, pese a la recuperación a posteriori de las economías nacionales y regionales, no se vieron modificadas de manera sustantiva. La implantación del neoliberalismo en mayor o menor grado de profundidad y alcance provocó en la última década del siglo pasado una degradación más acentuada del bienestar de grandes contingentes de trabajadores asalariados, campesinos, pequeños productores, entre otros sectores sociales que, aun al abrigo de políticas sociales compensatorias, quedaron despojados del ejercicio pleno de sus derechos. El despliegue de políticas públicas que se sustentaron y autojustificaron en la mentada globalización neoliberal y en la necesidad de una reinserción internacional –que implicaron desregulación y flexibilización laboral, desindustrialización en muchos casos, privatizaciones, achicamiento y prescindencia del Estado, liberalización de los mercados, apertura económica y comercial, libre circulación de capitales (sobre todo financieros y especulativos)– agravaron los problemas sociales y provocaron el surgimiento de nuevos conflictos.

La tarea de los científicos sociales latinoamericanos debe contribuir también, en esta dirección, a ofrecer un marco de análisis socio-político, a fin de describir y comparar, intentar explicar e interpretar

los fenómenos y procesos sociales, identificar los clivajes y factores de diverso orden que inciden directa e indirectamente en los cursos históricos de las naciones del subcontinente y, de manera específica, en la construcción de nuevos escenarios democráticos.

En segundo lugar, este contexto caracterizado por la hegemonía del neoliberalismo en términos de paradigma económico, ideológico y cultural, resignificó la dependencia de América Latina de la potencia imperial norteamericana, sobre todo y mucho más después de la caída del bloque soviético. Con la decisiva influencia de los organismos internacionales tales como el FMI, el Banco Mundial y el BID, los países del subcontinente debieron transitar por una etapa que dejaba atrás el modelo sustitutivo de importaciones, el Estado de Bienestar (al menos como paradigma social, más allá de su instrumentación parcial y recordada) y la consideración de un modo desarrollista que tenía al Estado como su principal mentor.

El mapa de los conflictos sociales, en consecuencia, iría variando en su configuración económica y política. La emergencia de los nuevos movimientos sociales está vinculada al descenso del protagonismo de la clase obrera y sus organizaciones, a la relevancia que tomaron otras problemáticas tales como la exclusión histórica de los pueblos indígenas, el papel de la mujer en la sociedad, la degradación del medio ambiente y la destrucción impune de la biodiversidad, entre otras cuestiones. Los movimientos sociales latinoamericanos prefiguran nuevos ejes del conflicto social que ameritan un estudio cuidadoso de sus estrategias y formas de lucha, de sus demandas e interpelaciones, de sus logros y conquistas sociales. A mi juicio, los nuevos y viejos movimientos sociales desempeñan un papel central en la delimitación de los campos de controversia en la distribución del poder, de los recursos, y los rumbos de la historia de la democracia. Mi convencimiento a priori de que dichos movimientos sociales deberán jugar un rol fundamental en la construcción de nuevas democracias participativas que superen la debilidad intrínseca de las democracias meramente representativas, reconociendo sus insuficiencias y limitaciones actuales, me ha empujado a la ardua faena, pero subyugante, del examen y estudio de la acción social colectiva en América Latina.

Por ello me he propuesto desarrollar la presente investigación en el entendido de aportar apenas algunos insumos conceptuales, algunas herramientas de análisis y valoraciones respecto del papel de los movimientos sociales en la búsqueda de refundar una democracia inclusiva y, por ende, más genuina.

En tercer lugar, el vínculo históricamente entretejido entre movimientos sociales y partidos políticos –independientemente de su signo, de sus orígenes, causas y efectos, del tipo de relaciones entre ambos actores, de sus múltiples modalidades y variantes en el continente–

constituye de antemano una dimensión susceptible de ser investigada. De hecho, varios han sido los científicos sociales que desde escuelas diferentes abordaron las relaciones entre partidos políticos y actores sociales.

Hay un componente o aspecto central en aquel relacionamiento que refiere al grado de autonomía de unos y otros en sus correspondientes prácticas institucionales en escenarios democráticos, tanto si estos se caracterizan por el populismo que integra al corporatismo mediante la cooptación, como si se trata de ambientes más pluralistas que suponen lógicas y racionalidades de competencia desembozada por los recursos de poder. Este aspecto merece especial atención, en la medida en que encuentro argumentos pertinentes para afirmar en mis hipótesis de trabajo que una autonomía débil o ausente de los movimientos sociales los hace incapaces de activar procesos democráticos enraizados en la sociedad civil, así como compromete su propia legitimidad y credibilidad social. De otra parte, una maximización de la autonomía de los movimientos sociales, respecto tanto del Estado como de los partidos políticos, contribuye decididamente a que se consoliden como actores o sujetos protagonistas en la edificación de democracias inclusivas y cuyas luchas y reivindicaciones sociales no queden acotadas a los parámetros de las coyunturas económicas ni a los limitados campos de las concesiones políticas de corto alcance.

Por último, quiero expresar mi compromiso con el universo de los actores sociales, movimientos sociales, organizaciones populares de América Latina, en tanto investigador, pero también en mi condición de ciudadano. El investigador, por su compromiso epistemológico, no puede despojarse de sus propias convicciones sociales, políticas e intelectuales; aunque simultáneamente, debe ser consciente de las limitaciones y condicionamientos (materiales y simbólicos) de su producción científica. Por ello, mi labor de investigación está también fundada en un compromiso ético con la causa de los pueblos latinoamericanos, en una América Latina profundamente convulsionada, desgarrada, pero asimismo cargada de enigmas, de potenciales alumbramientos y, sobre todo, de futuro.

Mirza, Christian Adel. Capítulo II. Acerca de la metodología empleada. Una perspectiva comparada compleja pero necesaria. Las hipótesis y las variables de estudio. En publicación: Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina: la construcción de nuevas democracias. Christian Adel Mirza.

CAPÍTULO II

ACERCA DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA

UNA PERSPECTIVA COMPARADA COMPLEJA

PERO NECESARIA

LAS HIPÓTESIS Y LAS VARIABLES DE ESTUDIO

Programa Regional de Becas CLACSO, Buenos Aires, Argentina. 2006. ISBN: 987-1183-45-3. Disponible en la web:

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/mirza/cap2.pdf>

Fuente: Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la red CLACSO -

<http://www.clacso.org.ar/biblioteca>

OBJETO DE ESTUDIO E HIPÓTESIS DE TRABAJO

El proyecto de investigación se desarrolló sobre la base de un estudio de casos y desde una perspectiva comparada, para lo cual se diseñó una matriz de criterios de análisis de las variables pertinentes, predefinidas como las más relevantes.

La cobertura territorial o geográfica abarcó principalmente los países del mercado común del Sur (MERCOSUR); es decir, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, más Chile, como nación asociada; por otra parte, del subcontinente se agregaron al estudio Venezuela y Ecuador, por las peculiaridades de sus recientes procesos sociopolíticos que marcan un devenir turbulento pero rico en movilizaciones y participación ciudadana. No obstante, debe aclararse que los casos más profundamente examinados corresponden a Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay, quedando Chile, Paraguay y Venezuela como países *testigo* o de espejo-referencia para contrastar con los primeros. De tal modo, resalta la diferencia en el tratamiento de unos y otros (menos exhaustivo y meticuloso en los últimos), quedando un importante margen de información no procesada para las situaciones de los casos testimonio. La presente investigación considera las series temporales provistas por el Latinobarómetro desde el año 1996 a 2003 para caracterizar la evolución de los sistemas políticos en cada uno de los países; en cuanto a los movimientos sociales y al contexto político general se consideraron períodos más amplios que incluyeron antecedentes históricos y su evo-

lución hasta el año 2003, dando por concluida la investigación en el año 2004.

Para el análisis de los movimientos sociales nos hemos servido de los datos provistos directamente por documentos y textos, así como de aquellos proporcionados por los entrevistados, la mayoría de ellos dirigentes o líderes bien reconocidos. Dichas entrevistas fueron realizadas por nuestros investigadores colaboradores, y en otros casos se trató de entrevistas ya editadas en revistas o publicaciones de circulación no restringida, de las cuales extrajimos lo medular con relación a los asuntos de interés que nos propusimos estudiar. Por otra parte, resultaron piezas fundamentales en la elaboración de las descripciones de los movimientos sociales, tanto el recurso a otras investigaciones similares o del mismo orden (cada una de las cuales es citada en los respectivos capítulos), como el aporte de algunos *informantes cualificados* que hicieron posible el desarrollo de la investigación. En este sentido, queremos mencionar particularmente a los siguientes investigadores que colaboraron en este trabajo; Marcelo Bagnati (Argentina) por su orientación y valiosos aportes expresados en sendas entrevistas; Amaranta Pico (Ecuador) por su prolijo informe sobre los dos casos seleccionados; Nelson Arellano (Chile) por sus aportes resumidos y las entrevistas a dirigentes sociales; y agradecer muy especialmente a los dirigentes de los movimientos sociales considerados, cuyos nombres también figuran en el Anexo IV.

Por otra parte, cabe mencionar también la recurrencia a una buena porción de la bibliografía (básica y complementaria) del curso “Neoliberalismo y movimientos sociales en América Latina: la configuración de la protesta social” del Campus Virtual de CLACSO, a cargo de José Seoane y Emilio Taddei, desarrollado en el transcurso del año 2003, y la oportunidad que me significó la participación en el mismo, en cuyas clases encontré las fuentes de datos y aleccionantes análisis respecto de varios de los movimientos sociales seleccionados, así como el estímulo derivado del debate y la discusión que favorecieron la ampliación de los horizontes epistémicos de la presente investigación.

También es justo hacer referencia a los talleres de discusión e intercambio entre varios profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, todos compenetrados en la problemática que nos convoca, lo que nos aportó ideas, formas de abordaje y acentos en las dimensiones del análisis propuesto.

Quizás a algunos lectores la formulación de las hipótesis, variables e indicadores les resulte algo “añeja” o exacerbadamente influida por un enfoque positivista, que procura hallazgos empíricamente comprobados y susceptibles de mediciones (cuanti y cualitativas), que verifiquen o echen por tierra tesis anteriores; probablemente también

escudriñen en unos marcos teóricos que, lejos de ser rígidos, en rigor, pecan por exceso de mixtura o yuxtaposición de abordajes analíticos. Lo cierto es que, desprovisto de algunos prejuicios (al menos en el intento), el trabajo pretendió ser un escalón más en el itinerario del conocimiento de los clivajes del conflicto social, la acción social colectiva y la democracia en América Latina. Por ello, cuenta con una sistematización de indicadores comparados sobre varios movimientos sociales y su articulación con la praxis democrática de los respectivos países. También se trabajó con indicadores sobre los perfiles de los sistemas políticos y, más específicamente, de los respectivos sistemas de partidos, junto con un examen de la evolución de indicadores de confianza en las instituciones democráticas obtenida gracias a la cooperación del Latinobarómetro con sede en Santiago de Chile, que nos entregó una importante masa de datos con los resultados de las encuestas realizadas en los últimos ocho años de labor.

El devenir de la investigación nos condujo por flujos y reflujos teóricos, por la zozobra y la inspección de intersticios metodológicos poco convencionales, nos exigió una renovación de las habilidades para combinar y coordinar de manera consistente (y coherente) los marcos de análisis conceptuales de los cuales nos servimos. Todo ello durante más de un año y medio de quehacer de un equipo reducido (mi asistente Álvaro Coronel y yo, más el aporte de los profesionales mencionados en cada país), sumergidos en ocasiones en un pantano fangoso y en otras en una subyugante selva pletórica que inevitablemente había que desmalezar, sin la certeza de la meta alcanzada definitivamente.

Para los fines de la investigación se consideraron las relaciones entre algunos movimientos sociales seleccionados y el sistema de partidos de cada país, y especialmente se examinaron los vínculos más o menos consolidados con algunas fuerzas políticas. Por otra parte, se analizaron los formatos organizacionales de los movimientos sociales, y su capacidad de articulación y coordinación sobre la base de ciertas plataformas comunes. Queda claramente establecido que no examinamos todos los movimientos sociales de los siete países implicados, por lo que una porción muy importante del tejido social, de nuevos actores y movimientos de naturaleza heterogénea y plural, fue explícitamente dejada fuera del presente análisis.

En rigor, como unidad de análisis de la investigación se definió a determinados movimientos sociales (urbanos y rurales) de los países latinoamericanos seleccionados, de los cuales estudiamos específicamente algunos aspectos significativos vinculados con una hipótesis central: la mayor autonomía de los movimientos sociales respecto de los partidos políticos los habilita a generar alternativas de construcción democrática sobre nuevas bases. Junto con esta hipótesis central, planteamos otras hipótesis secundarias que a nuestro juicio son coadyuvantes:

- La conformación de plataformas y ámbitos de relativa organicidad que aglutinen un número significativo de movimientos sociales contribuye a afianzar y amplificar sus propias capacidades y aumenta su legitimidad respecto de la sociedad civil.
- La pérdida de confianza en algunas de las instituciones democráticas ha generado, por defecto y no por virtud, cierta vigorización y tonificación de la sociedad civil organizada en movimientos sociales, favoreciendo especialmente la emergencia de nuevos actores sociales. Seguramente esa pérdida de confianza se encuentra asociada a prácticas político-institucionales tradicionales de distribución de bienes públicos tales como clientelismo, discrecionalidad y negociación altamente corporativa.
- La implantación de un modelo neoliberal de corte hegemónico en América Latina y el Caribe provocó la convergencia de mayores agregaciones sociopolíticas, reconfigurando las relaciones entre el Estado, el sistema de partidos y los movimientos sociales.

En este marco se establecen algunas variables relevantes que aportan los insumos y datos fundamentales para su interpretación y explicación causal: a) el grado de desarrollo y organización alcanzado por los nuevos movimientos sociales resulta una variable relevante; b) la densidad propositiva, en tanto los movimientos sociales aparecen como portadores de mensajes y opciones compartidas por unas mayorías populares; y c) la acumulación de prácticas de lucha y movilización social que reivindicán no sólo viejas aspiraciones, sino reclamos novedosos en el territorio propiamente de las instituciones democráticas y de la participación ciudadana. Siendo que la variable dependiente puede sintetizarse como el grado de autonomía y consolidación organizacional de los movimientos sociales (emergentes e históricos), se examinó su correlación efectiva con otras variables consideradas independientes, como la pérdida de legitimidad de los partidos “históricos” o de mayor arraigo en la configuración de los respectivos sistemas políticos, el desarrollo y crecimiento de algunas fuerzas políticas de signo progresista, la evolución reciente de los formatos institucionales y de algunas instituciones democráticas, y el grado de implantación de las reformas estructurales de la última década.

En un análisis más dinámico y diacrónico, caracterizamos a los movimientos sociales como sujetos colectivos portadores de proyectos democratizadores innovadores, en el marco de un panorama regional signado por la desigualdad y la exclusión social. Evaluamos, en consecuencia, sus potencialidades y también sus bloqueos, los factores que actúan como estimuladores y aquellos que intervienen inhibiendo sus capacidades de desarrollo y despliegue en los escenarios de lucha, con-

frontación, conflicto y arbitraje, en suma, en la arena política que condensa la disputa por el poder o por los poderes.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CASOS

Se ha establecido a priori una muestra pequeña de casos a ser estudiados, dado el carácter cualitativo de la investigación. Para ello, determinamos algunos criterios de selección que fueron combinados con los aspectos a considerar de cada país incluido en el grupo de siete países alcanzados por la cobertura del proyecto.

Por definición metodológica –para un mayor margen de aplicación–, no sólo vamos a caracterizar a los sistemas de partidos con las mismas variables (institucionalización y dimensiones principales) y a los movimientos sociales con el mismo criterio, sino que tomaremos determinados tipos de movimiento sociales para los siete países seleccionados. Esta condición la cubrimos escogiendo a los movimientos históricos de trabajadores como movimientos de similares características presentes en todos los países, en tanto son formaciones representativas de los intereses de los trabajadores (activos y pasivos). También se asumió el criterio de combinar organizaciones obreras configuradas históricamente y en otros casos organizaciones sindicales de creación más reciente, surgidas sobre todo a partir de la fractura del modelo de bienestar y protección social. Asimismo, se incluyeron movimientos de carácter territorial tanto a nivel urbano como rural, y otros cuyas estructuraciones se vertebraron en torno a la problemática étnico-cultural.

- Se consideraron los movimientos sociales de mayor visibilidad en la escena pública y de mayor impacto en términos de movilizaciones y protagonismo en los procesos de protesta social en cada país.
- Se consideraron, por un lado, aquellos movimientos sociales históricos y de arraigo en las poblaciones y, por otro, algunos de los *nuevos movimientos sociales*, es decir, los que aportaron alguna novedad, sea por su identidad, por las dimensiones específicas de sus luchas o por las reivindicaciones planteadas.
- Se consideraron movimientos sociales con un grado importante de organización, junto con otros de reciente formación y construcción en ciernes.
- Dentro del conjunto de movimientos sociales estudiados se han incluido movimientos de trabajadores (el eje *trabajo asalariado* fue tomado como sustento de una cierta tipología de asociaciones obreras); en esta clase se incluyeron tanto formaciones sindicales de larga data, como actores sindicales de surgimiento

relativamente reciente. De esta manera resultarán comparables centrales sindicales y organizaciones de trabajadores de los países elegidos, más allá de sus singularidades.

- Se consideraron también movimientos de adscripción territorial, étnica o cultural, que aportan una perspectiva diversa y que apelan a valores, orientaciones y símbolos no necesariamente asumidos universalmente, pero igualmente legítimos.

A partir de esta sencilla red de criterios se procedió a pasar revista a la casi totalidad de los movimientos sociales en los países considerados –Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Uruguay–, lo que permitió a seleccionar finalmente los casos que se analizaron.

De otra parte, se examinó también, en trazos muy genéricos, la evolución de las modalidades neoliberales asumidas y adoptadas en cada país. Así, en Argentina, las recetas económicas y sociales se aplicaron de manera total y completa, mientras que en Uruguay puede afirmarse que el neoliberalismo no se implantó cabalmente, sino en forma parcial y acotada. En Ecuador, la aplicación del modelo neoliberal fue tardía y tal vez a destiempo de la mayoría del subcontinente, mientras que en Chile el modelo fue tempranamente aplicado bajo la tutela militar y continuado después en el marco de formatos democráticos. Las connotaciones políticas de las respectivas democracias nos remiten indudablemente a los sistemas de partidos, recorte necesario para observar y comparar, buscar correlaciones fuertes o débiles entre la emergencia, la consolidación, el desarrollo y la autonomía de los movimientos sociales, la pérdida de legitimidad de algunas instituciones democráticas y la capacidad de reconstruir escenarios democráticos innovadores y sustentables.

APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS EN CADA PAÍS

ARGENTINA

Teniendo presente el primer criterio referido al impacto o protagonismo en las luchas sociales para el caso argentino, lo primero que viene a nuestra mente son los popularmente llamados movimientos de *piqueteros*. Este nombre se deriva de su estilo principal de protesta que consiste en hacer *piquetes* o barricadas en las rutas nacionales para buscar respuestas a sus reclamos.

Estos movimientos son integrados por desocupados, lo que se refleja en su nombre oficial de Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD), a partir de movilizaciones poco estructuradas –que, sobre todo en el interior, son llamadas *puebladas*– que se manifiestan con el corte de rutas. Se organizan y asumen como movimiento a través de un nombre, y la estructura que toman es asamblearia,

constituyendo una democracia de base con independencia de partidos políticos y del Estado. La independencia señalada tiene diferentes niveles en las diversas organizaciones denominadas MTD, algunas de ellas muy ligadas al tradicional movimiento sindical y los partidos políticos relacionados con él, o bien a otras formaciones políticas de la izquierda. Hay además importantes sectores piqueteros vinculados a la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), que tienen un tipo de organización más formalizada.

De esto se desprende que estamos ante lo que denominamos un *nuevo movimiento social* (no necesariamente del estilo definido por muchos autores que incluyen a los ecologistas, feministas, etc.) de reciente conformación (aproximadamente desde 1997), pero que tiene puntos de encuentro muy significativos con los tradicionales movimientos de trabajadores, al punto que la reivindicación laboral juega un rol central dentro de sus reclamos, y sus objetivos y plan de manifestaciones tienen cierto nivel de coordinación con el de las centrales obreras argentinas.

Lo anterior hace que el otro movimiento seleccionado para el caso argentino sea la CTA, que no es la central de trabajadores más antigua, pero que en los últimos años ha tenido un peso y arraigo que, en principio, convocan a estudiarla. Aunque tiene un perfil de movimiento histórico trabajador, es de conformación relativamente reciente (exactamente el 14 de noviembre de 1992). La preeminencia relativa de la CTA no es definitiva, dado el arraigo histórico y el peso importante que tiene la Confederación General del Trabajo (CGT), tanto en su versión oficial como en su rama disidente. Aunque la opción por la CTA se mantenga, no vamos a dejar de relacionarla con las otras centrales, incluyendo la Corriente Clasista y Combativa (CCC), y con otros movimientos sociales.

BRASIL

Al igual que en el caso argentino, si pensamos en movimientos sociales brasileños nos vienen enseguida algunos a la mente. Los “Sin Tierra” es una denominación que difícilmente pase desapercibida a los estudiosos de la temática, o incluso, dado su arraigo y peso sociopolítico, a cualquier ciudadano de la región, como mínimo. Por otra parte, y vinculado con la elección de Lula como presidente de Brasil, la Central Única de Trabajadores (CUT), que es la central obrera más importante del país, tiene una presencia constante e importante en las luchas sociales brasileñas. En este caso, al igual que la relación CGT-peronismo en Argentina, aparece el Partido de los Trabajadores (PT) muy vinculado con dicha central.

Los dos movimientos seleccionados primariamente tienen, como ya sugerimos, dentro de las luchas sociopolíticas brasileñas, un poder

de convocatoria y propuesta muy relevante. La denominación oficial de los Sin Tierra es Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) y su lucha se extiende a todo el territorio brasileño con algunos puntos de mayor presencia. Su organización se sustenta en comisiones, desde las de base en las zonas rurales, pasando por las comisiones municipales y las estatales, hasta llegar a la Comisión Coordinadora Nacional; aunque el órgano máximo es el Congreso Nacional, que se celebra cada cinco años, y en los niveles nacional y estadual hay comisiones ejecutivas (23 en total).

El proceso de crisis socioeconómica y de concentración de la propiedad de la tierra, junto con otros factores como la existencia de una Comisión Pastoral por la Tierra, causaron un estado de protestas en el período 1975-1985 (también hubo algunos antecedentes) que desembocó en un llamado de las organizaciones locales a un congreso en el cual se conformó el MST. Dicho congreso se realizó en la ciudad de Curitiba, estado de Paraná, en enero de 1985.

El MST es una articulación de campesinos que luchan por la tierra y por la reforma agraria en Brasil, con autonomía de los partidos políticos y una relación permanente con el movimiento sindical brasileño, que incentiva a los campesinos a afiliarse al Sindicato de Trabajadores Rurales.

Un poco antes de la creación del MST, y como respuesta a las crisis que propiciaron su surgimiento, nació una central sindical diferente de las corporaciones oficialistas tradicionales, la que además de los reclamos laborales típicos formulaba una exigencia democrática junto con otras organizaciones sociales. El nacimiento de la Central Única de los Trabajadores se produjo el 28 de agosto de 1983. A pesar de su conformación reciente, tiene el formato de los movimientos históricos de trabajadores, en cuanto al estilo de organización y tipo de reivindicación y de forma de protesta.

Su lucha se relaciona fuertemente con la oposición a los procesos de privatización planteados por las políticas de corte neoliberal. Asimismo, mediante la vinculación con otros movimientos sociales, lucha por la defensa de los sectores marginados, formulando una serie de reclamos que incluyen la reforma agraria, el medio ambiente y otros.

CHILE

A diferencia de los casos anteriores, no es fuerte e inmediata la identificación de movimientos sociales con notoriedad para el caso chileno, pero, al igual que en todos los países en estudio, el movimiento sindical tiene un lugar en la tarea de combatir los resultados negativos de la implantación del modelo neoliberal. En Chile se habla de que dicha implantación, comenzada por la dictadura militar y mantenida por los

sucesivos gobiernos, ha tenido buenos resultados macroeconómicos, pero no hay duda de que el proceso tiene aristas negativas para algunos sectores de la sociedad. En este marco, cobra especial interés para nuestro estudio.

La central más importante de trabajadores en Chile es la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que en su propia definición de fines y objetivos dice lo siguiente: “La Central Unitaria de Trabajadores, que se identifica con la sigla CUT, es una organización pluralista y autónoma, independiente del Estado, del gobierno, de los empresarios, de los partidos políticos, de los credos religiosos y de cualquier institución ajena al movimiento sindical” <www.cutchile.cl>.

La CUT es continuadora de la línea desarrollada entre 1958 y 1973 por la Central Única de Trabajadores de Chile, la que desapareció durante la represión del gobierno militar. Su conformación se remite a agosto de 1988, aunque fue reconocida y obtuvo personalidad jurídica en abril de 1992. Es una conformación relativamente reciente, pero, como en los casos anteriores, está dentro de lo que llamamos *movimiento histórico de trabajadores*.

La *baja intensidad* comparativa de las organizaciones sociales en Chile, al igual que en Uruguay, hace muy difícil ubicar un movimiento social con alto impacto sociopolítico. Como no estamos afirmando la inexistencia de conflictos sociales ni de movimientos sociales más o menos activos, ello podría expresar que el sistema de partidos tiene conquistada buena parte de la representación de intereses de los sectores postergados económica o socialmente.

A diferencia del conflicto indígena ecuatoriano, que se plantea la integración en la sociedad ecuatoriana con identidad propia e igualdad de derechos –es decir, reivindicaciones de reconocimiento étnico y cultural–, en Chile existe el llamado conflicto mapuche, que contiene reclamos étnicos y culturales, pero que suma a ellos un reclamo territorial y de autonomía social e inclusive política por parte de algunas de sus organizaciones.

No hay una única organización que dirija el reclamo indígena, pero existen algunas que tienen impacto nacional: Consejo de Todas las Tierras, Ad-Mapu, Corporación Mapuche Newen, Coordinadora de Instituciones Mapuches, Coordinadora Mapuche Arauko-Malleko, Organización de Mujeres Mapu Domuche Newen. De estas surge nuestro movimiento social seleccionado para el caso del conflicto indígena chileno.

Para ver el perfil del reclamo mapuche transcribimos palabras de José Huenchunao, uno de los líderes de la Coordinadora Arauko-Malleko, extraídas del “Informe sobre Chile” de Nelson Arellano (2003):

En la actualidad tenemos más conciencia de que el problema de fondo es la territorialidad de las comunidades mapuches. Aquí hay que

reconocer que nosotros seguimos siendo un pueblo y una cultura diferente, que seguimos teniendo en nuestra memoria colectiva la conciencia de que éramos y somos una nación originaria.

Las reivindicaciones mapuches están representadas por el Consejo Interregional Mapuche (CIM), formado en 1993 por grupos y organizaciones indígenas y comunidades mapuche con el objetivo de promover el desarrollo económico, social y cultural del pueblo mapuche y defender sus derechos. El CIM se ha organizado en sintonía con los valores ancestrales y las leyes tradicionales de los mapuches, y se adhiere al pluralismo y la diversidad de las comunidades mapuche.

ECUADOR

El conflicto indígena ecuatoriano tiene un impacto social y político que convierte a los movimientos que lo lideran en referentes ineludibles para un estudio comparado de los movimientos sociales latinoamericanos y sus relaciones con el sistema político, en particular con los partidos políticos. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) se nos presenta como el actor central del conflicto indígena.

En principio, como respuesta válida a la pregunta de qué es la CONAIE tomamos la que dan sus integrantes en la página oficial del movimiento en Internet: “es una organización autónoma, no depende de ningún partido político, ni de instituciones estatales, extranjeras o religiosas” <www.conaie.org>. Será materia de la investigación establecer el grado de autonomía y de dependencia reales de la CONAIE, así como identificar sus características principales y otros aspectos.

El levantamiento indígena de 1990, llevado adelante por la CONAIE, la coloca como un actor de primera línea en la lucha social y política de la sociedad ecuatoriana, aunque su existencia se remite al año 1986. La década del ochenta es denominada por los indígenas ecuatorianos como *década ganada*, puesto que en ella se dio el proceso de conformación de su principal organización, la CONAIE, y el paso de una visión campesina a una étnico-cultural, todo ello concretado en el marco de conformación de una propuesta y un pensamiento indígena.

El espíritu actual de la propuesta de la CONAIE lo resume la frase “nada sólo para los indios”, que es el hilo conductor de su estrategia actual y la habilita a articularse con otros grupos que levantan las propuestas populares, en especial con la Coordinadora de Movimientos Sociales y con los movimientos sindicales. El proceso de transformaciones sufridas por las propuestas de las agrupaciones miembros de la CONAIE puede resumirse con la cita de un artículo escrito en junio de 2001 por Napoleón Saltos Galarza, líder de CMS, titulado “Movimiento indígena y movimientos sociales: encuentros y desencuentros”:

Desde el levantamiento de 1990 hasta hoy se ha registrado una serie de transformaciones en los sentidos, fines y repertorios de acción dentro del movimiento indio. En pocas palabras puede decirse que lo que en sus inicios emergió como un conflicto de carácter étnico se ha ido desplazando hacia un tipo de interpelación global a la matriz de dominación política y al modelo de conducción económica imperantes en el país durante la década que acaba de terminar. A las aristas de corte étnico y campesino se han sumado, de esta forma, variables “clasistas”, éticas y propiamente políticas.

Puede concluirse que las distintas “generaciones” de derechos ciudadanos –civiles, políticos, sociales, culturales– han sido intensamente tematizadas y disputadas en la esfera pública por el movimiento indio. Esa articulación del discurso histórico y étnico cultural con los contenidos anti-neoliberales, rasgo específico del movimiento indígena ecuatoriano, es la base sobre la cual pudo sintonizarse con los sentimientos generalizados de agravio, injusticia y pérdida que fueron mencionados antes (Saltos Galarza, 2001).

Además de estos movimientos, por relevancia, por definición metodológica y por la relación estrecha que tiene con ellos, escogemos como segundo caso a la que visualizamos como la principal fuerza sindical de Ecuador: el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que agrupa a las centrales sindicales CTE, CEOSL, CEDOC-CUT y a organizaciones campesinas e indígenas como la FEI, FENOCIN y FENACLE.

PARAGUAY

En este caso nos encontramos ante una ciudadanía muy poco integrada, donde los sectores populares no han podido articular una respuesta política al dominio hegemónico del Partido Colorado, así como tampoco una fuerte respuesta social liderada por algún movimiento sindical, indígena o de otro tipo. Todo esto en el marco de una exclusión económica, social y política de grandes sectores de la población, principalmente los indígenas y campesinos.

Hay que agregar que el dominio político del Partido Colorado, y en especial su expresión más radical que fue el período de Alfredo Stroessner (1954-1990), reprimió todo intento de organización popular, o permitió su funcionamiento en la medida en que respondiera a sus directivas. Luego de la caída de Stroessner, y con el desarrollo de elecciones a partir de 1990, ha habido un proceso de conformación de algunos movimientos sociales, pero estos han tenido que ponerse principalmente al servicio de sostener el lento proceso de democratización que vive el país.

En la esfera de los movimientos históricos de trabajadores, Paraguay mostró a lo largo del período de Stroessner una típica estructura

corporativista y de dependencia total del Estado y del partido de gobierno, la que sobrevive con menor convocatoria. Esta dependencia tenía como central exclusiva a la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT), fundada en 1951 y que ha sufrido desmembramientos a partir de la segunda parte de la década de los ochenta. El primer desmembramiento importante, en 1985, conformó el Movimiento Intersindical de Trabajadores (MIT).

Luego de la transición democrática se fundaron dos nuevas centrales independientes del Estado y del Partido Colorado: la Central Nacional de Trabajadores (CNT) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Ambas se han debatido en luchas internas entre sectores dialoguistas con el Estado y sectores más radicales, y tienen tasas muy bajas de afiliación. En el ámbito estatal se destacan la Central de Sindicatos del Estado Paraguayo (CESITEP) y la Unión Nacional de Trabajadores del Estado (UNTE), así como en la enseñanza se destaca la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP).

Los persistentes problemas económicos y el deterioro de las condiciones de vida de los paraguayos han hecho que la conflictividad social aumente en los últimos años. Junto con los sindicatos han proliferado organizaciones campesinas, dado el deterioro profundo que han sufrido el sector agrícola y, en particular, los pequeños productores. Las asociaciones campesinas han llevado a cabo constantes movilizaciones contra la política económica y social, exigiendo una reforma agraria que dé acceso a la tierra a los trabajadores rurales (los denominados *labriegos*), así como la condonación de sus deudas y la facilitación de créditos, asistencia técnica y la realización de programas de producción y comercialización.

Las organizaciones campesinas tienen larga data en el Paraguay, y desde la década del ochenta hasta el presente ha surgido un grupo importante de ellas. Las más destacadas son el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) y la Asamblea Permanente de Campesinos sin Tierra (APCT). Entre las organizaciones campesinas más activas se destacan la Federación Nacional Campesina (FNC), la Organización Nacional Campesina (ONAC), la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), la Organización Campesina Independiente (OCI) y la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos (CNTC).

Las organizaciones campesinas más importantes pertenecen a la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MC-NOC). Dada su trascendencia y peso en la sociedad paraguaya, es el movimiento que seleccionamos para nuestro estudio, en el marco de un análisis más general del movimiento campesino. Por otra parte, habremos de considerar las centrales sindicales para caracterizar el movimiento de trabajadores en su conjunto. La MCNOC busca presionar al gobierno a través de una estrategia común con el movimiento

sindical, y además coincide en casi todos sus miembros con una organización llamada Federación Nacional Campesina (FNC) que articula las movilizaciones.

URUGUAY

Una larga tradición democrática, junto con una fuerte integración social y una cultura de participación ciudadana, han promovido a lo largo de la historia del Uruguay una sociedad que aboga por la cooperación entre los agentes sociales. En su seno han surgido movimientos sociales con un alto nivel de autonomía organizacional y política, lo que no significa que el movimiento sindical uruguayo no haya estado estrechamente relacionado con determinados sectores de la izquierda política nacional.

El movimiento histórico de trabajadores por excelencia ha sido la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), que luego del período dictatorial tomó la denominación PIT-CNT, debido a la conjunción de un nuevo intento de estructura sindical, el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) con la tradicional CNT, muy vinculada a la izquierda (socialista, comunista, en menor medida la democracia cristiana y los anarquistas, así como sectores independientes).

Desde la reapertura democrática, la central de trabajadores ha peleado por el mantenimiento de las fuentes de trabajo y el nivel de salarios, pero se ha destacado especialmente por su lucha contra las privatizaciones de las empresas del Estado. Dichas luchas fueron exitosas, y llevadas adelante con otras organizaciones sociales y partidos políticos, especialmente los nucleados en la coalición de izquierda Frente Amplio (actualmente Encuentro Progresista-Frente Amplio).

La selección de un segundo movimiento social para el caso uruguayo es extremadamente compleja, no por la inexistencia de organizaciones sociales, sino por la baja conflictividad llevada adelante por ellas. Cabe aclarar que en el territorio no hay poblaciones indígenas, así como tampoco campesinos que pudieran organizarse, ni existe un proceso de apropiación de tierras por grandes latifundistas que sienten las bases de un reclamo por su reparto.

Tenemos la sensación de que el movimiento sindical y la izquierda política organizada en partidos absorben las demandas de los diferentes sectores sociales, en especial los de los sectores populares. Este tema es uno de los que analizaremos a lo largo de la investigación.

En estos momentos de crisis económica profunda y constante, donde los indicadores de bienestar social empiezan a decaer, entre ellos los vinculados a la vivienda, parece registrarse un resurgimiento de un movimiento social llamado Federación Unificadora de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM). Este movimiento, relacionado

con la solución del problema de la vivienda a través de la construcción cooperativa, junto con otros, desempeñó un importante papel durante la segunda parte de la década del ochenta en la lucha de los sectores populares en pos de reclamos particulares y de la consolidación del proceso democratizador.

El nacimiento de FUCVAM se produjo en 1970, y durante el período militar cobijó y promovió movimientos de trabajadores y otros que se opusieron al gobierno. Siempre participó de plataformas en conjunto con otros movimientos sociales; inclusive en estos últimos tiempos viene realizando acciones desde una perspectiva social más amplia y de índole política. Por lo antedicho, FUCVAM será entonces el segundo movimiento social seleccionado para el caso uruguayo.

VENEZUELA

Según los criterios que venimos utilizando, y teniendo en cuenta el colapso sufrido por el sistema de partidos venezolano, además de la crisis social y política actual, tomar en primer lugar un movimiento histórico-tradicional de trabajadores no es tarea fácil. Existen en la historia de Venezuela varias centrales sindicales, pero la que más influencia y adhesión ha tenido es la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la cual todavía existe, pero ha sufrido transformaciones y escisiones.

La CTV tiene diferentes corrientes sindicales que responden a diversas alineaciones con sectores políticos opositores al chavismo. La mayoritaria, Frente Unitario de Trabajadores de Venezuela (FUTV), es una corriente identificada con Acción Democrática (AD); hay otro sector importante alineado a los sectores socialcristianos (COPEI). Luego encontramos una serie de organizaciones opositoras a estas, algunas cercanas al gobierno y otras más independientes. Ejemplos de estas últimas son Acción Sindical Independiente (ASI), la Confederación General de Trabajadores (CGT), la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA); y la más identificada con el gobierno es la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT).

Un sector de la FBT está promoviendo el apartamiento de la CTV y la fundación de una nueva central que se identifique más con la *revolución bolivariana* y su líder, Hugo Chávez. Dentro de la FBT también hay una central de trabajadores que nuclea a diferentes sindicatos respetuosos del gobierno pero con convicción de independencia para las organizaciones de trabajadores; hablamos de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) que en cuanto a los cambios para la organización sindical no propone el apartamiento de la CTV sino la redefinición de esta, con vistas a lograr una nueva correlación de fuerzas menos opositoras en una Corriente Sindical Nacional (CSN).

Consideraremos otros movimientos sociales para completar un panorama venezolano más general, aunque pensamos que la complejidad en que se encuentran los movimientos sindicales, al igual que el sistema de partidos, justifica que tomemos sus diferentes versiones y las correspondientes interacciones que se están dando, principalmente el conflicto antichavista-prochavista.

Mirza, Christian Adel. Capítulo III. Las democracias, los sistemas políticos y los movimientos sociales en el subcontinente. Convivencia, coexistencia y confrontación en los márgenes de la era moderna.

CAPÍTULO III

LAS DEMOCRACIAS, LOS SISTEMAS POLÍTICOS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL SUBCONTINENTE

CONVIVENCIA, COEXISTENCIA Y CONFRONTACIÓN EN LOS MÁRGENES DE LA ERA MODERNA

En publicación: Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina: la construcción de nuevas democracias. Christian Adel Mirza Programa Regional de Becas CLACSO, Buenos Aires, Argentina. 2006. ISBN: 987-1183-45-3. Disponible en la web: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/mirza/cap3.pdf>

LAS DEMOCRACIAS RECONSTRUIDAS e instaladas en gran parte de América Latina se sustentan en regímenes presidencialistas o semipresidencialistas, fuertemente estructurados desde un papel preponderante de los partidos políticos, y basados en instituciones de carácter liberal. En ellas se pone el acento en el respeto a las reglas de juego, entre las cuales el sufragio libre y universal, la libre expresión de las ideas, y la posibilidad de organización para la competencia electoral son componentes básicos que garantizan o al menos posibilitan la alternancia en el gobierno de los actores políticos en pugna.

En estos regímenes políticos la ciudadanía es depositaria de la soberanía y confiere a los gobernantes legítimas facultades en el ejercicio democrático del poder, a través de un sistema de elecciones regulares y periódicas. Así, desde la instauración y restauración de las democracias representativas en las naciones latinoamericanas, el poder se distribuye en los ámbitos institucionalizados conforme cada Constitución o Carta Magna lo establezca. Los Parlamentos están integrados por los representantes electos a partir de elencos ofrecidos a la ciudadanía en régimen de libre competencia. El Poder Ejecutivo y particularmente la Presidencia constituyen el núcleo central de aplicación de las políticas públicas, arbitradas por un conjunto de normas y orientaciones dispu-

tadas en la arena política por una multiplicidad de actores portadores de intereses diversos y contrapuestos. El conflicto es un denominador común, en tanto que su conciliación no supone necesariamente el consenso; antes bien, su regulación se coagula desde posiciones diferentes y antagónicas.

Esta aproximación conceptual no desconoce por cierto las limitaciones y perversidades de las democracias instauradas, las insuficiencias y las debilidades que en cierta medida contribuyen a la fragilidad aún presente en numerosos países. Entre otros aspectos, porque la libre competencia electoral es asimétrica, porque no siempre se respetan las voluntades mayoritarias, porque la corrupción también ha impregnado al sistema político, porque los condicionamientos externos con frecuencia limitaron severamente las soberanías nacionales, porque muchos ciudadanos perciben a los partidos políticos y los poderes públicos como ajenos a sus destinos personales.

Los movimientos sociales que inscriben sus luchas en el terreno de las confrontaciones con el poder político simbolizado en los sucesivos gobiernos democráticamente establecidos han urdido un tejido –a la vez complejo y contradictorio– de relaciones con los actores políticos, con el Estado y los partidos políticos: unas veces sosteniendo con creces el frágil equilibrio entre las demandas y las conquistas sociales, otras ocupando los espacios “abandonados” o perdidos por los partidos políticos en su papel de representación social. Los sistemas políticos democráticos en el subcontinente fueron revalorizados por la ciudadanía en tanto portadores en sí mismos de renovadas ilusiones; tras los períodos autoritarios habrían de sobrevenir las épocas de recomposición social y económica de las naciones subdesarrolladas. Sin embargo, apenas iniciada la presente centuria, las condiciones de vida de las enormes mayorías latinoamericanas se observan aún deprimidas y sin aliento, exangües y en niveles muy por debajo de las expectativas generadas.

En este marco, en el cual el pensamiento neoliberal, extendido sin fronteras por la globalización finisecular, deja su estela de pobreza y desigualdad, millones de latinoamericanos vuelven a sumirse en la indignidad de ya no ser útiles ni necesarios a los nuevos patrones de producción y acumulación capitalista.

Los viejos movimientos sociales se debilitan, pierden intensidad y luminosidad, aunque no fenecen. Los nuevos emergen de la desolación y la impotencia, se yerguen nuevos sujetos sociales en el alba de la posmodernidad. Ambos coexisten, todos cohabitan las tierras pobladas aún fértiles para la búsqueda de sueños y utopías. Los partidos políticos renovados en sus legítimas y necesarias ambiciones, las instituciones democráticas positivamente interpeladas pero no vapuleadas, los actores y movimientos sociales que estremecen los

basamentos del poder y construyen sus identidades desde el desasosiego, pero lanzados a la esperanza.

El discurso político que define la democracia como el mejor sistema de convivencia social alude con frecuencia a la ausencia de otros proyectos, a la inexistencia práctica de otro tipo de contratos sociales eficaces, y al mismo tiempo respetuosos de las normas elementales amasadas y maduradas en el fragor de la confrontación por el poder, de la regulación de los equilibrios entre múltiples actores. El pluralismo enfatiza la necesidad de variados escenarios públicos donde cuenta la capacidad de forjar alianzas, de sostener y defender intereses que se oponen, pero que encuentran siempre su punto de equilibrio en la democracia. Cuantos más organizaciones, colectivos y actores políticos y sociales existan, más podría asegurarse la estabilidad dentro de coordenadas universalmente aceptadas. La democracia debería pues asegurar una competencia política a través de mecanismos apropiados para dirimir los conflictos. Para el contexto latinoamericano, las democracias restauradas después de los períodos autoritarios, y sobre todo en la etapa inmediatamente posterior al fin de las dictaduras, se asociaron a la emergencia de nuevos actores sociales y al resurgimiento de los movimientos sociales “tradicionales”, asumiendo roles más activos y protagónicos. Unos años más tarde, bien entrada la década del ochenta, en varios de los países examinados se asistió a un fenómeno de reflujo de la acción social colectiva, el repliegue de la movilización y la protesta, en particular la reducción de la centralidad del movimiento social en favor del retorno al primer plano de los partidos políticos, precisamente a expensas de absorber a los núcleos más militantes y activos de los sectores sociales, desplazando el eje de la acción colectiva, subordinando las lógicas y estrategias de los movimientos sociales a las emanadas de la matriz político-institucional.

El tema que nos convoca a la reflexión, al análisis sociológico y al debate desde la ciencia política, alude a ciertos asuntos que se vuelven singularmente esenciales para una evaluación de los rendimientos de las instituciones democráticas, a la pertinencia de los actuales formatos de ingeniería institucional, a los rituales y liturgias consagradorios de un sistema político vulnerable e interpelado, pero a la vez percibido como *inherente* a una cultura (más allá de las culturas particulares) contemporánea y compartida por el grupo de naciones latinoamericanas. Unas democracias que ciertamente se distinguen de sus homónimas occidentales, de las cuales son tributarias. Pero que, no obstante, expresan una configuración basada en coordenadas similares, en las cuales los partidos políticos son significativamente relevantes en la construcción de las normas, los modos de regulación y de procesamiento del conflicto para conjugar los múltiples intereses presentes en la sociedad.

A lo largo de todo el siglo pasado identificamos rutas particulares en cada una de las naciones emergentes de los procesos emancipatorios desde el siglo XIX hasta nuestros días; en unos casos la prefiguración temprana de sistemas consolidados sustentados en un contrato social entre *trabajo y capital*; en otros, regímenes frágiles, aún no dispuestos para la alternancia política y más proclives a perpetuar hegemonías protodemocráticas. Con relación a los países analizados, podemos diferenciar, por una parte, aquellos que, habiendo afianzado y asentado tempranamente la democracia sobre la base de un sistema de partidos fuertemente estructurado y enraizado en la sociedad, con resultados inclusive sostenidos durante largo tiempo en cuanto al modelo de bienestar, políticamente estables e institucionalizados, vieron interrumpidos dichos procesos democráticos por golpes de Estado y períodos autoritarios más o menos prolongados (Uruguay, Chile, Argentina, Venezuela); y, por otra parte, aquellos países con debilidades evidentes para consolidar la democracia (Paraguay) y otros con sistemas incoativos que también pasaron por dictaduras (Brasil y Ecuador). Aun en la diversidad de itinerarios, los partidos políticos fueron piezas fundamentales para la restauración de las democracias, y dieron cuenta de las reservas acumuladas durante los años precedentes.

De otra parte, las sociedades civiles produjeron movimientos sociales de tradición obrera, de arraigo en el campesinado, de naturaleza gremial estudiantil y de variados anclajes en torno a múltiples reivindicaciones, referidos a los derechos humanos, a la demanda de igualdad de género, de respeto a la diversidad cultural y étnica, de contenido ecologista o vinculados a derechos específicos tanto a nivel territorial como sectorial. En un sentido puede afirmarse que los espacios estaban bien delimitados: de un lado el espacio público de la confrontación y la competencia electoral, reservado a los partidos políticos; de otro, el escenario para la demanda, la presión y la negociación, reservado a los movimientos sociales, fuertemente dominado durante décadas por una fisonomía corporativa. Más acá, y en vísperas de finalizar el siglo XX, la acción social colectiva adquirió una naturaleza más sociopolítica, en el sentido de irrumpir en el espacio de la política institucional, al menos con mucho más fuerza que en décadas anteriores. Las instituciones democráticas fueron sometidas a la interpelación más descarnada, y los reclamos no se dirigieron sólo a apaciguar las demandas por salario, tierras, empleo, igualdad de género, etc., sino también a replantear y cuestionar cierto orden establecido en las esferas del poder político, coto exclusivo de los partidos. Por ello, entre otras razones, se hace más explícita la correlación entre acción social colectiva y sistemas políticos, particularmente entre movimientos sociales y sistemas de partidos. Hay efectivamente una intersección de ambos espacios de lo público, que son redefinidos por la emergencia de una ciudadanía organizada

(formal o informalmente), que resignifica el valor de la participación en democracia.

El Estado (nacional) recobra sentido como el *locus* para operar políticas públicas, ora conservadoras, ora transformadoras. No parece útil ni tan acertado estimar como irreversible la debilidad de sus capacidades estratégicas e instrumentales, aunque admitamos que ha perdido autonomía o, lo que es lo mismo, que mantiene fuerzas limitadas para establecer pautas y soportes verosímiles para gobernar. ¿Cómo entender las pujas y esfuerzos que han desplegado tanto los actores sociales como políticos por “ocupar” aquel *locus*, y no sólo en tiempos electorales, si no es porque en todo caso persiste la percepción generalizada de que aún mucho puede producirse desde el Estado? Vale decir que se lo concibe como un conjunto de estructuras materiales y simbólicas, como ámbitos pertinentes y adecuados para favorecer a unos u otros, para resolver conflictos, para dirimir litigios sociales, para efectuar distribuciones regresivas o progresivas de la renta, así como para enfrentar consecuentemente los dilemas ocasionados por la mundialización.

Sin entrar en la discusión acerca de hasta dónde y cómo el Estado se constituye en un foco de atención para su apropiación por parte de las elites –perspectiva desde la cual se puede apreciar la lucha de clases y especialmente la disputa por el poder institucionalizado–, podríamos advertir que el Estado en sus múltiples dimensiones y niveles continúa siendo un referente insoslayable para la imposición de reglas, normas, orientaciones, estímulos, arbitrios, sanciones e incentivos. En este marco, no cabe duda del papel central que continúa imponiéndose para un Estado disminuido en sus potencialidades pero aún activo, con señales de agotamiento de sus formatos burocratizados pero con disponibilidad operativa, habilitado para cumplir las funciones básicas y otras que, libradas al juego del mercado, no han podido satisfacer las expectativas y demandas sociales.

No haremos un análisis exhaustivo de los éxitos y fracasos de los procesos de reforma del Estado impulsados desde los años ochenta, pero baste consignar que en buena parte de los países donde se impulsieron las privatizaciones y se procedió al desmantelamiento más o menos drástico de las empresas públicas y los servicios públicos estatales, el conflicto resuena en torno al deterioro de su calidad, al encarecimiento de las tarifas y al manejo discrecional sobre la base de la oferta y la demanda, con tendencias monopólicas y oligopólicas que no atienden las necesidades de la mayoría de la población. En este contexto, la convergencia en el espacio público resalta la importancia del papel del Estado y de los elencos de gobierno que asumen su conducción. Los movimientos sociales se movilizan políticamente sin abdicar de sus identidades específicas en favor de un desdibujamiento de sus

demandas, pero teniendo claro que es desde el Estado que se juega gran parte de sus oportunidades de éxito. Los partidos políticos también –y es natural que así sea– apuestan a obtener resultados forjados desde la competencia electoral para decidir la asignación de las cuotas de poder institucional en las diferentes esferas estatales.

El resultado final es inestable. La zona de incertidumbre se expande a las diversas esferas de la convivencia social. Aquellos que manejen apropiadamente los recursos que determinan los cursos de acción en las zonas de incertidumbre, contarán con alícuotas de poder acrecentadas. Partidos políticos, movimientos sociales, actores sociales¹, todos están estrechamente involucrados en la construcción y el mantenimiento del delicado equilibrio democrático. El reparto del poder en una democracia representativa no es un acto único que se ejecute al día siguiente de las elecciones, sino el producto de una interacción permanente cuya correlación de fuerzas depende de factores económicos, políticos y socioculturales. Las variaciones de aquella correlación vienen dadas por la posición en el control de recursos estratégicos (económicos, institucionales, simbólicos, políticos), por las destrezas en el manejo de los recursos, por la capacidad de articulación entre actores, por la fluidez de los vasos de comunicación y la influencia comunicativa, por los respaldos ciudadanos y el grado de legitimidad acumulado. La representación de intereses diferentes y contrapuestos exige desde luego la negociación, pero también la confrontación explícita que expresa las contradicciones de un sistema capitalista en crisis. Las alianzas de clases y sectores sociales, en este marco, se manifiestan en las articulaciones entre movimientos sociales y partidos políticos, delimitando las autonomías recíprocas para el desarrollo de las orientaciones estratégicas de unos y otros actores.

1 Me refiero a otros actores como las iglesias, las corporaciones empresariales y las asociaciones culturales, entre otros.

Mirza, Christian Adel. Capítulo IV. El estado del arte. En publicación: Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina: la construcción de nuevas democracias. Christian Adel Mirza

CAPÍTULO IV

EL ESTADO DEL ARTE

Programa Regional de Becas CLACSO, Buenos Aires, Argentina. 2006. ISBN: 987-1183-45-3. Disponible en la web: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/mirza/cap4.pdf>
Fuente: Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la red CLACSO
<http://www.clacso.org.ar/biblioteca>

PODEMOS RASTREAR algunos trabajos de tipo comparativo producidos en la década de los setenta, conforme la acción social colectiva y, más concretamente, las movilizaciones sociales, las protestas y los movimientos sociales fueron ganando mucho más terreno en la escena pública, provocando el interés de la academia en los procesos sociopolíticos que los generaban. Desde luego, la acción social colectiva no empieza cuando se la estudia, pero la diferencia es que antes esta no resultaba un *objeto de estudio relevante*, en la medida en que se la concebía como resultado o producto de inestabilidades, convulsiones o conmociones sociales. Las alteraciones de un orden establecido implicaban, en consecuencia, estudiar sobre todo cómo se modificaban las constantes estructurales, y cuánto había de “conducta colectiva anómala” en la acción social colectiva.

Encontramos en la década de los setenta, cuando los movimientos sociales son planteados dentro de la arena política, los aportes de Alain Touraine en *Actores sociales y sistemas políticos en América Latina*, de 1987, y en la primera edición en francés en 1976 de *Las sociedades dependientes. Ensayos sobre América Latina*, donde examina los movimientos sociales en relación con los sistemas políticos. Son aportes relevantes para nuestra perspectiva teórica sobre los movimientos sociales por cuanto Touraine ha colocado como objeto central de sus estudios a la acción social colectiva, en especial a los movimientos so-

ciales, y los ha relacionado con la democracia y la política, en especial dentro del marco latinoamericano. También hay otra serie de autores en la misma línea, pero vamos a desarrollar un poco más los aportes que fuimos seleccionando en el capítulo I de la parte II del presente trabajo, llamado: “Los marcos teóricos de interpretación y análisis”. En la década de los ochenta surgió con fuerte impulso la teoría de los nuevos movimientos sociales, en la que encontramos autores como Scherer-Warren y Krischke (1987) y Laranjeira (1990), y obras como *Los movimientos populares en América Latina*, de Camacho y Menjívar (1989).

Exclusivamente en el contexto de América Latina, y centrandolo en el análisis en las transformaciones de la acción social colectiva y su relación con los procesos de democratización política y social, tomamos los aportes del sociólogo Manuel Antonio Garretón (2002); con el mismo contexto y desde otra perspectiva de análisis de los movimientos sociales contemporáneos, Maria da Glória Gohn (1997) llega a delimitar de forma conveniente para nuestro análisis lo que son los movimientos sociales. Del paradigma norteamericano, los ensayos realizados por McAdam, McCarthy y Zald (1999) muestran en forma clara las potencialidades y posibilidades de los movimientos sociales dentro de la arena política; en esta última perspectiva pero con diferente mirada retomamos aportes de Sidney Tarrow (1999), por un lado, y Dieter Rucht (1999), por otro.

Sobre todo dentro del área de la teoría sociológica, y no de modo particular sobre América Latina, aparecen los primeros trabajos que toman como eje el relacionamiento entre movimientos sociales y partidos políticos; en esa misma línea hay una obra fundamental de Claus Offe, *Partidos políticos y nuevos movimientos sociales*, de 1988. También hallamos trabajos como el de M. Kuechler y R. J. Dalton, “Los nuevos movimientos sociales y el orden político o la posibilidad de que los cambios producidos preparen una estabilidad a largo plazo”, de 1992. Más recientemente, podemos encontrar referencia a la relación entre movimientos y partidos en John Markoff, *Olas de democracia*, de 1999. Ninguno de ellos aborda la cuestión en la perspectiva que intentaremos desarrollar en este libro, explicitada en el capítulo siguiente.

Para los estudios de los sistemas políticos y más particularmente de los sistemas de partidos, hay una bibliografía abundante; para los partidos y, en especial, los sistemas de partidos, más específicamente en Latinoamérica, también existe una acumulación académica importante y con diferentes encuadres teóricos y metodológicos. Para el encuadre teórico más general, no puede dejar de mencionarse los aportes históricos y fundamentales de Duverger, Sartori y demás clásicos de la ciencia política. Hay una serie de autores europeos, entre los que se destaca Manuel Alcántara Sáez, que han dedicado un largo período de investigación sobre los partidos y sistemas de partidos en América Latina.

Dentro de los aportes recientes sobre la temática partidaria latinoamericana puede hallarse una compilación de Marcelo Cavarozzi y Juan Abal Medina (h.) publicada en 2003, titulada *El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal*, y otros.

Dentro del paradigma neoinstitucionalista, y de forma central, nos concentramos en los aportes de Mainwaring y Scully, sobre todo en la compilación *La construcción de instituciones democráticas* (1995), en la que proponen una forma de medir y comparar el nivel de institucionalización de los sistemas de partidos en doce países latinoamericanos. En el último lustro, no se registraron comparaciones. Tengamos en cuenta que la problemática de los movimientos sociales y sus correlaciones con el sistema político (en particular, con el sistema de partidos) no había sido objeto de análisis corriente en nuestro subcontinente, por lo que los escasos desarrollos comparativos en América Latina (tanto de producciones sociológicas, como desde la ciencia política) datan de los últimos veinte años. No obstante, encontramos una profusa bibliografía acerca de la acción social colectiva en los diferentes países (sobre todo de artículos, investigaciones, trabajos colectivos y estudios recientes), pero acotados a sus respectivas realidades nacionales.

Mirza, Christian Adel. Capítulo I. Los marcos teóricos de interpretación y análisis. En publicación: Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina: la construcción de nuevas democracias. Christian Adel Mirza Programa Regional de Becas CLACSO, Buenos Aires, Argentina. 2006. ISBN: 987-1183-45-3. Disponible en la web:
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/mirza/partellcap1.pdf>

Fuente: Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la Red CLACSO
<http://www.clacso.org.ar/biblioteca>

PARTE II

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LOS SISTEMAS POLÍTICOS EN AMÉRICA LATINA

CAPÍTULO I

LOS MARCOS TEÓRICOS DE INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS

HABIDA CUENTA de las múltiples aportaciones teóricas y encuadres conceptuales que por pertinentes y admisibles pueden considerarse relevantes, la selección de los marcos de análisis para el abordaje de la problemática de los movimientos sociales ha resultado de la combinación y articulación de algunas corrientes y enfoques provenientes tanto de la teoría social como de la teoría política.

En principio, no adscribimos a una sola concepción o marco teórico acotado de los movimientos sociales o de la acción colectiva; antes bien, incorporamos algunas visiones que, aunque a priori podrían parecer contradictorias, nos revelan la complejidad de los asuntos en juego y la necesidad de miradas diversas.

En apretada síntesis recogemos los aportes del sociólogo Alain Touraine, quien desde hace más de tres décadas ha resignificado el objeto de estudio de la sociología y argumentado por constituir la acción colectiva y los movimientos sociales en el epicentro de sus estudios, más recientemente orientados al análisis del sujeto colectivo, la democracia y la política. La consideración de un conflicto central para Alain Touraine (1998) constituye una idea fuerza en su marco de análisis, que coloca al sujeto en lucha contra la mercantilización de las relaciones sociales y el triunfo del mercado y, por otra parte, contra los poderes comunitaristas de carácter autoritario; lo que evidencia una tensión permanente entre el mundo de la instrumentalidad (mercado) y el de la identidad

(cultura). En esta dirección, introduce la noción de *movimiento societal*, definido por oposición o diferenciación frente a los grupos de interés (los cuales serían meros instrumentos de presión política), pero también como aquel que da cuenta de una categoría social que cuestiona o interpela ciertas formas de dominación, y que en consecuencia pugna por valores y orientaciones generales de la sociedad con sus antagonistas. El concepto de historicidad que propone Touraine supone precisamente la lucha por una hegemonía o control de aquellas orientaciones culturales e ideológicas en una sociedad determinada; lo que Garretón replantea como la dimensión histórico-estructural en la cual se dirimen los proyectos y contraproyectos sociales.

Al referirse a la sociedad civil en tanto espacio autónomo e intermedio, Touraine observa una debilidad –sobre todo– de los nuevos movimientos sociales como contrapartida de la mayor autonomía o independencia respecto de los actores políticos y del Estado. Democracia y movimientos sociales están intrínsecamente ligados; los últimos no pueden existir sin la primera. Al profundizar su enfoque y concepción de la democracia, Touraine reivindica la democracia cultural de tal modo que pueda efectivamente defenderse la autonomía y la identidad de los movimientos sociales. Estos, en su estrategia de resistencia, apuestan a la reconstrucción de una nueva democracia, o al menos generan las reservas energéticas para tal objetivo. Control social de la economía, limitación de poder, representatividad social de los dirigentes políticos y separación entre el poder temporal y el espiritual (laicismo) constituyen las condiciones y funciones que debería tener la democracia contemporánea.

Desde la óptica latinoamericana, el también sociólogo Manuel Antonio Garretón nos ha ilustrado de manera fundamental acerca de las transformaciones no sólo de las matrices sociopolíticas, sino de las nuevas formas de acción colectiva y la rotación y traslación de sus ejes de evolución, exigiendo en consecuencia la emergencia de nuevos paradigmas epistemológicos. Movimiento Social (singular) y movimientos sociales (plural) definen los dos polos entre los cuales oscilan las diversas teorías, dos dimensiones de un mismo objeto de estudio. Por un lado, el MS, en tanto está orientado “al nivel histórico-estructural de una determinada sociedad y definiendo su conflicto central. Por otro, los movimientos sociales que son actores concretos que se mueven en los campos de la vida y de las instrumentalidades, organizacional o institucional” (Garretón, 2002).

Más concretamente, el autor enuncia una definición básica y caracteriza los movimientos sociales, en tanto acciones colectivas relativamente estables y con un mínimo nivel de organización, “orientados al cambio o conservación de la sociedad o de alguna esfera de ella” (Garretón, 2002). Garretón asevera lo siguiente:

[En general] siempre combinan la referencia a un cierto principio de globalidad con una referencia a una identidad particular. El grado de corporativismo y el de orientación política varían para cada movimiento social. Esta referencia a un principio de acción debe distinguirse del nivel de orientación de la acción colectiva que podría estar conformado por las interacciones personales, el contexto organizacional, el marco institucional o las reglas del juego, y la problemática sociohistórica de la sociedad (Garretón, 2002).

Para Garretón, aquel paradigma teórico de la acción social colectiva, sustentado en la noción de estructura (principalmente económica), determinante de los movimientos sociales subordinados a su lógica, perdió vigencia, en la medida en que no se adecua a los procesos sociopolíticos registrados en los últimos veinte años en América Latina. No hay esquemas sustitativos claros y definitorios, pero sí conceptos que recobran protagonismo en los análisis sociológicos; la idea de cambios continuos y flexibilidad, la integración de la dimensión de las subjetividades, el *mundo de la vida*, la identidad y los factores socioculturales que inequívocamente están emparentados con los presupuestos de la *teoría de los nuevos movimientos sociales*. Por otra parte, plantea la ruptura y descomposición de la matriz sociopolítica clásica que definió la naturaleza de los movimientos sociales y el Movimiento Social; la que asimismo dio cuenta de un modo de articulación entre Estado y sociedad caracterizado por la impronta nacional-popular y estadocéntrica.

[La matriz sociopolítica] define las relaciones entre el Estado y sus diferentes dimensiones (unidad nacional, relaciones de dominación, agente de desarrollo e integración), el sistema de representación (instituciones, sistema de partidos) y la base cultural y socioeconómica de los actores sociales (sociedad civil y economía). Las mediaciones institucionales entre estos tres componentes constituyen el régimen político (Garretón, 2002).

La hipótesis central de Garretón sostiene que la descomposición de la matriz sociopolítica influyó de manera decisiva para modificar la naturaleza del movimiento social y también la resignificación de los nuevos ejes de la acción social colectiva y los conflictos sociales. Desde su perspectiva, los movimientos sociales, y más específicamente las movilizaciones sociales, se encontrarían en la búsqueda de un Movimiento Social Central, exactamente en una situación invertida respecto de la del pasado, caracterizado por la búsqueda de movimientos sociales (actores sociales) de parte del Movimiento Social. En el horizonte próximo, señala, habrán de observarse formas de lucha más autónomas, cortas y menos políticamente orientadas, “relacionadas con las instituciones en lugar de las protestas, más orientadas hacia las inclusiones sectoriales,

las modernizaciones parciales y la democratización e integración social gradual que hacia los cambios globales radicales” (Garretón, 2002).

Los nuevos ejes de la acción colectiva se orientan en cuatro direcciones: la democratización política (sobre todo a partir de los procesos de reinstalación de los regímenes democráticos y su concomitante consolidación); la democratización social apoyada en la revalorización de los derechos sociales y de ciudadanía; la reconstrucción de las economías nacionales y su inserción en el proceso reciente de globalización (desde la implantación del esquema neoliberal); y la reformulación de la modernidad (modernidades, según Garretón, que combinan de manera diversa patrones de racionalidad científico-tecnológica con la dimensión más expresivo-comunicacional y la memoria histórica colectiva). El análisis debería recaer más en los actores sociales que en las estructuras económicas (de producción, distribución y acumulación de capital), conformando un escenario donde los oponentes y antagonistas son más difusos que en el pasado.

El sociólogo Garretón sostiene la improbabilidad de que ocupe el escenario sociopolítico un sólo sujeto o movimiento central “en torno al cual se genere un campo de tensiones o contradicciones” (2002), que articule los principios y orientaciones de la acción colectiva que surge de los nuevos ejes emergentes. Sin embargo, así como plantea la existencia de serias limitaciones o ausencia de incentivos significativos para la acción colectiva (cuestión que discutiremos en nuestro abordaje analítico de los movimientos sociales seleccionados, a partir del cual nos atrevemos a adelantar que al menos podría ponerse en duda tal afirmación, cuando no refutarla con otros argumentos), señala también que nuevas oportunidades políticas se convierten en campo fértil para el desarrollo de múltiples actores sociales más autónomos. El sentido de la política en democracia adquiere en este marco un giro renovado: la reconstrucción de los espacios institucionales –al decir de Garretón–, en que efectivamente la política se redefine, se refunda como articuladora entre actores sociales autónomos y fuertes, con un Estado vigoroso que recupera y emprende su papel como agente de desarrollo.

Desde otra perspectiva de análisis de los movimientos sociales contemporáneos, María da Glória Gohn construye lo que a nuestro juicio es una buena delimitación, lo suficientemente amplia, pero a su vez precisa, de los movimientos sociales (en plural). La definición habilita la inclusión de actores sociales como categoría en tanto resalta las diversas aristas que los distinguen de otras modalidades que asumen las acciones colectivas y movilizaciones sociales, no tan permanentes ni estables.

Movimientos sociales son acciones sociopolíticas construidas por actores sociales colectivos pertenecientes a distintas clases y capas so-

ciales, articuladas en ciertos escenarios de la coyuntura socioeconómica y política de un país, creando un campo político de fuerza social en la sociedad civil. Las acciones se estructuran a partir de repertorios creados sobre temas y problemas en conflictos, litigios y disputas vivenciados por el grupo en la sociedad. Las acciones desarrollan un proceso social y político-cultural que crea una identidad colectiva para el movimiento, a partir de los intereses en común. Esta identidad es amalgamada por la fuerza del principio de solidaridad y construida a partir de la base referencial de valores culturales y políticos compartidos por el grupo, en espacios colectivos que no están institucionalizados. Los movimientos generan una serie de innovaciones en las esferas pública (estatal o no estatal) y privada; participan directa o indirectamente de la lucha política de un país, y contribuyen para el desarrollo y la transformación de la sociedad civil y política. Estas contribuciones son observadas cuando se realizan estudios de períodos de media o larga duración histórica, en los cuales se observan los ciclos de protesta delineados. Los movimientos participan por lo tanto de los cambios sociales históricos de un país y el carácter de las transformaciones generadas podrá ser tanto progresista como conservador o reaccionario, dependiendo de las fuerzas sociopolíticas a que están articulados, en sus densas redes; y de los proyectos políticos que construyen con sus acciones. Ellos tienen como base de soporte entidades y organizaciones de la sociedad civil y política, con agendas de actuación construidas alrededor de demandas socioeconómicas o político-culturales que abarcan las problemáticas conflictivas de la sociedad donde actúan (Gohn, 1997: 252).

Siguiendo el esquema que retoma Alejandro Casas (1999) en su tesis de maestría, Gohn señala cinco categorías o formas de expresión de los movimientos sociales:

- movimientos sociales que se construyen apoyados al abrigo o amparo de instituciones, tales como la iglesia, el partido, el sindicato, la escuela;
- movimientos sociales fundados en rasgos peculiares de la naturaleza humana (sexo, edad, raza y color);
- movimientos sociales construidos a partir de determinados problemas sociales, por ejemplo, aquellos vinculados a la vivienda y al hábitat, a la salud, en relación con asuntos medioambientales o ecológicos, entre tantos otros;
- movimientos sociales generados por la propia coyuntura y en el contexto de las políticas aplicadas (económicas, sociales, cultu-

- rales) que provocan resistencias civiles, insurrecciones y sublevaciones, motines y revoluciones;
- movimientos sociales cuya matriz posee un carácter propiamente ideológico (anarquismo, marxismo, cristianismo), desde la cual se elaboran utopías o ideales, creando a su vez los correlatos organizacionales en la sociedad civil.

Del paradigma norteamericano, los ensayos de síntesis de McAdam, McCarthy y Zald pueden arrojar algunas luces en aspectos esenciales que develan las potencialidades y posibilidades de los movimientos sociales; sus estructuras de oportunidades políticas, de movilizaciones y procesos enmarcadores (factores socioculturales que retoman los análisis de Melucci y Offe, entre otros), en los procesos de interacción con los actores políticos. En la publicación *Movimientos sociales: perspectivas comparadas* (McAdam, McCarthy y Zald, 1999), se recogen aportaciones de numerosos investigadores norteamericanos y europeos que expresan con elocuencia los avances respecto del paradigma de la movilización de recursos y la evolución del enfoque de la movilización política, a partir de la extensión y reconceptualización de las oportunidades políticas. Asimismo, se concreta el esfuerzo por articular esta perspectiva de análisis con la *teoría de los nuevos movimientos sociales* (proclive a un enfoque culturalista e identitario). Según una reseña hecha por McAdam, McCarthy y Zald (1999), el interés por examinar las relaciones entre política institucional y movimientos sociales ya había sido marcadamente valorizado por Charles Tilly, Doug McAdam y Sidney Tarrow desde la escuela norteamericana, y H. Peter Kriesi, Herbert Kitschelt, Ruud Koopmans y Jan Duyvendak en Europa. Los conceptos más desarrollados y profundizados aluden a la “amplia gama de oportunidades políticas y constricciones propias del contexto nacional en que se inscriben [los movimientos sociales]” (McAdam, McCarthy y Zald, 1999). Sean las diferencias entre los estados nacionales, como los cambios o transformaciones en la estructura institucional, o las variaciones en las relaciones informales de poder, todas las variables son consideradas independientes y por tanto con incidencia decisiva en el surgimiento, configuración, desarrollo y grado de éxito de los movimientos sociales. Esta estructura de oportunidades, según Doug McAdam, contiene a su vez algunas dimensiones singulares que contribuyen en términos metodológicos a su desagregación analítica: el grado de apertura del sistema político institucionalizado, la estabilidad o inestabilidad de las alineaciones entre las elites, la presencia o no de aliados entre aquellas elites, y la capacidad represiva del Estado. Para este investigador, también los movimientos sociales pueden influir ampliando las oportunidades políticas, lo que razonablemente implica el reconocimiento de un nexo interactivo.

En el abordaje de Sidney Tarrow, en cambio, se establecen dos miradas o perspectivas de estudio de las oportunidades políticas; desde el análisis estatalista (trans-seccional o dinámico) y el concreto también en sus dos versiones, y se señala además que aquellas oportunidades se refieren a “señales continuas –aunque no necesariamente permanentes, formales o a nivel nacional– percibidas por los agentes sociales o políticos que les animan o desaniman a utilizar los recursos con los que se cuentan para crear movimientos sociales” (Tarrow, 1999). Por su parte, Dieter Rucht (1999) incursiona en aspectos vinculados a los contextos políticos nacionales y los correlaciona con una predefinida tipología organizacional; establece para ello una matriz analítica de cuatro variables: el acceso al sistema de partidos (mayor o menor grado de apertura del sistema político), la capacidad del Estado para implementar políticas públicas, la estructura de alianzas (ya referida por McAdam) y la estructura del conflicto (débil o fuerte, según el perfil y la configuración de los oponentes o actores en pugna). En esta dirección, Rucht asume como variable principal las estructuras de movilización que despliegan y alcanzan los movimientos sociales en contextos diferentes.

Otros factores son fundamentales y constituyen la base de la teoría. Por un lado, la consideración de las estructuras de movilización que reposa en el concepto de dinámica organizacional, para cuyos efectos se comparan las infraestructuras organizativas de los movimientos sociales, se intentan determinar las relaciones entre tipos de movimientos y formas organizativas, y se procura establecer las influencias que pueden ejercer las estructuras del Estado y la *cultura organizativa* en general, sobre la conformación de los movimientos sociales. Más exactamente, las estructuras de movilización se refieren a las “formas consensuadas de llevar a cabo acciones colectivas, a los repertorios tácticos, a formas organizativas concretas de los movimientos sociales y a repertorios modulares de los movimientos sociales” (McCarthy, 1999). Por otro lado, también resultan de significación los procesos enmarcadores entendidos como aquellos “esfuerzos estratégicos conscientes realizados por grupos de personas en orden a forzar formas compartidas de considerar el mundo y a sí mismas que legitimen y muevan a la acción colectiva” (McCarthy, 1999). Para su estudio, Mayer Zald (1999) define seis áreas o aspectos lógicamente interconectados: la construcción cultural de repertorios de argumentos y los marcos en los cuales se encuadran, las contradicciones culturales y los sucesos históricos, los procesos de creación de marcos como actividad estratégica, los procesos competitivos entre actores como escenario donde se desenvuelven las opciones predominantes entre marcos, el papel de los medios de comunicación masiva y, por último, los marcos resultantes y sus efectos sobre el stock cultural.

Del dominio de los sistemas políticos y de la teoría política, anotamos los aportes de Mainwaring y Scully respecto de los partidos políticos y su perfil de institucionalidad en contextos democráticos.

Para el análisis de los sistemas políticos latinoamericanos y sus instituciones democráticas, estos autores proponen el concepto de *institucionalización* (Mainwaring y Scully, 1995), el cual clasifica a los sistemas de partidos en dicha región mediante la aplicación de una metodología comparada. Las categorías propuestas por los autores son las de *sistemas institucionalizados* y *sistemas incoativos*, si bien existe también una tercera, residual, denominada *sistemas hegemónicos en transición*. Dichas categorías no son estáticas, sino que se puede hablar de grados de institucionalización, y de cambios a través del tiempo.

En el grupo de países con sistemas de partidos institucionalizados se ubican Uruguay, Chile, Venezuela, Colombia, Costa Rica y, con menor puntaje, Argentina. En este punto conviene aclarar que la publicación es del año 1995 y los datos utilizados para clasificar a los países abarcan hasta 1993, lo que deja fuera del análisis todos los acontecimientos del último decenio.

Luego de presentar el marco conceptual de los autores mencionados profundizaremos el análisis de las cuatro condiciones para clasificar a los casos estudiados (Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela) como sistemas de partidos institucionalizados, incoativos o hegemónicos. Profundizar el análisis significa, en este caso, intentar una medición más ajustada a la realidad de dichas condiciones, pero además lo haremos actualizando los datos al año 2003. También tendremos en cuenta clasificaciones más clásicas de los sistemas de partidos, como el número de partidos relevantes y el grado de polarización ideológica, conceptos propuestos por Sartori que adecuaremos a nuestro estudio, integrando otros aportes como los de Manuel Garretón o Marcelo Cavarozzi y Abal Medina.

Seguidamente vamos a presentar los conceptos utilizados por Mainwaring y Scully y sus diferentes dimensiones, incluyendo algunos comentarios primarios que guiarán nuestra profundización y actualización. Luego tomaremos de a una las dimensiones y las trabajaremos solamente para los casos en estudio, buscando su ajuste a los datos con que contamos, manejándonos con información actualizada para las elecciones y demás acontecimientos partidarios.

Es necesario aclarar que los autores emplearon sólo información de la que pudieran disponer para todos los países incluidos en el estudio, lo que sin duda limitó el análisis de algunas dimensiones. Y no solamente hay que tener la información, sino que esta debe ser recogida con la misma metodología para que sus datos puedan ser objeto de comparaciones entre los diferentes sistemas de partidos. Esta aclaración vale por cuanto nosotros contamos con información para

todos los países mediante el uso del convenio de CLACSO con el Latino-barómetro, y que además la actualización es posible obviamente desde el presente.

LOS CONCEPTOS Y SUS PRIMEROS AJUSTES

Mainwaring y Scully parten de la idea de que la noción de institucionalización proporciona un instrumento conceptual útil para comparar los sistemas de partidos latinoamericanos. A nosotros nos permite clasificarlos y estudiarlos con relación a los movimientos sociales seleccionados. Primero plantean la noción de *partido* a utilizar y su papel en la forma en que funciona la democracia. Luego se concentran en la noción de *institucionalización*, argumentando qué es lo que permite visualizar las diferencias entre los sistemas de partidos latinoamericanos. Dicha institucionalización surge de observar la estabilidad de la competencia entre partidos, la existencia de partidos con raíces más o menos estables en la sociedad, la aceptación de partidos y elecciones como instituciones legítimas que determinan quién gobierna, y la existencia de organizaciones partidarias con reglas y estructuras razonablemente estables.

Más adelante hacen una clasificación de doce países (Sudamérica más México y Costa Rica) según el grado de institucionalización de sus sistemas de partidos, conformando tres grupos de países. Como sistemas institucionalizados identifican a Colombia, Venezuela, Costa Rica, Chile, Uruguay y, en menor medida, Argentina. Como sistemas incoativos (con bajo nivel de institucionalización o incipientes) presentan a Bolivia, Perú, Ecuador y Brasil. Por último, y como categoría residual, presentan a México y Paraguay como sistemas de partidos hegemónicos en transición, donde la falta de competencia cuestiona el concepto mismo de sistema.

También argumentan que dicha institucionalización es importante para el proceso de consolidación democrática. La existencia de un sistema institucionalizado hace una diferencia en el funcionamiento de la política democrática. Finalmente, agregan al análisis conceptos clásicos para la comparación, como lo son el número de partidos y la distancia ideológica entre ellos, y establecen que en los sistemas presidenciales estos son más estables, con baja dispersión multipartidaria y con una polarización ideológica limitada o moderada. Nosotros agregaremos en el análisis la interacción con los movimientos sociales.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Hemos asumido para el presente estudio la definición que da Sartori de los partidos: “cualquier grupo político que se presenta a elecciones y es

capaz, por medio de las elecciones, de colocar candidatos para cargos públicos” (Sartori, 1992). Por otra parte Mainwaring y Scully (1995) agregan que un partido que quisiera presentarse a elecciones pero no pudiera hacerlo porque no hay convocatoria o porque está proscrito, igual sería considerado como tal. A pesar de ser una definición inclusiva, deja afuera a grupos revolucionarios de vanguardia que no compiten en elecciones.

Los autores plantean que, a pesar de haber cedido algunos espacios, ocupados en cierta forma por los movimientos sociales, los partidos se mantienen en América Latina como los representantes de los intereses de los ciudadanos y como los conformadores de dichos intereses a través de su actividad política. No obstante, se reconoce el creciente poder burocrático, el aumento de fórmulas de representación alternativas (movimientos sociales), el avance de la independencia del electorado frente a los partidos, y el rol jugado por los medios masivos de comunicación, principalmente la televisión. Veremos en los análisis algunos datos que confirman el avance de la independencia del electorado, y somos conscientes también de la tendencia a perder espacios junto con los demás factores que presentan los sistemas de partidos estudiados, sin perder su papel central como representantes de los intereses de la sociedad civil.

SISTEMAS INSTITUCIONALIZADOS DE PARTIDOS

Mainwaring y Scully definen *sistema de partidos* como un conjunto de interacciones esquematizadas en la competencia entre partidos; se habla de reglas y ocurrencias regulares en la competencia; también se plantea la continuidad –aunque no el congelamiento– de sus componentes. Para la noción de sistema se desestiman la falta de regularidad, la debilidad de los partidos y la volatilidad electoral; y la cantidad mínima para aceptar la noción es de dos partidos. Desde las restauraciones democráticas existen, en algunos países más que en otros, interacciones esquematizadas, y las reglas y ocurrencias regulares son las que pautan una competencia electoral desde entonces. Los componentes relevantes del sistema tienen una continuidad, en algunos casos con la presencia excluyente de los partidos tradicionales; en otros, los componentes centrales han sufrido cambios importantes.

La *institucionalización* se refiere al “proceso por el cual una práctica o una organización se hace bien establecida y ampliamente conocida, si no necesariamente aceptada por todos” (Mainwaring y Scully, 1995). Los actores cuentan para sus orientaciones con la continuidad de las prácticas u orientaciones. Suman a su idea una proposición de Huntington: “Institucionalización es el proceso por el cual las organizaciones y procedimientos adquieren valor y estabilidad”. En referencia a

esto, y como primera impresión, debemos manifestar que el valor de las organizaciones y procedimientos de las democracias en estudio tiende a consolidarse, y que desde la apertura democrática su estabilidad ha aumentado constantemente, aunque con dificultades y algunas excepciones. Los autores sostienen que hay cuatro condiciones para considerar institucionalizado un sistema de partidos democrático. En primer lugar, la estabilidad de las reglas y, en la naturaleza de la competencia entre partidos, la regularidad. Luego se plantea que los partidos importantes deben tener raíces más o menos estables en la sociedad. En tercer lugar, los actores políticos importantes deben conceder legitimidad al proceso electoral y a los partidos. En último término, debemos encontrar organizaciones partidarias importantes, bien organizadas y con recursos propios.

El primer criterio, la regularidad, es fácil de medir y comparar por medio del índice de volatilidad electoral de Pedersen, que mide el cambio neto de participación en los cargos parlamentarios (o votos) de todos los partidos de una elección a la siguiente. Luego se utiliza un indicador agregado compuesto por los votos en elecciones legislativas y presidenciales. Para la mayoría de los países analizados se observa una volatilidad muy alta, y se encuentran sistemas estables, moderadamente estables y extremadamente inestables. El segundo criterio, las raíces, hace hincapié en los vínculos entre los partidos, los ciudadanos y los intereses organizados. Los autores sostienen que la diferencia entre votación presidencial y legislativa proporciona información relevante para evaluar el grado de penetración de un partido en la sociedad: la mayor correspondencia habla de una mayor influencia. Las coaliciones se mantuvieron unidas para hacer el análisis. Como alternativa para medir el criterio de las raíces se plantea la posibilidad de contar con encuestas y geografía electoral, a fin de visualizar la permanencia de las identificaciones partidarias y de los perfiles. Para esto contamos con los datos que pueden conseguirse en forma de series temporales construidas por los responsables del Latinobarómetro. En este caso observaremos el proceso de las identificaciones globales del sistema y las continuidades o no en los perfiles. Luego hay que ver las conexiones de los partidos con los intereses organizados, con todo tipo de organizaciones sociales; este es el objetivo general del estudio, para apreciar las conexiones de diferentes organizaciones de la sociedad civil, en particular los movimientos sociales seleccionados, con los partidos políticos. Podemos plantear como de sentido común la existencia de superposiciones de dirigentes entre los movimientos sociales y los partidos, pero las conexiones se dan de muchas otras formas. Con lo que no contamos es con cuantificaciones que nos permitan observar las permanencias o evoluciones de dichas conexiones, pero esto es la materia en estudio.

Para caracterizar el sistema de partidos tiene mucha importancia ver las conexiones que pueden tener sus componentes con los movimientos sociales. Hay que indagar los niveles de asociación entre unos y otros, teniendo como premisa que la cooptación total de unos por otros, o la independencia total de partidos y actores sociales, son extremos que no hablan bien del sistema de partidos o de los partidos en esas situaciones. Además, nos parece que la complejidad de estos aspectos impide cuantificarlos, pero sí habilita un análisis cualitativo que permite concluir tendencias del sistema de partidos, y hacer calificaciones de falta de independencia o de confrontación con los actores de la sociedad civil. Esto último puede mostrar riesgos del sistema de partidos y, por lo tanto, su posibilidad de crisis. A la hora de examinar las raíces de los partidos, su capacidad de sobrevivir y su permanencia se pueden observar registrando y analizando las series electorales, es decir, considerando los votos obtenidos por los partidos nacidos hasta 1950. Otra forma de medirlo es calcular la edad de los partidos que obtuvieron por lo menos un 10% de los votos en la última elección, conformando un índice con la suma de ellos. Debemos preguntarnos si el porcentaje de votos obtenidos en la última elección no debería ser una ponderación para calcular la edad promedio.

El tercer criterio de institucionalización subraya que los ciudadanos e intereses organizados deben percibir que los partidos y las elecciones son los medios para determinar quién gobierna, y que al proceso electoral y a los partidos se les otorga legitimidad o “confianza”. Los autores señalan que los datos de encuestas proporcionan la forma de medir este criterio, por lo cual utilizaremos las encuestas ya mencionadas, realizadas por los responsables del Latinobarómetro, para ver la percepción de los ciudadanos. Asimismo, deberíamos procurar datos relativos a las elites partidarias –del estilo de la encuesta a elites latinoamericanas realizada por la Universidad de Salamanca– y de organizaciones sociales, para ver la percepción de los intereses organizados.

El último criterio habla de que las organizaciones partidarias deben ser relativamente sólidas en los países con sistemas institucionalizados de partidos. Esta es una variable muy difícil de medir, dado que hay diferentes estilos organizativos que, por lo tanto, implican instrumentos de mediciones diferentes y no necesariamente comparables. Además, la solidez puede verse en la capacidad de conducir a los integrantes, o de controlar a los que ocupan cargos en el gobierno, o de convocar a los electores, o en la cantidad de integrantes, etc. Los autores ponen el acento en la lealtad de las elites partidarias y la disciplina de los legisladores; también mencionan la presencia nacional de los partidos y la tenencia de recursos financieros. Indagaremos en algunos de estos aspectos, como por ejemplo, la opinión de los legisladores con respecto de su disciplina partidaria.

Sumando los puntajes obtenidos en cada criterio se obtiene un índice agregado, con la siguiente escala de medición para cada criterio: 3,0: alto; 2,5: mediano alto; 2,0: mediano; 1,5: mediano bajo; 1,0: bajo. El sistema de partidos uruguayo queda entre los calificados como institucionalizados con el máximo puntaje, que llegó a 11,5, igual que Chile. Dentro de la misma calificación, sigue Venezuela, con 10,5 puntos, y Argentina, con 9,0 puntos. Dentro de los sistemas incoativos encontramos a Ecuador y Brasil, con 5,0 puntos cada uno, es decir, un muy bajo nivel de institucionalización para el año del estudio de Mainwaring y Scully (1995). Paraguay es parte de la categoría de sistemas hegemónicos en transición, considerada una categoría residual y no un nivel de institucionalización; el puntaje obtenido de 7,5 se explica porque el Partido Colorado tiene fuertes raíces en la sociedad paraguaya y su organización es muy buena, a pesar de su carácter hegemónico y poco democrático. Sobre el índice agregado y sus dimensiones, los autores expresan: “Los puntos para las tres últimas dimensiones y el puntaje total son aproximaciones en grueso e incompletas” (Mainwaring y Scully, 1995).

OTROS APORTES A LAS DIMENSIONES PLANTEADAS

Contar con un sistema institucionalizado de partidos no necesariamente implica el buen funcionamiento de la democracia, y ni siquiera garantiza su permanencia; al respecto vale mencionar, a modo de ejemplo, el período autoritario entre 1973 y 1984 en el Uruguay. Sin embargo, la institucionalización es muy importante, junto con otras variables como el número de partidos y la polarización ideológica, además del contexto socioeconómico del sistema de partidos y sus respuestas a los desafíos que se le presentan. Además, tiene mayor relevancia si pensamos a la inversa: un sistema de partidos incoativo genera incertidumbre, y también ausencia de controles y equilibrios. Los autores encuentran una asociación fuerte entre sistemas incoativos y el surgimiento de líderes populistas, y agregan que donde existen sistemas de partidos institucionalizados, estos controlan la selección de los candidatos para jefe de gobierno. Los sistemas institucionalizados dan forma, moderan y también limitan la articulación de intereses sociales, los cuales otorgan legitimidad al sistema más allá de la coyuntura. Encuentran también correspondencia entre, por un lado, gobernabilidad y sistemas institucionalizados, y, por el otro, incertidumbre en el gobierno con la falta de institucionalización de los sistemas de partidos. En cuanto al número de partidos, los autores usan el número efectivo de partidos (NEP) de Laakso y Taagepera (1979), desestimando la forma de contar partidos relevantes utilizada por Sartori (1992), el cual hace hincapié en dos propiedades: la cantidad de partidos y el tipo de competencia, que le permiten construir siete categorías de sistemas, entre las que se

encuentran: de partido predominante, bipartidista y pluralismo. Los criterios de Sartori se sustituyen por la fórmula aritmética de Laakso y Taagepera que permite hacer un cálculo más preciso del NEP. Esta medición estima cuántos partidos hay en un sistema, ponderándolos según su peso electoral (o legislativo). Si dos partidos se reparten en porciones iguales la totalidad de votos, el NEP será 2. Si uno de ellos lleva más votos que el otro, el NEP será menor a 2. Cuando el NEP se mueve entre 2 y 2,5 tendremos un sistema con dos partidos grandes y otro pequeño. Cuando el NEP se ubica entre 2,5 y 3, el sistema tendrá dos partidos grandes y uno intermedio o dos o más partidos pequeños. Los autores reconocen la falta de medios precisos para medir el grado de polarización ideológica, limitación que procuramos superar analizando la distancias que separan a los partidos en la escala de identificación ideológica, donde 1 es extrema izquierda y 10 extrema derecha; esto nos permite determinar si la fuerza de la competencia es centrípeta, hacia el centro, o centrífuga, hacia los extremos del espectro político.

PASOS A SEGUIR

A continuación hay que tomar cada una de las dimensiones propuestas para medir el grado de institucionalización, buscando en cada caso profundizar el análisis ajustando las mediciones y actualizando los datos a 2003. Estas son la regularidad del sistema, las raíces de los partidos, la legitimidad de los dos y, por último, las organizaciones partidarias –teniendo en cuenta, como mencionamos–, otros aportes. Contando con lo anterior vamos a reclasificar los sistemas de partidos ubicando los países en estudio según su nivel de institucionalización. Todo esto con el objetivo de estudiar las conexiones que tienen los componentes partidarios de cada sistema con los movimientos sociales seleccionados para el estudio, y mediante una metodología comparada encontrar similitudes o divergencias en dichas conexiones. También se tendrá en cuenta el nivel alcanzado en la implantación de las políticas neoliberales en todas sus dimensiones.

CUADRO 1
PARTIDOS RELEVANTES HASTA 2003

Argentina	
ARI	Afirmación para una República Igualitaria
PJ	Partido Justicialista
AL.MOV.FED	Alianza Movimiento Federal-Recrear para el Crecimiento (Ricardo López Murphy)

CUADRO 1 (CONTINUACIÓN)
PARTIDOS RELEVANTES HASTA 2003

Brasil	
PT	Partido de los Trabajadores
PSDB	Partido de la Social Democracia Brasileira
PSB	Partido Socialista Brasileiro
PMDB	Partido Movimento Democrático Brasileiro
PCdoB	Partido Comunista del Brasil
PPS	Partido Popular Socialista
Chile	
PDC	Partido de la Democracia Cristiana
PPD	Partido Por la Democracia
PS	Partido Socialista
RN	Renovación Nacional
UDI	Unión Demócrata Independiente
Ecuador	
RP	Reconquista Popular (León Roldós Aguilera)
ID	Izquierda Democrática
PRE	Partido Roldosista Ecuatoriano
PSC	Partido Social Cristiano
PSP/MUPP	Movimiento de Unidad Plurinacional Patchakutik
PRIAN	Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Álvaro Fernando Novoa)
Paraguay	
MPQ	Movimiento Patria Querida
ANR	Asociación Nacional Republicana Partido Colorado
PLRA	Partido Liberal Radical Auténtico
UNACE	Unión Nacional de Ciudadanos Éticos

CUADRO 1 (CONTINUACIÓN)
PARTIDOS RELEVANTES HASTA 2003

Uruguay	
EP-FA	Encuentro Progresista-Frente Amplio
PC	Partido Colorado
PN	Partido Nacional
Venezuela	
CR	Causa R
MAS	Movimiento al Socialismo
MVR	Movimiento V República
AC	Arias Cárdenas

Fuente: elaboración propia.

Mirza, Christian Adel. Capítulo II. Los casos examinados. Movimientos sociales y sistemas de partidos en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Uruguay. En publicación: Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina: la construcción de nuevas democracias. Christian Adel Mirza

CAPÍTULO II

LOS CASOS EXAMINADOS

MOVIMIENTOS SOCIALES Y SISTEMAS DE PARTIDOS EN ARGENTINA, BRASIL, CHILE, ECUADOR, PARAGUAY, VENEZUELA Y URUGUAY

Programa Regional de Becas CLACSO, Buenos Aires, Argentina. 2006. ISBN: 987-1183-45-3. Disponible en la web:

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/mirza/partellcap2.pdf>

Fuente: Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la red CLACSO

<http://www.clacso.org.ar/biblioteca>

MOVIMIENTOS SOCIALES

Tal como explicamos anteriormente, hemos considerado relevantes algunas variables e indicadores relativos a los movimientos sociales que dieran cuenta de las singularidades de cada país, y al mismo tiempo nos permitieran conectar dimensiones de una misma realidad y compararlas. En ese sentido, elaboramos una restringida batería de indicadores de mayor o menor desarrollo de los actores sociales, así como de su relevancia en los escenarios públicos específicamente nacionales. Los rasgos que caracterizan los movimientos sociales considerados fueron examinados a partir de las siguientes definiciones conceptuales básicas.

GRADO DE ORGANICIDAD

La dimensión socioorganizacional constituye a nuestro juicio uno de los aspectos más importantes, en la medida en que le adjudicamos un especial papel en la pervivencia de los movimientos sociales, en el desarrollo de su propia base de sustentación, y porque condiciona en cierta medida sus capacidades de influir tanto en la arena política como en el plano de las grandes orientaciones culturales e ideológicas de la sociedad. Los grados de organicidad se pueden verificar teniendo en cuenta la estructura de los movimientos sociales (más o menos formalizada), el organigrama respectivo (escrito o no), la disposición de recursos de toda clase (no

solo económicos), la presencia de autoridades o voceros reconocidos, las redes internas o grupos existentes que funcionan *ad hoc*, las reglas y normas de actuación. Para ello hemos establecido un rango simple de tres grados en la escala que va desde un grado alto de organización, pasando por un grado medio, hasta el grado bajo de organicidad. La escala propuesta supone entender que un grado alto de organicidad implica mayor formalización de los vínculos entre los miembros de los movimientos sociales, así como una estructura organizacional consensuada o aceptada por sus miembros; también implica el reconocimiento de reglas y normas que regulan el funcionamiento y el proceso de decisiones. Un grado medio de organicidad da cuenta de mayor laxitud o indefinición de aquella estructura, en tanto un grado bajo de organicidad estaría reflejando la casi inexistencia de reglas o acaso solo de algunas normas básicas y prácticamente la inexistencia de organismos internos establecidos del tipo *Consejos, Comités o Comisiones Directivas*.

CAPACIDAD PROPOSITIVA

Entendemos la capacidad propositiva como aquella que alude a las elaboraciones de respuestas más o menos articuladas y consistentes referidas a los problemas particulares de las poblaciones afectadas y de los movimientos sociales que las representan, así como las propuestas que trascienden sus asuntos específicos para colocarse como alternativas sociales inclusivas o de carácter universal. De esta manera se toman en cuenta las plataformas de naturaleza reivindicativa y los proyectos de carácter general asociados a los modos de regulación de los conflictos, y a la democracia como régimen de convivencia sociopolítica. A tales efectos se examinan los documentos elaborados y propuestos públicamente; se analizan los diferentes momentos en que se formulan propuestas y se caracterizan sus respectivas plataformas, la amplitud de las propuestas (es decir, si son reivindicaciones puntuales o muy parciales o si, por el contrario, abarcan un abanico de intereses generales), y se evalúan los resultados de las propuestas (reacción de los demás actores sociales o estatales).

CAPACIDAD DE CONVOCATORIA

Esta dimensión da cuenta de cuáles son los grados de apoyo y legitimidad de los movimientos sociales. Se trata de corroborar, o al menos estimar, la base social de apoyo al movimiento, tomar nota de la cantidad de personas que se manifiestan a favor de sus postulados, o al menos responden a sus convocatorias. También puede ser una medida de la legitimidad obtenida en la escena pública. La capacidad de movilización popular y callejera es tal vez el indicador más contundente para evaluar

cuánto respaldo tiene un movimiento social, aun cuando la capacidad de convocatoria se exprese de otras maneras menos visibles o aparentes. He utilizado también una escala básica que va desde una adhesión y respaldo alto, medio o bajo para el caso de una carencia o débil capacidad de convocatoria social.

DISCURSO POLÍTICO

El discurso permite apreciar la construcción de identidades colectivas y sus respectivas apelaciones (diferenciándose por categorías sociales, económicas y territoriales); también manifiesta los proyectos societales, o simplemente da cuenta de los objetivos y finalidades específicos. Asimismo, los discursos ilustran sobre el tipo de intercambios con las elites y los demás actores y movimientos sociales, así como los vínculos con el aparato del Estado. El uso de los medios de comunicación masivos arroja algunas luces tenues a propósito de la capacidad de amplificar sus voces y sus discursos.

GRADO DE AUTONOMÍA

En rigor, resulta muy difícil identificar los indicadores de esta variable propuesta. Cabe precisar en primer lugar qué se entiende por autonomía: nos referimos muy concretamente a los vínculos más o menos fuertes de los dirigentes y principales cuadros medios de los movimientos sociales con algunos partidos políticos, que pueden expresarse en clave de subordinación estratégica o de diferenciación fuerte de opciones y valores. Asimismo, puede entenderse como la expresión de los intereses sociales de un determinado movimiento social sin mediaciones institucionales del sistema político, o bien como lejanía o equidistancia respecto de los partidos y del Estado, que los hace colocarse, en fin, en oposición a ambos. Pero también y desde otra perspectiva, lo opuesto a la autonomía supondría la subordinación y funcionalización, instrumentalización de los movimientos sociales por parte de los partidos y del Estado; esto implica la pérdida de independencia en la definición de los objetivos, estrategias de acción colectiva, y finalmente la anulación de su sentido de identidad y de existencia. En ese caso no habría autonomía, sino cooptación, "asfixia", pérdida de legitimidad, desencantamiento de los ciudadanos, de los adherentes y militantes de los movimientos sociales, que verían en ellos tan sólo poleas de transmisión de intereses "ajenos". En este enfoque la politización se asimila al concepto de partidización.

En las conversaciones con informantes calificados relacionados con los movimientos de piqueteros en Argentina se alude al proceso de fragmentación (en sentido negativo, como pérdida de unicidad de la ac-

ción colectiva y, en consecuencia, degradación de la fuerza o poder de negociación frente a los partidos y al Estado), provocado en parte por la penetración (intento de “copamiento”) del movimiento por sectores políticos, fuerzas o partidos de la más diversa extracción y origen (peronistas de diversas tendencias, trotskistas, anarquistas, entre otros). Sin duda, la relación de los movimientos sociales con los partidos ha estado históricamente asociada a la lucha de clases, a las reivindicaciones por los derechos sociales y políticos, con los movimientos y partidos políticos. No podría deslindarse el íntimo enlace entre comunistas y anarquistas con los sindicatos o movimientos obreros de las primeras décadas del siglo XX, ni entenderse la evolución de unos sin los otros. Pero la autonomía admite grados, lo que presupone que en cierto sentido los movimientos sociales se construyen por diferenciación respecto de los partidos, percibidos como no siempre idóneos para defender intereses socialmente legitimados, o inexistentes en tanto depositarios de confianzas y representaciones sociales populares.

En todo caso, cuando me refiero a la autonomía estoy pensando en la no subordinación estratégica de fines y orientaciones a los de los partidos políticos, y cuando me refiero a la autonomía respecto del Estado es justamente porque aquella les permite a los movimientos sociales establecer un diálogo –negociador– desde una posición propiamente suya, y no manipulada por las elites del poder burocrático.

TASA DE AFILIACIÓN

Este indicador, que registra el número de adherentes al movimiento, puede con frecuencia, por diversas circunstancias, no ser ilustrativo del apoyo o adhesión al movimiento; aun cuando para muchas organizaciones sociales la afiliación es un medio para formalizarse e institucionalizarse, dotándolos de una mayor trama orgánica, y un intento de galvanizar los apoyos sociales de la ciudadanía, así como de permitir una mayor transparencia en los momentos de decisión más significativos (elección de autoridades, resoluciones ante conflictos prolongados), aportando además una base segura para el financiamiento del funcionamiento general. Sin embargo, ha sido difícil obtener datos fidedignos para todos los casos seleccionados, lo que ha resultado más sencillo en los movimientos de trabajadores sindicalizados.

SISTEMAS DE PARTIDOS

En este capítulo vamos a presentar, resumidos en un cuadro, los datos 1996-2003 referidos a los sistemas de partidos de cada país, pero se va a hacer una pequeña reseña del sistema político nacional de cada uno, teniendo en cuenta los datos anteriores a ese período en base al trabajo

de Mainwaring y Scully (1995) y algunos datos del período pero en forma de adelanto del posterior estudio de los datos correspondientes.

El análisis pormenorizado de la evolución del sistema de partidos en el período 1996-2003 se hace en el capítulo III de esta segunda parte y en los cuatro capítulos de la parte III donde se presentan algunas conclusiones respecto de las hipótesis planteadas y algunos escenarios futuros. Esta advertencia debe estar presente a la hora de ver la caracterización del sistema político que se hace luego de presentar los movimientos sociales seleccionados para cada país.

ARGENTINA

Los casos seleccionados son movimientos sociales de reciente desarrollo. Tanto la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), como los “Piqueteros” o Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD) emergieron en la década de los noventa y son contemporáneos, no casualmente, al período en que se implantó de manera completa y profunda el denominado modelo neoliberal, a cuyo frente se ubicó el entonces presidente de Argentina Carlos Saúl Menem.

CARACTERIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

CENTRAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS (CTA)

- Contexto histórico de origen y evolución reciente

A inicios de la década del noventa surge, en diversos encuentros más o menos informales en Burzaco y Rosario, el Congreso de Trabajadores Argentinos, luego convertido en Central de los Trabajadores Argentinos. En dichos encuentros se fue dibujando una alternativa al sindicalismo histórico dominado por la CGT, en sus dos versiones.

En 1991, por impulso sobre todo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), se fue perfilando este nuevo movimiento social como reacción al burocratismo sindical de las centrales de inspiración peronista, sobre tres pilares: afiliación directa (verdadera innovación en términos de organización y legitimidad social), incluyendo a otros sectores sociales (no necesariamente sindicales); democracia plena sustentada en la participación activa de sus integrantes; y autonomía respecto de cualquier partido político y con relación al Estado. Formalmente, el Congreso se creó el 14 de noviembre de 1992, cuando varios sectores abandonaron la CGT para fundar la CTA, en la que confluyeron además organizaciones territoriales, barriales, desocupados, campesinos y pequeños comerciantes. En 1996 se constituyó como Central, afirmando su identidad combativa y de resistencia al neoliberalismo implantado por el gobierno peronista de Carlos Menem,

y presentando una alternativa al modelo socioeconómico vigente. En la etapa 1999-2002 la CTA fue ganando adhesiones y reconocimiento de la sociedad civil, configurándose como un actor social independiente pero con vocación de articulación con otros movimientos sociales, y en franca oposición al statu quo hegemónico.

Especial mención cabe realizar a los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001 que provocaron la caída del presidente Fernando de la Rúa, en los que participaron decenas de miles de manifestantes, entre quienes se encontraban también dirigentes y líderes de la CTA, aun considerando el carácter policlasista, plural, heterogéneo y autoconvocado de aquel episodio histórico. Otro hito fue la conformación del Frente Nacional contra la Pobreza, entre cuyos organizadores estuvo la CTA, que junto con organismos de derechos humanos, organizaciones piqueteras y barriales, fuerzas políticas y asociaciones de pequeños propietarios del campo y la ciudad organizó una consulta masiva que culminó en diciembre de 2001, en la que participaron más de tres millones de ciudadanos, reclamando un seguro de empleo para los jefes y jefas de hogar desocupados. Desde el Congreso de Mar del Plata, de diciembre del año 2002, “comienza una nueva etapa signada por la intención de comprometerse en la construcción de un nuevo movimiento político y social que posibilite la apertura de nuevos horizontes frente a la crisis de representación política que padece la Argentina”².

- Organicidad

Según lo expresado en el documento de presentación de la CTA, la estructura amplia y flexible incluye:

Más de 240 organizaciones sindicales y sociales [que] se extienden por todo el territorio nacional. De sus casi 850 mil afiliados, alrededor del 60% lo componen las organizaciones sindicales, un poco más del 15% los jubilados y el restante, en una cuantía un poco menor al 25%, las organizaciones barriales y campesinas. Dentro de las organizaciones específicamente sindicales, aquellas con mayor peso numérico e institucional son ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) y FJA (Federación Judicial Argentina), entre otras [...] En cuanto a los movimientos sociales no sindicales, la FTV –Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat–, la organización territorial de la CTA, incluye a campesinos, desocupados urbanos y

² Expresiones de la CTA en su página oficial <www.cta.org.ar>.

organizaciones de asentamientos. También movimientos sociales relacionados con la niñez, como el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, o las mujeres, como AMMAR, Asociación de Mujeres Meretrices, entre otros (CTA, 2003).

Es preciso destacar que la CTA extiende la organización tanto a trabajadores activos y sindicalizados como a desocupados y jubilados, poniendo énfasis en sus alcances organizativos y en fomentar los nucleamientos o agregaciones mayores a través de las federaciones por grandes sectores de la economía (la Federación de Trabajadores de la Industria, la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina), lo que le permite plantearse las intervenciones vinculadas a las “políticas públicas o de Estado” (Rauber, 2000). Asimismo, se propone tres tipos de estructuras organizativas de acuerdo con el tipo de conflictos, definidas respectivamente por “la relación obrero-patronal, es decir, al interior del establecimiento [de trabajo] [...] la organización ligada a la disputa en torno a los conflictos que plantean las políticas públicas [...] y la organización en el área territorial” (CTA, 2003).

En relación con la estructura y dinámica interna de toma de decisiones, se observa una especial preocupación por la participación horizontal de todos los miembros. El máximo organismo deliberativo y de decisión lo constituye el Congreso Nacional, en cuyo nivel están representados todos los sindicatos, gremios y afiliados directos, en un esquema de un delegado congresal por cada cien afiliados.

El delegado congresal se elige de acuerdo a cada estatuto de cada entidad, pero siempre mediante la elección directa. Los afiliados no representados a través de entidades sindicales eligen a sus congresales a partir del ámbito territorial –o del ámbito subjetivo que los agrupe– mediante la realización de asambleas –respetando siempre– la proporción y el voto directo. Es en los congresos nacionales donde se fijan las líneas generales de actuación, la política de organización y finanzas y la política internacional. También es en ese ámbito donde se elige la Junta electoral. Los momentos de actualización o de discusión de las líneas de trabajo lo dictan los Confederales, órganos compuestos por los Secretarios Generales de las provincias y de las distintas localidades. La intervención en la coyuntura –en un ámbito más cotidiano y con reuniones de al menos una vez al mes– lo realiza la Mesa Nacional compuesta por cada uno de los Secretarios Generales de las CTA provinciales, más un Secretariado General elegido por voto directo y secreto de la totalidad de los afiliados. Este secretariado es, a su vez, el encargado de la ejecución de lo resuelto por los ámbitos más amplios, antes mencionados (CTA, 2003).

En síntesis, la CTA presenta un alto grado de organicidad y anclaje en organizaciones plurales con diversos grados de consolidación específica.

- Capacidad propositiva

La CTA ha formulado, en los escasos años de su desarrollo, varias propuestas e iniciativas vinculadas al trabajo, a la problemática del desempleo y de los hogares por debajo de la línea de la pobreza, entre otras. Una breve reseña obliga a incluir a modo de ejemplo: el proyecto del Seguro de Empleo y Formación para todos los desocupados, que suponía un subsidio de 500 pesos para los jefes de hogar en situación de desempleo, haber mínimo jubilatorio y asignación universal para todos los hijos, entre otras. Corresponde señalar que otras organizaciones sociales como el Instituto Cooperativo, la Federación Agraria y la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios acompañaron la iniciativa, lo que puso de manifiesto también la capacidad de articular e integrar a otros sectores sociales. Por otra parte, la convocatoria a la conformación de un Frente Nacional contra la Pobreza despertó numerosas adhesiones, y dio paso a la convocatoria de un referéndum organizado por las mismas organizaciones sociales, con resultados plausibles en los que se expresaron más de tres millones de argentinos.

En virtud de sus orígenes y su posicionamiento como nueva articulación sociosindical, puede afirmarse que la CTA se constituye como un actor social relevante, legitimado al menos por dos fuentes, precisamente por su capacidad propositiva, y por su capacidad de convocatoria amplia. La propia autoconstitución como Central de Trabajadores, luego de su primigenia configuración como Congreso, nos informa de la innovación institucional y la audacia en las propuestas removedoras y diferentes de anteriores prácticas sindicales.

- Convocatoria y movilización

La convocatoria a trabajadores sindicalizados y con tradición organizativa fuertemente anclada en un movimiento obrero casi dependiente o cooptado por el peronismo, les implicó a los fundadores de la CTA una ruptura radical con aquel pasado y un riesgo de fracaso muy grande. La historia reciente, tras más de una década de aquellos momentos, ha demostrado el fin de la perennidad de las tradiciones sindicales específicamente vinculadas a la CGT, jaqueando una hegemonía ya en franca degradación en una disputa por la legitimidad de la clase trabajadora en su conjunto. Este proceso de gestación de un nuevo movimiento de trabajadores y no exclusivamente obrero, vertebrado bajo la consigna de la recuperación de la centralidad del trabajo y la dignidad de los desocupados, conquistó un espacio ciertamente “abandonado” por la vieja central sindical, poniendo de relieve la capacidad de convocatoria

extensiva a otros movimientos sociales más o menos formalizados que tuvo y tiene la CTA.

En los años de tránsito de *Congreso* a *Central*, la CTA supo incorporar experiencias plurales y diversas que emergían como fruto de las preocupaciones por problemas de sobrevivencia, de defensa de los derechos humanos más elementales, en fin, de una mirada de organizaciones de base popular vinculadas a los asentamientos irregulares o de enclave barrial o territorial. Las múltiples movilizaciones en la calle, entre las cuales se recuerda la iniciativa de la Carpa Blanca, resistencia de los docentes, numerosos cortes de ruta o piquetes protagonizados por organizaciones que integran la CTA, la carpa frente a la OIT por libertad sindical, manifestaciones públicas que fueron desde los apagones de luz hasta los mitines y las marchas ya clásicas (la Marcha Federal y la Marcha Grande), sin olvidar la masiva adhesión al referéndum por el Plan contra la Pobreza (más de tres millones de ciudadanos que se expresaron en las urnas), así como su presencia en las aciagas jornadas de los días 19 y 20 de diciembre de 2001, principalmente en Buenos Aires: todas ellas ratifican la alta capacidad de convocatoria y movilización de la CTA.

- *Discurso político*

Los principales líderes, dirigentes y referentes de la CTA han construido un discurso signado por la oposición al modelo neoliberal implantado y profundizado durante el gobierno de Carlos Menem, y de equidistancia de los partidos políticos hegemónicos en las últimas décadas en Argentina. La impronta radical y anticapitalista también es un elemento distintivo en su discurso político, matizada por la actitud abierta al diálogo con otros actores sociales que no necesariamente coinciden o comparten todas sus reivindicaciones, presupuestos y propuestas. El antiburocratismo (como contraposición a la tradición burocrática del movimiento obrero de los años setenta y ochenta), la participación libre y la democracia interna son el soporte ideológico y conceptual del movimiento, que ha reafirmado su papel en la consolidación de la institucionalidad democrática aunque sobre nuevos pilares. La CTA procura generar un proyecto político social que trascienda la propia organización de los trabajadores, para situarse junto con otros sectores productivos (pequeños y medianos empresarios, productores rurales, etc.) en una recuperación de la soberanía nacional, por lo que asimismo adquieren relevancia las posturas antiimperialistas que se manifiestan en alusión al FMI o al Banco Mundial, incluso en contra del proyecto del ALCA.

Finalmente, debe subrayarse que el discurso político de la CTA gira siempre en torno de algunos ejes, ya mencionados, pero que pue-

den sintetizarse en la recuperación de la centralidad del trabajo y de la identidad de clase, la producción y la distribución de la riqueza, así como la eliminación de la pobreza como efecto directo de los cambios reclamados, todo lo cual perfila un proyecto antisistémico.

- *Autonomía*

La cuestión de la autonomía constituye para la CTA un asunto de principios, lo que no oculta sin embargo la convergencia en su interior de varias corrientes del pensamiento marxista (ortodoxos y renovadores), anarquista, o incluso cristiano de izquierda. Tal vez por esta misma prefiguración heterogénea, plural y tolerante, la autonomía sea más valorada y respetada, aun cuando coexisten posiciones diferentes respecto al alcance mismo del concepto y a la práctica de la autonomía. Sectores de la izquierda y el centro del espectro político se hallan de algún modo insertos en el movimiento social a través de representantes electos o candidatos en las recientes elecciones de 2002: militantes y dirigentes del ARI (liderado por la diputada Carrió), del Partido Comunista, del trotskismo en algunas de sus vertientes, de las fracciones del peronismo, de fuerzas socialistas, de Izquierda Unida, del radicalismo, de las corrientes que conformaron el FREPASO en tiempos de cierta unificación de las izquierdas; en fin, de una panoplia de las denominadas corrientes progresistas que intentan incidir en las orientaciones generales de la CTA.

En nuestros espacios hay compañeros que son diputados, representantes de distintas políticas partidarias. Lo que sí, lo que nosotros como Central, y lo hemos decidido en el congreso, es que tenemos que asumir la autonomía, ratificamos la autonomía, la autonomía de los partidos políticos, de los patrones y de los gobiernos. Autonomía significa decisión democrática de la clase trabajadora. El problema es cuando hay quienes resuelven en los partidos y operan en los sindicatos, en las organizaciones, para que se haga lo que se resuelve en los partidos. Eso es dependencia. Autonomía es resolver en el sindicato, resolver en la unidad política de la clase trabajadora y compartir la acción con las definiciones políticas [...] Ese es el esquema de relacionamiento con los partidos políticos (entrevista a un dirigente de la CTA, integrante de la Mesa Nacional).

Esta autonomía le ha permitido a la CTA una articulación con diversos sectores sociales y políticos en torno a varias iniciativas, conformando plataformas amplias y heterogéneas que lograron el reconocimiento de otros actores sociales y políticos, así como del Estado, adjudicándole una interlocución válida, sobre todo en los episodios más críticos. Derivada de la discusión respecto de la autonomía y

el relacionamiento con los partidos políticos, ha surgido con fuerza inusitada la necesidad, planteada en los últimos congresos, de construir una herramienta política que sea capaz de alojar las expectativas, proyectos y aspiraciones del “movimiento popular”. Para algunos de sus dirigentes la mirada está puesta en la experiencia del PT brasileño; en cambio, para otros, aún no estarían dadas las condiciones ni subjetivas ni objetivas para crear un partido político³, aunque casi todos coinciden en la exigencia de indagar y explorar opciones de una nueva institucionalidad que traduzca las acumulaciones del movimiento social en correlatos en la arena específicamente política.

- *Tasa de afiliación*

Al momento de recabar los datos respecto de la afiliación, se contabilizaban unos 850 mil afiliados y adherentes a la CTA (aproximadamente un 6,3% de la PEA), con un incremento progresivo de la masa de trabajadores y de organizaciones de carácter territorial, que expresan de diversas maneras su apoyo al movimiento social.

MOVIMIENTOS DE TRABAJADORES DESOCUPADOS (MTD) – MOVIMIENTO PIQUETERO

- *Contexto histórico de origen y evolución reciente*

La consideración del Movimiento Piquetero exige el reconocimiento de una conformación múltiple y heterogénea, caracterizada por la diversidad de agregaciones y organizaciones de primer y segundo orden y cuyas interrelaciones están signadas por liderazgos en puja y orientaciones políticas de diferente origen. De todos modos, algunos rasgos del movimiento los unen en términos de una forma de lucha bien singular: precisamente el *piquete* o corte de ruta, así como la procedencia de los sectores sociales, mayoritariamente desocupados y excluidos de los circuitos de la economía formal y de las representaciones simbólicas e iconográficas de una cultura argentina supuestamente homogénea.

Las movilizaciones acompañadas por cortes de ruta (*piquetes*) surgieron en localidades del interior de la Argentina, en las provincias de Jujuy, Neuquén y Salta en 1996 y 1997; se desarrollaron de manera explosiva en los años sucesivos con inusitada violencia y represión, registrándose los primeros piquetes en Cutral-Có y Plaza Huincul (ambas

³ El caso singular lo constituye el Partido de los Trabajadores Argentinos (PTA), que condujo al líder de la FTV, Luis D'Elía, a la candidatura como gobernador de la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones del año 2003, lo que inevitablemente generó reacciones a favor y en contra.

en Neuquén⁴), en Tartagal, en General Mosconi⁵, y poco más tarde se instalaron como modalidad combativa en el sur del país, en el conurbano bonaerense (La Matanza, San Francisco Solano, Lanús, Guernica, entre tantas otras).

El punto de inflexión más alto fue la lucha de los dieciocho días de La Matanza, en mayo de 2000, con miles de compañeros cortando rutas durante dieciocho días, que se transformó en la primera lucha exitosa. Porque Tartagal, Mosconi, Plaza Huincul, Cutral-Có habían sido luchas que conmovieron pero que terminaron en represión y en muerte, en autoritarismo. La nuestra terminó en un convenio de 25 millones de dólares donde el gobernador y la ministra tuvieron que venir a capitular a la ruta, y eso abrió el camino al 19-20 de diciembre de 2001. A partir de allí nuestro pueblo pudo ver que era posible pelear y que era posible ganar. De ahí vinieron piquetes en toda la Argentina, nuevos movimientos piqueteros, la lucha de las 24, 48 y 72 horas de piquete en todo el país, el primero y segundo congreso piquetero. Ahí explotó una etapa que puso en crisis el modelo (entrevista al dirigente Luis D'Elía⁶).

Desempleo de larga duración, desestructuración del suelo industrial (cierre de fábricas, desindustrialización, pérdida del sistema de protección social), “desafiliación” del trabajador formalizado, que inserto en la cadena productiva mantenía aún las certezas del empleo relativamente estable, con los consiguientes beneficios sociales, económicos y culturales; todo llegó a su fin en la era menemista. La impotencia y rebeldía inicial encauzaron a importantes contingentes de trabajadores desempleados hacia nuevas y por cierto, innovadoras, formas de lucha. Los piqueteros se organizan de manera independiente de cualquier mediación política o sindical (aun cuando se observaron movilizaciones conjuntas con trabajadores sindicalizados y partidos de izquierda); la asamblea ha sido la instancia de discusión y decisión, incluso en los momentos más álgidos de la confrontación. El estereotipo del piquetero puede inducir fácilmente a confusiones, sin advertir las diferencias

4 Fue en esta provincia donde murió baleada Teresa Rodríguez, en un episodio con impacto y trascendencia nacional. Podría decirse que fue el punto de inflexión que precipitó los acontecimientos sucesivos y la extensión de los piquetes y fogones a numerosos puntos de varias provincias, para un poco más tarde llegar al Gran Buenos Aires.

5 Aunque, en rigor, esta movilización no fue sólo de desocupados, sino de empleados y obreros de YPF, la empresa petrolera argentina, otrora estatal y luego privatizada.

6 Principal líder y presidente de la FTV (afiliada a la CTA), organización de piqueteros que incluye también “aborígenes, campesinos empobrecidos, villeros y asentados, ocupantes e inquilinos, trabajadores de los institutos de la vivienda, ligas de consumidores, mujeres”, según el propio entrevistado.

entre sus diversas manifestaciones y expresiones morfológicas, plurales y heterogéneas, las cuales llevan a afirmar a ciertos analistas que “el Movimiento Piquetero es un verdadero movimiento de movimientos” (Fontana et al., 2002). Dos características son comunes a los estallidos sociales y a los piquetes, según las anotaciones de Gabriela Delamata (2002); por un lado son protestas laborales, vertebradas en torno a la cuestión del trabajo, y por otro, son protestas contra el sistema político en general y particularmente contra aquellos sectores que definieron los rumbos económicos de la nación argentina en la última década del siglo pasado (Carlos Menem desde 1990 y Fernando de la Rúa a partir de 1999 y hasta su renuncia abrupta en 2001).

Desde mediados del año 2000, los diversos grupos y conformaciones piqueteros participaron de manera cada vez más activa y protagónica en numerosas movilizaciones callejeras y marchas, sumándose al Frente Nacional contra la Pobreza, para finalmente constituirse en julio de 2001 como Congreso Nacional de Piqueteros⁷, con la presencia de más de 2 mil delegados de las distintas provincias y del Gran Buenos Aires. La institucionalización y el mayor grado de formalización que implicó la articulación del movimiento evidenciaron simultáneamente las divergencias preexistentes entre los diversos aglutinamientos sociales de los piqueteros. Entre mayo y junio de 2001 se fueron registrando diferentes movilizaciones, que anticiparían la configuración de la Coordinación Nacional Piquetero, donde se destacan: el corte de la ruta nacional N° 3 (a la altura de Isidro Casanova, en la provincia de Buenos Aires), por parte de 3 mil desocupados; unas 2 mil personas que colocaron un piquete para cortar el acceso del puente internacional que une Argentina con Bolivia (en Jujuy); cortes de ruta en los puentes Alsina, Pueyrredón y Uruburu; un paro nacional convocado por la CTA, la CCC y la CGT, y numerosos cortes de ruta a lo largo y ancho del país; luego se organizó la primera movilización conjunta y coordinada del Movimiento Piquetero, en la que participaron más de 100 mil personas en 200 protestas (OSAL, 2001). Más tarde se sucederían más jornadas de lucha, insubordinación y resistencia civil a las medidas económicas impuestas por la administración de Fernando de la Rúa en acuerdo con

7 El 24 de julio se realizó la Primera Asamblea Nacional de Organizaciones Populares, Territoriales y de Desocupados, en el galpón de la parroquia del Sagrado Corazón, partido de La Matanza (Buenos Aires), impulsada por la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (de la CTA), el Movimiento de Desocupados de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Polo Obrero, entre otras organizaciones. Unas semanas más tarde se realizó la Segunda Asamblea Nacional, con más de 2 mil delegados integrantes de la FTV-CTA, la CCC, el Polo Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez, el Movimiento Territorial Liberación (MTL), así como representantes de gran cantidad de localidades y provincias de todo el país.

el FMI: en agosto se concretaron 48 horas y luego otras 72 horas de movilización con más de 150 mil personas en varias provincias, contabilizando unas 300 protestas.

El incremento de las protestas fue evolucionando en forma exponencial y en relación directa a la dureza de las medidas tomadas por el gobierno, así como también en respuesta a la represión desatada por la policía en muchas jornadas sangrientas, que dejaron como saldo varios muertos, centenares de heridos, arrestos y persecución a militantes y dirigentes piqueteros. Los piquetes fueron contagiando a innumerables organizaciones sociales, que asumieron esta forma de resistencia y protesta en varias localidades, y en función de diferentes reclamos y reivindicaciones. A lo largo de 2001 se sucedieron decenas de saqueos en una caótica situación económica y social prácticamente en descontrol; más piquetes, también caceroleos, huelgas y marchas de protesta, “asalto” y toma de edificios públicos y bancos; culminando el año con las manifestaciones espontáneas de decenas de miles de argentinos, ya no sólo de los piqueteros, sino amas de casa, estudiantes, comerciantes, pequeños productores, profesionales, ahorristas damnificados por el *corralito*⁸, jubilados...; es decir, la convergencia de las clases y sectores sociales que en mayor medida fueron afectados por el modelo económico, virtualmente descompuesto. Fueron las jornadas aciagas del 19 y 20 de diciembre del año 2001 las de mayor agitación social vividas en los últimos años en Argentina, como reacción al estado de sitio que el mismo día 19 de diciembre había impuesto el presidente Fernando de la Rúa, y provocaron su precipitada renuncia luego de la dimisión de su ministro de Economía, Domingo Cavallo.

El vacío de poder, el clima enrarecido mezcla de descontento, sublevación e impotencia, la represión, más de treinta muertos y decenas de heridos, miles de detenidos, las corridas, las calles de las principales ciudades convertidas en verdaderos campos de batalla, la ocupación del espacio público (literalmente hablando) en disputa entre el pueblo y las fuerzas policiales. Las dos últimas semanas del año 2001 fueron testigo del cambio de presidente en cinco oportunidades (sucediéndose de la Rúa, Puerta, Rodríguez Saá, Camaño y Duhalde), en el marco de una ciudadanía perpleja y enardecida que exigía la renuncia de todos los gobernantes y de la “clase política”, lo que se tradujo en una sola consigna: “que se vayan todos”, acuñada espontáneamente y a coro por las multitudes en las calles, asumida como consigna propia por las asambleas po-

8 Expresión popular para denominar la retención de los depósitos bancarios de miles de ahorristas en el peor momento de la crisis económica y financiera de Argentina (ante el default declarado), a partir de decretos del Poder Ejecutivo y a instancias del ex ministro Domingo Cavallo (2001).

pulares (movimiento barrial emergente en 2002), pero sentida por la inmensa mayoría de la población. Durante los meses de enero y febrero de 2002 se sucedieron aún con vigor las manifestaciones populares, aunque con menor intensidad y frecuencia que en el último tramo de 2001, tal vez por la expectativa de una resolución institucional del conflicto social y de la crisis política y económica. De todos modos, el año 2002 estaría teñido por una mezcla de resistencia activa (piquetes, paros, marchas) y expectativa por el recambio en el elenco de gobierno, ocurrido tras la victoria electoral de Néstor Kirchner en las elecciones de abril de 2003.

No obstante, hubo nuevos episodios sangrientos. En junio de 2002, la Policía Federal y la Policía Bonaerense, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, en una acción combinada, cargaron contra una manifestación de diversas organizaciones piqueteras, dejando como saldo dos jóvenes asesinados del Movimiento Piquetero Coordinadora Aníbal Verón, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, centenares de heridos y detenidos, esta vez aún en tiempos de la administración de Eduardo Duhalde (período de transición), episodios que meses antes habían sido precedidos por otras tantas represalias y refriegas con muertos y heridos. Esta movilización dio cuenta de las diferencias estratégicas y tácticas entre los diferentes “sectores” piqueteros: aquellos que participaron de la referida movilización adherían a la Coordinadora Aníbal Verón, también al Polo Obrero y al Movimiento Teresa Rodríguez, pero no participaron aquellos relacionados con la FTV (vinculada a la CTA), ni tampoco a la CCC (liderada por Juan Carlos Alderete).

Una vez que asumió el nuevo presidente, Néstor Kirchner, los primeros contactos formales y oficiales entre el Movimiento Piquetero y el gobierno se concretaron con la FTV y la CTA, cuyos dirigentes principales fueron recibidos en la Casa Rosada. En lo que ha transcurrido del primer período de gestión del presidente Kirchner (2003-2004), no se han registrado enfrentamientos violentos, aunque voceros del gobierno han expresado preocupación por la insistencia en los cortes de ruta y marchas permanentes en las calles y avenidas de las grandes ciudades (sobre todo de Buenos Aires). No obstante, la disposición e intención expresa del nuevo gobierno para resolver los problemas sociales más acuciantes permite prever un descenso de la conflictividad, al menos en sus facetas más ríspidas y agresivas.

Mientras tanto, el Movimiento Piquetero parece ir decantando los diversos enfoques, y nuevas polémicas internas –en cuanto a las plataformas y mecanismos de presión– van dibujándose en el horizonte más próximo. Más recientemente, a principios de 2004, una de las corrientes piqueteras, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), liderado por Raúl Castells, llevó adelante una movilización con cortes de ruta y marchas, sobre todo en Buenos Aires, contra la ley laboral y en reclamo de 250 mil subsidios. La movilización

no registró enfrentamientos de gran envergadura, más allá de actos esporádicos que pretendían dañar la imagen del Movimiento Piquetero o su relacionamiento con el gobierno. A fines de febrero de 2004, el Congreso Piquetero perteneciente al MIJD (realizado en Mar del Plata) resolvió organizar nuevas marchas callejeras, y su líder llamó a la “desobediencia civil”⁹ en torno al no pago de impuestos y la “compra en negro”, sin factura, anticipando la constitución de un grupo político para competir en las próximas instancias electorales. Contrasta esta actitud con la estrategia de la CCC y de la FTV, que otorgan mayores márgenes al gobierno de Kirchner y más plazos para posicionarse firmemente ante el FMI por el pago de la deuda externa argentina.

- *Organicidad*

Dentro del Movimiento Piquetero subsisten, al menos dos posiciones de pensamiento distintas:

Por un lado, las organizaciones más estructuradas –principalmente la Federación de Tierras y Vivienda (FTV), ligada a la CTA, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Polo Obrero y el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR); [...] por otro lado se identifican las organizaciones menos estructuradas [...] encontrándose la experiencia de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) Aníbal Verón y del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) de Solano (Quilmes) (Fontana et al., 2002).

Sin embargo, parece predominar un rasgo organizativo común: la horizontalidad fundada en la asamblea, la cual se erige como fuente primordial de construcción de consensos y decisiones de un barrio y de un conjunto de nucleamientos vertebrados en torno a experiencias comunitarias de trabajo.

Nosotros lo decidimos todo por asamblea y por áreas. Tenemos el área Mercaderías, el área de Administración, el área de Relaciones, el área de Finanzas. En simples palabras te diría: todo sale de una asamblea, todo se vota en asamblea, pero tenemos nuestras áreas y después una mesa central donde nos juntamos los cuatro barrios y discutimos los problemas; traemos lo que se decide en cada asamblea y de ahí se hace un consenso y de ahí sale lo que es el movimiento y hacia dónde apunta el movimiento a través de las asambleas (entrevista a un miembro del MTD Lanús, de la Coordinadora Aníbal Verón).

9 Conviene recordar un antecedente inmediato de esta medida: el anuncio de Hugo Moyano, principal dirigente de la CGT disidente, quien también convocara a la desobediencia civil en noviembre de 2001.

Con relación a la coordinación entre varios nucleamientos de desocupados o piqueteros, hay un compañero representando a los cuatro barrios. Está el área de Relaciones, donde ahí se centraliza todo primero en una mesa donde están todas las áreas, y a veces solemos ser hasta treinta compañeros de los cuatro barrios; se hace una síntesis y se pasa a los otros movimientos, como por ejemplo el Aníbal Verón, que ahí somos diecisiete movimientos (entrevista a un miembro del MTD Lanús, de la Coordinadora Aníbal Verón).

En suma, puede observarse un importante matiz entre aquellas formaciones “menos estructuradas” y las que presentan un formato más perfilado a la organización piramidal, vale decir, con delegaciones de agrupaciones de base (es el caso de la FTV o de la CCC); sin embargo, todo el Movimiento Piquetero se halla atravesado por las modalidades participativas, tanto sea en régimen de asambleas, como de plenarios o comisiones sectoriales o de trabajo. El intento de la Coordinadora Nacional de los Piqueteros podría ir tornándose en una suerte de articulación sobre la base de mínimos acuerdos, pero persistiendo cierta debilidad en el diseño de una estrategia común, y el mantenimiento de una unidad de acción concertada.

Por lo expuesto, el grado de organicidad es medio (con relativa fragmentación y dispersión territorial), con desarrollos desiguales y asimétricos según las experiencias, prácticas sociales y corrientes ideológicas presentes en las múltiples agregaciones o formaciones piqueteras surgidas en el último lustro.

- *Capacidad propositiva*

Piquete, lucha, reclamo y negociación, tal parece ser el patrón de comportamiento de la mayoría de las formaciones u organizaciones que componen el Movimiento Piquetero. Los resultados generan contradicciones, contención social en ocasiones, y estímulo a la continuidad y progresividad de las movilizaciones en otras. De todos modos, la adjudicación de los Planes Trabajar (subsidios para jefas y jefes de hogar en situación de desempleo) se ha constituido en un objetivo buscado y materialmente reconocido como medida de éxito de las reivindicaciones que se le “arrancan al gobierno” (no como concesiones, sino como el producto directo de la confrontación en la calle). Asimismo, los Planes Trabajar configuran una herramienta o instrumento de validación de las estrategias de movilización piquetera, otorgándole un plus en términos de logros y conquistas *vis à vis* los propios adherentes, simpatizantes y militantes del movimiento, y operando como un mecanismo de captación, retención, compromiso y mayor involucramiento de los miembros de cada organización piquetera (de alguna manera opera como un sistema de incentivos).

Si bien el Movimiento Piquetero se ha caracterizado por ser más contestatario, reivindicativo y de protesta que propositivo, debe reconocérsele un atributo significativo en términos de albergar propuestas innovadoras (al menos en un sector importante del movimiento) que han modificado radicalmente las prácticas asistenciales, a partir de una redistribución de los subsidios estatales entre la propia comunidad.

Estos MTD empiezan a recibir planes, planes en dinero [...] son Planes Trabajar (para jefas y jefes de hogar). ¿Qué sucede con esta cantidad de planes que empiezan a bajar? Ellos ya empiezan a trabajar con la idea de autonomía y empiezan a crear proyectos autogestivos y proyectos productivos (huertas, carpinterías, bloqueras, panaderías, etc.), que ahora se le da el nombre de *economía solidaria*. ¿Qué pasa con estos proyectos productivos? Reciben los Planes Trabajar o reciben los subsidios del Estado, se ponen en función del proyecto productivo, y los trabajadores que trabajan en el proyecto productivo, que a su vez son los beneficiarios de los Planes Trabajar, se llevan el producto de lo producido, el producto económico de lo producido y no el plan. Eso [...] rompe la lógica del asistencialismo y asume la lógica de la recuperación de plusvalía, el rescate de plusvalía, que es una actitud completamente revolucionaria (entrevista al antropólogo argentino Marcelo Bagnati).

Por otro lado, cuando se realizan asambleas conjuntas o coordinadas, congresos o encuentros generales de todos los piqueteros, se acuerdan algunas propuestas generales; debe recordarse que el Movimiento Piquetero acompaña activamente las iniciativas del Frente Nacional contra la Pobreza, propone el ajuste de los subsidios o la realización de obras públicas en beneficio de un barrio o una zona, o subsidios para los pequeños chacareros. Tras las movilizaciones hay también negociaciones, y los frutos son vistos como avances de la misma lucha:

El piquete de La Matanza fue un piquete de la clase trabajadora, y lo que se genera producto de esa lucha es un acuerdo social, el cual incluía diecisiete mil planes de empleo, dos millones de pesos, en ese entonces dólares (estaba uno a uno) para compra de medicamentos de un hospital que es el más importante que estaba a cuerdas del piquete, la construcción de siete kilómetros de camino absorbiendo mano de obra desempleada del lugar, la construcción de cinco escuelas y la compra de cinco móviles sanitarios para hacer medicina preventiva sanitaria en todo los sectores de los barrios más pobres justamente de La Matanza. Eso es un acuerdo social, no es un acuerdo de desocupados de planes (entrevista a un dirigente de la CTA).

Pese a ello, consideramos que el Movimiento Piquetero ha carecido de una capacidad propositiva importante o bien desarrollada, quizás

porque no se lo propuso, o porque las circunstancias no facilitaban la profundización en esta dimensión.

- *Convocatoria y movilización*

En contraste con su escasa capacidad de generar propuestas, el grado de movilización y de convocatoria es alto, sobre todo si tomamos en cuenta que se trata del movimiento más castigado por la represión policial. De hecho, las muertes en los primeros piquetes contribuyeron a condensar el movimiento social. Se pueden contabilizar por centenas los cortes de ruta, piquetes y movilizaciones del Movimiento Piquetero, habida cuenta precisamente de la pluralidad de núcleos que lo componen; también se cuentan por miles los individuos involucrados en ellos, no sólo desocupados, aunque efectivamente estos constituyen la enorme mayoría.

Todos estos MTD que estaban poblando, MTD Lanús, Solano, Almirante Brown, Guernica, los de acá de Capital, los diferentes MTD se conforman no en una agrupación, sino que para cortar la ruta, para cortar los puentes de Buenos Aires, hubo una jornada donde cortaron todos los accesos durante seis horas de toda la Capital Federal. A la Capital Federal ingresan por día siete millones de personas [...] viven tres millones pero ingresan por día siete millones de personas. Tuvieron esa fuerza. Eso también es un botín bien preciado, ese elemento de presión (entrevista a Marcelo Bagnati).

También por las tácticas de enfrentamiento, resistencia y lucha se diferencian las diversas formaciones piqueteras, destacándose entre ellas la Coordinadora Aníbal Verón por sus capuchas y garrotes, polémicos en su fisonomía, y por su indefectible presencia combativa y cotidiana en el conurbano bonaerense. La convocatoria ha ido ampliándose desde sus orígenes hasta los momentos más tórridos y agitados del conflicto social, de tal modo que es inobjetable su fuerza y capacidad de convocar el apoyo activo y también pasivo de miles de argentinos que proyectan en el movimiento una esperanza revivificada en un futuro (y presente) más digno.

- *Discurso político*

A propósito del *constructo discursivo*, una lista de ideas fuerza acaso sea la mejor síntesis del Movimiento Piquetero: dignidad y trabajo, anticapitalismo, antiglobalización neoliberal, interpelación a la democracia “burguesa”, autoafirmación y contrapoder, resistencia y ocupación del territorio público –en otro sentido, se resignifican el *ágora* y la *ecclesia* (Castoriadis, 1996)–, lucha de clases y de los “desclasados”. Sin embargo, no hay un discurso unificado, unívoco y omnicomprensivo de todos

los asuntos públicos que incluya y represente la *voz* (en la acepción de Hirschman) de todos los sectores piqueteros. Las diferencias ideológicas se hacen visibles; el Movimiento Piquetero también es permeable a las corrientes político-ideológicas, así como es productor de discursos específicos y genuinos.

¿Un movimiento y dos discursos? ¿O una pluralidad discursiva y una sola modalidad de lucha?

Nosotros como movimiento nos definimos como anticapitalista, nosotros somos anticapitalistas. Pero no el anti, en contra de, para hacer otra cosa; o sea, somos anticapitalistas y antisistémicos. ¿Qué significa esto? Que no creemos ni en la democracia, en esta democracia que nos venden no creemos porque es democracia burguesa, porque es democracia que lo único que hace es legitimar a aquellos que vienen y te pegan. O sea, problema del poder, nosotros insistimos en esta cuestión, o sea, todo eso es poder. ¿Podemos hablar de contrapoder? Sí, podemos hablar de contrapoder. Podemos ir un poquito más allá: disolución de las relaciones de poder [...] Simplemente, lo nuestro es trabajo, dignidad y cambio social. Y otra de las consignas que tenemos es “ocupar, producir y resistir” (entrevista a dirigente del MTD Alem).

La gente quiere vernos muy metidos en el conflicto social, pero muy llenos de racionalidad a la hora de hacer las cosas. Por eso estamos vistos como los piqueteros más racionales [...] Reivindicamos los sueños de los jóvenes de los setenta, el socialismo nacional, el socialismo adaptado a nuestro país, a nuestra comunidad, donde el hombre sea el destinatario último de toda actividad (entrevista al presidente de la FTV).

De un lado puede apreciarse un discurso que denuesta el burocratismo y la lógica del poder (abreva en el concepto de *contrapoder*), alertando acerca de los peligros que acarrearán ciertos estilos y conducciones que van impregnando los movimientos sociales. En algunos extremos se expresa de manera inequívoca un discurso contrario a las instituciones democráticas representativas, o al menos a aquellas que conforman e identifican la arquitectura institucional democrática: “una sociedad sin cámara de diputados, sin senadores, sino con asambleas que ejerzan las decisiones sin la representación y todo su circo” (declaraciones de dirigentes y militantes del MTD Solano, en Fontana et al., 2002). De otra parte, un discurso que aporta una perspectiva de largo plazo con sentido de proyecto político-social en construcción, que critica al sistema democrático y sus correlatos de gestión y efectos nocivos para la clase trabajadora, pero no necesariamente a sus instituciones; que conecta la lucha popular con la intención de influir en el aparato del

Estado (reapropiándolo con instrumentos propios de la contienda electoral), para que este responda a sus intereses y no a los de la oligarquía. Procura una incesante búsqueda y regeneración de nuevas identidades de clase, alimentando la visión de un *sujeto* (nuevo), protagonista de las transformaciones sociales con sentido radical.

- *Autonomía*

En términos de autonomía también se registran –y resulta lógico– diferencias notorias, no sólo con relación a su conceptualización sino, antes bien, en el terreno mismo de las actuaciones y principales orientaciones valorativas (un cuerpo deontológico), políticas e ideológicas del Movimiento Piquetero. Es posible establecer correlaciones y distinciones entre organizaciones piqueteras que responden mayormente a la línea comunista de orientación maoísta, otras más recostadas en la línea trotskista, algunas mucho más plurales en las que tienen cabida sectores provenientes de alguna vertiente peronista de izquierda, corrientes afines al ARI (Elisa Carrió) o incluso afines a la Alianza (representada por el actual jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra), a Autodeterminación y Libertad (Luis Zamora), otras que se articulan en torno al proyecto del PTA de Luis D'Elía, y formaciones francamente alineadas a corrientes anarquistas.

Precisamente, las que de algún modo parecen revelar una influencia anarquista, elaboran una teoría de la autonomía (y son denominados o autodenominados *autonomistas*), así como una práctica política y social despojada de la injerencia directa de los partidos políticos (inclusive se menciona la función de detectar *punteros*¹⁰ para evitar así la manipulación partidaria o estatal). “La noción que hay en los compañeros de autonomía, de solidaridad, de democracia directa es muy fuerte” (entrevista a dirigente del MTD Allen de la provincia de Río Negro, que integra el MTD Aníbal Verón). Los MTD que se integran en la Coordinadora Aníbal Verón comparten estos puntos de vista y enfoques y no están ligados a ningún partido político, iglesia, central sindical ni al Estado: “son autogestivos, autónomos” (entrevista a Marcelo Bagnati con relación al Movimiento Piquetero).

Buscamos coordinación y articular con otros movimientos, con Solano y con Guernica especialmente, con esos dos movimientos, dos movimientos que tienen la misma percepción de pensamiento,

10 Expresión popular que designa a los militantes sociales pertenecientes a algún sector político (tradicionalmente del PJ o la UCR), que incrustados en las estructuras de base de las organizaciones populares operan desde allí a favor de los lineamientos políticos de su respectivo sector o fracción partidaria.

pensamiento autónomo, no como autonomía económica sino como movimiento liberador de personas, anticapitalista (entrevista a militantes y dirigentes del MTD Alem de la provincia de Río Negro).

Autonomía que significa “pensar con cabeza propia y en función de la situación concreta. Esto implica saber desoír las urgencias ajenas que proyectan los circuitos mediáticos y los microclimas militantes, para reencontrarse con las capacidades propias de comprender e intervenir” (Fontana et al., 2002). En cambio, para otros dirigentes del Movimiento Piquetero, la adscripción a determinada corriente ideológica o directamente influida por un partido político no supondría necesariamente la pérdida de la autonomía en tanto movimiento social.

En síntesis, puede inferirse que el grado de autonomía es alto en algunas organizaciones piqueteras, mientras que parece estar disminuida o mediatizada en organizaciones piqueteras identificadas políticamente con algún partido (sobre todo de izquierda), las que están sujetas de manera más evidente a los lineamientos generales correspondientes a dicha fuerza política. No obstante, proponemos otra hipótesis: varios partidos y fuerzas políticas de la izquierda que están mayormente asociadas a diferentes bloques y formaciones piqueteros son “marginales” en el sistema de partidos y, concomitantemente, procuran incrementar su influencia en los movimientos sociales. Para el caso del piqueterismo, la amplitud y dinámica del movimiento ha superado las lógicas específicamente partidarias y sectoriales, generando en conjunto una autonomía neta del movimiento MTD globalmente considerado.

- Tasa de afiliación

La disponibilidad de datos sólo nos permite identificar la afiliación a la FTV (una de las organizaciones del Movimiento Piquetero), que es de unas 250 mil personas según declaraciones de sus dirigentes. En los demás casos, es posible suponer que la afiliación se podría asimilar al número de Planes Trabajar con los cuales cada organización piquetera logra la adhesión de sus miembros.

CUADRO 2
CARACTERÍSTICAS DE LOS MOVIMIENTOS ARGENTINOS

	Organicidad	Capacidad propositiva	Convocatoria y movilización	Discurso político	Autonomía	Tasa de afiliación
CTA	Grado alto. Estructura creciente y articulada. Cuenta con organigrama formal.	Alta. El punto más alto lo marcó la recolección de firmas por el Plan para combatir la Pobreza.	Alta. Ha demostrado una enorme convocatoria con miles de argentinos en la calle.	Radical, antineoliberal, anticapitalista.	Alta. Incluye una gama amplia de corrientes políticas, pero mantiene posturas propias.	En alza, significativamente alta para el tiempo de fundación y crecimiento.
MTD Piqueteros	Grado medio. Fragmentado, disperso y no estructurado sobre la base de unicidad. Diversas organizaciones que componen una categoría.	Grado medio. Dispar, poco evidente. Predomina el carácter reivindicativo, pero no alcanza a formular una propuesta.	Alta, si se considera el conjunto de las agregaciones y nucleamientos.	Reivindicación, insubordinación, antineoliberal, anticapitalista.	Grado alto de autonomía.	Sin registros. Depende de la cantidad de planes obtenidos por las dirigencias. FTV: 250 mil afiliados.

Fuente: elaboración propia.

CUADRO 3
ARGENTINA: EVOLUCIÓN RECIENTE DE INDICADORES PARA EL PERÍODO 1996-2003
(EN PORCENTAJE)

Perfil del sistema político					
Confianza en el Parlamento	Confianza en los partidos	Participación electoral (promedio últimos 20 años)	Sistema de partidos (NEP)	Confianza en los presidentes o el Ejecutivo	Satisfacción con la democracia
20,31	14,62	80,00	2,60	27,90	33,27

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Latinobarómetro (1996-2003).

Como se advirtió en la presentación del presente capítulo no se hará un análisis de los datos resumidos en el cuadro anterior, sino que se tomará en cuenta sobre todo los datos elaborados por Mainwaring y Scully (1995) en su estudio, presentando dicho cuadro como una foto que nos permite tener una primera imagen de lo que se analizará detenidamente en el capítulo siguiente.

En su investigación sobre el sistema de partidos, los autores, Mainwaring y Scully, encuentran en Argentina, para el período 1983-

1993, un número efectivo promedio de partidos de 2,7, siendo el número efectivo de partidos de la última elección (1993) de 2,8. La base de cálculo son los puestos obtenidos en la Cámara Baja. Según la clasificación de Sartori (1992), el sistema podría ubicarse en la categoría *bipartidismo moderado*, pero teniendo en cuenta a Blondel y Cotta (1996) estaríamos en el esquema de *dos partidos y medio*, con tendencia a *pluralismo moderado*. Mainwaring y Scully encuentran limitado el nivel de polarización ideológica, atribuyéndoles tendencias centristas a los dos principales partidos, la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Justicialista, o peronismo (PJ), y aclarando que el peronismo estuvo más a la izquierda en el pasado. El sistema de partidos argentino es clasificado como *institucionalizado* para el estudio de 1995, con una puntuación relativamente alta de 9 en un total posible de 12 puntos.

Desde la recuperación democrática hay continuidad en el sistema y alternancia en el gobierno; el PJ es el partido de mayor arraigo popular, habiendo conquistado un segundo y tercer períodos de gobierno con la presidencia de Carlos Menem en las dos ocasiones, y también el período actual a cargo del presidente Néstor Kirchner. La UCR ocupó el primer período de gobierno, con el mandato de Raúl Alfonsín, y fue el socio principal de la Alianza en el cuarto período, que culminó con una fuerte crisis y la renuncia del presidente Fernando de la Rúa; en ese cuarto período estaban en la coalición gobernante algunos ex peronistas, como el vicepresidente Carlos Chacho Álvarez, pertenecientes en su mayoría al FREPASO (Frente por un País Solidario), y ciertos sectores de izquierda y partidos provinciales. En las últimas elecciones se confirmó el retroceso electoral de los radicales, también el arraigo fuerte del peronismo, y surgieron como segundo y tercer sectores fuertes los votantes de Ricardo López Murphy, y de Afirmación para una República Igualitaria (ARI), liderada por Elisa Carrió.

A pesar de la crisis que desató la renuncia de Fernando de la Rúa y los problemas de corrupción todavía sin solucionar, se logró convocar a elecciones, que se realizaron en forma pacífica. El resultado fue un nuevo presidente, Néstor Kirchner; la comprobación de una confianza extendida en que las elecciones son la forma de instituir un nuevo gobierno; y la certeza de que los partidos son las organizaciones apropiadas para representar los intereses ciudadanos.

En resumen, puede afirmarse que se verifica una cierta continuidad. Los actores y las reglas son en general respetados, con excepciones obvias como la de Fernando de la Rúa, y hay bastante movilidad o volatilidad electoral. Podemos hablar de un sistema en etapa de ajustes, con un nivel de institucionalización medio en el contexto regional.

BRASIL

Se ha considerado en el eje del movimiento obrero a la Central Única de Trabajadores (CUT), por ser un caso paradigmático de construcción del poder sindical en América Latina, y por otra parte se incluyó al Movimiento de los Sin Tierra (MST), por sus singulares e innovadoras formas de articulación social en el sector rural.

CARACTERIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

CENTRAL ÚNICA DE TRABAJADORES (CUT)

- Contexto histórico de origen y evolución reciente

El nacimiento de la Central Única de Trabajadores el 28 de agosto de 1983 se inscribe en el proceso de lucha de la sociedad civil en su conjunto y más particularmente de los trabajadores por restaurar el orden democrático, recuperar las libertades de opinión y de organización y la lucha por el salario y los derechos cercenados durante los años de la dictadura militar. Una renovación del movimiento obrero fluía por los canales de organización sindical, por los múltiples ámbitos en los que los trabajadores reanudaban la faena de reconstrucción de sus propias herramientas genuinas de lucha, al margen y en oposición al mundo laboral cooptado o manipulado por las elites de turno (económicas, políticas y militares).

Este proceso de fines de los setenta y principios de los ochenta, llamado el *novo sindicalismo*, condujo a la reaparición de un movimiento sindical que abjuraba de su pasado inmediato (corporativo y asistencial), enraizado en la sumisión de sus dirigentes o maniatado en sus legítimas y auténticas reivindicaciones sociales, para recrear una central autónoma y avalada por innumerables organizaciones de base en todo el territorio brasileño, singularmente fuerte en las grandes urbes industrializadas.

La CUT nació de la confluencia de tres significativos movimientos sociales: el *nuevo sindicalismo*, que se caracterizaba como un movimiento más sindicalista; el movimiento de las *oposiciones sindicales*, heredero de los sectores de la izquierda católica y marxista en disidencia con la izquierda tradicional; y el *movimiento sindical rural*, también con fuerte presencia de la izquierda católica. La confluencia de estos tres movimientos le dió una vida real, clasista, heterogénea y plural a la CUT (Antunes, 1995; traducción propia).

Fueron varios sindicatos cuantitativa y cualitativamente importantes por su inserción económica y productiva, incluso algunos de ellos bajo intervención (bancarios, metalúrgicos del ABC paulista, metroviarios, petroleros de Bahía y Campinas), los que decidieron convocar a una

huelga general y realizar el Congreso Nacional de la Clase Trabajadora con más de 5 mil delegados de todo el país, lo que se constituyó en el acto fundacional de la CUT.

De esa manera la CUT surgió como respuesta al autoritarismo, significando una ruptura con una práctica sindical generalizada en tiempos de dictadura, que impedía estructurar sindicatos y gremios interprofesionales. La legalización de la central sobrevendría años más tarde, en 1988, con la consagración de una nueva Constitución federal, tras incontables movilizaciones y una lucha incesante por adquirir la personería jurídica y el reconocimiento en última instancia de su personería política y social.

En términos de las principales reivindicaciones, aquel congreso fundacional planteó la lucha por la libertad y la autonomía sindical, el fin del impuesto sindical y del monopolio de la representación impuesta desde el poder estatal, así como el reclamo del cese de la intervención de los sindicatos, y también la reforma agraria.

Si bien la CUT se perfiló inmediatamente como la principal referencia sindical en Brasil, no pudo mantener la unicidad de la clase trabajadora en tanto se creaba en 1986 el Comando General de Trabajadores (CGT), que mantuvo la vieja estructura federativa. Pese a ello, ambas centrales obreras se movilizaron de manera conjunta y coordinada en 1989 en respuesta a un paquete de medidas del gobierno.

Durante el proceso de reforma de la Constitución que culminó en 1988, varios líderes de la CUT fueron electos diputados constituyentes, y participaron activamente con propuestas de 122 enmiendas (respaldadas por más de 1,7 millones de firmas) vinculadas a la estabilidad del empleo, la semana laboral de 40 horas, reforma agraria y libertad sindical, entre otras. Paralelamente se hacía sentir la presión, combinando la tarea de los constituyentes con movilizaciones masivas y huelgas.

La década de los noventa exigió a la CUT una readecuación de las formas de lucha y una focalización de sus acciones en los locales de trabajo, teniendo que asimilar nuevos problemas en la relación capital-trabajo, en función de la alteración de algunas orientaciones de la política económica y la reestructuración del mercado laboral. Ya no sólo importaba el ajuste salarial, sino que debieron intervenir en asuntos relativos a la innovación tecnológica, la mejora de la competitividad, el mantenimiento de los empleos y condiciones de la empleabilidad, la formación continua y la recalificación de los operarios.

Más organización y más movilización fueron los ejes de un movimiento obrero que se iría consolidando, para jugar un papel fundamental en lo concerniente a la definición de algunas políticas públicas en tiempos del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, sin abandonar su oposición al modelo económico hasta entonces imperante. De todas maneras, puede apreciarse un descenso en la conflictividad en los primeros

años de la década del noventa, y una mayor propensión al diálogo, la cooperación y la negociación como modalidades de acción. En la segunda mitad de la década, conforme el gobierno aceleró su plan de privatizaciones y ajustes fiscales (fórmulas neoliberales ampliamente desplegadas en el marco de severas crisis financieras), el movimiento sindical modificó su estrategia para hacerla más combativa y confrontacional.

Durante aquellos años se fueron generando mayores nucleamientos de la CUT a nivel regional o estadual, por rama de actividad y centralizados a nivel nacional a través de la creación confederaciones (CONTRACS, de comercio y servicios; CNTT, de transportes; CNQ, de la industria química; CNB, bancarios; CONTAG, que responde a los trabajadores rurales sindicalizados y pequeños agricultores, la que en rigor es una confederación afiliada a la CUT, entre otras), consolidando la base de apoyo del movimiento sindical (De la Garza Toledo, 2001).

La candidatura a la presidencia promovida desde la CUT de su líder indiscutible durante casi dos décadas estrechó los lazos entre el Partido de los Trabajadores (PT) y la central sindical, vínculos que indudablemente son fuertes desde el nacimiento de ambas organizaciones, surgidas ambas contemporáneamente en los inicios de los años ochenta (acaso por momentos en unión cuasi simbiótica). Tras la victoria obtenida por el PT en las últimas elecciones brasileñas y el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lleva ya más de un año en el ejercicio, puede vislumbrarse un período totalmente diferente para la CUT, que va provocando una modificación de las pautas de relacionamiento con el Estado y el PT (ahora partido de gobierno), y entre este y los movimientos sociales afines, no exentas de contradicciones, conflictos internos en la CUT y en el PT, disidencias por los cambios de rumbo (para algunos, apenas circunstanciales; para otros, desviaciones premonitorias de nuevas derrotas del movimiento popular), todo lo cual repercute en detrimento de una autonomía saludable para el movimiento obrero.

- Organicidad

La CUT cuenta con estatutos que han formalizado sus estructuras de organización y funcionamiento, regulando el proceso de decisiones del movimiento y las relaciones entre sus diferentes niveles y ámbitos específicos. De su carta estatutaria se desprenden dos niveles de organización: uno vertical, que establece un punto de partida de articulación en las organizaciones de base (locales de trabajo), luego las entidades sindicales por rama de actividad económica y, finalmente, el lugar de las confederaciones o federaciones nacionales. Dichas estructuras verticales tienen –según lo define el propio estatuto– “el poder de representación y negociación de la rama de actividad económica”. Mientras,

el nivel horizontal tiene por objetivo “construir la unidad de los trabajadores promoviendo su organización entre categoría profesional en cuanto clase a nivel regional estadual y nacional”.

Las instancias deliberativas de las confederaciones o federaciones son los congresos, el consejo directivo y la dirección ejecutiva, mientras que en el nivel horizontal se establecen a su vez dos estructuras: la CUT estadual y la CUT nacional, las que cuentan con similar organización que el nivel vertical: un Congreso (convocado cada tres años), una Plenaria (anual), una Dirección y una Dirección Ejecutiva. La Dirección Nacional de la CUT cuenta con más de cien miembros, en tanto que la Dirección Ejecutiva tiene treinta y dos integrantes (veinticinco titulares y siete suplentes). En términos de criterios y principios orientadores que rigen en todos los niveles, se afirman las autonomías regionales, la participación de las bases y la descentralización.

Cabe explicitar, de todas maneras, que dentro de la CUT coexisten varias corrientes de opinión más o menos formalizadas: una principal e íntimamente vinculada a los sindicatos más fuertes o de mayor peso estratégico (Articulación Sindical), y otras agrupaciones muy críticas y que han “denunciado” la excesiva tendencia a la burocratización de la central, y su exacerbada conexión con sectores políticos del PT.

De todos modos, la CUT cuenta con un alto grado de organicidad expandida en los veintiséis estados, lo que la habilita a mantener alineadas política y estratégicamente a un conjunto de organizaciones sindicales que responden mayoritariamente a fuerzas políticas de centro e izquierda (sean del PT, del Partido Comunista Brasileiro-PCB, de la izquierda cristiana o de otras formaciones minoritarias provenientes del trotskismo).

- Capacidad propositiva

La capacidad propositiva de la CUT “se viene reafirmando en estos veinte años de existencia como central combativa pero también propositiva en el sentido que combatimos aquellas políticas y aquellos puntos en los que divergimos, pero por otro la CUT presenta propuestas y discute esas propuestas en la sociedad” (entrevista a un dirigente de la CUT del Estado de Río Grande del Sur, RGS).

Varios espacios de discusión, debate y negociación son aprovechados por la CUT, entre los cuales deben necesariamente destacarse los Consejos Participativos, creados e incluidos en la Constitución de 1988 como elemento democratizador del Estado, en los cuales la Central ha tenido un papel relevante en clave propositiva. Esta participación institucionalizada fue aprovechada por la CUT para incidir en el diseño de una panoplia de políticas públicas en materia de salud, adolescencia e infancia y, desde luego, trabajo y empleo. Al respecto, se subraya la par-

ticipación en diferentes programas y proyectos vinculados al sistema público de empleo y al sistema público de educación profesional.

En la estrategia de confluencia en ámbitos tripartitos se destacan la decisiva influencia de la CUT y de sus afiliadas en la creación y gestión de la Central de Trabajo y Renta en el marco del Programa de Generación de Empleo y Renta (PROGER), en conjunto con la Prefectura de Santo André y el Ministerio de Trabajo y Empleo; en programas como el Programa Nacional de Formación del Trabajador (PLANFOR) o el PRONAF (referido a la agricultura familiar). Asimismo, sus propuestas han tenido otras cajas de resonancia en el Consejo Deliberativo del Fondo de Amparo al Trabajador (CODEFAT), así como en el Consejo de Administración del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Por otra parte, corresponde señalar la convocatoria a la conformación del Foro Nacional del Trabajo, en el que confluyeron diferentes movimientos sociales, iglesias, partidos de izquierda y progresistas, intelectuales, en favor de generar opciones de amplio consenso social y político, sostenidas en articulaciones y coordinaciones extendidas a las multiformes expresiones de la sociedad civil. La CUT hubo de acumular a lo largo de su historia, y sobre todo en los últimos quince años, un conjunto de propuestas atinentes a los problemas del desempleo y la exclusión social; a la formación y recalificación laboral, reducción de la jornada de trabajo, etc. En función de esta realidad, la CUT aparece con un alto grado de capacidad de propuesta, que se desarrolló de manera congruente con la estrategia de lucha y oposición desde su fundación.

- Convocatoria y movilización

A lo largo de su historia, la CUT ha hecho gala de una amplia y diversificada capacidad de movilización –recibiendo desde sus orígenes un respaldo muy fuerte–, convocante de un abanico heterogéneo de trabajadores: operarios y empleados bancarios, asalariados rurales y docentes, en fin, de prácticamente toda la gama posible de trabajadores. Ello le ha valido precisamente un sitio jerarquizado en la escena de la confrontación, pero también como interlocutor en el diálogo y la negociación, a partir de una equilibrada e inteligente combinación de movilizaciones multitudinarias, huelgas y paros de actividades en centros neurálgicos de la economía brasileña, compatibilizadas con una participación activa en la generación de soluciones ante conflictos con las patronales y el Estado.

En cuanto a las movilizaciones, puede recordarse la presencia muy fuerte de la CUT en la campaña por las “Directas Ya”, en 1984, que pretendía la realización de elecciones presidenciales inmediatas a la salida de la dictadura, obtenidas por la presión popular de centenares

de miles de ciudadanos convocados, entre otros, por la recientemente creada Central de Trabajadores. También fue muy relevante y significativa su participación en el proceso constituyente de 1988, utilizando por un lado los mecanismos institucionales, con delegados en la Asamblea Constituyente, al mismo tiempo que la realización de paros, huelgas, marchas y manifestaciones públicas. En 1992, la CUT se hizo sentir en las gigantescas y multitudinarias marchas que se efectuaron de modo conjunto entre varios movimientos sociales y partidos políticos, y culminaron con la destitución del entonces presidente Fernando Collor de Mello, acusado de corrupción y fraude. También vale mencionar la marcha de los 10 mil trabajadores rurales por la reforma agraria, que se concentraron en la Explanada de los Ministerios, y su participación como uno de los principales convocantes en la Marcha de los 100 mil a Brasilia, en 1999, para denunciar los ataques desde el Estado y las patronales a las conquistas obtenidas por la clase trabajadora; en fin, incluso logrando apoyos masivos en las manifestaciones contra el ALCA (también el referéndum en el que participaron varios millones de brasileños) y contra la invasión a Irak por parte de Estados Unidos en el año 2003.

Muchísimos ejemplos más podrían ilustrar la alta capacidad de convocatoria y movilización de la CUT, aun cuando pudiera observarse un descenso leve en los últimos años, probablemente sintiendo el impacto de las modificaciones estructurales en el mercado laboral (desindustrialización en algunos sectores productivos clave para el movimiento obrero).

- Discurso político

La CUT ha definido desde su propia fundación su impronta clasista, apuntando no solamente a la defensa de los derechos de la clase trabajadora, sino explícitamente a transformar las estructuras sociales y económicas, sobre la base de una sociedad justa, democrática e igualitaria, estableciendo asimismo una meta última hacia el socialismo.

La Central se rige según algunos principios que han determinado en buena medida su discurso político: independencia frente a los partidos políticos y al Estado, libertad sindical, democracia y participación amplia de sus afiliados, garantía de unidad de acción y solidaridad entre los trabajadores (incluso a nivel internacional), y ha manifestado en varias de sus instancias orgánicas la necesidad de generar una nueva ética, fundada en nuevos valores, para la sociedad brasileña.

El discurso político está fuertemente referido a la necesidad de contraponer un proyecto alternativo al neoliberal, a la preservación de la soberanía nacional frente a los modelos de integración vía ALCA (antiimperialismo), a la lucha de clases y la autoexigencia de generar

propuestas en materia de políticas públicas, a la defensa de un Estado reformado desde la perspectiva de los intereses de las grandes mayorías populares.

Nuestra Central tiene como estrategia lo que aquí llamamos *resistencia propositiva*. O sea, nos posicionamos contra o discordamos con determinados proyectos, sea del empresariado, sea del gobierno; por tanto, hacemos oposición a ese proyecto, discordamos a determinadas actitudes y acciones de los empleadores o del mismo gobierno (entrevista a un dirigente de la CUT RGS).

- *Autonomía*

La misma matriz sociopolítica dio origen (en base a una identidad e historia común), tanto a la CUT como al PT, de manera contemporánea en los inicios de los años ochenta, constituyendo de manera paralela dos instrumentos bien diferenciados en sus adscripciones sociales, roles y funciones, pero cuya relación de cercanía cultural y simbólica impide distinguir con precisión los límites entre el movimiento social y el político. Sin embargo, para los principales dirigentes sindicales la relación biunívoca entre la CUT y el PT no afecta ni lesiona la autonomía, conscientes además de que otras corrientes ideológicas, sobre todo desde la izquierda, confluyen y conviven en una organización multicromática y plural, cuyas prácticas cotidianas han forjado la unidad de acción en el yunque de la tolerancia, el respeto mutuo y la causa común de la clase obrera.

Si es autonomía relativa, o quizás autonomía plena, mucho depende de los niveles donde se juegan las orientaciones estratégicas y la disputa por la hegemonía. Nuevamente en este caso, como en otros, la coexistencia de fracciones o corrientes internas en la CUT, lejos de ocasionar el inmovilismo o la fractura, alimentan y afirman la autonomía como resultante de un equilibrio (a veces frágil, sin duda) entre fuerzas políticas aún dispares, pero ciertamente conscientes de la fortaleza del instrumento sindical. Al respecto transcribimos un fragmento de una entrevista a un dirigente sindical:

Evidentemente aparecería una relación más próxima, pero una relación próxima de la CUT preservando su autonomía respecto a los partidos de izquierda. Y varios partidos de izquierda tienen relación con la Central, o sea, personas que militan en partidos de izquierda también forman parte de la dirección de la Central, y tenemos muy claro esa relación de autonomía y de independencia con los empresarios y con el poder público del Estado [...] Es importante resaltar también que nuestra Central tiene una fuerte relación con otras organizaciones de izquierda, con organizaciones de base, con movimientos sin tierra, con organizaciones de la propia Iglesia, que tiene

organizaciones de base de izquierda u organizaciones progresistas. Nuestra Central tiene relaciones muy próximas, muy fraternas, una acción directa que la CUT desenvuelve en la base con los trabajadores; ella tiene permanentemente sociedad con estas organizaciones (entrevista a dirigente de la CUT RGS).

- Tasa de afiliación

Actualmente la CUT cuenta con organizaciones sindicales distribuidas en todos los estados federados, aglutinando 3.119 sindicatos afiliados (de los cuales 1.146 son rurales y 1.973 de extracción urbana), que representan a unos 33.665.000 trabajadores brasileños. Sin embargo, hay datos de una reducción en la tasa de afiliación en el último decenio, ocasionada por la caída del empleo, la precarización y la fragmentación productivas, entre otros factores.

MOVIMIENTO DE TRABAJADORES RURALES SIN TIERRA (MST)

- Contexto histórico de origen y evolución reciente

La conformación del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) resulta de un proceso de resistencia y lucha de varias décadas, en las que el conflicto agrario en Brasil se fue agudizando a raíz de diferentes factores socioeconómicos durante el período 1975-1985, en plena etapa autoritaria. El desarrollo capitalista en la agricultura, la concentración de la propiedad de la tierra, la introducción de tecnología en el agro, la expulsión de miles de campesinos y pequeños productores que fueron quedando sin tierra, más la activa participación y decisiva influencia de la Iglesia Católica (a través de la Comisión Pastoral de la Tierra), coadyuvaron lentamente a coagular una organización incipiente que pretendía precisamente erigirse en defensora de los derechos de los trabajadores rurales.

El MST nació entre el 20 y el 22 de enero de 1984, en el histórico Primer Encuentro Nacional de Trabajadores Sin Tierra, en el Estado de Paraná, con la presencia de delegados de al menos trece estados, con el propósito de crear un movimiento autónomo de masas, no sujeto a los designios de ninguna otra organización, fuera esta eclesial o partidaria, ni tampoco sindical. Si bien pueden rastrearse antecedentes de organizaciones y movimientos de base agraria, entre otras las Ligas Campesinas (campesinos propietarios, aparceros, medieros y ocupantes), la Unión de Agricultores y Trabajadores Agrícolas, el Movimiento de los Agricultores Sin Tierra y la Confederación Nacional de Trabajadores Agrícolas (CONTAG) –esta última creada en 1963–, fue la creciente ocupación de tierras en diferentes regiones y la frustración ante el fracaso de una modalidad asistencialista de ciertas organizaciones sindicales lo

que generó el proceso de cristalización del MST en tiempos de restauración de las instituciones democráticas y del fin de la dictadura militar.

Siguiendo el esquema aportado por Marta Harnecker (2002) se puede distinguir algunas etapas que resultan clave para comprender la evolución reciente y la consolidación del MST como uno de los movimientos sociales más sobresalientes en Brasil y en América Latina.

Precisamente, el primer período de expansión se ubica entre los años 1985 y 1990; desde el Primer Congreso que realiza formalmente el MST, en enero de 1985, con la participación de más de 1.500 delegados de 23 de los 26 estados de Brasil. Este primer hito cobra especial trascendencia porque establece de manera contundente e inequívoca la voluntad del movimiento emergente de bregar y luchar por la reforma agraria, más allá de las intenciones expresadas en el Plan Nacional de la Reforma Agraria propiciado por el gobierno electo de Tancredo Neves (quien falleció antes de asumir, dejando el cargo en manos del vicepresidente, José Sarney). Las ocupaciones se multiplicaron: sólo en el oeste de Santa Catarina se produjeron 18, movilizandando a más de 5 mil familias; se organizaron pequeños grupos que al principio estuvieron conformados por núcleos de 10 a 15 familias para el trabajo colectivo; este “paradigma del pequeño grupo de cooperación sin mediación formal [...] prevaleció hasta 1989” (Harnecker, 2002).

En esta etapa (mayo de 1986), se realizó el Primer Encuentro de Asentados, que dio lugar a la discusión en torno a las formas más apropiadas de organizarse; en dicho evento se congregaron unos 76 asentamientos, representando a 11 estados. Por otra parte, se incrementaban notablemente las ocupaciones, esta vez mayoritariamente en el estado de São Paulo. En aquel encuentro se decidió no excluir a los ya asentados del MST, sino integrarlos bajo otras modalidades de organización y lucha. Experiencias novedosas y ensayos organizativos de la producción en cooperación iban tomando forma; así, se puede mencionar a los Laboratorios Organizacionales creados por Santos de Moraes, puestos en práctica con aciertos y también fracasos que finalmente obligaron a dejarlos de lado, sustituyéndolos por otros dispositivos que hicieron hincapié en la formación integrada a la producción.

El Quinto Encuentro Nacional, en 1989, incorporaba una dimensión entonces poco trabajada por el MST, resumida en la consigna “Ocupar, resistir, producir”: pasar de las formas aún artesanales de producción a unas renovadas metodologías que implicaron aumentar la eficiencia y el éxito de numerosas experiencias, provocando un giro positivo por parte de quienes dudaban aún de la envergadura y los objetivos últimos del movimiento. Este primer período es el que significa de algún modo la territorialización del MST, es decir, la conquista de espacios reapropiados por los trabajadores rurales en las regiones del Nordeste, Sudeste, Centrooeste y parte de la Amazonia. Al final de los años

ochenta se inició un proceso de expansión de las ocupaciones y asentamientos que supuso la “nacionalización del MST, que ganó expresión nacional y se transformó en el símbolo de la lucha por la tierra”¹¹.

La segunda etapa, cuyo inicio podría coincidir con la realización del Segundo Congreso Nacional, en 1990, confirmó efectivamente la tendencia de finales de la década anterior, en el sentido de posicionar al MST en toda la nación brasileña. Sin embargo, el cambio de gobierno como resultado de la victoria electoral de Collor de Mello inauguró una nueva era de represión feroz al movimiento campesino y de los trabajadores rurales, con el objetivo claro de destruir y desarticular al MST. Surgió casi inmediatamente la idea de configurar un Sistema Cooperativista de los Asentados, como mecanismo de autodefensa orgánica y preservación económica de las experiencias en desarrollo. Nacieron así las primeras cooperativas, y más tarde, en 1992, la Confederación de Cooperativas de Reforma Agraria de Brasil (CONCRAB). La caída de Collor de Mello, acusado de corrupción, fue en buena medida producto de una movilización popular en la que también tomó parte el MST, que acompañó el papel fundamental que tuvo en aquellos episodios la CUT. Así se abrió a partir de 1992 un nuevo período para el movimiento, caracterizado por “la recuperación y avance” –al decir de Harnecker– en sus conquistas sociales. El gobierno presidido por Itamar Franco recibió a la cúpula del MST y tendió puentes de negociación directa, lo que hubo de significar su reconocimiento como interlocutor válido y actor social de primer orden. Durante esta etapa se realiza, en 1994, el Seminario Nacional sobre Cooperación, se constituyen nuevas “Cooperativas de Prestación de Servicios, que organizan los procesos de comercialización de la producción, insumos y bienes de consumo. Y también prestan asistencia y capacitación técnica, así como realizan formas de planificación a nivel municipal o micro regional” (Harnecker, 2002), y se funda el Instituto Técnico de Capacitación e Investigación de la Reforma Agraria (ITERRA).

La multiplicación de las ocupaciones y movilizaciones resaltó aún más la labor cada vez más intensa y fuerte del MST, generando enfrentamientos y masacres en 1995 en Corumbiara, estado de Rondonia, y la masacre de El Dorado dos Carajás, estado de Pará, en 1996, bajo el mandato del presidente Fernando Henrique Cardoso. El intento de reducir el poder y prestigio del MST condujo al gobierno de Cardoso a la utilización de distintas estrategias de cooptación y aislamiento, y finalmente la represión. Sin embargo, luego de la realización del Tercer Congreso Nacional del MST, con la presencia de más de 5 mil delegados

11 Según entrevista a dirigentes brasileños del MST.

de todos los estados, en el cual se reafirmó la identidad del movimiento de masas y se registró además un punto de inflexión en términos de las propuestas –que trascendían largamente la exclusiva reivindicación de la tierra–, resultaría imposible detener el avance y la fuerza del MST.

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, del PT, que asumió el gobierno en enero de 2003, reposiciona al MST en clave ya no de confrontación, sino de diálogo y negociación, expresada en su más reciente Congreso, el cual contó con la presencia del presidente Lula en el acto inaugural. Ciertamente, se abren nuevas perspectivas para la consolidación definitiva del MST, y la consideración de la puesta en práctica de sus proyectos en consonancia con las metas del gobierno progresista que comienza a operar en el ámbito federal.

- *Organicidad*

El MST cuenta con una estructura organizativa fuerte y amarrada desde la misma base social que lo sustenta desde el inicio como movimiento de masas: a nivel de comisiones de base en las comunidades rurales, en los grupos de familias que constituyen las células organizativas del movimiento, comisiones dentro de los campamentos o asentamientos, pero también a nivel estadual y nacional.

El organigrama (suficientemente flexible y dinámico para adaptarse a las necesidades de cada etapa) refleja la creciente complejización de un sistema de participación y decisión que involucra a miles de familias, militantes y profesionales del ámbito rural que valorizan la democracia y la horizontalidad de las relaciones sociales, de producción y de cooperación entre todos sus integrantes. Las instancias deliberativas, representativas y de decisión están conformadas por el Congreso Nacional –máximo órgano del MST–, que se convoca cada cinco años y al cual concurren delegados de todos los asentamientos y familias acampadas de todos los estados, así como de todos los ámbitos que conforman el cuerpo del movimiento, respetando la pluralidad y la proporcionalidad, de tal suerte que en el último Congreso participaron más de 11.700 delegados. Estos congresos apuntan a definir los grandes lineamientos de acción y a reforzar las señas de identidad y mancomunidad de sus miembros. Los Encuentros Nacionales, por otra parte, se realizan cada dos años y tienen como cometido la discusión de las plataformas de lucha en función de cada coyuntura social, económica y política, teniendo en cuenta las necesidades del propio movimiento. Estos Encuentros Nacionales reúnen a la Coordinación Nacional, la Comisión Nacional de Asentados, equipos asesores, sectores y comisiones nacionales y un representante por cada una de la Secretarías de cada estado (su número oscila entre los docientos y los 5 mil integrantes).

La Coordinación Nacional es el máximo organismo ejecutivo del MST; asume la representación pública del movimiento, aplica las resoluciones emanadas de los Congresos y los Encuentros Nacionales, respetando asimismo el principio de la descentralización en la aplicación de las decisiones y la autonomía de las organizaciones de cada estado y de cada municipio. Este órgano se reúne cada tres meses, y cuenta con dos miembros por cada estado, que son electos por sus respectivas Ejecutivas Estadales o por el Encuentro Estadual del movimiento, así como por los integrantes de la Dirección Nacional; participan también los delegados de los sectores. Sus decisiones son tomadas por votación abierta y por mayoría simple. Finalmente, la Dirección Nacional, encargada de elaborar y discutir la línea política del MST, está conformada por veintidós miembros que son electos por votación secreta por los Encuentros Nacionales, resultando designados aquellos que obtengan al menos el 50% más uno de los votos, quienes ejercen el mandato por dos años.

Otros ámbitos son también muy relevantes: no sólo las diferentes instancias a nivel local (en las cuales se replican los órganos antes descritos), sino los denominados Sectores de Actividad, entre los cuales pueden destacarse: Formación, Prensa y Propaganda, Educación, Finanzas, Salud, Producción, Proyectos, Derechos Humanos, la CONCRAB y el Frente de Masas como impulsor y generador de los cuadros del movimiento. En síntesis, el MST cuenta con un nivel de organización muy alto, fuertemente estructurado y decididamente expansivo a todas las áreas de actuación del movimiento, operando sobre la base de ciertos principios como la dirección colectiva, división de tareas, formación y disciplina, estudio, vinculación con la base, planificación, crítica y autocrítica, profesionalismo, entre otros.

Tal vez sea esa la gran contribución histórica que el MST puede ofrecerles a otros movimientos de masas: “No tienen futuro si no aplican principios organizativos, si no se constituyen como organización política en el sentido de la lucha de clases, no en el sentido partidario” (Stedile y Mançano Fernandes, 2000).

- Capacidad propositiva

La capacidad de generar propuestas y proyectos es alta si consideramos la pluralidad y diversidad de intervenciones multidimensionales en las prácticas sociales cotidianas e innovadoras, y no sólo aquellas propuestas dirigidas al poder instituido por un gobierno o por los ámbitos parlamentarios. De todos modos, también en esa dirección, el MST ha efectuado en más de una oportunidad planteos de tinte “constructivo”, como la presentación conjunta en 1987, con otras organizaciones y movimientos sociales (CONTAG, CUT), del Proyecto de Reforma Agraria,

avalado por la firma de 1,2 millones de personas, que fuera rechazado por el Congreso Nacional de aquella época.

Por otro lado, debe mencionarse la obtención del Programa de Crédito Especial para la Reforma Agraria (PROCERA)¹², en 1986, implantado y puesto en práctica por el gobierno de la época a partir de las propuestas formuladas por el MST, luego de múltiples gestiones, presiones y negociaciones. Sin embargo, lo más relevante del MST es la capacidad de haber instrumentado diversos mecanismos y modalidades para enfrentar la lucha por la tierra y la organización-formación de su base social, que de alguna manera garantiza la perduración de sus objetivos, de sus logros y, en definitiva, de su proyecto sociopolítico, más allá de las coyunturas adversas o favorables. En ese sentido, la fundación de cientos de escuelas en las que están implicados más de 140 mil niñas y niños, la creación de institutos de formación especializada en la gestión cooperativa y asistencia técnica, la instalación de la educación como dimensión fundamental, el desarrollo de estudios e investigaciones, la labor de entrenamiento y formación a nivel medio y superior (a través de numerosos convenios con universidades brasileñas, con el apoyo de UNICEF y la UNESCO), la elaboración de documentos en los que se explicita un modelo de desarrollo agropecuario, resultan todas iniciativas que confirman una alta capacidad propositiva y de generación de poder propio.

- Convocatoria y movilización

En cuanto a la fuerza de movilización, también el MST se destaca por haber acumulado una práctica de lucha social, obteniendo la adhesión de contingentes cada vez más amplios de la población rural y las ciudades, toda vez que se hizo visible que sus estrategias y reivindicaciones eran justas y afectaban al conjunto de la sociedad brasileña.

Las marchas, ocupaciones de tierra, huelgas, ayunos, acampadas, entre otras tantas variedades tácticas de lucha, lograron posicionar al MST en el escenario público como actor y sujeto de cambio, tornando una situación secularmente injusta, y hasta el momento casi invisible, en una cuestión central en la política nacional, en la medida en que afectaba obviamente los intereses de grupos económicos muy poderosos, latifundistas y grandes corporaciones agroindustriales.

Desde 1995 hasta 1999, fue el período en que más se implantaron asentamientos en Brasil. También fue el período en que más se ocuparon tierras en el país. El crecimiento de las ocupaciones fue, principalmente, a causa de la territorialización del MST. En el período

12 Eliminado más tarde por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso.

que va de 1996 a 1998, el número de ocupaciones creció un 50% y el número de familias aumentó 21%. La organización de los movimientos sociales y el aumento del desempleo en el campo y en la ciudad obligaron al gobierno federal a implantar una política de asentamientos rurales. La tendencia de las ocupaciones y del número de familias es de crecimiento. El decrecimiento del número de ocupaciones y de familias del MST es el resultado de la acumulación de familias acampadas o ya asentadas. El 31 de diciembre de 1999, había 67.704 familias organizadas en el MST acampadas (Mançano Fernandes, 2000b; traducción del autor).

El MST amplificó, poco a poco, su capacidad de movilización, volcando su esfuerzo hacia la realización de marchas que recorrían las grandes ciudades, de tal manera que se constituían en una suerte de ritual de autoafirmación, al mismo tiempo que operaba en la disputa por estar más presente en los medios masivos de comunicación y atraer la atención de toda la ciudadanía. Puede mencionarse, a modo de ejemplo, la Marcha Nacional por la Reforma Agraria, el Empleo y la Justicia, de 1997, en la que participaron miles de personas del propio MST y de otras organizaciones que se solidarizaron con su causa.

El carácter épico que asumía dramatizaba la demanda de los sin tierra y la transformaba en un espectáculo político, provocando el posicionamiento de diferentes fuerzas sociales. Juntando la cuestión de la tierra con la del empleo, tocaba temas candentes y despertaba simpatía popular. En el momento de su arribo a la capital de la República, en abril de 1997, se transformó en un gran acto público contra el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, con la adhesión de las diferentes fuerzas de oposición, dando aún mayor visibilidad a las demandas del MST (Servolo de Medeiros, 2000).

En suma, el movimiento ha dado prueba cabal de un apoyo inusitado, de amplia convocatoria y una muy significativa capacidad de movilización organizada en función de las prioridades políticas y sociales de cada período.

- Discurso político

Los ejes principales del discurso político del MST pasan por la lucha por la tierra, la reforma agraria, la emancipación de los trabajadores rurales en clave de oposición de intereses de clase, así como la dignificación del trabajador y su familia en nuevas relaciones de solidaridad, respeto y comunitarismo. Las referencias y alusiones al neoliberalismo y a los modelos económicos implantados en Brasil son permanentes; la cuestión de la tierra no remite sólo a su justa distribución, sino a formas de producción capitalista que han empobrecido a la enorme

mayoría de los trabajadores rurales del Brasil. La crítica al Estado y las corporaciones no suponen de suyo una anulación de su rol o función social o condena a priori, sino en tanto estas instituciones han servido a los intereses de las minorías latifundistas y a las clases dominantes. Al respecto parece pertinente reproducir las declaraciones de uno de sus líderes más reconocidos: “La prensa miente cuando dice que pretendemos sustituir al Estado. Todo lo contrario: las instituciones públicas de la sociedad tienen que hacer la reforma agraria, y el agente principal de ella es el Estado” (Stedile y Mançano Fernandes, 2000).

En los primeros congresos, el MST definió sus objetivos como movimiento en tres grandes líneas:

La lucha por la tierra para poder sobrevivir (objetivo económico), la reforma agraria (social y político) y la lucha por una sociedad más justa a través de un cambio político radical (Zibechi, 1999).

Conocedores de las conquistas y fracasos de la histórica lucha campesina y de la lógica del desarrollo desigual y contradictorio del capitalismo, los *sin tierra* determinaron, como principio del MST, no separar nunca en las luchas por la tierra y por la reforma agraria la dimensión económica de la dimensión política. Procuraron tomar conciencia y comprender que la lucha no termina en la conquista de la tierra. Esa es apenas una fase. De este modo, organizan simultáneamente la cooperación agrícola y las ocupaciones de tierra, la formación técnica y la formación política. Esa concepción hace que el MST actúe directamente en la formación tecnológica, en la educación, y que se preocupe por la socialización de las conquistas con vistas a la calidad de vida de los asentados (Mançano Fernandes, 2000b; traducción del autor).

La lucha por la tierra se transforma en lucha por la reforma agraria y, en consecuencia, en un proyecto político de los trabajadores si estos, en su lucha, adquieren conciencia social de que es necesario transformar la sociedad. Y para cambiar la sociedad tienen que cambiar al Estado (Stedile y Mançano Fernandes, 2000).

- *Autonomía*

Uno de los rasgos que más perfilan al MST es precisamente la autonomía de sus actuaciones, de su estrategia y de las orientaciones principales que han desarrollado desde sus orígenes hasta el momento actual. Aun cuando la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas hubieran influido de manera muy marcada en su gestación y nacimiento, y que la participación de militantes y dirigentes de partidos políticos de la izquierda brasileña (de orientación marxista, comunistas, petistas, etc.) también

haya transmitido su bagaje intelectual e ideológico, la autonomía es una de las características que resaltan los dirigentes y miembros del MST.

El MST es un movimiento campesino autónomo, independiente, que se rige por sus propias normas y no está sometido a ninguna autoridad externa en cuanto a su funcionamiento. Si bien tiene buenas relaciones con el movimiento sindical, no depende de dirección sindical alguna [...] aunque sus miembros adhieran militante o electoralmente, en forma mayoritaria, al Partido de los Trabajadores, eso no significa que este partido político tenga injerencia alguna en su vida interna. El MST no se somete ni depende a estas entidades” (sic) (Harnecker, 2002).

Constituimos un movimiento social autónomo, que piensa con su propia cabeza, que camina con sus propias piernas y que mantiene relaciones fraternas con todas las demás organizaciones (entrevista a Stedile en Harnecker, 2002).

Tal como afirma el dirigente João Pedro Stedile, efectivamente, el MST ha demostrado estar libre de ataduras, lo que no impide reconocer la disposición y práctica de cooperación y articulación con otros movimientos sociales que, al abrigo de consignas y reivindicaciones comunes, vieron al MST marchar sin vacilaciones a favor de la democracia y contra la corrupción, sumarse al movimiento del Foro Social Mundial o negociar en forma conjunta y coordinada con el Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), toda vez que fue necesario converger sinérgicamente para obtener mejores rendimientos políticos.

En síntesis, el MST presenta un grado de autonomía importante, una vocación sociopolítica para ubicarse como referente de las corrientes de cambio que trasciende incluso sus propias fronteras sociales y plataformas específicas, con la intención de constituirse en una opción de “poder real desde abajo” para contribuir a la democratización de la sociedad y el Estado.

- Tasa de afiliación

Los datos de familias asentadas y campamentos de ocupantes son ilustrativos en cuanto a que dan cuenta del número de adherentes al MST: hay cerca de 350 mil familias asentadas y aproximadamente 150 mil que viven en campamentos. Considerando que la media por familia se estima en cuatro personas, se deduce que alrededor de dos millones de militantes y adherentes están directamente vinculados al Movimiento, según las propias fuentes que maneja el MST.

CUADRO 4

CARACTERÍSTICAS DE LOS MOVIMIENTOS BRASILEÑOS

	Organicidad	Capacidad propositiva	Convocatoria y movilización	Discurso político	Autonomía	Tasa de afiliación
MST	Alto grado de organicidad. Estructura sólida en casi todos los estados. Se sustenta en poder local.	Alta, al considerar el despliegue de propuestas originales e innovadoras.	Alta. Ha generado la adhesión de otros sectores sociales y de la ciudadanía en general.	Antisistémico, en contra del modelo neoliberal. Reforma agraria, transformación de la sociedad. Democratizador.	Autonomía importante. Vinculado con fuerzas políticas de izquierda (sobre todo con el PT).	Sin datos específicos, pero con un número de colonos y acampados muy grande.
CUT	Grado alto. Cobertura en todos los estados federados.	Alta capacidad de propuesta. Articula eficazmente lucha con negociación y proposición.	Mantiene un grado alto, aun habiendo perdido parte de su capacidad en los años noventa.	Antiimperialista, democratizador, clasista, antineoliberal.	Autonomía media. Vínculos estrechos con el PT y otros partidos.	Media. Registró un descenso en los años noventa.

Fuente: elaboración propia.

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO

CUADRO 5

BRASIL: EVOLUCIÓN RECIENTE DE INDICADORES PARA EL PERÍODO 1996-2003
(EN PORCENTAJE)

Perfil del sistema político					
Confianza en el Parlamento	Confianza en los partidos	Participación electoral (promedio últimos 20 años)	Sistema de partidos (NEP)	Confianza en los presidentes o el Ejecutivo	Satisfacción con la democracia
23,62	16,60	75,00	2,90	31,85	22,55

Fuente: elaboración propia en base a datos de Latinobarómetro (1996-2003).

Como se ha aclarado anteriormente, el Cuadro 5 presenta una foto del sistema político para el período 1996-2003, su utilización para el análisis se hará en los siguientes capítulos junto a otros datos. Seguidamente, se hará una caracterización con datos anteriores y algunos datos recientes a modo de adelanto.

Según Mainwaring y Scully (1995), el sistema de partidos brasileño, hasta 1995, está dentro de la categoría *incoativo*, es decir, con una muy débil institucionalización, partidos débiles, alta volatilidad electoral, pocas raíces sociales de los partidos, y las personalidades por enci-

ma de las instituciones. Sumando los puntos obtenidos en cada criterio llegan a un puntaje agregado de 5, el más bajo dentro de los siete países considerados en el presente estudio. Encuentran un número efectivo de 5,7 partidos como promedio para el período 1985-1990, en el que hubo dos elecciones, y en la última elección ascendió el NEP a 8,7. Estamos ante un sistema de pluralismo polarizado, dado el alto número de partidos y la distancia ideológica entre ellos.

Luego de la elección indirecta de Tancredo Neves y José Sarney para dirigir los rumbos de la redemocratización brasileña, se produjo la elección de Collor de Mello, marcando un período de características fuertemente populistas. Los dos períodos, según el análisis de los autores citados, son de preeminencia de las personalidades por sobre los partidos, incluyendo en el segundo período escándalos de corrupción. Hay una marcada falta de regularidad o alta volatilidad electoral, los partidos no tienen raíces fuertes en la sociedad, la legitimidad de elecciones y partidos está en construcción y las organizaciones partidarias son débiles. En este contexto llegan luego los dos períodos de gobierno de Fernando Henrique Cardoso, relegando a una posición insignificante al Partido de Reconstrucción Nacional (PRN) del ex presidente Collor; lo mismo sucedió con el Partido del Movimiento Democrático Brasileiro (PMDB) de Neves y Sarney.

Desde la elección de Collor hasta la reciente de Luiz Inácio Lula da Silva, el PT se mantuvo con entidad y aumentó su caudal elección tras elección; el Partido de la Social Democracia Brasileira (PSDB) del ex presidente Cardoso, a pesar de perder la presidencia, ha mantenido una porción del electorado (23,2% en la primera vuelta de 2002 y 38% en la segunda). Los casos del PT y del PSDB, así como en parte el Partido Popular Socialista (PPS) de Ciro Gomes, muestran un camino de incipiente regularidad, de raíces sociales más sólidas, de consolidación de la legitimidad electoral y partidaria, y de solidez de las estructuras partidarias; lo que pauta la salida de Brasil de la categoría *incoativo* y lo coloca entre los *débilmente institucionalizados*, pero con un progresivo proceso de institucionalización.

CHILE

Tal como adelantamos, hemos analizado los dos movimientos sociales chilenos considerados desde un ángulo de contrastación con los restantes casos examinados, sin profundizar con exhaustividad todos los indicadores relativos a la organización, capacidad de convocatoria y movilización, discurso político, etc. No obstante, elaboramos una caracterización general de los dos movimientos sociales: Ad-Mapu, una de las organizaciones indígenas mapuches, y la CUT, en tanto es bien representativa del movimiento obrero chileno. Agregamos también al-

gunas valoraciones más generales respecto de los movimientos sociales en Chile y sus vinculaciones con el sistema político.

CARACTERIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

ASOCIACIÓN GREMIAL DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y ARTESANOS AD-MAPU Y OTRAS ORGANIZACIONES DEL MOVIMIENTO MAPUCHE (CONSEJO DE TODAS LAS TIERRAS, COORDINADORA ARAUKO-MALLEKO)

Este movimiento mapuche surgido a principios de la década de los ochenta (1981-1982) representa una de las expresiones orgánicas del movimiento indígena en Chile. Ad-Mapu nació al amparo de la iniciativa de los Centros Culturales Mapuches, promovidos por la Iglesia Católica en tiempos de la dictadura militar de Augusto Pinochet, para ser reapropiados por los propios grupos mapuches que resistían la división de sus comunidades indígenas. Precisamente, el Decreto-Ley 2.568 del año 1978 provocó la indignación y repulsa de los indígenas oriundos de Chile en virtud de que, por efecto legal, se desconocía a las etnias y por tanto sus tierras podían ser divididas. La misma norma establecía: “dejarán de llamarse tierras indígenas e indígenas sus habitantes”, en un intento por acabar con la identidad mapuche, desde una concepción integracionista homogeneizadora de las diferencias y pluralidades culturales.

La organización mapuche Ad-Mapu (en ese tiempo la más numerosa, que luego se dividió en varios subgrupos) señaló que “se nos suprime por decreto”, manifestando la preocupación por lo que esta ley significó. Se dividieron cerca de 2.062 comunidades repartiéndose 71.423 hijuelas en casi 400 mil hectáreas. Esto significa que el promedio por familia alcanza a 5,5 hectáreas, que en el centro del país permite la subsistencia de una familia, pero en las tierras sureñas no (Salinas Cañas, 2003).

El movimiento surge acá en la región, en el territorio: Arauco, Bío-Bío, décima y novena regiones. El trabajo urbano en Santiago se desarrolla cuando ya es Ad-Mapu y con la dirección que tenía. Se crean bases de residentes urbanos en Santiago, bases de residentes urbanos en Temuco, bases de residentes urbanos en Concepción [...] Ad-Mapu surge como un movimiento reivindicativo, en oposición a una disposición legal promulgada por la dictadura desde sus intereses, con su práctica política recurrente. La principal bandera de los centros culturales era la no división de las comunidades que iba a significar la pérdida de las tierras [...] Hay que considerar que la tierra tiene para los mapuches un significado muy especial. Es la base, el fundamento que da origen a su organización económica y social, a su cultura, a sus valores y creencias. Por algo ellos se han dado el

nombre de Mapuche (*Mapu* = tierra; *Che* = gente), es decir, gente de la tierra (entrevista a un ex dirigente del Movimiento Ad-Mapu).

En el transcurso de la formación de Ad-Mapu, los partidos políticos identifican también en esta problemática étnico-cultural un espacio propicio para canalizar el descontento, la resistencia civil, y ampliar la base social de la lucha contra la dictadura, influyendo en las orientaciones del movimiento, al punto de lograr tras las primeras elecciones “una directiva mapuche de orientación política de izquierda” (según un ex dirigente de Ad-Mapu). En particular, Ad-Mapu fue un movimiento social de base mapuche más influido por el Partido Comunista, mientras que otra formación mapuche, Nehuen Mapu, se articulaba preferentemente con la Democracia Cristiana, y ambas coordinaron sus estrategias y planes de acción a partir del año 1979; asimismo, es posible establecer una asociación privilegiada de Arauko-Malleko con sectores socialistas.

El conflicto mapuche, según Fernando Marcelo de la Cuadra (2001), trasciende la cuestión de la propiedad de la tierra para incluir un abanico de reivindicaciones que componen la causa mapuche (como una expresión del “ecologismo popular”). En efecto, se considera que una multiplicidad de factores fueron sumándose e interrelacionándose para configurar el conflicto en sus manifestaciones contemporáneas. Según el investigador de referencia, habría que tomar en cuenta al menos seis fuentes que proporcionan elementos para una versión más ajustada a la realidad del conflicto mapuche, entre los cuales menciona la deuda histórica con los pueblos mapuches por su discriminación desde los orígenes del Estado-nación, la pérdida de autonomía político-territorial y la permanente marginación de su cultura, religión e idioma. Por otra parte, da cuenta del proceso de colonización agrícola, que implicó la pérdida de 9,5 millones de hectáreas de los mapuches, empujándolos a la migración y su conversión al minifundismo o al trabajo como asalariados rurales; la creciente pauperización de las comunidades mapuches como efecto de los procesos antedichos; la fragmentación y dispersión de las comunidades; pérdida de espacio para manifestaciones culturales y de identidad; y finalmente menciona la persistencia del despojo sistemático del cual siguen siendo objeto las comunidades mapuches. En este sentido, cabe resaltar dos problemas que han movilizadado a las principales organizaciones mapuches en los últimos años: la resistencia a las empresas forestales y a la instalación de una central hidroeléctrica (Proyecto Ralco), en el Alto Bío-Bío, con enfrentamientos y actos de sabotaje, y fuerte represión del Estado.

Una vez restaurada la democracia y durante el gobierno de Patri- cio Aylwin, el conflicto mapuche es asumido por el Estado a partir de un proceso de diálogo con todas las organizaciones representativas (el

vínculo entretejido del movimiento social con los principales partidos políticos favoreció una aproximación al gobierno de la Concertación) que culminó con el Acuerdo de Nueva Imperial, en diciembre de 1989. En este,

Un conjunto de organizaciones indígenas llega a un acuerdo con Patricio Aylwin: ellas se comprometían a “apoyar y defender” el futuro gobierno de la Concertación así como a “canalizar sus legítimas demandas” a través de las instancias y mecanismos de participación que crearía el gobierno. Por su parte, Aylwin se comprometía a que la existencia de los pueblos indígenas pudiera ser reconocida constitucionalmente y a que las futuras proposiciones de dichas comunidades fueran estudiadas por una comisión especial [...]

Ya por inicios de la década de los 90 y paralelo a la discusión en el Parlamento de la Ley Indígena, surge en el espíritu de naciendo organizaciones como el Consejo de Todas las Tierras (que toma distancia de la politización y compromisos que terminan por hacer inoperantes en el marco de las reivindicaciones a sus referentes tradicionales) una posición crítica, centrada en torno a lo “indígena” más que a la coyuntura política (Marín, s/f).

El resultado de aquellas negociaciones se plasmó en la promulgación de la Ley 19.253 de 1993, que:

En términos generales tiende a proteger la propiedad y la posibilidad de enajenación de las tierras de las comunidades, además de la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) como organismo que vela supuestamente para que estas disposiciones se cumplan, aparte de entregar algunos beneficios como becas para estudiantes, etcétera (Marín, s/f).

Más ocupaciones de fundos, cortes de ruta, ocupación de la sede del CONADI (principalmente en Temuco) y de tierras en manos de empresas privadas, detención de dirigentes y militantes indígenas (del Consejo de Todas las Tierras, de Ad-Mapu, de la Coordinadora Arauko-Malleko), represión por parte de carabineros, movilización callejera y marchas son aún hoy –en el contexto de un gobierno presidido por el socialista Ricardo Lagos– las señas de un conflicto aparentemente insoluble política y socialmente. Para algunos investigadores, el golpe de Estado pinochetista marcó de manera significativa la evolución del movimiento mapuche, de tal modo que hasta entonces se lo podría caracterizar como un movimiento fuertemente asociado a los partidos y movimientos de izquierda y una connotación “campesinista” del conflicto, mientras que después, y sobre todo a partir de la salida post-autoritaria, se observa un giro hacia una perspectiva mucho más

próxima a la autonomía (étnico-cultural) y a la idea de libertad para la propia determinación nacional de los pueblos mapuches, a diferencia de los movimientos indígenas ecuatorianos, que promueven un Estado plurinacional.

En cuanto a la estructura orgánica, Ad-Mapu reposa en núcleos de base vinculados a las respectivas comunidades, en tanto que su capacidad propositiva parece haber disminuido sensiblemente en la última década del siglo XX. En tiempos inmediatos al golpe de Estado, Ad-Mapu convocó a cerca de 3 mil personas en un gimnasio, legitimando su lucha específicamente indígena, pero necesariamente contextualizada en la dictadura y la represión dura y sangrienta hacia todas las organizaciones populares de oposición.

El trabajo hacia las comunidades en Arauko, por ejemplo, se siguió haciendo igual, la organización mapuche continuó fortaleciéndose hasta que se realizó en 1980 el Congreso de los centros culturales mapuche en la ciudad de Temuko. También en esa fecha, Millaman fue elegido dirigente nacional de Ad-Mapu, una de las principales organizaciones indígenas de la época. Es más, es posible afirmar que es en estos centros culturales donde han de hallarse los gérmenes de la reorganización del movimiento mapuche y de su desvinculación paulatina con la forma tradicional de hacer política en Chile en la esfera de la problemática indígena. Es decir, una izquierda que se relacionaba con los pueblos y problemas indígenas a través de la militancia y, en muchos casos, a través de la imposición de sus políticas partidarias en desmedro de los intereses reales de los pueblos originarios (Buendía, s/f).

Hasta 1988 se puede decir que Ad-Mapu es la organización que tiene más protagonismo a nivel de base en el mundo mapuche. Se hacía necesaria la movilización contra la dictadura y Ad-Mapu llegaba con su propia gente; además se dan algunos procesos de recuperación de tierras en ese tiempo; en 1986 se dan las primeras recuperaciones: Loncoyán, Ad-Mapu Purén, que logran recuperar 900 hectáreas en ese tiempo, por la fuerza, sin ninguna disposición legal que lo reconozca y con el costo de detenidos, heridos de bala y toda la represión encima. Y otras dos localidades en la octava región (entrevista a José Millalén Paillal).

En referencia al Consejo de Todas las Tierras, algunos investigadores han observado su debilitamiento y desgaste a partir de los años noventa, en parte por su discurso ambivalente situado entre el rupturismo y el respeto a la legalidad, entre la oposición frontal y el diálogo negociador con el Estado. El Consejo de Todas las Tierras surge a consecuencia del rompimiento con Ad-Mapu en 1989 y del enfrentamiento entre las

corrientes socialistas y comunistas, sustentado en dos enfoques contrapuestos acerca de la transición democrática. “Entre fines de diciembre del 1989 y marzo de 1990, los automarginados/expulsados de Ad-mapu discuten su suerte e irrumpen en la escena política regional y nacional, bajo la fórmula de Aukiñ Wallmapu Ngulam” (Marimán, 1995), liderados por Aucan Huilcaman. De otro lado, la Coordinadora Arauko-Malleko (que articula alrededor de 160 comunidades mapuches) ha desarrollado una estrategia y una táctica de lucha mucho menos “condescendiente”, apostando a la toma de terrenos, al enfrentamiento directo con los intereses empresariales en las regiones geográficas de origen y fuerte arraigo mapuche, y expresando una baja predisposición al diálogo y la negociación como mecanismos de regulación del conflicto.

En lo atinente al grado de autonomía, es harto evidente la correlación existente entre los partidos políticos chilenos y las más importantes organizaciones que constituyen el movimiento mapuche, lo cual no significa de antemano establecer la presunción de dependencia de estas respecto de los primeros. No obstante –y ello fue puesto de manifiesto por los testimonios personales–, esta particular relación condicionó en buena medida la evolución del movimiento mapuche, fijándole, tal vez de modo heterónomo, una agenda y una ruta a su conflicto ancestral.

En Ad-Mapu se replica la apropiación de la organización por los partidos políticos; yo, al mismo tiempo que en Ad-Mapu, estuve militando en un partido político, de las Juventudes Comunistas en ese tiempo, y eso mismo me llevó a tomar responsabilidades de dirección; era prácticamente imposible que un independiente, un mapuche sin militancia llegara a la dirección. Porque eran los partidos los que cortaban el queso; la directiva de Ad-Mapu desde 1982 hasta que me desvinculé en 1992 la conocían primero las directivas partidarias antes que la gente que votaba. Era por cuoteo, era negociada. Hasta ese nivel era la intervención política de los partidos, en este caso, del Partido Comunista (PC), Partido Socialista (PS) y Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Por eso se marginan algunos centros culturales y forman otras organizaciones, pero es porque respondían a otros partidos políticos, como la Democracia Cristiana (DC), Mapu y que pasan a ser Partido Por la Democracia (PPD), y luego en 1988 el Consejo de Todas las Tierras, que fue una expresión de los socialistas que todavía estaba dentro de Ad-Mapu (entrevista a un ex dirigente de Ad-Mapu).

De todos modos, se ha observado una tendencia en el movimiento mapuche a autogenerar un discurso autónomo, desligado de los intereses estrictamente partidarios y por tanto reivindicativos de la autodeterminación del pueblo mapuche. Pero la fragmentación y relativa desarticulación de las organizaciones mapuches, la pérdida de su peso en el sector

campesino, las dificultades reales para transmitir los valores, la cultura y el idioma siguen aún frenando la posibilidad de desarrollar un movimiento pujante y de peso en el panorama político contemporáneo de Chile.

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES (CUT)

Al igual que la gran mayoría de las organizaciones y movimientos sociales, los sindicatos sufrieron también la persecución de sus dirigentes, la represión a toda manifestación opositora y la muerte, el exilio y la desaparición de miles de sus cuadros y militantes, durante la dictadura militar que se impuso entre 1973 y 1989. El papel de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) también fue decisivo para la caída del autoritarismo, teniendo una larga historia de luchas obreras en su haber. Es en 1980 (aunque se fue rearticulando gradualmente desde 1975) que se constituye la Coordinadora Nacional Sindical como antecedente inmediato de la CUT. Sin embargo, se crea formalmente recién el 11 de abril de 1992, después del Encuentro Nacional celebrado entre el 20 y el 21 de agosto de 1988 en Punta de Tralca.

Esta central sindical se autodefine como continuadora de la línea de acción de la histórica Central Única de Trabajadores, y reivindica su carácter independiente respecto del Estado, del gobierno, de los partidos políticos y de cualquier institución religiosa o empresarial. Entre sus fines establece que habrá de promover la organización de todos los trabajadores, y defender sus intereses en aras de mejorar el bienestar económico, social y cultural. Al enunciar sus objetivos específicos, la CUT enumera varios ítems relativos a la representación de los trabajadores ante el Estado, las empresas y demás organizaciones sociales; a la participación en diversos organismos públicos nacionales e internacionales; al rol de conductor y orientador de la clase obrera; a la necesidad de establecer lazos fraternales con otros actores sociales; al desarrollo de la solidaridad; al fomento cultural y la ampliación de los derechos políticos de los trabajadores. También resalta su vocación para contribuir en la profundización democrática y a un desarrollo económico con equidad y justicia (disminuyendo el desequilibrio entre capital y trabajo); así como para propiciar la unidad de acción de los trabajadores de la región. Conviene recordar el papel fundamental que tuvieron importantes sectores y voceros de la Iglesia Católica en el respaldo a los intentos de reagrupar las fuerzas sindicales en tiempos de la dictadura militar. Numerosas marchas y paros entre 1983 y 1988 hubieron de trazar el camino de la restauración democrática en Chile, logrando el 5 de octubre de 1988 la derrota electoral de Augusto Pinochet tras la votación por el *no* a la reforma constitucional que proponía extender el mandato del dictador.

La CUT ha registrado un descenso de su tasa de afiliación en los últimos años, situándose en la actualidad en alrededor de un 15% de la PEA. Actualmente, el recambio en la dirección sindical ha manifestado a su vez una variación significativa en las posturas más “radicales” o duras respecto del gobierno de la Concertación, lo que de todos modos aún no redundará en un efecto de movilización masiva de los trabajadores. De todos modos, podría presuponer el despliegue de una estrategia más confrontacional y más crítica al modelo económico neoliberal implantado en Chile desde hace dos décadas.

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO

CUADRO 6

CHILE: EVOLUCIÓN RECIENTE DE INDICADORES PARA EL PERÍODO 1996-2003
(EN PORCENTAJE)

Perfil del sistema político					
Confianza en el Parlamento	Confianza en los partidos	Participación electoral (promedio últimos 20 años)	Sistema de partidos (NEP)	Confianza en los presidentes o el Ejecutivo	Satisfacción con la democracia
38,04	22,92	77,00	2,30	54,25	30,94

Fuente: elaboración propia en base a datos electorales y de Latinobarómetro (1996-2003).

Para el estudio de Mainwaring y Scully (1995), que usamos como referencia para este primer acercamiento al análisis, el sistema de partidos chileno goza de un alto nivel de institucionalización, llegando a 11,5 puntos en 12 posibles, al igual que Uruguay y Costa Rica; cifra que coloca a los tres países en el máximo nivel de América Latina. El primer criterio, de regularidad, medido con el índice de volatilidad electoral de Pedersen, es el que no le permite a Chile tener el puntaje perfecto, según los autores del estudio. El número efectivo de partidos promedio para el período 1973-1993 es de 4,7, considerando por separado los partidos que conformaron coaliciones en 1989, lo que permite designar el sistema como de fragmentación moderadamente alta. La polarización ideológica es calificada de moderadamente alta, la que, combinada con la moderadamente alta fragmentación, supone riesgos de inestabilidad o posibilidad de conflictos de costosa resolución institucional. Es conveniente aclarar que la fragmentación puede ser vista como menos pronunciada si se asume la actual consolidación de dos núcleos partidarios fuertes, por un lado la Concertación y por el otro la derecha. Con relación a la polarización ideológica, esta se ha visto disminuida notoriamente.

Para ciertos cálculos, los autores se basaron en las elecciones de 1973, previas al sangriento golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet, en las que resultó electo presidente Salvador Allende. En la primera elección del período de restauración democrática, año 1989, fue electo presidente el candidato de la Concertación, el demócrata cristiano Patricio Aylwin Azócar, estableciendo el comienzo de un período de tres gobiernos de dicha fuerza política, que se extiende hasta el presente. Los integrantes principales de la Concertación son el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano, claros contrincantes en el período predictatorial. Lo anterior muestra una continuidad en el sistema, pero una falta de alternancia en el gobierno. Vale aclarar que los resultados económicos obtenidos por los sucesivos gobiernos de la Concertación son satisfactorios, y queda alguna duda sobre los resultados sociales de las políticas aplicadas.

En el segundo período de gobierno, 1994-2000, ejerció la presidencia el también demócrata cristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien dejó el gobierno en manos del socialista Ricardo Lagos Escobar. En aquella elección, la Concertación no logró en primera vuelta más del 50% de los votos, debiendo habilitarse el mecanismo de *ballottage* en el que Ricardo Lagos venció a Joaquín Lavín por un escaso 3% de los votos. El índice de volatilidad electoral de todo el período es bastante bajo, lo que marca una regularidad fuerte, que junto con la falta de alternancia en el poder puede hacer demasiado rígido el alto nivel de institucionalización del sistema.

ECUADOR

Los dos movimientos examinados expresan realidades diferentes, tanto por sus orígenes como por su configuración sociocultural: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), “que representa a cerca de cuatro millones de habitantes, secularmente discriminados pertenecientes a las siguientes nacionalidades: Awa, Quichua, Tsáchila, Chachi, Siona, Secoya, Huaorani, Cofán, Shuar y Achuar” (Pico, 2003) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que incluye varias centrales sindicales.

CARACTERIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

CONFEDERACIÓN DE NACIONALIDADES INDÍGENAS DEL ECUADOR (CONAIE)

- Contexto histórico de origen y evolución reciente

Nacida a mediados de la década de los ochenta, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador es el resultado de un largo proceso de maduración del movimiento indígena que hunde sus raíces en la propia fundación de aquella nación latinoamericana y aún mucho

antes, pero que expresa en varios hitos históricos la galvanización de un extenso itinerario de articulaciones entre comunidades y pueblos de rasgos étnicos y culturales comunes. En noviembre de 1986 ya estaba configurada la CONAIE como expresión organizada del movimiento indígena que a lo largo de tres décadas aceleró la construcción de su propia herramienta de lucha y reivindicación. Desde la conformación de la ECUARUNARI (Ecuador Runacunapac Riccharimui-Confederación de los Pueblos de Nacionalidad Kichua del Ecuador) en 1972, como confederación regional de la sierra, la posterior creación de la CONFENAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana), que refleja la convergencia de varias federaciones y organizaciones de base de la Amazonia, y de la CONAICE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana), que expresa a las organizaciones de la costa ecuatoriana, la condensación organizativa del movimiento fue de la mano con un grado de maduración de la conciencia colectiva y la presencia activa y crecientemente protagónica en la escena pública.

Entre los jalones más relevantes pueden mencionarse la promulgación de la primera Ley de Reforma Agraria, en 1964, como antecedente más inmediato, producto de las presiones de campesinos e indígenas, aun cuando su aplicación efectiva no haya implicado cambios sustantivos ni favorecido significativamente a los sectores sociales involucrados (Ospina, 2000).

El primer levantamiento indígena, acaecido a partir de la ocupación de la iglesia de Santo Domingo de Quito el 28 de mayo de 1990, que provocó una extendida y masiva movilización de miles de indígenas y campesinos en Ambato, Latacunga y Riobamba, entre otras localidades y pueblos ecuatorianos, colocó en el primer plano de la acción social colectiva al movimiento indígena, que emergió como actor relevante y sujeto social legitimado por su propia base de sustentación y por los demás actores en juego. El discurso entonces ya no refería exclusivamente a la cuestión de la tierra –aunque de hecho esta fue el desencadenante–, sino que aludía al reconocimiento de las identidades y la plurinacionalidad, a la situación de exclusión social y a la discriminación racial, a la cuestión de la democracia y la participación de las grandes mayorías. La convergencia oportuna de la CONAIE y de la Coordinadora de Tierras¹³, organización esta que asumió la primera iniciativa para dar solución a quienes ocupaban tierras o aquellos que procuraban legalizar sus propiedades, dio

13 Coordinadora que, según algunos autores consultados, no era conocida públicamente al momento de convocar a la movilización y la ocupación de la iglesia de Santo Domingo de Quito.

paso a una unificación del conflicto que consolidó el papel relevante y aglutinador de la CONAIE. En 1991 se registró otra importante y significativa movilización social que reunió tanto a la CONAIE como al Frente Unitario de Trabajadores (FUT) frente a un paquete de medidas económicas que provocaron la reacción de los movimientos sociales expresada en paralizaciones urbanas y rurales.

Al año siguiente, durante los meses de abril y mayo, se realizó una gran marcha promovida y organizada por la Organización de los Pueblos Indígenas del Pastaza (OPIP), que logró la adhesión activa de miles de indígenas que reivindicaron sus demandas de territorialidad. Este hito condujo a un nuevo punto de inflexión en la configuración de la plataforma de la CONAIE; se reclamó entonces una reforma constitucional para considerar la plurinacionalidad como elemento central constitutivo de la nación ecuatoriana. En 1994 se produjo el segundo levantamiento: durante casi un mes se efectuaron cortes de carreteras, ocupaciones de radioemisoras y canales de televisión, movilizaciones callejeras multitudinarias que consolidaron la emergencia de un actor social en la arena pública. En ese contexto se constituyó una mesa de negociaciones entre representantes gubernamentales, gremios campesinos y empresariales, en la que el movimiento indígena enarboló un discurso mucho más abarcador, incluyendo las problemáticas de indígenas, campesinos y los pobres de las ciudades.

Ciertamente, en esta apretada síntesis de la evolución histórica reciente del movimiento indígena no puede soslayarse otro hito innegable: la decisión de participar en la competencia electoral a través de su propio instrumento político. En efecto, en 1996 se creó el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP), que obtuvo en su primera participación en la contienda política un diputado nacional y siete provinciales. Aun cuando el MUPP está conformado principalmente por la CONAIE, cabe resaltar que su configuración es plural, en la medida en que también lo integran otras organizaciones sociales de raigambre popular.

En enero de 1997 se produjo una ola de paros, nuevas movilizaciones callejeras y la toma de la catedral metropolitana de Quito; durante los días 5, 6 y 7 de febrero se paralizó el país como respuesta al paquete de medidas económicas decididas por el gobierno a cuyo frente estaba el presidente Abdalá Bucaram. Este fue destituido por el Congreso por incapacidad mental; tras unas horas en que coexistieron tres presidentes, los arreglos políticos finalmente colocaron como sucesor a Fabián Alarcón. Los episodios de aquellos meses marcan de modo indeleble el itinerario de alzamientos y revueltas indígenas con un mensaje nítido y contundente: los movimientos sociales son capaces de tumbar presidentes y están dispuestos a hacerlo toda vez que estos impongan políticas regresivas y en contra de los intereses de los pueblos.

Ese mismo año se eligió una Asamblea Nacional Constituyente, instancia electoral que confirmó el apoyo al movimiento a través de la presencia de siete representantes sobre setenta, permitiendo la incorporación de varias de las reivindicaciones históricas a los textos aprobados en la nueva Carta Magna. En junio de 1998 se celebraron nuevas elecciones, de las que resultó electo como presidente Jamil Mahuad, dirigente socialcristiano. Pocos meses más tarde se registraron nuevas protestas en contra de anuncios y decisiones en materia de política económica. Al año siguiente se produjo el tercer levantamiento: nuevamente fueron miles de personas que desde Ambato, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Bolívar se dirigieron a la capital para realizar una toma simbólica de Quito, involucrando a otros sectores sociales en convergencia con los planteos y plataformas mucho más generales del movimiento indígena. Se constata un cambio en el eje de la lucha, que se traslada ya de manera inequívoca al cuestionamiento del poder político, logrando detener el proceso de privatizaciones, debilitando al gobierno constituido, criticando la democracia formal y la organización actual del Estado, proponiendo la instauración de los parlamentos populares, o el Parlamento de los Pueblos de Ecuador.

En el mes de enero de 2000 se produjo otro levantamiento nacional que generó un nuevo impacto directo y sustantivo en la situación política ecuatoriana. Nuevamente hubo marchas multitudinarias, entre las cuales se destaca la de Cuenca, en la que participaron unas 30 mil personas; en tanto que en Quito, miles de indígenas, campesinos, trabajadores y estudiantes tomaron el Congreso Nacional obligando a la dimisión del presidente Mahuad. En rigor, debe subrayarse que en el derrocamiento de Mauhad convergió la fuerza de la movilización popular del movimiento indígena con la acción de las Fuerzas Armadas comandadas por Lucio Gutiérrez. La Junta de Salvación, que duró efectivamente pocas horas, tuvo entre sus miembros al dirigente y presidente de la CONAIE, Antonio Vargas, que fue desplazado ante la propuesta de otro de los integrantes, que fue apoyado por las Fuerzas Armadas, para que asumiera el vicepresidente legalmente designado.

El desplazamiento de los sectores indígenas a poco de resolver la continuidad del Ejecutivo colocó al movimiento de insurgencia ante el dilema de profundizar la lucha o dejar que la vía constitucionalista resolviera el vacío de poder. De esta manera, asumió la presidencia Gustavo Noboa, que era entonces el vicepresidente, para dar paso a una etapa de transición que culminó con la celebración de nuevas elecciones nacionales en octubre de 2002, en las que triunfó finalmente el coronel Lucio Gutiérrez al frente de la Sociedad Patriótica 21 de Enero, en alianza (que acabaría siendo fugaz) con el MUPP, y el respaldo de la CONAIE. La victoria tal vez inesperada de Gutiérrez en la segunda vuelta posibilitó que la alianza político-electoral con el movimiento

indígena cristalizara luego en una alianza político-programática, que supuso la inclusión de varios representantes del MUPP y la CONAIE en el gabinete ministerial del nuevo Ejecutivo, entre los cuales se destacan la ministra de Relaciones Exteriores Nina Paccari (connotada dirigente de la CONAIE) y María Rosa Torres como ministra de Educación y Cultura. Seis meses más tarde de haber asumido el nuevo gobierno, y en virtud de fuertes discrepancias y desavenencias, el MUPP rompió la alianza política y se retiró del gobierno.

La situación a fines del año 2003 estaba signada por fuertes tensiones y acusaciones al gobierno por no haber respetado el espíritu transformador que se expresara en los acontecimientos del 21 de enero de 2000.

- *Organicidad*

Pese a su corta edad, la CONAIE se presenta con una trama organizativa fuerte y bien estructurada sobre la base de las representaciones de comunidades y pueblos. Tal como se indicó, es una organización de alcance nacional que se constituye por tres confederaciones regionales, compuestas a su vez por federaciones o pueblos provinciales conformadas por organizaciones de base de segundo grado, y estas por organizaciones de base o comunidades.

La comunidad se configura como un nuevo sujeto o actor político en el ámbito más local o próximo a los individuos que lo componen. Precisamente para la terminología de la CONAIE existen diez nacionalidades indígenas a las cuales pertenecen varios pueblos, integrados asimismo por dichas comunidades. Según Massal, el papel de “las organizaciones locales consiste en controlar la ejecución de los proyectos y ser intermediarias entre la Unión de Comunidades y cada comunidad” (Massal, 2000: 120), mientras que para Barrera “las comunas son núcleos de población asentadas en un territorio delimitado, con una matriz de centralidad dispersa, con fuertes nociones de delimitación y pertenencia con modalidades de representación propias, con fuertes lazos de parentesco y que en algunos casos incluyen la permanencia de formas de propiedad comunitaria” (Barrera Guarderas, 2001: 135).

En suma, se registra un alto grado de organización que refleja la maduración de un nuevo movimiento social con importante desarrollo de su democracia interna.

- *Capacidad propositiva*

Su capacidad de propuesta ha quedado patentizada a lo largo de su historia, que refleja una apuesta desde el nacimiento a constituirse como el referente social de los pueblos indígenas y campesinos ecuatorianos, tanto *vis à vis* el Estado como con relación a los demás actores políticos

y sociales. Así se puede destacar la propuesta de conformación de un Parlamento Indígena Popular, que de suyo reconocía de algún modo la pérdida de legitimidad del Parlamento electo de acuerdo con las reglas democráticas establecidas por la Constitución. Por otra parte, el Proyecto Político presentado por la CONAIE y que sintetiza un conjunto de propuestas y demandas articuladas de manera coherente, es una prueba irrefutable de su capacidad propositiva:

La propuesta de un nuevo modelo de desarrollo económico denominado Economía Comunitaria Ecológica planificada [...] cuyo interés primordial será alcanzar el desarrollo integral de las nacionalidades; mejorar el nivel de ingresos de los trabajadores manuales e intelectuales; emprender la diversificación de la producción de manera planificada; garantizar el sistema alimentario a toda la población; utilizar racional y óptimamente los recursos económicos, incorporar tecnología apropiada a los sectores productivos, respetando y desarrollando las propias, y lograr en el plano internacional la aplicación del nuevo orden internacional, basado en el intercambio equilibrado y justo de bienes y servicios entre todas las naciones y estados soberanos (Barrera Guarderas, 2001).

En la dimensión más propiamente política institucional, por su parte, se propone “la transformación del estado uninacional burgués en un estado plurinacional. Las claves de esta demanda son la propuesta de plurinacionalidad, autodeterminación y territorialidad” (Barrera Guarderas, 2001).

Por lo expuesto, se desprende que la CONAIE cuenta con un alto grado de capacidad de propuesta, desplegada desde sus inicios como actor social en Ecuador.

- Convocatoria y movilización

En términos de su capacidad de convocatoria, la CONAIE ha ido convocando a lo largo de su devenir histórico una creciente adhesión de los pueblos indígenas, así como de campesinos y trabajadores que provenían de una pluralidad de comunidades que depositaron su confianza, y sobre todo su esfuerzo mancomunado y comprometido en decenas de movilizaciones, marchas, paros, manifestaciones callejeras y ocupaciones. Los documentos gráficos y periodísticos son fuentes incontestables de aquel apoyo, que evidencia una fuerza de convocatoria de gran porte, expresada en miles de personas en marcha en las principales localidades y ciudades de Ecuador. La historia de la CONAIE ha estado marcada por una inocultable vocación de movilización de masas, fuertemente anclada en identidades étnico-culturales del movimiento indígena, pero francamente con una buena disposición a la inclusión

de sectores sociales más amplios, por lo que ha generado un alto grado de convocatoria y respaldo popular. Cabe destacar que el propio movimiento ha sido capaz de canalizar las innumerables manifestaciones espontáneas que hubo a lo largo de los últimos años de acción social colectiva; precisamente la población le ha conferido legitimidad social toda vez que la CONAIE lograba canalizar adecuadamente el sentimiento de rebeldía y hartazgo de los sectores indígenas excluidos y de la ciudadanía en general.

En resumen, se trata de un movimiento social con alta capacidad de convocatoria y movilización, lo que a su vez retroalimenta su capacidad de iniciativa y presión ante el poder político.

- *Discurso político*

En términos del discurso político, la CONAIE ha evolucionado velozmente desde la reivindicación por la tierra ancestral y por el reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, hasta posicionarse actualmente en clave de apelación a un nuevo modelo de organización social, territorial y política. Sin duda, la coyuntura o, mejor dicho, las circunstancias caracterizadas por el debilitamiento de otras organizaciones sociales (especialmente el movimiento obrero) la habilitaron a construir un discurso que poco a poco daría cuenta de las aspiraciones extendidas de vastos sectores de la sociedad ecuatoriana. El movimiento indígena encarna así el descontento, y despunta como actor social de referencia política, social y simbólico-cultural, ocupando los vacíos dejados por las otras organizaciones sociales.

Se invoca a las tradiciones comunitarias, a la identidad étnico-cultural, en un discurso lo suficientemente inclusivo y a la vez diferenciador que permite un reconocimiento de las identidades específicas. Para ciertos investigadores, la formación de “núcleos generadores de pensamiento” (dirigentes e intelectuales indígenas), forjados en las conexiones entre la práctica política y la práctica comunitaria personal, constituye una clave explicativa fundamental.

[Discurso] atravesado fuertemente por las dimensiones clasistas, pero construido en clave étnica, a su vez, enraizado en el *ethos* comunitario. El estilo de acción organizativa está fuertemente referido a la base; la apelación es principalmente contra el estado y los “poderosos”. Son preeminentes las nociones de pueblos y nacionalidades, territorialidad y gestión autónoma [...] Parece evidente, por lo tanto, que el discurso levantado por los indígenas interpele fuertemente la idea de un estado uninacional burgués y mestizo, y en oposición reivindique su propia presencia como pueblos y nacionalidades que portan modos de organización social y bagajes culturales propios.

La visibilización de la etnicidad aparece así como un elemento medular en la construcción de la identidad india (Pico, 2003).

Se expresa este discurso político en el Proyecto Político de la CONAIE, cuyas ideas centrales se refieren a la plurinacionalidad, la territorialidad y la autodeterminación; pero también sobresale un cuestionamiento global que toma en cuenta la cuestión agraria, la política energética, la política de educación bilingüe intercultural, y una propuesta de refundación del Estado sobre nuevas bases.

- Autonomía

La autonomía de los movimientos sociales, entendida como la posibilidad cierta y real de definir por sí mismos las orientaciones estratégicas principales, las decisiones en torno a las demandas y propuestas, así como los alcances de los acuerdos buscados, debe necesariamente examinarse en referencia tanto a los partidos políticos como al Estado, o también a algunas otras instituciones de carácter religioso o confesional, como por ejemplo la Iglesia Católica. Desde esta idea, la CONAIE ha desplegado una política autónoma sin duda respecto de los partidos y sectores políticos, sobre todo de la izquierda; ha tenido una estrecha vinculación con algunos sectores de la Iglesia más progresista marcando una importante influencia en la configuración de su discurso, pero no en relación de dependencia, y una relación de confrontación total con el Estado en todas sus expresiones orgánicas. Así fue desde sus orígenes hasta la conformación del MUPP, brazo político si se quiere de la CONAIE, pero que la trasciende en la medida en que, por un lado, en él confluyen otras organizaciones sociales y corrientes diversas y, por otro, este ha debido jugar con las reglas propias y específicas del sistema político.

Así pues, el debate contemporáneo de la autonomía del MUPP respecto de la CONAIE y viceversa está hoy colocado en el movimiento indígena, de tal suerte que se discuten las ventajas de participar en la arena política electoral y en los ámbitos de representación legislativos y, de otra parte, la conveniencia de mantener posturas y capacidades de autonomía en las decisiones, sin perjuicio de una convergencia real en las estrategias comunes. Algunos dirigentes sostienen que el MUPP debería responder a las directivas de la CONAIE, en la medida en que la representa en el sistema de partidos ecuatoriano (más allá de no tratarse *stricto sensu* de un partido político), mientras que otros militantes y dirigentes históricos defienden la necesaria autonomía del MUPP respecto de su mentor social.

A ello se agrega la discusión en torno a la autonomía respecto del Estado, sobre todo en consideración del acuerdo alcanzado en su momento con el grupo del actual mandatario Lucio Gutiérrez. Quizás

aquí deban examinarse con más detenimiento las implicaciones que tuvo tal arreglo, que superó la mera coyuntura electoral para ubicarse en la proyección de una gestión gubernamental compartida, al menos durante el período en que el MUPP contaba con representantes en el gabinete ministerial de Gutiérrez.

Probablemente, las alianzas CONAIE-MUPP-Sociedad Patriótica fueran harto complejas de instrumentar, habida cuenta de los planteos de cambios mucho más estructurales de los cuales eran portadores tanto el MUPP como la CONAIE, frente al escaso desarrollo ideológico-programático de una fuerza política nacida casi para gestar un liderazgo de corte neopopulista, pero con poco arraigo en las bases de sustentación social. La alianza entre ambos actores pudo también haber carecido de un proyecto común compartido, madurado, amasado con mutuas concesiones, pero al fin resultado o producto consciente de las fuerzas sociales, políticas y militares en las luchas cotidianas. El riesgo de la subordinación, contracara de la autonomía, podría haber empujado a la CONAIE a forzar a su vez al MUPP a la ruptura con el gobierno de Gutiérrez, en la medida en que no se visualizaba la traducción de los planteos del movimiento indígena en las políticas públicas, y menos en las prácticas de gobierno. Sin duda, la autonomía de los actores sociales, involucrados aún en las definiciones clave de un gobierno, es a todas luces un factor decisivo para mantener viva y activa la potestad de la crítica, del control ciudadano y, en suma, de mantener intacta la legitimidad social. Salirse del gobierno seguramente constituyó para la CONAIE y su correlato político una opción válida para evitar la pérdida de prestigio, reconocimiento y base de apoyo popular.

En síntesis, la CONAIE ha desplegado su potencial y construido su legitimidad sobre la premisa de la autonomía neta, conquistando precisamente por ello un lugar privilegiado como actor social en el escenario de las confrontaciones, como protagonista indiscutible, en los años más recientes, en el proceso sociopolítico ecuatoriano.

FRENTE UNITARIO DE TRABAJADORES (FUT)

El Frente Unitario de Trabajadores constituye el principal aglutinamiento de obreros y empleados del sector público y privado de Ecuador.

- Contexto histórico de origen y evolución reciente

El FUT nace como instancia de unificación de varias centrales sindicales, expresión de diversas corrientes y realidades del mundo del trabajo que logran su formalización en 1975, pero con un antecedente importante en 1972, año en que confluyen varias organizaciones de trabajadores en torno a una huelga general. Actualmente incluye a la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), la Confederación

Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas por la Unidad de los Trabajadores (CEDOCUT) y la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (CEDOC), además de algunas federaciones campesinas y de indígenas (FENOCIN, FEI, FENACLE).

Prácticamente, todas estas organizaciones se inspiran en corrientes ideológicas nítidamente perfiladas y en correspondencia con diferentes partidos políticos (Comunista, Socialista y Demócrata Popular). El contexto histórico se caracterizaba por la impronta autoritaria y populista del entonces presidente Velazco Ibarra y luego por el general Rodríguez Lara, que motivaron a los movimientos de trabajadores a asumir una plataforma de resistencia y reclamo para recuperar el orden constitucional democrático perdido. Entre los hitos debe destacarse la masacre de trabajadores del ingenio azucarero AZTRA, perpetrada por las fuerzas represivas en 1977, que contribuyó de manera decisiva a iniciar un camino para recuperar las instituciones democráticas en 1979. La década del setenta marcó el auge del movimiento obrero, que llegó a su apogeo en los primeros años ochenta, particularmente el 21 de octubre de 1982, cuando se decretó un nuevo paro de alcance nacional, cuyo acatamiento y respaldo masivo hizo ceder al gobierno de Roldós ante las reivindicaciones del FUT (rebaja del precio de la gasolina, incremento del salario), lo que evidenciaba el liderazgo del movimiento social por parte de los trabajadores sindicalizados. Poco a poco, la declinación del modelo desarrollista, la desindustrialización progresiva y el aumento de las importaciones, el cierre de fábricas, así como la crisis provocada por la deuda externa acumulada, fue impactando negativamente en la clase obrera. En marzo de 1983 se convocó a una nueva huelga para los días 23 y 24 de aquel mes, que obtuvo una vez más una adhesión masiva pero no logró los objetivos que se había propuesto el FUT, dando muestra de fallos en el mecanismo y la medida de lucha adoptada.

Por otra parte, los conflictos en el seno de la izquierda ecuatoriana repercutieron en el movimiento obrero, debilitando las posibilidades de unidad del movimiento social, y erosionando la capacidad de respuesta innovadora ante el embate de las políticas de desarticulación del movimiento sindical. En 1984, al asumir el mando el gobierno de Febres Cordero, todos los movimientos sociales sufrieron la persecución y la represión, de las cuales no escapó el FUT, que pagó un costo alto en vidas humanas y encarcelamiento de muchos de sus dirigentes. El 25 de marzo de 1987 se convocó a otra jornada de paro cívico, que contó con la participación de casi todas las organizaciones sociales, incluyendo obviamente al FUT, a la que convergió también la CONAIE, la que provocó un cierto protagonismo del movimiento sindical aún fuerte. Sin embargo, ya entrada la década del noventa y a partir de la

modificación del Código del Trabajo, con la flexibilización laboral y en concurrencia con otros vectores decisivos, el FUT fue entrando en una etapa de crisis profunda que le supuso una paulatina pérdida de protagonismo en el escenario de las luchas y movilizaciones populares, así como el socavamiento de sus bases de apoyo social. De todos modos, mantuvo un papel relevante en la caída del presidente Abdalá Bucaram en 1997, junto con otros sectores sociales y el movimiento indígena que ya se encontraba en plena etapa de expansión.

Entre la reedición de mecanismos de lucha y presión que fueron lentamente degradándose ante la imposibilidad de mostrar resultados plausibles y la estrategia de diálogo y negociación con el Estado, el FUT fue dejando en el camino su patrimonio sociopolítico como actor relevante (al ser por un lado criticado por su incapacidad de resolver y readecuar sus tácticas de confrontación apelando a viejas fórmulas y esquemas para muchos perimidos, y por el otro acusado en cierto modo de no responder a los reclamos y demandas genuinas de los trabajadores). De todas maneras, las movilizaciones más recientes que desembarcaron en los sucesivos quiebres institucionales lo vieron acompañando las convocatorias que otros movimientos sociales asumieron, supliendo el vacío de conducción de la acción social colectiva que fue dejando sobre mediados de los años noventa.

- Organicidad

La estructura organizativa del FUT se sustenta en la articulación y coordinación de las centrales sindicales que lo componen, a través de una dirección permanente compuesta por dos o tres dirigentes nacionales de cada una de ellas, que actúan de manera rotativa. En ciertas ocasiones y dependiendo de las circunstancias, funciona una suerte de dirección ampliada constituida por el conjunto de las tres direcciones sindicales. A su vez, la Convención Nacional es el órgano máximo del Frente Unitario de Trabajadores, que es convocada por la dirección permanente, y que reúne los principales dirigentes y líderes de las organizaciones sindicales. El FUT reúne o aglutina asimismo otras organizaciones de carácter barrial, cooperativas y organizaciones campesinas en la medida en que reivindica los derechos de los trabajadores desde una visión amplia que no se circunscribe exclusivamente a los obreros. Según algunos de sus dirigentes, la forma de designación o elección de las autoridades ha sido en cierto sentido verticalista y centralizada, propugnando la necesidad de una democratización y una mayor horizontalidad de las decisiones, apuntando a la participación directa o universal, sin mediaciones de los congresos respectivos de cada central sindical. Cabe señalar que en las centrales que conforman el FUT converge una pluralidad de organizaciones de

empleados públicos, docentes, campesinos, trabajadores informales, que dan cuenta de una amalgama en la diversidad y multiplicidad de sindicatos singulares o bien específicos.

En suma, el FUT cuenta con una estructura formalizada desde hace por lo menos dos décadas, cuyo soporte son las centrales sindicales que lo integran; parece aún contar con un mediano a alto grado de organización, sin que por ello pueda inferirse que mantenga intacta su eficacia operativa; sobre todo por la disminución de sindicatos en razón de las exigencias formales derivadas de las normativas jurídicas a partir de mediados de los años ochenta y el descenso de su tasa de afiliación.

- *Capacidad propositiva*

En términos de una articulación del movimiento de trabajadores, las propuestas se plasmaron por lo general en las plataformas de lucha y reivindicación, con un carácter dual según declaraciones de uno de sus principales dirigentes; vale decir que por un lado se expresaron en demandas puntuales, y por otro en exigencia de cambios más globales o de “remodelación del orden social vigente”. Sin embargo, aparentemente, en casi ninguna de las plataformas levantadas por el FUT se observaron interpelaciones directas al poder, sino que más bien significaron cuestionamientos a las políticas gubernamentales y al papel del Estado en cuanto a la redistribución de la riqueza nacional. En ese sentido, se toma en consideración uno de los documentos de autoevaluación de la organización con relación al “Balance de la Huelga Nacional del 9 de diciembre del año 1981”, en el que ya se advertía acerca de los problemas y errores del movimiento obrero, tanto en el plano de la estrategia como en cuanto a los aspectos más operativos de las formas de lucha asumidas. Según las fuentes consultadas, aquellas advertencias tempranamente señaladas no pudieron superarse, y nutrieron el presumible debilitamiento como actor social en la década posterior, coincidente con la emergencia de otros sujetos colectivos en la escena pública. Podría afirmarse que actualmente el FUT está en cierto sentido desprovisto de una fuerte capacidad propositiva, lo que le resta peso específico en el concierto de los movimientos sociales ecuatorianos. En síntesis, presenta un bajo grado de propuestas y proyectos fuertemente estructurados.

- *Convocatoria y movilización*

En correspondencia con su período de auge, el FUT no sólo cosechó importantes adhesiones en los sectores obreros y trabajadores en general, sino que fue capaz de aglutinar otros movimientos más o menos incipientes, o con menor desarrollo organizacional. Lentamente, conforme se fue debilitando el tejido productivo industrial e imponiéndose un

modelo de flexibilización y desregulación laboral, aquel apoyo también fue debilitándose. A principios de los años ochenta la realización de huelgas generales tuvo un ciclo de respuestas masivas y con fuerte efecto simbólico que, sumadas a las sucesivas Convenciones Nacionales (como ámbitos de participación más amplia), reafirmaron la identidad del movimiento obrero y le otorgaron un espacio reconocido en el escenario de las confrontaciones sociales. Sin embargo, aquella capacidad de convocatoria se percibe actualmente muy debilitada o deteriorada, entre otras razones por la ausencia de creatividad para sustituir viejas formas y estrategias de lucha sindical, ante nuevos desafíos de la acción colectiva concertada. Las huelgas siguen siendo casi las únicas opciones en el repertorio de medidas de protesta, presión y lobby ante el poder instituido, las corporaciones empresariales y los partidos políticos. Además de una aparente asintonía entre los dirigentes sindicales y sus bases o adherentes, que señalan de algún modo una distancia en términos de representación, se ha registrado un descenso significativo de la tasa de afiliación, que según fuentes consultadas habría pasado de un 30% a una tasa actual de alrededor de un 10% de la PEA ecuatoriana. En síntesis, el FUT ha perdido notablemente su capacidad de convocatoria y adhesión, colocándose en un grado medio o bajo, sobre todo si se lo compara consigo mismo en un lapso de una década atrás, y con otros actores sociales que han ocupado buena parte del espacio político y simbólico en la sociedad.

- Discurso político

El discurso político del FUT se caracterizó por un fuerte componente reivindicativo vinculado a los salarios, las condiciones de trabajo, los marcos normativos laborales y la necesidad de respetar la libertad de sindicalización y organización de los trabajadores. En los tiempos autoritarios también se volcó a reclamar la restauración del orden democrático; actualmente las plataformas del FUT también van dirigidas a la injerencia de los organismos multilaterales en los asuntos internos del Ecuador, y la denuncia de la pérdida de soberanía, expresada de manera elocuente con la completa dolarización de la economía nacional, que abandonó la moneda nacional. En su dirigencia se observan discursos de crítica severa a la democracia y su funcionamiento, señalando las imperfecciones y sobre todo los efectos de una democracia que no es participativa sino “meramente electiva” en términos de exclusión de las grandes mayorías en los procesos de decisión sobre los principales asuntos públicos. Asimismo, el FUT se ha centrado específicamente en la unidad del movimiento de trabajadores, pero, al decir de un dirigente histórico, sin tener en cuenta la identidad de otros sectores sociales: “el movimiento obrero no pudo dar tratamiento a los pueblos indígenas,

se los consideraba sindicatos y no lo que eran: pueblos indígenas con identidad propia” (Pico, 2003). En definitiva, se observa finalmente un debilitamiento del Frente Unitario de Trabajadores, en aras de una autonomización de algunos de sus componentes originales, tales como eran las organizaciones indígenas.

Por otra parte, el FUT manifiesta una preocupación por las nuevas modalidades que asume el modo de desarrollo capitalista, y la necesidad de responder ante los avances de la globalización, la inserción de los trabajadores en el mercado laboral, la calificación y capacitación, entre otros aspectos propiamente de índole laboral. No aparece claramente como portador de un proyecto político totalizante o abarcador que incluya al conjunto de los actores sociales ecuatorianos, aunque con frecuencia el FUT articula su plataforma junto con el movimiento indígena, particularmente con la CONAIE.

- *Autonomía*

La procedencia político-ideológica de las centrales sindicales que forman parte del FUT ha condicionado de manera notoria la autonomía del movimiento obrero, al punto de servir en ciertas circunstancias como correa de transmisión de los partidos políticos, sobre todo de la izquierda ecuatoriana. De hecho, las principales organizaciones sindicales que lo componen se reconocen en sus corrientes de inspiración comunista, socialista y socialcristiana. Este arraigo ideológico ha tenido por cierto doble implicación: de un lado, los partidos políticos han nutrido de cuadros, militantes y dirigentes al movimiento obrero, dotándolo de unicidad en las estrategias de lucha y de homogeneidad de enfoques, al tiempo que le aseguró –al menos durante el período de auge del FUT– una organización fuerte, compacta y densa para encarar el sostenimiento de las medidas de lucha. No obstante, por otra parte, le marcó el rumbo estratégico y los contenidos de las plataformas, tanto como los acotamientos en términos de territorios de operación política, restringiendo la capacidad de trascender a determinadas esferas de la acción social más amplia. La política laboral durante el gobierno de Izquierda Democrática acaso en su momento evidenció y puso de relieve precisamente la autonomía limitada del movimiento obrero, que quedó entrampado por un relativo inmovilismo, y carente de respuestas contundentes ante las diversas leyes que comprometieron su propia expansión y consolidación como actor social.

Al comparar esta situación con la de la CONAIE, vemos que esta última ejerció influencia exactamente en sentido inverso: creando su propio instrumento político al fundar el MUPP junto con otras organizaciones sociales. Debe subrayarse además la complejidad que supone la construcción de una organización que aglutina diversas corrientes

sindicales en su seno, a partir de fatigosos consensos y acuerdos multilaterales para establecer una conducción común y una orientación política compartida por todas sus bases populares.

En suma, reiteramos que el FUT ha perdido importantes márgenes de autonomía respecto de los partidos políticos, lo que al decir de uno de sus más conspicuos dirigentes le ha minado su “representatividad social”.

- Tasa de afiliación

Los datos actuales ubican la tasa de afiliación en aproximadamente un 10%, con un considerable descenso a partir de los años noventa.

CUADRO 7

CARACTERÍSTICAS DE LOS MOVIMIENTOS ECUATORIANOS

	Organicidad	Capacidad propositiva	Convocatoria y movilización	Discurso político	Autonomía	Afiliación
CONAIE	Alto grado de organicidad. Movimiento indígena de reciente formación, bien estructurado sobre la base de delegados de varias entidades y comunidades.	Alta; presentación de proyectos de ley y de plataformas más generales.	Alta. En varios momentos de las últimas dos décadas fueron protagonistas y obtuvieron una respuesta masiva de amplios sectores sociales.	Antisistémico, reivindicativo de autodeterminación de los pueblos indígenas. Reclamo de Estado plurinacional. Se propone llegar al poder; fundó su propia organización político-electoral.	Autonomía respecto a los partidos políticos. Dificultades internas por la ruptura del acuerdo con el gobierno condujeron a un debate interno aún inconcluso respecto a la autonomía de MUPP y de la CONAIE.	Sin datos específicos.
FUT	Central sindical que unifica a su vez a tres centrales obreras. Estructurada con representantes de cada dirección. Grado medio alto.	Baja. Ha perdido capacidad de propuestas más allá de los reclamos particulares. Debilidad creciente y falta de articulación de todas las organizaciones sindicales.	Baja. Buena respuesta a las convocatorias de huelgas y movilizaciones en la década de los ochenta, pero pérdida de protagonismo en la de los noventa.	Intenta construir un discurso más abarcador. Fuerte apelación a la unidad de los trabajadores y excluidos. Débil reconocimiento del Estado. Ausencia de un proyecto político; actúa por reacción; antineoliberal.	Escasa autonomía por correlación directa con los partidos de izquierda o de centro.	Baja, con pérdida importante en la década del noventa.

Fuente: elaboración propia.

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO

CUADRO 8

ECUADOR: EVOLUCIÓN RECIENTE DE INDICADORES PARA EL PERÍODO 1996-2003
(EN PORCENTAJE)

Perfil del sistema político					
Confianza en el Parlamento	Confianza en los partidos	Participación electoral (promedio últimos 20 años)	Sistema de partidos (NEP)	Confianza en los presidentes o el Ejecutivo	Satisfacción con la democracia
14,18	11,05	65,00	5,50	23,48	24,94

Fuente: elaboración propia con datos electorales y de Latinobarómetro (1996-2003).

El sistema político ecuatoriano, según el estudio de Mainwaring y Scully (1995), se ubica en la categoría *incoactivo*, lo que significa que el nivel de institucionalización del sistema de partidos es insuficiente para un funcionamiento normal y estable del sistema democrático. Al igual que Brasil, tiene 5 puntos en el agregado de los cuatro criterios utilizados, con un puntaje mínimo en tres de los cuatro criterios: la regularidad del sistema, las raíces o penetración social de los partidos y la solidez de las organizaciones partidarias. Recibe un puntaje medio de 2 para el criterio que afirma que los ciudadanos e intereses organizados deben dar legitimidad a los partidos y a las elecciones. El número efectivo de partidos promedio, considerando el período 1978-1992, es de 5,8, el más alto para todos los sistemas considerados en el estudio. La polarización ideológica es calificada de moderadamente alta. Estos dos elementos refuerzan la idea de un sistema con dificultades de funcionamiento y una estabilidad muy baja.

Luego de la presidencia de Sixto Durán Ballén, desde 1992 a 1996, hubo tres presidentes electos por las urnas, pero hubo también otros dos mandatarios: un presidente interino designado por el Congreso Nacional, y un vicepresidente que asumió la primera magistratura luego de una convulsión social y una intervención militar. Así que dos de los tres gobiernos electos no terminaron su mandato, lo que confirma la tendencia a la inestabilidad y al mal funcionamiento, lo cual estaría vinculado al bajo grado de institucionalización del sistema de partidos ecuatoriano. Ninguna de las tres elecciones se definió en la primera vuelta, por lo cual se recurrió al mecanismo de *ballottage* para dirimir la presidencia, lo que junto con la alta fragmentación del sistema de partidos dio como resultado presidentes con muy bajo apoyo parlamentario.

En la primera elección (1996), Bucaram obtuvo un 22,11% de los votos en primera vuelta y ganó el *ballottage* con el 54,4%, 9 puntos más que su adversario; luego del interinato de Fabián Alarcón Rivera, en las elecciones de 1998 Jamil Mahuad Witt obtuvo el 35,3% de los votos en la primera vuelta y en la segunda le ganó a su competidor por menos del 3% de los votos. Luego de la presidencia de Gustavo Noboa Bejarano, vice de Mahuad que asumió el cargo en 2000, ocupó la primera magistratura el presidente Lucio Gutiérrez, que obtuvo en las elecciones de 2002 un 21% en la primera vuelta y ganó el *ballottage* por una diferencia de 9 puntos porcentuales. La coalición que llevó a Lucio Gutiérrez a la presidencia se dividió por diferencias políticas, y esto hace que se mantenga la falta de regularidad en el sistema y su mal funcionamiento, lo que sigue confirmando su muy bajo grado de institucionalización y su permanencia dentro de la categoría de sistemas *incoativos*.

PARAGUAY

Al igual que el caso venezolano, habremos de formular algunas apreciaciones más generales de los movimientos sociales, que incluyen actores sociales de relevancia en la historia reciente de Paraguay. En particular, analizamos el movimiento sindical y el campesino, con una mención especial a la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC).

CARACTERIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Los actores sociales paraguayos han estado desarticulados al menos hasta mediados de los años noventa, no obstante haberse registrado múltiples espacios de unidad de acción, que si bien duraron poco tiempo sin lograr tener mucha trascendencia, periódicamente han estado presentes y cada vez más activos en la política nacional. Durante la difícil transición democrática se fueron reconstituyendo, logrando recuperar espacios en la vida pública del país. Claro que luego de tantos años de dictadura (con Stroessner a la cabeza), la sociedad civil paraguaya estaba débil, desorganizada y totalmente desarticulada; esto hizo que los actores sociales tuvieran una movilización de carácter discontinuo y con muy poca articulación, cuestión que ha empezado a cambiar en los últimos años

Hasta los acontecimientos de 1999, las organizaciones de la sociedad civil centraron sus protestas en reivindicaciones particulares y contra las políticas neoliberales del gobierno; aunque con dificultades para articularse en torno a temas que afectarían a la sociedad en su conjunto, a partir de un proyecto de conjunto claro y una fuerza capaz de lograr sus objetivos. Recientemente el movimiento campesino ha

dado importantes pasos para superar la atomización, logrando articular a varios movimientos campesinos y otras organizaciones sociales a su alrededor. Por su parte, el movimiento sindical está sumido en una crisis causada por las políticas neoliberales, y por la fuerte corrupción de algunos de sus dirigentes; son varias las centrales que compiten por el espacio del movimiento sindical organizado. No hay fuerza en los movimientos barriales o universitarios, aunque sí existen movimientos juveniles desarticulados pero con presencia en la sociedad paraguaya (uno de los actores que surgen con fuerza desde fines de los años noventa es el movimiento juvenil, no universitario).

MOVIMIENTO SINDICAL

Tras el largo período autoritario (1954-1989) durante el cual gobernara el general Stroessner, el movimiento sindical inició un proceso de reconstrucción organizativa que anota –entre sus hitos principales– la emergencia del Movimiento Intersindical de Trabajadores (MIT-P), un 1° de mayo de 1985, acto en el cual hace su primera aparición pública reivindicando la autonomía del movimiento obrero y la incorporación de demandas clasistas. Entre sus antecedentes debemos consignar la conformación en 1979, en plena dictadura, del “Grupo de los 9 Sindicatos”, que aunaba el esfuerzo de viejas y nuevas organizaciones sindicales (bancarios, transportistas, construcción, metalúrgicos, entre otros), así como la constitución de la Comisión de Solidaridad Intersindical en setiembre de 1982. Durante esta primera etapa, las acciones tuvieron un carácter defensivo y de resistencia, al mismo tiempo que de oposición a la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT), central sindical oficialista claramente cooptada por el Partido Colorado (en el gobierno) y por el Estado. La multiplicación de las movilizaciones sociales y la caída del régimen autoritario en el año 1989 alentaron la formación de nuevas organizaciones sindicales que fueron incrementando el espacio sindical de manera notable, al punto de registrarse para el año 1990 más de 169 sindicatos en numerosos sectores de la actividad económica. Durante aquel año precisamente, el MIT se transforma en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), además de fundarse la Central Nacional de Trabajadores (CNT) de orientación socialcristiana (amparada por la Central Latinoamericana de Trabajadores-Confederación Mundial del Trabajo, CLAT-CMT), “aglutinando ambos a obreros y empleados, cuentapropistas, jubilados y a organizaciones campesinas” (Palau, 1997). Entre los años 1990 y 1992 se incrementó la sindicalización en un 39%, llegando al año 1995 a contabilizarse más de 120.000 trabajadores afiliados a los diversos sindicatos.

En un país con una economía de fuerte impronta agroexportadora, los sectores industriales no tuvieron una participación muy sig-

nificativa, a diferencia del protagonismo de otras ramas que generaron efectos en la dinámica organizativa a nivel sindical (servicios, transporte, empleados públicos, producción agropecuaria), observándose una fuerte presencia en la arena pública de las agremiaciones transportistas, de los maestros y docentes, trabajadores del Estado, que en este caso condujeron a la creación en 1995 de la Central Sindical de Trabajadores del Estado de Paraguay (CESITEP). La gravitación de los empleados y obreros del sector estatal ha marcado de manera evidente las protestas y movilizaciones en los primeros años de la década del noventa.

La misma se puso de manifiesto en los meses previos a la huelga general del 2 de mayo de 1994 y durante la propia jornada de lucha que se libró ese día en casi todo el territorio nacional, destacándose la labor desplegada por el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Administración Nacional de Energía), cuya sólida estructura organizativa fue uno de los elementos decisivos para garantizar el éxito de la medida de fuerza que se volviera a practicar después de 36 años en el Paraguay (Livieres, 1994).

Es preciso señalar que la emergencia de un sindicalismo pujante en el sector público no estuvo exenta de contradicciones en función de los vínculos que persistían entre las dirigencias sindicales y el partido hegemónico en el poder desde el inicio del período autoritario. Vale decir que aun cuando las demandas de mejora salarial y la defensa de los derechos laborales enfrentaron a los sindicatos con el Gobierno, la autonomía de las organizaciones de trabajadores no era total, y fue ciertamente condicionada por los constreñimientos derivados de aquellos lazos históricos que permearon las estrategias de lucha y protesta obrera.

Como todo fenómeno nuevo, el que está operando a nivel de los funcionarios públicos también arrastra elementos de lo viejo que, en este caso, se expresa a través de una parte significativa de las dirigencias que están al frente de las organizaciones y que responden a las directrices de las distintas vertientes en que se encuentra dividido el coloradismo (Livieres, 1994).

Este perfil de las organizaciones sindicales estatales generó –sobre todo en los primeros años de su desarrollo– una cierta aprehensión de las centrales sindicales (CUT y CNT), que observaban con inquietud la “influencia colorada” en la conducción sindical. No obstante, puede afirmarse que la postura claramente antiprivatizadora de aquellos sindicatos fue uno de los factores de peso para disipar las sospechas de manipulación, logrando una articulación en las luchas posteriores. La propia convocatoria a la huelga general de mayo de 1994 constituye un dato en ese sentido:

La huelga general del 2 de mayo, convocada con 7 semanas de antelación –el 12 de marzo–, y el éxito que esta logró, no es por tanto producto del azar ni fue un estallido coyuntural. Ha sido el resultado de grandes luchas sectoriales, como la de los estatales y los campesinos, a los que hay que agregar el conflicto que estaba en curso en el gremio de los choferes y en una cantidad importante de empresas privadas, que dieron lugar al fortalecimiento del movimiento obrero y campesino. Este ascenso general encontró una instancia de centralización a partir de la celebración del Congreso Unitario de Trabajadores, en el que los delegados de las tres Centrales obreras, en forma unánime, adoptaron la histórica determinación de convocar a los trabajadores de la ciudad y del campo para llevar a cabo la medida de fuerza, que fuera practicada por última vez en agosto de 1958, es decir hace 36 años. La participación de los gremios del sector público ha sido desigual en las tareas preparatorias de la huelga y en la propia jornada del día 2, aunque eso no significa que no haya sido fundamental el aporte realizado por sindicatos estatales (Livieres, 1994).

Entre 1990 y 1997 se registraron 110 paros, huelgas y movilizaciones, especialmente dirigidos a las reivindicaciones por trabajo, negociación colectiva, participación en la redefinición de las normativas laborales, incremento salarial y enfrentamiento a las políticas neoliberales privatizadoras. Durante la difícil transición democrática, el movimiento sindical se propuso intervenir e influir decididamente en los asuntos público-institucionales y en la arena propiamente política; así, subrayamos a modo de ejemplo, la participación de dirigentes sindicales de la CUT que impulsaron la conformación del movimiento “Asunción para Todos” (de orientación centro izquierdista), que finalmente ganara las elecciones municipales en 1991, colocando a Filizzola como Intendente de la capital; así como la inclusión en el año 1992 de varios líderes sindicales de la CNT y de la CUT, en las listas del “Movimiento Constitución para Todos”, como candidatos para integrar la Asamblea Nacional Constituyente. En este mismo sentido, debe destacarse la participación y lucha social en aras de mejorar el nuevo Código Laboral, que fuera promulgado en el año 1993, y que institucionalizara la negociación colectiva (entre otras tantas normas), reivindicación y aspiración largamente esperada por el movimiento sindical. En lo concerniente a los reclamos históricos, que finalmente se incluyeron en la nueva Constitución refrendada, y que fueron asumidos como conquistas del movimiento obrero, se destacan “la jornada de 48 horas, el salario mínimo inmóvil, la estabilidad laboral, el derecho a la sindicalización del sector público y privado y el derecho a la huelga” (Palau, 1997).

Tras la euforia de movilizaciones durante el período de transición política, el movimiento sindical paraguayo cayó en una etapa de reestructuración, sufriendo el impacto de las políticas de ajuste y cierres de fábricas por un lado, y por el otro, los efectos de la corrupción de algunos de sus dirigentes principales, que coadyuvaron a la pérdida de credibilidad y de poder de convocatoria. En este contexto, en la década de los noventa el movimiento sindical paraguayo ingresa en un proceso de decaimiento y fragmentación, así como de pérdida de legitimidad ante la ciudadanía, que se manifiesta en la falta de apoyo a sus huelgas y movilizaciones. Resulta evidente el resquebrajamiento de las centrales obreras, al punto de contar con seis organizaciones diferentes en 1997: CNT, CUT, CPT, CESITEP, CGT y CUT-A (Auténtica). Más próximos en el tiempo, el enjuiciamiento en 2002 de varios dirigentes sindicales por el vaciamiento del Banco Nacional de Trabajadores (BNT), todos pertenecientes a la CUT, la CPT y la CESITEP, constituyó un duro golpe al movimiento de trabajadores, en la medida en que los “igualara” a los dirigentes de los partidos políticos acusados frecuentemente de corrupción y uso indebido de los recursos públicos. De todos modos, y aun cuando se reconoce un debilitamiento del movimiento sindical a partir de mediados de la década de los noventa, se constataron entre los años 2000 y 2001 la realización de 118 huelgas o paros y 176 movilizaciones, muchas de las cuales fueron protagonizadas por sindicatos de empleados públicos. Entre ellas cabe acotar que hubo importantes logros, tales como la aprobación del Estatuto del Docente y el freno al proceso de privatizaciones como consecuencia de las movilizaciones conjuntas entre el movimiento sindical y el campesino, así como la concurrencia de múltiples organizaciones sociales y políticas.

Hoy en día existen cinco centrales sindicales en Paraguay: Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Central Nacional de Trabajadores (CNT), Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT), Central General de Trabajadores (CGT) y Central Sindical de Trabajadores del Estado de Paraguay (CESITEP). Todas menos la CNT están recientemente vinculadas a través del Comando Sindical, que busca aunar esfuerzos. Existen también otras federaciones o sindicatos independientes de las centrales, como la Unión Sindical de Trabajadores del Transporte (USTT), la Federación de Trabajadores Bancarios y la Organización de Trabajadores de la Educación Paraguaya (OTEP). Por otra parte, entre los años 2002 y 2003, se conforma la CUT-Auténtica, una escisión de la CUT.

MOVIMIENTO CAMPESINO

Al igual que el movimiento sindical, las organizaciones campesinas han tenido desde el comienzo de la transición hasta el presente una importante participación en las luchas populares, pero en la mayoría de

los casos han estado fragmentadas y muy poco articuladas. Aquellas organizaciones son herederas de las otrora Ligas Agrarias Campesinas de los años sesenta y setenta, vinculadas a la Iglesia Católica y a las Comunidades Eclesiales de Base.

Las organizaciones campesinas recién reaparecen con fuerza a partir de 1960, con la creación de las primeras Ligas Agrarias Cristianas (LAC), las Juventudes Agrarias Cristianas (JAC) y las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) que se extendieron rápidamente en todos los departamentos del país. Las mismas fueron disueltas en el año 1976 con grandes represiones, desapariciones y asesinatos de sus principales dirigentes. La fecha es recordada como la Pascua Dolorosa, porque ocurrió entre los meses de abril y mayo de 1976. En el mismo período, existían otros núcleos organizacionales en los departamentos del Guairá, Caazapá y Central en forma de cooperativas, grupos pre-cooperativos o comités de agricultores (Riquelme, 1997).

En la última etapa del autoritarismo, y a consecuencia de la “modernización conservadora”, el movimiento campesino intentó rearticularse sin éxito:

La respuesta campesina más frecuente fue la invasión de tierras libres o latifundios improductivos: se intensificó entre 1983 y 1986, e involucró por lo menos a 15 mil familias campesinas. Se trata de unas 60 invasiones aisladas entre sí aunque altamente eficientes, que movilizan a los campesinos hasta la consecución de la parcela familiar, luego de la cual vuelven a su atomización social e individualismo habituales. También surgen movimientos con una clara orientación sociopolítica que se articula en una perspectiva de transformación de la sociedad, la cual proponía cambios básicos en las relaciones sociales y políticas predominantes. En todos los casos fueron experiencias fragmentarias, muy localizadas y aisladas entre sí, pero que aun así contribuyeron al fortalecimiento de identidades colectivas (Fogel, 2001).

Aún durante los primeros años de iniciada la transición democrática, desde el golpe de estado del general Rodríguez que derrocara al dictador Stroessner en 1989, el campesinado paraguayo no encontraba alternativas plausibles para configurarse como actor social de relevancia y con poder para disputar los espacios socio políticos imprescindibles para avanzar en las conquistas sociales anheladas.

Los desencuentros ideológicos entre grupos campesinos contribuyeron a la atomización de las organizaciones, a tal punto que a fines de 1992 los 70 mil campesinos afiliados a 753 bases distribuían su adhesión a 53 organizaciones regionales, integradas a su vez a 10

organizaciones nacionales. Una publicación del CDE de 1994 [...] refiere la existencia de 13 organizaciones nacionales censadas, 58 organizaciones regionales, 111 zonales, y 768 comités de base, incluyendo 82 comités de mujeres (Fogel, 2001).

Sin embargo, los campesinos retomaron la senda de la reconstrucción orgánica –sobre todo a partir del período de redemocratización política– a principios de los años noventa, con el surgimiento de nuevas formaciones mejor articuladas y aglutinadas en pocas organizaciones de carácter regional y nacional, pero con vocación de erigirse como referentes del campesinado. De este modo se constituyen la Federación Nacional Campesina (FNC) y la Organización Nacional Campesina, así como la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), que se conforma en 1994, año a partir del cual sucesivamente convoca anualmente a la Marcha hacia Asunción, inaugurando sus reclamos por reforma agraria, reivindicando precios justos, asistencia técnica y créditos adecuados a sus necesidades para la producción. Se estima que en el año 1995 se contabilizaban más de 70.000 campesinos agremiados, cifra que fue creciendo a lo largo de toda la década de los noventa y albores del siglo XXI. Otras organizaciones importantes fueron consolidándose y expandiéndose en prácticamente todo el país: la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI), las Organizaciones de Sin Tierra y el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP, que surge ya en la década del ochenta). Aquella Marcha campesina se iría posteriormente debilitando, y en 1998 el Movimiento Campesino expresaría su fractura en movilizaciones dispersas, atomizadas aunque por momentos muy intensas; conformándose los Comités Nacionales de Lucha por la Reforma Agraria. Así, entre los años 1999 y 2001 se incrementaron las movilizaciones, totalizando 161 protestas en dicho período; mientras que solo en el año 2001 fueron 73. Entre los años 1999 y 2001 se observaron 67 casos de ocupaciones de tierra.

Es preciso señalar la participación del movimiento campesino durante los episodios trágicos de marzo de 1999, en ocasión de la crisis institucional provocada por el juicio político al entonces presidente Cubas, y el posterior asesinato del vicepresidente del Paraguay, Luis María Argaña, cuyo principal acusado fuera el ex golpista, general Lino Oviedo.

A los siete meses de gobierno, en otro marzo campesino, ante desórdenes callejeros, aprovechando la presencia de 15.000 campesinos y las manifestaciones de jóvenes, las Fuerzas Armadas dan la espalda a su Comandante en Jefe y se declaran leales al Congreso, forzando la renuncia del Presidente de la República y la constitución de una curiosa alianza encabezada por los barones de Itaipú y de la corrupción y por la vieja guardia de Stroessner. La victoria campesina fue

pírrica: obtuvieron la condonación de sus deudas, pero reinstalaron en el poder a sus verdugos, y sólo se destinaron sumas irrisorias para la colonización, apenas unos 2 millones de dólares al mes de octubre de 1999. Para colmo, el protagonismo campesino en la plaza del Congreso fue desconocido por la prensa, que sólo otorgó créditos a la “heroica juventud”. En esas condiciones sólo se podría prever el crecimiento de movilizaciones y desbordes (Fogel, 2001).

Tras la represión sangrienta, ocho jóvenes asesinados y centenares de heridos fue el saldo de la semana trágica entre el 23 y 28 de marzo de 1999; en la que confluyeron los campesinos que durante esos días habían marchado a la Plaza del Congreso a reclamar la condonación de sus deudas. Por su lado, los “Jóvenes por la Democracia” se movilizaron para ocupar la Plaza y exigir la renuncia inmediata del Presidente. Es importante aclarar que en los primeros momentos no hubo coincidencia de objetivos entre los jóvenes y los campesinos, lo que efectivamente aconteció luego, en virtud de la magnitud de las manifestaciones callejeras y la virulencia desatada por las fuerzas represoras, tanto de la Policía, y del Ejército, como de los grupos parapoliciales afines al ovidismo. La participación e involucramiento de la población trascendió los límites de la Plaza pública, extendiéndose a otras ciudades y localidades, movilizándose pacífica y espontáneamente al pueblo paraguayo.

Otro de los hitos significativos para el movimiento campesino tuvo lugar el 20 de marzo de 2002 en ocasión de la Marcha organizada por la FNC en la cual participaron unos 5.000 campesinos, motivada fundamentalmente por la intención de paralizar el proceso de reforma de la banca pública (antesala de la privatización), por la industrialización del algodón, y la reactivación de la economía. El 17 de abril de 2002 otra marcha, esta vez organizada y convocada por la MCNOC contra las privatizaciones de las empresas públicas, recibió la adhesión de la FNC y de la Coordinadora Agraria del Paraguay (gremial de pequeños productores rurales), consolidando una modalidad de lucha que iría concitando un importante nivel de respaldo social y político. Aquella marcha fue además acompañada de otras medidas simultáneas de protesta social, tales como cortes de rutas, todos los cuales se mantuvieron durante tres días. Las exigencias de suspensión de las privatizaciones y la cancelación del proceso de reforma de la banca pública volverían a constituir el eje principal de las protestas ante el gobierno. Todas estas movilizaciones, en el marco del incremento de la represión y la reaparición de grupos parapoliciales, contribuyeron a la conformación de una plataforma más amplia que dio origen al Congreso Democrático del Pueblo (CDP), que reunió a dos frentes de articulación que venían desplegando acciones de similar envergadura: por un lado la Plenaria Popular contra la Corrupción y la Impunidad, que posteriormente

cambió su denominación a Plenaria Popular contra el Terrorismo de Estado (en la que se encontraba la MCNOC junto a otros movimientos sociales y políticos), y por otro lado el Frente Nacional de Defensa de los Bienes Públicos y el Patrimonio Nacional (constituida por la FNC y otras organizaciones sociales y fuerzas políticas).

El Congreso Democrático del Pueblo tuvo como objetivos la derogación de la Ley 1.615, que habilitaba la privatización de las empresas del Estado, así como de la Ley de Reforma de la Banca Pública, detener el anteproyecto de Ley Antiterrorista y el proyecto de Ley de Concesión de las Rutas, y la ley que hubiera creado el IVA agropecuario, además de la lucha contra la corrupción e impunidad. En este ámbito integrado por casi todo el movimiento campesino, confluyeron algunos partidos de izquierda o progresistas por primera vez en todo el proceso democratizador, y su éxito fue por demás trascendente, ya que lograron frenar las privatizaciones de la telefonía, el agua potable y el ferrocarril. El día 21 de mayo de 2002 se iniciaron nuevas movilizaciones, pero ahora de manera conjunta y articulada en torno al CDP, y sobre un acuerdo que incluyó los puntos antes mencionados; entre las modalidades combinadas y complementarias de protesta se realizaron cortes de ruta, marchas y paros. La fuerza inusitada del movimiento que contemplaba un espectro muy amplio de organizaciones sociales y políticas, mantuvo en vilo al gobierno de González Macchi durante dieciséis días, y se extendió a numerosos departamentos de todo el país. Los resultados fueron auspiciosos en términos de los logros obtenidos; ya que se detuvo el proceso de privatizaciones, se suspendieron los efectos de la Ley 1.615 y se retiraron los proyectos de ley antiterrorista, de concesión de rutas y de imposición del IVA agropecuario. Aun cuando no se obtuvieran conquistas efectivas en materia de la lucha contra la corrupción y la impunidad, puede considerarse un hito histórico, que impactó en la política neoliberal instrumentada por los sucesivos gobiernos post-autoritarios en connivencia con los organismos internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional).

MESA COORDINADORA NACIONAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS (MCNOC)

Como ya dijimos, en marzo de 1994 se realizó la primera marcha campesina en Asunción; desde ese momento empezó a crecer el movimiento social campesino, convirtiéndose en el actor social más coherente y combativo, aunque dividido en dos grandes expresiones que tienen alianzas con otros sectores: la MCNOC y la Federación Nacional Campesina (FNC).

La MCNOC cuenta en su interior con más de treinta organizaciones de base, y con una estructura laxa que se corresponde con su estatuto de coordinadora. La FNC cubre gran parte del país, aunque no

tanto como la anterior; su estructura es más rígida y sus reclamos más corporativos. No obstante, ambas coinciden en la necesidad de la reforma agraria y en la oposición a las políticas neoliberales, y para conquistar sus objetivos emplean métodos de lucha similares: movilizaciones, invasiones de tierra y cortes de ruta.

Seguidamente se presenta una caracterización general de la MCNOC, basada en datos institucionales y en una entrevista a su secretario general, Luis Aguayo, realizada por Lis Jara en Asunción. En cuanto al origen y evolución del movimiento, del cual ya adelantamos algunos datos, lo primero a destacar es que no se trata de un movimiento maduro, más allá de que las organizaciones que lo componen sí lo sean, y que además ha tenido una presencia importante en la vida social y política paraguaya. Su origen se puede ubicar en 1993, al proponer un frente a favor de la reforma agraria y la construcción de una nueva sociedad, es decir, luchar por la transformación política, económica y social del país.

Está compuesta por varias organizaciones campesinas, entre las que se destacan el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), la Asociación de Agricultores del Alto Paraná (ASAGRAPA) y la Organización Campesina Independiente (OCI), entre otras. Tiene una autofinanciación a través del aporte de los asociados a las distintas organizaciones; también cuenta con el apoyo de alguna agencia de cooperación, pero la forma principal es el aporte de las bases. No tiene un organigrama de la estructura organizativa formalmente predefinido, pero al respecto Luis Aguayo manifiesta:

Tiene sus instancias, la Plenaria Nacional. De la Plenaria Nacional surge la línea general de acción, como la Dirección Nacional compuesta por representantes de las organizaciones nacionales, como la Dirección Departamental. Después tienen su conducción política representada por la Secretaría en una conducción permanente en lo nacional y después en los departamentos, que es la Mesa Coordinadora Departamental, MCD.

Tiene una capacidad propositiva interesante, y un poder de convocatoria y movilización demostrado en hechos concretos. Para conseguir tierras recurre a la estrategia legal en primera instancia, y en caso de no lograr el objetivo realiza ocupaciones, que son consideradas legítimas por el movimiento por cuanto su reclamo es justo. Todas las luchas están dirigidas en última instancia al objetivo principal, que es la construcción de una sociedad más justa e integrada.

La MCNOC se siente cercana a los objetivos o propuestas de las fuerzas políticas progresistas, pero mantiene distancia e independencia de ellas desde el punto de vista formal. Se reconoce que algunos militantes de sectores de izquierda integran la estructura del movimiento, principalmente del Partido de los Trabajadores (trotskista) y el Partido

Convergencia Popular Socialista; también hay integrantes de una organización denominada Corriente Gremial, muy vinculada a la actividad política en Paraguay.

La siguiente transcripción de las palabras de Luis Aguayo nos ilustra sobre la tasa de afiliación de la MCNOC:

La gente ya se acopla en el momento de las propuestas y de las acciones, y de las dos formas responden los asociados, tanto como la ciudadanía desde el momento de que se cree que se tiene una lectura de la coyuntura acertada [...] Exactamente no tengo cuántos afiliados hay en este momento, pero aproximadamente estábamos hablando de 15 mil familias sin tierras, de 11 mil familias de pequeños productores, y cerca de mil familias indígenas. Pero no lo tenemos actualizado, o sea, que hay más. En ese momento hablábamos de 11 departamentos, y ahora hablamos de 13 departamentos, en la zona oriental y en el Chaco. Es decir, que la MCNOC está en proceso de crecimiento y realmente necesitamos actualizar nuestra base de datos.

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO

CUADRO 9

PARAGUAY: EVOLUCIÓN RECIENTE DE INDICADORES PARA EL PERÍODO 1996-2003 (EN PORCENTAJE)

Perfil del sistema político					
Confianza en el Parlamento	Confianza en los partidos	Participación electoral (promedio últimos 20 años)	Sistema de partidos (NEP)	Confianza en los presidentes o el Ejecutivo	Satisfacción con la democracia
25,50	19,68	55,00	2,80	26,00	14,21

Fuente: elaboración propia con datos electorales y de Latinobarómetro (1996-2003).

El sistema político paraguayo es un caso colocado en una categoría *residual*, es decir, no se incluye dentro del continuo de institucionalización, donde están las categorías de incoativo e institucionalizado, con sus diferentes grados. Mainwaring y Scully (1995) califican al sistema de partidos paraguayo, al igual que al mexicano, como de *hegemónico en transición*, lo que significa que puede tener partidos institucionalizados y con raíces en la sociedad pero no hay alternancia en el gobierno y se les da poca legitimidad a las elecciones. Lo anterior significa que hay un partido que está permanentemente vinculado al Estado, y los demás son partidos de segunda clase o periféricos, que no tienen posibilidades reales de llegar al gobierno; el partido gobernante tiene una fuerte or-

ganización, y al ocupar todos los cargos estatales hace del clientelismo su forma de captar la adhesión de la ciudadanía.

No obstante esto, el puntaje agregado para el caso paraguayo es de 7,5, con un nivel alto en cuanto a solidez de la organización partidaria, un nivel medio alto en cuanto a raíces de los partidos, y un nivel bajo en la regularidad y en la legitimidad dada a los partidos y elecciones. Esto puede poner en duda los criterios utilizados, pero los autores concluyen que no hay una competencia real en el sistema y, por lo tanto, la democracia no está madura. Desde la restauración democrática, que según manejan los autores es inmadura y lo sigue siendo incluso hasta nuestros días, se han sucedido cinco presidentes en Paraguay; cuatro fueron electos por la ciudadanía y uno designado por la Corte Suprema de Justicia ante la renuncia de Raúl Cubas Grau en 1999. Todos fueron candidatos o miembros de la Asociación Nacional Republicana, también llamada Partido Colorado.

En las elecciones de 1989 llegó a la primera magistratura Andrés Rodríguez, con el 74% de los votos emitidos. Luego, en 1993, fue electo presidente Juan Carlos Wasmosy Monti; en esa ocasión el Partido Colorado obtuvo el 39,9% de los votos, quedando en segundo lugar Domingo Laíno con el 32,1%. En las elecciones de 1998 el candidato colorado Raúl Cubas Grau obtuvo el 55,4% de los votos, pero tras su renuncia asumió la Presidencia, nombrado por la Suprema Corte de Justicia, Luis González Macchi. El actual presidente, Nicanor Duarte Frutos, fue electo con el 37,1% de los votos emitidos, y los otros más relevantes fueron Julio César Franco, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), con un 23,9%; Pedro Fadul, del Movimiento Patria Querida (MPQ), con un 21,2%; y Guillermo Sánchez Guffanti, de Unidad Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE), con un 13,5%.

El número efectivo de partidos promedio entre 1989-1993 es de 2,2, según el estudio de referencia; en 1998 se mantenía esa tendencia de dos partidos y algo más, pero en la última elección hubo un salto a más de tres partidos relevantes, lo que habla de una dispersión de la oposición que favorece la permanencia de los colorados en el poder, a pesar de haber disminuido su caudal electoral. La polarización ideológica evaluada por los autores es moderadamente baja, lo que hace que el conflicto político gire en torno de otras variables –por ejemplo, en las luchas intestinas del coloradismo por obtener la candidatura a la presidencia–; dicha polarización es más pronunciada hoy en día. El sistema tiene bajo nivel de institucionalización, aunque con tendencia a consolidarse.

Si bien es cierto que el desencadenante de la etapa de transición democrática fue el golpe de estado del general Rodríguez, motivado por discrepancias internas en las filas del coloradismo en el poder, debe considerarse la creciente movilización social como factor coadyuvan-

te en la generación de mejores condiciones democráticas a partir del año 1989 y en los primeros años de la década del noventa. El debate y posterior aprobación de la nueva Constitución en 1992, sin duda, le confirió un marco propicio para el juego político y la reconstrucción de la oposición, lo que permitió el surgimiento de un movimiento político renovador, "Asunción para Todos", que obtuvo en 1991 la Alcaldía de la capital, y expandió su representación parlamentaria al menos hasta fines de los años noventa.

Asimismo, resulta importante subrayar la influencia del oviedismo, movimiento que proviene de las filas coloradas y cuya vocación populista de carácter conservador con aristas autoritarias, mantuvo en vilo la transición y consolidación democrática hasta principios del presente siglo. Aún hoy, la figura del general Oviedo genera inquietud en el sistema político paraguayo, habida cuenta de una historia cargada de intentos de golpes de Estado, en la cual las Fuerzas Armadas tuvieron siempre un papel decisivo para volcar la balanza a favor o en contra de algunas de las facciones del Partido Colorado. Recordemos las elecciones internas de dicho partido en setiembre del año 1997, que determinaron el triunfo de la candidatura del general Oviedo a las elecciones nacionales. Sin embargo, Oviedo fue arrestado y condenado por un Tribunal Militar a diez años de cárcel, y obviamente impedido de presentarse a los comicios por el Partido Colorado. En su lugar iría Raúl Cubas, que junto con Luis María Argaña fueron la fórmula triunfadora de las elecciones de 1998, derrotando a la fórmula de la Alianza Democrática de Laíno y Filizzola. Una de las primeras medidas (conforme al compromiso asumido con Oviedo), fue precisamente decretar su libertad, lo que desencadenó enfrentamientos entre sus seguidores y opositores. En diciembre de 1998 la Suprema Corte de Justicia dictaminó aquella medida como inconstitucional, elevando la temperatura política y generando el recrudecimiento de los enfrentamientos. En vísperas de que el Parlamento paraguayo votara el juicio político al presidente Cubas, el vicepresidente Argaña fue asesinado. Esta situación desembocó en los episodios trágicos y sangrientos que culminaron con la muerte de ocho jóvenes y centenares de heridos en marzo de 1999, provocando finalmente la destitución del presidente Cubas y su reemplazo por Luis González Macchi, también del Partido Colorado.

La tensión social no aminoró, registrándose importantes movilizaciones y protestas de vastos sectores sociales durante los años subsiguientes, sobre todo contra la política económica y privatizadora del nuevo mandatario. En agosto del año 2000 se realizaron elecciones especiales para designar al vicepresidente que sustituyera al asesinado Luis María Argaña. En aquella ocasión, en un hecho histórico, resultó vencedor un candidato opositor (después de 53 años), asumiendo Julio César Franco, del Partido Liberal. En el año 2002 el propio presidente Gonzá-

lez Macchi era también acusado de corrupción, de apropiación ilegal de fondos y desvío de 16 millones de dólares a sus cuentas personales.

En las elecciones de abril de 2003 resultó triunfador el actual presidente Nicanor Duarte Frutos con el 37,1% de los votos, uno de los guarismos más bajos del oficialista Partido Colorado; aunque debe considerarse la popularidad en ascenso registrada meses después a partir de sondeos de opinión (realizados sobre la base del Índice de Confianza en el Gobierno elaborado por el Departamento de Ciencia Política y Escuela de Gobierno Torcuato di Tella, de Buenos Aires), que arrojara valores relativamente altos para el recientemente electo presidente de la República del Paraguay. Finalmente debe anotarse que el sector oviedista del Partido Colorado se escindió del mismo, conformando su propio partido, que obtuvo representación parlamentaria a través de UNACE.

VENEZUELA

CARACTERIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Las condiciones sociopolíticas del último lustro han cambiado de manera radical en Venezuela, dando cuenta de una implosión o colapso del sistema de partidos –en el cual predominaron durante cuatro décadas los dos partidos históricamente más fuertes, la Alianza Democrática (socialdemocracia) y el COPEI (democracia cristiana)–, con la emergencia del fenómeno del chavismo (gracias al movimiento liderado por el teniente coronel Hugo Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela desde 1998). El sistema político venezolano, anclado desde 1958 en el “puntofijismo”, se sustentó durante cuatro décadas en la política del consenso, que intentaba evitar la conflictividad que pusiera en riesgo el esquema democrático y produjo un “programa democrático mínimo” (Romero Jiménez, 2003), sobre la base de la renta petrolera, con un fuerte papel a cargo del Estado, que regulaba en el campo de las políticas sociales, su redistribución y la generación de las condiciones básicas de reproducción de la fuerza de trabajo.

Sin embargo, sobre fines de los años ochenta y principios de los noventa, se altera el “orden social” y el equilibrio político que había perdurado tantos años, sobre todo a causa de la recesión económica acumulada, la corrupción y la complicidad de los poderes públicos con los dirigentes políticos de los principales partidos, la desigualdad social como efecto directo de la pauperización aguda del pueblo venezolano, y la incapacidad de las elites políticas de resolver los profundos problemas sociales de larga data. Conviene recordar entonces el *sacudón* o *caracazo* del año 1989, cuando una ola de saqueos, protestas callejeras y disturbios violentos, que terminó con una represión sangrienta (se es-

timaron más de 400 muertos y miles de heridos y detenidos), se originó en la reacción popular a las medidas impuestas por el presidente Carlos Andrés Pérez, quien había incrementado las tarifas públicas como resultado del acuerdo con los organismos internacionales que le habían “sugerido” la necesidad del ajuste fiscal. La no intervención inmediata y oportuna de los principales actores sociales y políticos significó de hecho un vacío o ausencia que presagiaba la fuerte interpelación al statu quo aparentemente cristalizado en Venezuela.

El movimiento espontáneo de protesta expresaba en aquellas circunstancias la desazón y el descreimiento de la población mayoritariamente pobre, lo que implicaba al mismo tiempo que la deslegitimación de los actores sociales que no asumieron plenamente su representatividad (sobre todo los sindicatos, entre ellos la Central de Trabajadores de Venezuela), un proceso acelerado y creciente de desinstitucionalización del sistema de partidos políticos. Este episodio marcaría el inicio de un ciclo de protesta cada vez más confrontacional y violento, perlado con cortes de vía, tomas de edificios públicos, disturbios, quemas, saqueos y enfrentamientos callejeros que se agregaron a las tradicionales formas de lucha social (mitines, huelgas, marchas), dando paso además al surgimiento de nuevos movimientos sociales, o la revigorización de movimientos sociales que actuaban en la escena pública desde hacía mucho tiempo atrás (López Maya, 2002).

Siguiendo la pauta de análisis de la investigadora citada, pueden identificarse unos movimientos sociales incipientes o más maduros, algunos con más trayectoria y otros menos expandidos, pero en su totalidad enfrentados al Estado como recinto del poder para resolver sus demandas y reivindicaciones. Paralelamente a este sismo social se produce de manera indisociable un proceso de resquebrajamiento del dispositivo del consenso, en el cual las fisuras se convierten en profundas grietas que dejan de un lado a las elites gobernantes y las corporaciones más poderosas (sindicales y empresariales), y del otro un contingente humano mayoritariamente empobrecido y empujado a la economía informal y de subsistencia. Es en este terreno fértil que emerge el Movimiento V República, liderado por un militar carismático que irrumpe en la escena pública en 1992, al intentar asestar un golpe de Estado.

Los movimientos sociales clásicos (sindical, estudiantil y campesino) estuvieron asociados o vinculados desde sus orígenes –en mayor o menor grado– a los partidos políticos que acordaron el consenso de 1958, es decir, básicamente AD y COPEI. Así, tanto el movimiento sindical estructurado en torno a la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), como el movimiento campesino articulado en la Federación Campesina Venezolana, estuvieron asociados fuertemente a la socialdemocracia, mientras que varios sindicatos que constituyen la central obrera también estuvieron interpenetrados por el socialcristianismo

del COPEI. En la década del setenta emerge y fluye capilarmente de la trama de la sociedad civil el nuevo movimiento vecinal cuyo auge y esplendor se mantendría por varios años, al punto de configurar en 1977 una Federación de Comunidades Urbanas “que agrupaba a todas las asociaciones vecinales del país, a la fecha ya una agrupación civil con notable poder de negociación y abundante espacio de cobertura en los medios” (Fernández, 2003). Al respecto esta autora señala:

El origen de esa parte de la sociedad civil desvinculada del gobierno y los partidos políticos, relativamente tardío en comparación con otras sociedades latinoamericanas, dio inicio a la aparición de otra serie de instancias de participación política, con claro interés por lo público, pero sin afanes de ejercer el poder político como tal. A medida que las necesidades de orden urbanístico fueron satisfechas, las asociaciones de vecinos fueron evolucionando hacia otros niveles de participación política, comenzando a actuar como grupos de presión en áreas de política pública mucho más amplias. Es así como la aspiración por reivindicaciones de orden político-electoral pronto fue meta en organizaciones que se habían iniciado en la vida civil como movimientos vecinales. Dado el origen de conflictividad entre estos movimientos y el gobierno y los partidos políticos, no es de extrañar que en sus aspiraciones de cambios en lo político y electoral los movimientos sociales urbanos pretendieran ganarle espacio político a los mismos partidos. Una de esas reivindicaciones políticas era la oposición a los sistemas electorales por listas cerradas, escogidas al seno de los partidos políticos y la petición de elecciones por sistemas nominales (propuesta moderada) o uninominales por circuitos de postulación (propuesta de los más radicales). En 1978 y en 1989 se aprueban sendas versiones de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la primera de ellas mejoró la capacidad administrativa de los gobiernos locales, mientras que la segunda creó la figura del alcalde, electo por decisión popular. Ambas leyes recogían gran parte de las aspiraciones vecinales mas no la de la elección uninominal de los representantes locales [...] Aún para 1996, cuando ya estaban distantes los días de mayor gloria del movimiento vecinal, la confianza institucional de la gente hacia los movimientos vecinales era muy superior a la que sentían por los partidos políticos (Fernández, 2003).

Por otra parte, los análisis de Margarita López Maya refieren a dos orígenes diferentes de aquellas asociaciones vecinales: las promovidas en las barriadas más pobres a instancias de los partidos políticos, y aquellas otras más autónomas en los barrios de clase media. Precisamente las últimas son la que se extienden y fortalecen en la década de los ochenta y dan lugar a movilizaciones más abarcadoras y de tono menos puntualmente reivindicativo. De ese tronco nace Queremos Elegir,

como formación típicamente cívica que apunta al plano de la mayor democratización de las instituciones públicas y la ampliación de la participación ciudadana.

Entre las movilizaciones sociales más interesantes registradas en la década de los noventa, la investigadora Margarita López Maya destaca además la de los pensionados y jubilados, que demostraron una buena capacidad de convocatoria y obtuvieron asimismo importantes conquistas en su trayectoria de movilizaciones y protestas (este movimiento estaría vinculado al Polo Patriótico, coalición que condujo a la presidencia a Hugo Chávez Frías), así como también la del movimiento estudiantil (sobre todo universitario, a través de la Federación de Estudiantes Universitarios de Venezuela, FEUV), que incrementó notoriamente su presencia pública a finales de los años ochenta hasta inicios de los noventa, para retornar con fuerza en 1998, con un carácter más confrontacional.

Resulta significativa la percepción de una falta de evidencia para señalar una inclinación del movimiento estudiantil al chavismo (al menos en el período examinado, que sitúa las observaciones principales en 1999), lo que podría haberse modificado por efecto de la creciente polarización política, y de la alineación del gobierno liderado por Hugo Chávez en el eje antinorteamericano de política exterior (con posturas internacionales más inclinadas a estrechar lazos con Cuba, Brasil y China). De todos modos, se reconocen la identidad y la autonomía del movimiento estudiantil, que expresa un discurso de claro sesgo antiimperialista y antineoliberal (marchas contra el FMI y el BM), con denuncias y críticas al burocratismo, a la corrupción, al clientelismo y la inoperancia estatal. A partir del giro de sus estrategias y tácticas de lucha (se abandonó el uso de la capucha por considerar que producía un efecto negativo en la imagen del movimiento), se obtuvieron importantes conquistas, entre las cuales sobresale la no aprobación de la Ley de Educación Superior en 1998.

Por otra parte, los *buhoneros* (vendedores ambulantes) se han asociado en defensa de sus intereses particulares, siendo un sector de trabajadores de la economía informal, producto también de la precarización, del desempleo y los cambios estructurales operados en el capitalismo venezolano, regional y mundial. La unión de los buhoneros se destaca a pesar de la débil capacidad de organización y articulación en tanto movimiento social, así como por una evidente ausencia de autopercepción como actores sociales o sujetos colectivos de peso en la arena pública; también ellos son apoyados decididamente por el Polo Patriótico, al igual que los pensionados y jubilados. En su discurso prevalece la lógica reivindicativa, el reclamo por trabajo y la exigencia del respeto a sus derechos en tanto ciudadanos, dirigiendo su carga básicamente a los diferentes niveles del Estado (nacional, municipal).

No podemos dejar de mencionar otros movimientos sociales de relativa gravitación, como el movimiento ambientalista, que ha logrado importantes avances, como haber incluido en la nueva Constitución venezolana sus principales demandas y consideraciones acerca de la relevancia y pertinencia del desarrollo sustentable –aunque para algunos autores, como María Pilar García-Guadilla (2001), la incorporación de la cuestión ambiental en los textos constitucionales acarrió el riesgo de perjudicar al propio movimiento ambientalista empujándolo a su desmovilización o “institucionalización” negativa. El conflicto por el Proyecto del Tendido Eléctrico en el sur venezolano, en la frontera con Brasil, implicó para el gobierno de Chávez, un enfrentamiento con los sectores indígenas y ambientalistas, que por un lado obtuvo una aprobación y por otro la resistencia férrea a dichos proyectos.

En el último lustro, la inestabilidad ha sido el rasgo preponderante del sistema político venezolano. Desde la asunción del presidente Hugo Chávez se han sucedido vertiginosamente episodios de enfrentamientos muy duros entre los partidarios del gobierno y sus opositores, encabezados por la asociación de empresarios (FEDECAMARAS), la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), sectores de la Iglesia Católica, partidos políticos y organizaciones sociales de un espectro amplio (Coordinadora Democrática), entre los cuales se encuentran las diezmadadas AD y COPEI, y el lobby de otras corporaciones como las vinculadas a los medios de comunicación masivos. El nuevo enfoque propugnado por el emerrevismo (MVR) inauguró una etapa de desmontaje de la matriz institucional emanada del Acuerdo de Punto Fijo, promoviendo una democracia radical y participativa, rompiendo el bipartidismo tradicional, y fomentando el desarrollo de nuevas formaciones o movimientos sociales alternativos a los preexistentes, y en otros casos intentando congraciarse con los actores sociales emergentes en la década de los noventa.

Una de las estrategias del movimiento bolivariano apuntó directamente a la médula y soporte del sistema político en extinción. El golpe de gracia a los partidos políticos tradicionales fue la promulgación de una profunda reforma constitucional a través de la elección, instalación y control del chavismo de la Asamblea Nacional Constituyente (agosto a diciembre de 1999), en la que lisa y llanamente no hay referencias a los partidos políticos como entidades específicas de representación, aunque no se los desconozca en su papel de mediación de intereses. La Constitución actualmente en vigencia, y que constantemente es esgrimida por el líder venezolano, instauro nuevos poderes (Poder Moral, Ciudadano y Electoral) e introduce múltiples innovaciones en materia de derechos, objetivos y finalidades del Estado y mecanismos de participación. Por ejemplo:

Las “consultas con la sociedad civil” son mencionadas en siete ocasiones, como obligantes para procedimientos varios, que van desde la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral hasta la elaboración de la legislación de los estados (Fernández, 2003).

Sin embargo podríamos afirmar que el carisma de Chávez, la invocación a los héroes de la patria (especialmente a Simón Bolívar, pero también a Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora), el relacionamiento directo con el pueblo (aun cuando se han configurado ámbitos y estructuras del Movimiento V República y de sus aliados, como por ejemplo, la creación de los Círculos Bolivarianos), su estilo sencillo de comunicarse y las posturas nacionalistas y antiimperialistas asumidas, en convergencia con el descenso del papel del Congreso, el menoscabo a la negociación como vía de construcción de acuerdos políticos, el intento de generar una hegemonía en todos los planos de la vida nacional, el control de los poderes públicos, todo ello nos sugiere una caracterización del chavismo como un neopopulismo de izquierda (por cierto, polémico y discutible), a contrapelo de la democracia de consenso (sustentada en el pacto, la representatividad de los partidos políticos y en la centralidad de las elites políticas y corporativas), que sucumbió a comienzos de la última década del siglo pasado.

La consecuencia o impacto de estos procesos reseñados, en la sociedad civil y sus organizaciones más representativas, fue la de haber provocado un corte abrupto y bien visible entre los seguidores y adherentes al chavismo y sus opositores; esto es, la polarización que empapa todas las meso y microestructuras, y ámbitos del quehacer social, político y cultural. El desarrollo del proceso de instalación del chavismo en Venezuela desemboca, para algunos historiadores e investigadores, en un conflicto multimodal en el que “afloran las contradicciones internas” del movimiento, y se reduce el apoyo popular al presidente Chávez (Romero Jiménez, 2003). El apogeo del apoyo ciudadano se registró entre 1998 y 1999, a partir del triunfo electoral y la realización de la Asamblea Nacional Constituyente, tras lo cual sobrevendría el primer desmembramiento de su base de apoyo político, con la fragmentación del Partido Patria para Todos, y el enfrentamiento desatado con actores sociales y políticos (1999 a 2001), las huelgas convocadas por la oposición, las sucesivas marchas multitudinarias a favor y en contra de Chávez, el conflicto con los *mass media*, la huelga y la disputa por el control estratégico y vital de Petróleos de Venezuela (PDVSA), el fallido golpe de Estado del 11 de abril de 2002, promovido por la alianza opositora (FEDECÁMARAS, CTV, sectores de los partidos políticos); todos ilustran de manera elocuente una dinámica sociopolítica siempre convulsiónada, exacerbada en sus expresiones simbólico-discursivas, y en estado de alerta permanente. No hay puntos medios o zonas de aproxi-

mación aparente entre los antagonistas, lo que introduce el peligro y la tentación del aniquilamiento (recíproco) como solución de dominio político, económico y sociocultural. El actor militar ha tenido un rol singularmente decisivo a la hora de inclinar la balanza, al punto de que sin la participación de las Fuerzas Armadas no podría entenderse cómo resultó fallido el golpe de abril de 2002, y triunfó el contragolpe que restituyó el mandato constitucional a Hugo Chávez en menos de dos días.

El juego político antinómico que parece irreductible coloca a los contrincantes en una lógica confrontativa que asume grados de virulencia inusitados, jaqueando la preservación de las instituciones democráticas, y erosionando los mecanismos de diálogo entre actores políticos y sociales que aún subsisten. Todo indica que la confrontación se trasladaría en 2004 al territorio de los instrumentos predilectos del chavismo, al menos los más apelados en los comienzos de la implantación de la “revolución bolivariana”: el referéndum o plebiscito que convoca al pueblo al ejercicio de la democracia directa. Aunque la decisión de la Justicia de febrero de 2004, poniendo en duda la validez de más de un millón de las firmas recolectadas por la oposición para obligar la utilización de un referéndum revocatorio del mandato presidencial, arrojó un cono de sombra sobre su efectiva concreción.

Conviene subrayar que el papel de franco opositor asumido por el movimiento sindical (a través de la CTV) es relativizado por algunos analistas que contraponen dos datos significativos: por un lado, el hecho de que el 52% de la población económicamente activa pertenezca al sector informal (por tanto, no necesariamente está representada en la central sindical) y, por otro, la división en el seno de la CTV que nuclea mayoritariamente al sector de obreros y empleados de la administración pública, mientras que otros sindicatos de peso en la industria manufacturera (siderurgia, aluminio, acero e hidroeléctrica) o en el transporte (metro de Caracas) no acompañaron las huelgas y paros decretados por la oposición.

Por su parte, el gobierno ha llamado a la movilización de la sociedad a fin de sortear las dificultades confrontadas por el paro. Asociaciones de cooperativas, organizaciones de ingenieros petroleros y otros profesionales, pequeños y medianos productores, campesinos, buhoneros, vecinos, jubilados de distintas profesiones, etc. han comenzado a movilizarse en apoyo al gobierno (Romero Jiménez, 2003).

Finalmente, nos interesa retomar algunas de las conclusiones de Margarita López Maya en su trabajo sobre la protesta y la cultura elaborado sobre datos del año 1999 (López Maya, 2002), por considerarlas de extraordinaria utilidad a los fines de nuestra investigación. Es así que, en cuanto al “marco maestro” del ciclo de protestas en Venezuela, se constata un acento de los derechos ciudadanos en el discurso de los

movimientos sociales; la percepción de un Estado “rico”, capaz aún de resolver los problemas y responder a las demandas; el rescate de una concepción positiva de la descentralización y la reforma democrática; agregándose una cierta “apoliticidad” de las demandas sociales. Persiste la diada Pueblo-Estado, el primero como el sujeto colectivo arraigado a su vez en un profundo y enraizado nacionalismo, el segundo (aun corrupto, ineficiente y burocrático) depositario de las soluciones y las respuestas. Al decir de la autora, el marco maestro mantiene los viejos sentidos comunes de la cultura política hegemónica, y no introduce nuevos significados a la democracia venezolana, en la que la centralidad del Estado aún refleja una valoración positiva, pero del cual se espera provenga su autorreforma institucional.

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO

CUADRO 10

VENEZUELA: EVOLUCIÓN RECIENTE DE INDICADORES PARA EL PERÍODO 1996-2003
(EN PORCENTAJE)

Perfil del sistema político					
Confianza en el Parlamento	Confianza en los partidos	Participación electoral (promedio últimos 20 años)	Sistema de partidos (NEP)	Confianza en los presidentes o el Ejecutivo	Satisfacción con la democracia
27,22	18,92	70,00	3,20	38,78	39,25

Fuente: elaboración propia con datos electorales y de Latinobarómetro (1996-2003).

La situación del sistema de partidos para el estudio de 1995 es muy diferente de la que se registra hoy en día; es sin duda el caso en que se registró un cambio más pronunciado. En Chile, Uruguay y, en menor grado, Argentina hay una continuidad en el registro de nivel de institucionalización. El sistema de partidos brasileño es el que logra el mayor ascenso en el grado de institucionalización en toda la región, aumentando su regularidad, penetración social y mayor legitimidad del juego electoral y de los partidos. En Paraguay, el sistema de partidos empieza a recorrer el camino de la institucionalización, dada la permanencia de varios de sus actores en los últimos diez años, pero la democracia todavía es débil. El sistema de partidos de Ecuador es caracterizado por Mainwaring y Scully como incoativo, presentando un puntaje agregado

igual al sistema brasileño, pero, al contrario de este último, en evolución hacia un igual o aun menor grado de institucionalización. En Venezuela se observa un colapso en el sistema de partidos, que había sido calificado por los referidos autores como de alta institucionalización; a pesar de ello, los nuevos actores han logrado la adhesión de un alto porcentaje de la sociedad venezolana, y las elecciones siguen siendo el medio elegido para acceder al gobierno.

Para 1995, el puntaje agregado de Venezuela era de 10,5 sobre el total de 12 posibles, un punto por debajo de Costa Rica, Chile y Uruguay, e igual que Colombia. Para los tres primeros criterios Mainwaring y Scully le asignaron un puntaje mediano-alto de 2,5, lo que habla de una regularidad, una penetración social y una legitimación de las elecciones y partidos en desgaste; para el cuarto criterio, de solidez de las organizaciones partidarias, obtuvo un puntaje alto de 3, lo que luego colapsó, al punto de que dichas organizaciones casi desaparecieron, luego de perder el apoyo de la ciudadanía. El número efectivo de partidos promedio para las elecciones que van desde 1973 a 1993 es de 3, y la polarización ideológica fue calificada de moderadamente alta. A pesar de no tener una cantidad de partidos relevantes elevada, ni haber un espectro ideológico amplio que complicara los acuerdos, el sistema de partidos colapsó; lo que se puede inferir es que los partidos relevantes no estaban cubriendo los intereses de un alto porcentaje de la población y que, en vez de haber existido un proceso de renovación del sistema, este resultó descartado y sustituido por el que busca institucionalizarse en estos momentos.

Ya en las elecciones de 1993, los tradicionales sectores políticos, AD y COPEI, perdieron la primera magistratura frente a Rafael Caldera, candidato de Convergencia, cerrando un ciclo de veinte años de bipartidismo moderado (de duopolio partidista según Alfredo Ramos Jiménez) no polarizado e institucionalizado. A partir de ese momento se instaló un pluralismo polarizado con baja institucionalización, pero con señales claras de respaldo social y legitimidad de las elecciones y partidos como medios de acceder al gobierno. Los sectores del bipartidismo moderado, adecos y copeyanos, obtuvieron en las parlamentarias de 1988 el 74% de los votos, para luego empezar un retroceso del caudal electoral: 46% en 1993, 36% en 1998 y 21% en 2000. El espacio de centroderecha fue compartido con otras organizaciones, como Convergencia en 1993, Proyecto Venezuela en 1998, y varios grupos regionales en 2000, y el espacio del centro hacia la izquierda, que concita el apoyo de gran parte de la ciudadanía, fue ocupado por Causa Radical en 1993, Movimiento V República en 1998 y 2000, y otros grupos de distintos niveles de importancia. El actual presidente, Hugo Chávez, liderando un conjunto de grupos entre los que el MVR es el mayor, obtuvo en las elecciones de 1998 el 56% de los votos y en las de 2000 casi el 60%.

Es indispensable mencionar, por último, el resultado del Referéndum Revocatorio realizado el 15 de agosto de 2004, tras varios meses de movilización de la oposición articulada en torno a la Coordinadora Democrática, que venía exigiendo la celebración de una consulta popular para determinar la continuidad del presidente venezolano. El resultado de las urnas consolidó la legitimidad política e institucional de Chávez, tras obtener el 58% de los votos por el NO, contra el 42% de votos por el SI; hecho que constituye un nuevo revés para la multifacética y heterogénea oposición al movimiento bolivariano.

Al aplicar –de manera rigurosa– los indicadores del modelo de Mainwaring y Scully, se observa un corte en la regularidad del sistema, pero la volatilidad electoral es razonable si tomamos las dos últimas elecciones. Las raíces sociales del sistema en su conjunto –es decir, de la suma de los partidos que lo componen– es moderadamente alta, aunque algunos sectores son de reciente aparición; la legitimidad de las elecciones y partidos como medios para acceder al gobierno son bastante altas, a pesar de los fuertes cambios, del intento golpista de 1992 y del efímero golpe de Estado del año 2002; por último, la solidez de las organizaciones partidarias está cuestionada, ya que los partidos que tienen años han perdido espacio electoral, y los surgidos recientemente están en proceso de maduración. El sistema de partidos de Venezuela evidenció rasgos típicos de la categoría de sistema incoactivo, no obstante lo cual, si nos remitimos a aquellos indicadores, aún podría calificarse como sistema institucionalizado, con un bajo nivel, pero con algunas señales de comenzar a recorrer eventualmente el camino hacia una nueva institucionalización.

Dicho esto, sin embargo, debemos resaltar las insuficiencias o limitaciones del esquema de Mainwaring y Scully, para dar cuenta cabalmente de la evolución reciente del sistema político en Venezuela; en este sentido, si tomamos en cuenta las variables que los autores nos proponen y que hemos utilizado para los demás casos, estas no explican adecuadamente la irrupción del fenómeno del “chavismo” como relevo del modelo dominante hasta mediados de los años noventa. El enraizamiento social de los partidos tradicionales que emergieron del Pacto de Punto Fijo (principalmente AD y COPEI) fue debilitándose notablemente en la última década del siglo pasado, la regularidad del sistema de partidos fue alterada por la dispersión de los votantes, la pérdida masiva de votos de los partidos hegemónicos hasta el año 1993 y la aparición de nuevas formaciones políticas que aglutinaron en mayor proporción la voluntad popular. De otra parte, parece dudosa la afirmación de una aceptación –no traumática– de todos los actores políticos, de las normas, reglas y procesos electorales más recientes; sobre todo si consideramos la implicación directa de algunos partidos políticos en la promoción o complicidad tácita con el golpe de Estado

de abril de 2002, y la resistencia a aceptar los resultados electorales (avalados por la OEA, el Centro Carter y múltiples observadores internacionales) del Referéndum Revocatorio de agosto de 2004. Asimismo, si bien buena parte de los partidos políticos cuenta con una organización relativamente sólida, esta dista mucho de parecerse a aquellas estructuras partidarias de los otrora poderosos AD y COPEI, que les permitiera alternarse en el poder desde 1958 hasta fines de los años noventa. Finalmente, la fuerte correlación que Mainwaring y Scully establecen entre los sistemas incoativos y la emergencia de los populismos no parece plausible para el caso de Venezuela; precisamente parece identificarse una situación inversa caracterizada por la emergencia de un neopopulismo de izquierda en el marco de un sistema institucionalizado. Asimismo, la solidez de dicho formato institucionalista fue degradándose aceleradamente a mediados de los años ochenta en razón de varios factores: la corrupción generalizada, la descentralización que favoreció el surgimiento de liderazgos regionales y locales, la defeción de dirigentes y la fragmentación sucesiva de los partidos, así como la instrumentación de las políticas de ajuste económico (de corte neoliberal), que provocara el mayor empobrecimiento de la mayoría de la población. “El declive bipartidista debe entenderse también como parte del bloqueo de instituciones más identificadas con el poder civil, incluyendo los sindicatos y organismos patronales como FEDECÁMARAS, fenómeno que se extendió a los gremios profesionales y universidades” (Ramos Jiménez, 2003).

Los clivajes anotados por Ramos Jiménez refieren a la concepción de la democracia, situada entre una democracia de partidos o una democracia plebiscitaria, en la que parece claro que el chavismo ha podido construir y legitimar su poder después de ocho elecciones que le dieran una tras otra el triunfo inequívoco en las urnas. Precisamente, el sistema de partidos venezolano ha sufrido en los últimos diez años, una verdadera conmoción que impide reconstruir los antiguos clivajes del poder y consecuentemente es difícil de incluirlo de manera taxativa en una de las categorías que proporciona el modelo de Mainwaring y Scully.

URUGUAY

En Uruguay, tal vez la nación más estable políticamente de las consideradas en el estudio, el movimiento obrero constituye probablemente el paradigma unitario a partir de los años sesenta, cuando se fundó su única y unitaria Central Sindical (caso prácticamente excepcional en América Latina). Por otra parte, a principios de los años setenta otro movimiento social surgió con vigor y empuje desde una base cooperativa y territorial: la Federación Unificadora de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM).

CARACTERIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

PLENARIO INTERSINDICAL DE TRABAJADORES-CONVENCIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES (PIT-CNT)

- Contexto histórico de origen y evolución reciente

El Plenario Intersindical de Trabajadores-Convencción Nacional de Trabajadores es la denominación de la central unitaria del Uruguay, refundada en 1983, aún en dictadura, como uno de los principales actores sociales de resistencia y oposición al gobierno militar que cayó finalmente en 1984. Es la única (por unitaria) central de trabajadores y empleados privados y públicos del Uruguay, que condensa varias décadas de construcción de la “unidad sindical”, en la que finalmente confluyeron casi todas las corrientes ideológicas que en los años sesenta y setenta tuvieron insoslayable influencia en la conformación del movimiento obrero. Es en esta etapa, plena de ebulliciones sociales, que resurgió el movimiento sindical, con el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT), configurando de hecho la refundación del movimiento obrero.

El acto de celebración del 1° de mayo de 1983, organizado y convocado por el PIT, fue la más grande manifestación callejera del pueblo uruguayo desde el golpe de Estado, con más de 120 mil personas congregadas en los alrededores del Palacio Legislativo, como símbolo de un anhelo unánime de libertad y democracia. Unos meses más adelante, más exactamente el 27 de noviembre de 1983, se produjo un acontecimiento por demás trascendente para el proceso de redemocratización uruguayo: más de 300 mil personas se reunieron en la manifestación pública más numerosa que se haya registrado en la historia de las movilizaciones ciudadanas. Por cierto, en esa ocasión participaron todas las organizaciones y movimientos sociales, además de los partidos políticos que mayoritariamente se habían pronunciado en contra de la dictadura militar.

El proceso de restauración democrática condujo a la celebración de elecciones (con algunos líderes políticos aún proscriptos) y a la apertura democrática, a la que el movimiento de los trabajadores contribuyó decisivamente, pautando una nueva modalidad de participación de los actores sociales. En efecto, a partir de la denominada Concertación Nacional Programática (CONAPRO), el movimiento obrero junto con FUCVAM y otras tantas organizaciones sociales debatieron junto con los partidos políticos acerca de los grandes asuntos públicos (crecimiento económico y desarrollo productivo, políticas sociales, recuperación de los salarios y las condiciones laborales, mecanismos de regulación del conflicto entre obreros y patronales, etc.), sobre todo a fines del año 1984 y principios de 1985. Sin embargo, a poco de haber asumido el gobierno de Julio María Sanguinetti (Partido Colorado), la CONAPRO

perdió protagonismo para ir desvaneciéndose, tras la escasa respuesta del gobierno a sus propuestas acordadas de manera consensual. La Intersocial, en la que el PIT-CNT tuvo un papel relevante, también se constituyó, al menos durante los primeros dos años, como referencia de articulación social.

Por otra parte, la discusión en torno a la propia denominación de la recuperada central sindical operó como canal y excusa para un debate ideológico, en tanto los históricos dirigentes sindicales (muchos de ellos liberados después de varios años de prisión, o retornados del exilio) insistieron en recuperar la CNT, mientras que las nuevas generaciones de dirigentes y militantes sindicales defendían la bandera del PIT, como expresión de la renovación del movimiento. La discusión fue laudada sobre la base del acuerdo en conjuntar las dos expresiones (por ello PIT-CNT), que de alguna manera sintetiza el “nuevo consenso” (la síntesis entre la historia y la emergencia de lo nuevo), en el marco del movimiento sindical de los años ochenta. Las luchas por reinstaurar los consejos de salarios y las negociaciones colectivas fortalecieron el accionar del movimiento sindical, que recuperó virtualmente la capacidad de presión, movilización y negociación antes perdida.

Sin embargo, sobrevendrían nuevos dilemas y problemas en materia de trabajo y empleo. El inicio de los años noventa marca en cierto sentido la aceleración de la puesta en marcha del modelo neoliberal, que venía perfilándose con el anterior gobierno. Esta vez, tras la victoria electoral en 1989 del otro partido tradicional (Partido Nacional o Blanco), que llevó a Luis Alberto Lacalle al poder durante cinco años, se implementaron nuevos ajustes fiscales aun más duros, así como se retomaron proyectos de privatizaciones que no pudieron concretarse en el período anterior, acentuando los procesos de reforma social y del Estado encaminados por su antecesor. El PIT-CNT levantó las banderas de la oposición intransigente a las orientaciones neoliberales y a las políticas públicas correlativas, apoyadas también por el Partido Colorado. En ese contexto resulta significativo recordar el plebiscito del año 1992 contra la privatización de ANTEL (empresa estatal de telefonía y telecomunicaciones), con un triunfo trascendente en las urnas de la oposición política (sobre todo del Frente Amplio) y del movimiento social en el que convergieron la central sindical, FUCVAM, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU), organizaciones barriales, otras gremiales y una mirada de actores de la sociedad civil.

No obstante, tanto el gobierno de Lacalle como el segundo mandato de Sanguinetti profundizaron las políticas de apertura de la economía y desregulación del mercado laboral, generando entre otras consecuencias un pronunciado proceso de desindustrialización, con especial impacto en la clase obrera y por ende en sus estructuras organizativas, las que sintieron sus efectos por la pérdida de miles de empleos en la in-

dustria manufacturera. Tal vez estos cambios originados por la modificación de los patrones de acumulación capitalista, la apuesta al capital financiero y la desprotección de la industria nacional, que exigieron severos ajustes y adaptaciones económicas, sociales y culturales del movimiento obrero, sumados a las políticas privatizadoras, perfilaron el centro de atención en el conflicto “cuasi corporativo” de los sindicatos de empleados públicos, que junto con las agremiaciones de bancarios han protagonizado las luchas más recientes del último lustro. Además de las huelgas generales, manifestaciones y marchas en la calle, también los caceroleos y apagones en algunas circunstancias particulares, el movimiento sindical uruguayo utilizó un instrumento jurídico que la propia Constitución de la República prevé: el referéndum, sobre todo para interponer el recurso ante el avance de disposiciones legales privatizadoras.

El contexto actual, ante el colapso financiero que sumergió al país por el tobogán al default virtual y la crisis más profunda y prolongada (estancamiento y decrecimiento del PBI desde 1998, aumento del desempleo y de la pobreza), coloca a la coalición de los dos partidos tradicionales (formalmente fracturada desde tiempo atrás) ante una encrucijada difícil de sortear. La oposición avanza a pasos agigantados, amenazando la hegemonía secular de los partidos en el poder, con el beneplácito de la central sindical, que aguarda –y no de manera expectante sino asumiendo un rol proactivo– definiendo los parámetros de la acción social colectiva del movimiento social uruguayo.

- Organicidad

El PIT-CNT ha heredado la estructura básica de la central antecesora, aun cuando hubo varios plenarios generales y asambleas para revisar la organización, a fin de ajustarla a los escenarios cambiantes en la década pasada. De todos modos, mantiene los mismos principios, de afiliación por sindicato y federación, proporcionalidad en la representatividad de los congresos y plenarios, y unidad de acción.

El máximo órgano deliberativo y de decisión es el Congreso Nacional, que se realiza cada tres años, del cual surge la Mesa Representativa, órgano actualmente de treinta y tres miembros, pero que varía en su número de componentes según un conjunto de criterios que se discuten en cada congreso. De la Mesa Representativa surge el Secretariado Ejecutivo, ámbito político ejecutivo de conducción permanente que está compuesto por trece dirigentes electos.

En suma, el grado de organicidad es alto, constituyendo una malla densa en algunos sectores de la actividad económica (sindicatos de base, federaciones y confederaciones), especialmente en las ramas o subsectores de alta prioridad estratégica, mientras que de otro lado, la

desertificación de la organización sindical ha sido progresiva, acompañando el proceso de reestructuración productiva.

- *Capacidad propositiva*

Siendo básicamente un movimiento reivindicativo frente al Estado o bien frente a las empresas privadas, el legado de la CNT de los años setenta permitió al PIT-CNT potenciar la acumulación del pasado en clave de construcción de un proyecto político-social. El patrimonio institucional, cultural e ideológico, que se expresó en logros importantes en el Congreso del Pueblo¹⁴ (encuentro general de todas las organizaciones sindicales afiliadas a la central, agremiaciones del ámbito rural o agropecuario, gremios estudiantiles, cooperativas, organizaciones barriales o territoriales, culturales, entre otras) constituyó una plataforma amplia y socialmente inclusiva, que aportó alternativas y soluciones ante los problemas sociales de la etapa. Durante el proceso de transición democrática, la participación del PIT-CNT en la CONAPRO fue especialmente relevante, con propuestas en diferentes áreas: en el dominio económico y productivo (industrial y agropecuario), en materia de políticas activas de empleo y formación laboral, en salud y educación, entre tantas otras. Ese estilo predominó prácticamente hasta bien entrada la década de los noventa, para ser reasumido con mucha más fuerza en el período más recesivo del país (1998 al 2003), produciendo una nueva plataforma denominada Concertación para el Crecimiento, a instancias de otras gremiales de pequeños y medianos productores rurales, de micro y pequeños empresarios, comerciantes, profesionales, cooperativistas. La capacidad de propuesta se mantiene activa y con un grado alto de desarrollo, sobre todo a partir de su participación en Políticas Públicas en la JUNAE¹⁵ (organismo tripartito que acuerda los programas de recalificación laboral, y selecciona los ejecutores de los planes de capacitación dirigidos a los trabajadores desocupados que se encuentran en usufructo del seguro por desempleo), así como en la gestión del Banco de Previsión Social (BPS), a través de la participación de un delegado de los trabajadores en el Directorio de dicha entidad previsional.

- *Convocatoria y movilización*

Si la capacidad de convocatoria de una organización sindical se mide solamente con el indicador de las adhesiones a los paros y huelgas,

14 Congreso celebrado entre los días 29, 30 y 31 de julio de 1965.

15 Junta Nacional de Empleo, organismo tripartito constituido por delegaciones de los sindicatos, patronales y del Estado, opera en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

se podría asegurar que el PIT-CNT tuvo su momento más alto durante el proceso de transición (principios de los ochenta), así como en el período inmediato posterior (primer gobierno colorado), para decaer sensiblemente a mediados de los años noventa, y recuperarse parcialmente en los últimos tres años.

Dicha aseveración también se apoya en la revisión del número de personas –trabajadores activos y pasivos, desocupados– que asistieron a los innumerables actos en la vía pública, sobre todo a las convocatorias para la celebración del Día de los Trabajadores, de los días 1° de mayo. Recordemos la masiva concurrencia en los primeros años de los ochenta (que llegó a superar en algunos casos la cota de las 100 mil personas), que fue mermando gradualmente, pasando por un piso muy bajo de participación, para repuntar nuevamente en el último lustro. No obstante ello y pese a la pérdida de peso cuantitativo de militantes sindicales, por efecto de la destrucción masiva de ramas de actividad industrial, así como por causa de una inadecuación de las estructuras organizativas y estrategias de lucha del PIT-CNT, la central sigue siendo uno de los actores sociales de referencia para la población (pese a una percepción e imagen no muy favorable en los últimos años), las patronales y el Estado.

Por otra parte, el movimiento sindical ha conseguido articular eficazmente una plataforma más amplia, integrada con medianos y pequeños empresarios, así como con productores rurales, como la denominada Concertación para el Crecimiento y por el Trabajo.

Por ejemplo, el año pasado nosotros estuvimos movilizándonos con la Concertación para el Crecimiento, que era una organización de empresarios criollos; por lo tanto, allí teníamos para algunos una gran parte de apertura política de la Central que nos permitió pasar a la primera escena en el escenario del debate público y político del país, y para otros era una contradicción que nos fuéramos a movilizar junto con los patrones. Pero lo que hay que ver al final es cuáles eran los objetivos que nos llamaban a unirnos, y acá había un problema de una crisis financiera, bancaria y hasta política de la vida del país muy profunda, y teníamos que tener gestos de amplitud por encima de las cuestiones corporativas del movimiento sindical (entrevista a un dirigente del PIT-CNT).

Entre las más recientes movilizaciones cabe destacar algunas por su carácter “original”, diferente de las movilizaciones normalmente implementadas por el movimiento de trabajadores.

Un hecho relevante [en el verano de 2002] lo constituyó la marcha a Punta del Este que convocó la Central de Trabajadores, que fue prohibida por el gobierno en cuanto a su acceso a la ciudad misma,

culminando con un acto masivo de más de 30 mil personas en la ciudad de Maldonado, capital del departamento donde está el balneario referido. Si contamos las personas que a lo largo de los 140 kilómetros que separan Montevideo de Punta del Este salieron a las carreteras, superaron las 50 mil personas (Olesker, 2002).

Ese mismo año, el acto del 1° de Mayo fue uno de los más multitudinarios celebrados en los últimos años y, semanas antes, el PIT-CNT había convocado a miles de trabajadores, junto con productores, empresarios, gremios estudiantiles, organizaciones de jubilados, cooperativas, etc., a un acto coordinado y articulado por la Concertación por el Crecimiento. Durante el año 2003 fueron significativas las repercusiones de la campaña centrada y focalizada en la defensa de la empresa estatal ANCAP, que supuso la recolección de más de 600 mil firmas y luego más de 1,2 millones de votos en el acto plebiscitario.

En conclusión, cuenta aún con un grado medio en términos de cualificar su capacidad de convocatoria y adhesión, con una tendencia a recuperar un alto puntaje a partir del resultado del último referéndum por ANCAP¹⁶, habida cuenta del papel protagónico que jugó el PIT-CNT durante la campaña de recolección de firmas (por ser cosecha de su iniciativa) y luego en la propia campaña previa a la votación ciudadana. De asimilar convenientemente dicho éxito político –que obviamente comparte con las fuerzas de oposición, sobre todo de izquierda y centroizquierda, así como con otras organizaciones sociales como FUCVAM, por citar apenas un ejemplo–, la central sindical ciertamente se volverá a posicionar con fortalezas renovadas y oxigenadas, en el contexto de un “sismo político” causado a partir de aquel resultado.

- Discurso político

Si bien el discurso político fue variando a través del tiempo, pueden observarse algunos elementos constantes a lo largo de la historia del PIT-CNT, que parecieran “inmanentes” o inmutables y extemporáneos: la premisa de la unidad sindical (concepto cuasi sacralizado), que condiciona gran parte de las estrategias de acción sindical, pero que asegura la preservación del instrumento creado; el carácter clasista y la invocación insistente a la “clase obrera” (aun a sabiendas del peso disminuido de dicha categoría en el conjunto de la clase trabajadora, en un país con neto predominio del comercio y los servicios por sobre

¹⁶ El 7 de diciembre de 2003 se realizó el referéndum para derogar la Ley de Asociación de ANCAP, la empresa petrolera estatal. El categórico resultado (tal vez inesperado para algunos) se plasmó en las urnas a favor del *sí* con un 62% de los votos emitidos; cabe subrayar, además, el bajo porcentaje de abstención registrado.

las demás ramas de actividad económica); y la apelación a la resistencia frente a un modelo capitalista de producción y distribución inequitativa (bajo su formato neoliberal, al menos en los últimos diez años).

Por eso lo definimos de izquierda, por la concepción que tenemos, unitaria, clasista; independiente, desde el punto de vista de clase, de los partidos políticos y los patrones; internacionalista, solidaria, combativa, y que ha puesto objetivos tan grandes como esos; porque definir en su artículo 1º que luchamos por una sociedad sin explotados ni explotadores, eso léase que luchamos por construir el socialismo en Uruguay, y esas son las dotes que califican nuestra central única (entrevista a un dirigente del PIT-CNT).

Junto con el discurso anticapitalista resaltan las posturas antiprivatizadoras, contrarias a las tercerizaciones y a la sumisión a los mandatos de los organismos internacionales de crédito (FMI, BM o BID), en clara alusión al antiimperialismo como componente discursivo. Las referencias a las instituciones democráticas han sido muy cuidadosas en diferenciar el mal ejercicio de la representación política (particularmente a nivel parlamentario), las prácticas abusivas y de corrupción en los ámbitos de gestión pública, de las figuras y de las representaciones simbólicas de la democracia.

Prevalecen las ideas de lucha de clases, la invocación a las fuentes del marxismo y del socialismo (teoría y práctica política), aunque ello depende mucho más de los interlocutores o voceros de turno de la central. La negociación y el aporte desde una crítica constructiva a brindar soluciones ha sido también impronta del PIT-CNT.

- Autonomía

Resulta compleja, sin embargo, la caracterización en cuanto a la autonomía del PIT-CNT, por cuanto en determinadas etapas podría apreciarse una muy fuerte conexión entre los sectores de izquierda (Partido Comunista, Partido Socialista, sectores provenientes del Movimiento de Liberación Nacional, MLN –ahora incluido en el Movimiento de Participación Popular, MPP–, anarquistas y otras fuerzas con menor peso relativo) y las dirigencias sindicales que orientaban sus estrategias y tácticas de lucha de acuerdo con los mandatos de sus respectivas agrupaciones partidarias. En tanto, en otros períodos se registra una mayor independencia de las decisiones, provocando en más de una ocasión fricciones y desencuentros notorios entre dirigencias políticas y sindicales. Cierto es que en algunos sindicatos afiliados la disputa por el control del aparato sindical puso al descubierto la fragilidad de las organizaciones sindicales, que se abroquelaron para impedir una renovación de las elites dirigentes. Por su parte, al proyectarse una imagen

excesivamente dependiente de los partidos políticos, aunque sea más virtual que real, se le resta credibilidad y legitimidad social, puntos de apoyo en la clase trabajadora y en la sociedad civil, y finalmente se desgasta su poder de interlocución política y social.

Los aprendizajes en las prácticas sociales suelen ir acompañados de oscilaciones pendulares, de tal modo que el movimiento social se plantea la necesidad de revertir la influencia política y, antes bien, ejercer la suya sobre la “clase política”. Un claro ejemplo de lo que afirmamos puede ilustrarse con el reciente operativo de defensa de ANCAP (referéndum por el *sí* a la derogación de la ley de asociación), que fue una iniciativa de la Federación de Trabajadores y Empleados de la misma empresa pública que arrastró a otras organizaciones sociales y a la principal fuerza política de oposición (Encuentro Progresista-Frente Amplio, EP-FA) hacia la campaña de recolección de firmas; y el posterior plebiscito con el resultado altamente positivo para los impulsores de la derogación.

Nosotros mantenemos en nuestra organización la independencia de clase, quiere decir que acá nosotros no vamos a cumplir o no vamos a ejecutar o no vamos a resolver en función de lo que quieran los gobiernos, de lo que quieran los partidos políticos, de lo que quieran los empresarios, eso no va con nosotros, somos independiente de ello (entrevista a un dirigente del PIT-CNT).

Por ende, se torna complejo establecer un nivel o grado de autonomía, cuando de hecho se constatan relaciones biunívocas, vale decir, de interdependencia entre los partidos políticos (sobre todo de izquierda) y la central sindical. Un fenómeno a favor de la autonomía del PIT-CNT lo constituye sin duda el equilibrio de sus corrientes internas que responden precisamente a aquellos partidos, lo que obliga a establecer límites a la prevalencia o pretensiones hegemónicas de sus fracciones políticas.

Con la izquierda la relación es otra, pero también es más natural; no hay que alarmarse como se alarman tanto los dirigentes políticos de nuestro país o los medios de comunicación de derecha. Es natural que [en] un movimiento sindical definido como de izquierda, en el cual la inmensa mayoría de sus militantes son hombres que llevan doble militancia, que también son militantes de grupos o movimientos o partidos políticos de la izquierda del país, aparezca otro tipo de sintonía. Y aparecen por varias razones, pero la primera es bien al revés de lo que se intenta marcar: no es que nosotros seamos el brazo sindical de la fuerza política Frente Amplio, no es que nosotros le hagamos los mandados al Frente Amplio o a sus dirigentes; en realidad, cuando se crea la unidad de la izquierda, que fue en el año '71, es bastante posterior a la solidificación de la unidad del movi-

miento sindical, y cuando se funda el Frente Amplio toma como eje reivindicativo y de programa la plataforma que levantó el Congreso de la Unificación del PIT-CNT. Por lo tanto, el programa de la izquierda tiene rasgos fundamentales bastante similares al que tiene (sic) el programa reivindicativo de los trabajadores [...] Nosotros no somos autónomos, nosotros somos independientes (entrevista a un dirigente del PIT-CNT).

En suma, el grado de autonomía es medio, y en determinadas circunstancias llegó a valores muy altos. Del propio movimiento sindical surgieron varios dirigentes que se transformaron en legisladores con el propósito de expresar los intereses de la clase trabajadora en el seno del Parlamento (pero en representación de algunos partidos políticos de izquierda). Aun cuando el PIT-CNT no “representa” a la totalidad de los trabajadores uruguayos (aunque sí a la enorme mayoría), ha desarrollado una especial vocación de integración e inclusión de vastos sectores en sus plataformas de lucha, y una buena dosis de articulación con otros actores sociales tradicionalmente no tan afines a sus demandas.

- Tasa de afiliación

El PIT-CNT perdió en el lapso de 15 años aproximadamente la mitad de sus afiliados, es decir, si en 1985 tenía alrededor de 250 mil afiliados, para el año 2001 presentaba, según los registros derivados de los sucesivos congresos nacionales, una cifra aproximada a los 115 mil trabajadores sindicalizados. Esto significa que la tasa pasó de un 34,8% en 1987 a un 14,9% en 2001, pudiendo haber bajado aún más, de acuerdo con la tendencia muy marcada en los últimos tres años. En este proceso de caída, los trabajadores sindicalizados pasaron a estar mayoritariamente en el sector público (dos tercios del total de los congresales del año 2001 corresponden a afiliados de sindicatos del sector público), lo que se explica por la pérdida –en una década– de unos 90 mil puestos de trabajo en la industria manufacturera.

FEDERACIÓN UNIFICADORA DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA POR AYUDA MUTUA (FUCVAM)

- Contexto histórico de origen y evolución reciente

La Federación Unificadora de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua fue fundada el 24 de mayo de 1970 en Isla Mala (emblemática localidad del departamento de Florida, donde se desarrolló una de las tres primeras experiencias piloto de construcción de viviendas por ayuda mutua, con el apoyo decisivo del Centro Cooperativista Uruguayo), al amparo y estimulada directamente por la configuración de un nuevo dispositivo o mecanismo de construcción de viviendas populares esta-

blecido por la Ley Nacional de Vivienda N° 13.728¹⁷ del año 1968, que en su artículo X definía el marco jurídico que habilitaría luego la formación y desarrollo de centenares de cooperativas en todo el país. Identidad de clase como organización de trabajadores, vocación de defensa gremial y proyección nacional del incipiente movimiento constituyeron los pilares fundacionales de FUCVAM. A iniciativa de varios grupos de cooperativistas que habían puesto en práctica la modalidad de la ayuda mutua en la construcción de sus viviendas, fue tomando forma y expandiéndose el nuevo movimiento, que mayoritariamente se configuró a partir de gremios o sindicatos principalmente de la industria manufacturera (construcción, textil, metalúrgicos, también transporte y servicios), que a su vez le dieron la impronta matricial a la fisonomía socioorganizativa de la Federación de viviendas. Las propuestas de tipologías constructivas realizadas por algunos institutos de asistencia técnica (en el marco institucional de la Ley de Vivienda y gracias al financiamiento del Banco Hipotecario del Uruguay) fueron discutiéndose y aprobándose cada vez en mayor número por efecto demostrativo de las primeras experiencias exitosas.

En 1973 la federación logró consolidarse como una estructura gremial y obtuvo la personería jurídica. Sus acciones y objetivos, sobre todo en el marco de las innumerables dificultades generadas por la represión autoritaria que alcanzara a muchos de sus dirigentes e integrantes, tendió a orientarse hacia tareas de carácter gremial, buscando y logrando aumentar el número de cooperativas (obtención de créditos, concesiones de tierras, desburocratización de los trámites legales, habilitaciones de servicios de infraestructura, etc.), para “renacer” en los años finales de la dictadura como un movimiento claramente político (Casas, 1999).

Durante el período autoritario, FUCVAM se erigió como uno de los movimientos sociales más estructurados en la defensa de la libertad y la democracia; fueron los tiempos de resistencia y eclosión de cauces participativos que corrieron por los intersticios que permitía el régimen dominante. Sobre todo en los últimos años de aquel período (1980 a 1984), la Federación asumió un protagonismo inusual para ese tipo de organización social, emergiendo en la escena pública como actor sociopolítico. Desde las cooperativas de base (a través de sus asambleas, comisiones y servicios sociales) se fue ejerciendo la democracia sustentada en la participación y promoción de la autogestión. Policlíni-

17 La ley determinaba dos modalidades de gestión –ayuda mutua y ahorro previo– y dos formas de tenencia –de usuarios o de propietarios–, a partir de las cuales FUCVAM realizó su opción preferencial por la modalidad de ayuda mutua de usuarios.

cas y centros educativos para preescolares, organización de acciones comunitarias de integración barrial, servicios odontológicos y apoyo a la tercera edad, comisiones de deporte y cultura, bibliotecas y apertura de salones comunales para la “reunión” y la realización de asambleas; en fin, una multiplicidad de experiencias colectivas de participación, en las cuales –a despecho de la orientación oficial– se proclamaban la vigencia de la democracia, la autonomía de la sociedad civil y la defensa de los derechos ciudadanos.

El autoritarismo militar no pudo penetrar invasivamente la cotidianeidad de los uruguayos, que refugiados en la conservación de los vínculos básicos de solidaridad y encuentro anidaban en el “oikos ampliado” de la libertad, la democracia y el espíritu gregario. El hecho más trascendente para FUCVAM fue la campaña que se vio obligada a emprender en 1984, cuando sus militantes y dirigentes salieron públicamente a recolectar más de 500 mil firmas para impedir, mediante el recurso plebiscitario, la imposición desde el Estado que pretendía convertir las viviendas cooperativas al régimen de propiedad horizontal, con la intención de eliminar las formas cooperarias más allá de la obra de construcción. Finalmente, aun cuando no se realizó el plebiscito, el proyecto del gobierno autoritario fue abortado. De aquella etapa debe destacarse la participación del movimiento en la Intersocial, plataforma que aglutinaba a la casi totalidad de las organizaciones y movimientos sociales (sindicatos, gremios estudiantiles, asociaciones de productores rurales, pequeños empresarios, cooperativistas de varias ramas, comisiones barriales, entre tantas otras), así como su incorporación en la Concertación Nacional Programática (CONAPRO), ámbito en el cual junto con actores sociales y partidos políticos recorrió un camino de acuerdo y construcción de consensos en torno a propuestas de políticas públicas hasta 1985.

La ocupación de terrenos “abandonados” fue otra de las estrategias de lucha y reivindicación del movimiento cooperativo de vivienda, sobre todo entre los años 1989 y 1990.

El hecho de haber impulsado en aquel momento la ocupación de tierras donde hubo muchos compañeros –si bien en democracia– que fueron detenidos, nos exigió argumentar el por qué de esa ocupación de tierras, argumentar que el Estado las tenía totalmente desafectadas bajo cualquier punto de vista, no eran productivas, tampoco se edificaba, eran terrenos prácticamente abandonados y esta estrategia servía mucho para el crecimiento no sólo de FUCVAM sino para el crecimiento de la sociedad en su conjunto, llevando servicios, llevando vida a los barrios (entrevista a un dirigente de FUCVAM).

Es recurrente la participación activa de FUCVAM, en las últimas dos décadas, en movilizaciones sociales, manifestaciones y marchas, pri-

mero en defensa de los derechos humanos (por verdad y justicia, sobre todo entre 1985 y 1989), luego para evitar la privatización del patrimonio de las empresas estatales (distintas iniciativas pro-referéndum entre los años 1990 a 2003), pero también en asuntos particulares vinculados a la vivienda y el hábitat (marchas hacia el Ministerio de Vivienda y el Banco Hipotecario del Uruguay, caminatas y actos públicos, entre las cuales debe destacarse la marcha hacia Punta del Este –balneario emblemático para el turismo regional– que fuera prohibida por el gobierno). Más recientemente, FUCVAM jugó un papel preponderante en la defensa de ANCAP (recolección de firmas para el referéndum que finalmente se realizó en diciembre de 2004), apoyando la movilización de la central de trabajadores. La Federación sumó esfuerzos en la organización de la iniciativa de la Concertación por el Crecimiento, lo mismo que otros movimientos sociales que reaccionaron de manera conjunta ante la grave crisis social y económica que implosionó en Uruguay en julio de año 2002, con los efectos recesivos y la profundización de la brecha social.

- *Organicidad*

La estructura de FUCVAM se sustenta en primer lugar en los núcleos de cooperativas de base diseminados en todo el país; en segundo lugar las agrupadas en las denominadas *mesas de cooperativas*, que reúnen a varias cooperativas de vivienda cuyo origen proviene por lo general de una misma matriz sindical (las *mesas* son complejos donde conviven centenares de habitantes cooperativizados). Cada mesa cuenta con delegados de las respectivas cooperativas de base que la constituyen, y a su vez coordinan en plenarios y asambleas con otros complejos cooperativos de todo el país a través de plenarias departamentales.

Conviene acotar que, al tratarse de una federación de segundo grado, los socios no son directamente los cooperativistas sino las cooperativas que los agrupan.

Las afiliadas a FUCVAM son las cooperativas de vivienda, no somos las personas; por ende, la Asamblea Nacional es su órgano máximo. De esas cooperativas se constituyen los delegados que son nombrados para integrar la dirección nacional. Hoy por hoy, el movimiento está representado por once compañeros integrantes por el departamento de Montevideo y cinco delegados regionales distribuidos según la realidad del interior del país con cooperativas que también hay en casi todo el país. Son dieciséis integrantes que luego se distribuyen sus cargos entre sí en la mesa, votados libremente, propuesto cada compañero por su cooperativa a ser miembro de la dirección nacional. Y luego hay un órgano ejecutivo

y distintas comisiones que van abordando las tareas (entrevista al secretario general de FUCVAM).

A nuestro juicio, FUCVAM demuestra contar con un grado medio-alto de organicidad, que conjuga con equilibrio la eficacia de sus intervenciones con la participación social de sus miembros, con especial preocupación por respetar la horizontalidad entre todas las cooperativas asociadas a la Federación.

- Capacidad propositiva

Seguramente, FUCVAM ha sido el movimiento social con mayor capacidad propositiva, no tanto por la cantidad o calidad de proyectos enviados al sistema político, sino por cuanto sintetiza en sí mismo la capacidad de generar alternativas viables, cuando desde el Estado no ha habido respuestas ni capacidad de innovar en soluciones plausibles en la problemática de la vivienda y el hábitat. Por ello, analizar la evolución del cooperativismo de vivienda en el Uruguay supone de suyo relevar los proyectos puestos en práctica desde el movimiento popular, consiguiendo de esta manera una vía de legitimidad y reconocimiento por el conjunto de la sociedad y sus actores. Así también debe admitirse que se trata de un movimiento de fuerte anclaje territorial que ha sabido urdir un denso y rico tejido solidario “entre vecinos”, entre ciudadanos y organizaciones sociales de base; lazos que delimitaron verdaderas “islas de libertad” en tiempos de dictadura, como solía denominar al movimiento cooperativo el arquitecto y sociólogo Juan Pablo Terra (1995).

Entre las propuestas vale mencionar el Plan Nacional de Vivienda presentado junto con otras organizaciones relacionadas con el tema –institutos de asistencia técnica, otros movimientos sociales como MOVIDE¹⁸, articulados junto con FUCVAM en la Coordinadora de Vivienda Popular (COVIP)–, que define con precisión un conjunto de medidas tendientes a revitalizar el sector de la construcción (con el consiguiente efecto sobre el empleo), así como una inclusión privilegiada de la modalidad cooperativa como forma de resolver el déficit habitacional. También se presentaron proyectos de ley, modificaciones a la ley de personerías jurídicas, algunos de los cuales fueron aprobados por el Parlamento nacional.

- Convocatoria y movilización

La trayectoria de FUCVAM ha demostrado un desarrollo sostenido y un crecimiento paulatino de sus capacidades de articulación social, bá-

¹⁸ Movimiento Pro Vida Decorosa, que desapareció a fines de la década del ochenta.

sicamente vertebrada en territorios en los cuales fueron asentándose los complejos cooperativos de vivienda. Simultáneamente, y sobre todo a partir de la década del ochenta, FUCVAM cataliza buena parte de la resistencia al autoritarismo e imprime una fuerza inusitada a la movilización social, contribuyendo de manera significativa a la recuperación democrática. En ese sentido, vale la pena recordar la recolección de firmas a fin de evitar el pasaje del sistema cooperativo al sistema de propiedad horizontal que la dictadura quiso imponerle, obteniendo la adhesión de miles de ciudadanos en su campaña de reafirmación identitaria. En años sucesivos dicha Federación estuvo a la par de la central sindical y de otras organizaciones sociales en la defensa del patrimonio nacional, en reclamos por vivienda digna y soluciones habitacionales, realizando numerosas marchas multitudinarias. Aun cuando a mediados de los años noventa redujo su capacidad de movilización, podemos afirmar que esta todavía sigue siendo alta, pese a considerar los mecanismos que democráticamente se adoptaron para asegurar una presencia importante de cooperativistas en las diversas manifestaciones públicas (multas por ausentismo, justificación debida de las faltas).

- Discurso político

Como entidad gremial reserva la administración de los recursos destinados a proyectos constructivos a los grupos de base directamente involucrados. Esta es una de las claves en el entendimiento de la “autogestión”, uno de los rasgos distintivos del cooperativismo de vivienda por ayuda mutua. FUCVAM ha planteado desde su origen la necesidad de enmarcar la solución al problema de la vivienda en el contexto de reivindicaciones por una superior calidad de vida de los trabajadores en general. En este sentido, las sucesivas asambleas nacionales han definido como orientación de base de la Federación la unidad y la acción colectiva junto con las distintas fuerzas sociales que han demostrado poseer real capacidad de convocatoria. Las cooperativas uruguayas están indisolublemente ligadas a la autogestión y la participación comunitaria. La aplicación de los principios cooperativos de vigencia universal (en la organización empresarial, en el trabajo de construcción y en la convivencia y gestión barrial) ha llevado a que se trasmitan y profundicen valores de solidaridad, de democracia y de respeto mutuo, que son diferentes y hasta opuestos al individualismo y la competencia que tiende a predominar en las ciudades contemporáneas. Debe subrayarse su tono fuertemente antineoliberal y en cierto modo antisistémico, avalado por su concepción de la propiedad social de los bienes, en particular de la vivienda, no sujeta necesariamente a los vaivenes del mercado inmobiliario. En muchas de sus plenarios y asambleas puede

apreciarse visiblemente una intención de transformar la sociedad y las relaciones de poder hegemónicas.

- *Autonomía*

Pese a la incidencia evidente de fuerzas y sectores de la izquierda nacional, la Federación ha demostrado tener un margen significativo de actuaciones en tanto movimiento social no sujeto a condicionamientos externos.

Nosotros somos totalmente libres de todo condicionamiento político; no es que seamos apolíticos [...] Evidentemente es un país muy pequeño, todo el mundo sabe de qué corriente proviene, a quién votó, a quién no votó; eso es la puerta de FUCVAM hacia la calle. Hacia dentro es un conjunto de compañeros que venimos de distintos ámbitos a tratar de llevar, a impulsar lo que en una asamblea nacional se propuso, a seguir las pautas de esta Federación. No somos polea de transmisión absolutamente de nadie, eso lo hemos dejado claro. Hay mucha gente que no cree; habrá que esperar su tiempo para ver si cuando eso suceda realmente hemos llevado a cabo nuestra palabra adelante o no (entrevista a un dirigente de FUCVAM).

Tanto la composición social del movimiento, bien heterogénea y plural, así como los propios mecanismos previstos para la toma de decisiones, contribuyen a mantener un espacio significativo de autodeterminación. Los principios y valores de la autogestión no se quedan en los niveles de la retórica discursiva, sino que se manifiestan constantemente en las deliberaciones asamblearias que definen las principales orientaciones estratégicas y tácticas del movimiento. Por ello podría afirmarse que FUCVAM cuenta con un grado importante de autonomía, aunque no esté ajeno como movimiento social a la influencia de corrientes ideológicamente posicionadas en la izquierda política.

- *Tasa de afiliación*

La Federación nuclea a más de 16 mil familias que, a su vez, representan cerca de 70 mil personas en todo el territorio nacional, organizadas en cooperativas de base y mesas (conjunto de varias cooperativas agrupadas).

CUADRO 11

CARACTERÍSTICAS DE LOS MOVIMIENTOS URUGUAYOS

	Organicidad	Capacidad propositiva	Convocatoria y movilización	Discurso político	Autonomía	Afiliación
PIT-CNT	Grado alto de organicidad. Debilitado en la última década. Central de trabajadores unitaria, fuertemente estructurada.	Alta. Articula eficazmente la reivindicación con participación en ámbitos de generación de propuestas.	Medio alta. Capacidad fortalecida en el último lustro debido a su estrategia de promoción de referendos.	Reivindicativo, antineoliberal, anticapitalista, clasista.	Autonomía moderada. Vínculo con partidos políticos, sobre todo de la izquierda.	Media, en descenso desde 1985.
FUCVAM	Grado medio alto. Se sustenta en cooperativas de base. No tiene cobertura en todo el país.	Alta, con desarrollo propositivo en su campo específico y experiencias innovadoras.	Medio alta, con recuperación de capacidades debilitadas en los años noventa.	Autogestionario, democratizador, antineoliberal.	Autonomía importante. Mantiene vínculos con sectores de la izquierda.	Alta si se considera el número de familias asociadas a las cooperativas de base.

Fuente: elaboración propia.

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO

CUADRO 12

URUGUAY: EVOLUCIÓN RECIENTE DE INDICADORES PARA EL PERÍODO 1996-2003
(EN PORCENTAJE)

Perfil del sistema político					
Confianza en el Parlamento	Confianza en los partidos	Participación electoral (promedio últimos 20 años)	Sistema de partidos (NEP)	Confianza en los presidentes o el Ejecutivo	Satisfacción con la democracia
39,55	33,21	95,00	3,20	40,52	57,84

Fuente: elaboración propia con datos electorales y de Latinobarómetro (1996-2003).

El sistema de partidos uruguayo es calificado como institucionalizado por Mainwaring y Scully, y también lo podemos considerar sistema de pluralismo moderado si tenemos en cuenta la clasificación de Sartori (1992). Desde la instauración democrática hay continuidad en el sistema, y los actores principales son los mismos, manteniéndose la tendencia a aumentar el peso de los sectores de izquierda. El Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) pasó de un 21,23% en 1989 a un 30,61% en 1994, alcanzando en 1999 un 40,3% del electorado en la

primera vuelta. Sin duda alguna estamos frente a actores que expresan una continuidad, pero no un congelamiento. Los actores y las reglas son respetados y marcan una continuidad, a pesar de la reforma electoral de 1996, que no cuestiona la confianza en las elecciones sino que establece nuevos mecanismos para ellas.

El contar con un sistema institucionalizado de partidos no necesariamente implica el buen funcionamiento de la democracia, y ni siquiera garantiza su permanencia; al respecto vale mencionar el período autoritario en el Uruguay entre 1973 y 1984. Sin embargo, la institucionalización es muy importante, junto con otras variables como el número de partidos y la polarización ideológica, además del contexto socioeconómico del sistema de partidos y sus respuestas para afrontar los desafíos que se presentan. Además, tiene mayor relevancia si pensamos por la inversa, es decir, que un sistema de partidos incoactivo genera incertidumbre, así como ausencia de controles y equilibrios. Mainwaring y Scully (1995) encuentran una asociación fuerte entre sistemas incoactivos y el surgimiento de líderes populistas, agregando que donde existen sistemas de partidos institucionalizados estos controlan la selección de los candidatos para jefe de gobierno. Los sistemas institucionalizados dan forma, moderan y también limitan la articulación de intereses sociales, los cuales otorgan legitimidad al sistema más allá de la coyuntura. Los autores encuentran correspondencia entre gobernabilidad y sistemas institucionalizados, por un lado, e incertidumbre en el gobierno con la falta de institucionalización de los sistemas de partidos, por otro. En cuanto al número de partidos y la polarización ideológica, los autores usan el número efectivo de partidos de Laakso y Taagepera (1979), desestimando la forma de contar partidos relevantes utilizada por Sartori, y reconocen la falta de medios precisos para medir el grado de polarización ideológica. Encuentran para Uruguay un número efectivo de partidos de 3,3 para 1989, y una polarización ideológica moderadamente alta a partir de un análisis cualitativo. Se puede decir que el nivel de institucionalización encontrado por Mainwaring y Scully se mantiene hasta nuestros días.

Mirza, Christian Adel. Capítulo III. Sistemas políticos y movimientos sociales: dos realidades interpenetradas. En publicación: Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina: la construcción de nuevas democracias. Christian Adel Mirza

CAPÍTULO III

SISTEMAS POLÍTICOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES: DOS REALIDADES INTERPENETRADAS

Programa Regional de Becas CLACSO, Buenos Aires, Argentina. 2006. ISBN: 987-1183-45-3. Disponible en la web:
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/mirza/partellcap3.pdf>
Fuente: Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la red CLACSO
<http://www.clacso.org.ar/biblioteca>

HEMOS SUBRAYADO CON INSISTENCIA la necesidad de examinar los vínculos entre los movimientos sociales y los sistemas políticos para obtener al menos algunas pistas o señales acerca de la evolución y el desarrollo de las democracias latinoamericanas en las dos décadas pasadas. Oportunamente señalamos la conveniencia de establecer ciertas correspondencias entre la acción social colectiva y las variaciones registradas muy especialmente en los sistemas de partidos y las instituciones más típicamente democráticas, para intentar adelantar algunas opiniones y valoraciones acerca de eventuales itinerarios en los países alcanzados y por extensión en el resto del subcontinente latinoamericano. Las hipótesis que propusimos focalizaban sus argumentos en la idea de una renovación de los papeles protagónicos de los movimientos sociales y su cenit alcanzado en escenarios en los que los partidos políticos y otras instituciones de la democracia representativa precisamente se ubicaban en su nadir sociopolítico. Uno y otro fenómeno responden, a nuestro juicio, a la intersección entre la desinstitucionalización y la deslegitimidad social profunda del sistema de partidos que, al mismo tiempo, contribuyeron a la emergencia, consolidación y revigorización de la sociedad civil organizada a través de sus movimientos sociales más relevantes. Así, podría mencionarse que la fragmentación y creciente debilidad de los partidos políticos en Ecuador, junto con la escasa capacidad de las organizaciones sindicales clásicas para enfrentar

los nuevos retos, producidos principalmente a consecuencia de un modelo económico neoliberal aplicado tardíamente, produjo a mediados de los años noventa el rebrote del movimiento indígena. Así, la CONAIE se plantó en el terreno como el actor principal de la resistencia, la rebelión e intransigencia ante los avasallamientos contenidos durante décadas por ofertas de negociación convertidas en señuelos para impedir la protesta de los indígenas, los campesinos y los sectores históricamente excluidos en Ecuador.

Por otro lado, para desmentir a quienes pensaban que el movimiento obrero argentino estaba quebrado y derrotado, surgieron las novedosas formaciones en Argentina, como la CTA, consagrando una concepción horizontal y mucho menos burocratizada, la afiliación directa como aporte novedoso a las modalidades de adhesión y organización sindical, así como una autonomía que la central sindical asociada al peronismo –la CGT– no tenía. Casi simultáneamente surgía un Movimiento Piquetero, aún disperso, multifacético y plural, que ocupó y mantiene aún hoy un espacio significativamente importante en la realidad sociopolítica argentina.

El análisis exhaustivo y desagregado por país es informado por datos de la evolución en la confianza de las instituciones democráticas (en particular partidos políticos, Parlamento y Poder Ejecutivo), así como por la evolución del grado de satisfacción con la democracia, para los cuales nos remitimos a los cuadros y gráficos incluidos en el Anexo I, construidos en base a datos del Latinobarómetro. Para los datos electorales se solicitó información al Banco de Datos de la Facultad Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Uruguay).

ARGENTINA

Durante décadas, el sistema político argentino estuvo caracterizado por el bipartidismo centrado en el Partido Justicialista (peronismo) y la Unión Cívica Radical (UCR), con un predominio claro del primero en el ejercicio del gobierno. Las sucesivas interrupciones de la democracia en varios tramos de la historia contemporánea argentina culminaron en la década de los setenta con el quiebre producido en 1976, y luego con la restauración de las instituciones democráticas y el regreso de los partidos políticos al primer plano de la reconstrucción nacional, en 1983. Más tarde, luego de la anticipada renuncia del Dr. Raúl Alfonsín (ex presidente por la UCR), sobrevino una década de hegemonía peronista, pero con la impronta del “menemismo” (en alusión al presidente Carlos S. Menem), que impulsó hasta 1999 un extenso y profundo programa de reformas estructurales, y un Plan de Convertibilidad (“un peso, un dólar”), sobre la base del recetario más ortodoxo del neoliberalismo (contradictorio, por cierto, con la tradición peronista). En ese

año, la UCR reconquistaba el gobierno de la mano de una coalición con sectores políticos de centroizquierda, que convergió en la Alianza liderada por Fernando de la Rúa. Triste final para dicho presidente, que hubo de abandonar la Casa Rosada tras los trágicos episodios de diciembre de 2001, momento a partir del cual la nación argentina ingresó en su fase más crítica desde la recuperación democrática en 1983. Cuatro presidentes en dos semanas hubieron de asumir la máxima Jefatura del Estado, para que finalmente el ex gobernador Duhalde asumiera el período de transición, culminado formalmente con la celebración de nuevas elecciones (2003), en las que resultó vencedor el ahora presidente Néstor Kirchner, representante del ala de centroizquierda o más “progresista” del Partido Justicialista.

En este contexto, la valoración de las instituciones democráticas por parte de la ciudadanía en general arroja saldos negativos. En primer lugar, la confianza en los partidos políticos pasa del 17% en 1996 al 8,3% para el año 2003, habiendo registrado su punto más bajo en el año 2002, con apenas 4,8% de valoración positiva. Vale decir que en siete años los partidos políticos redujeron de manera sensible (casi doce puntos) el grado de confianza por parte de la población. En segundo lugar, la confianza en el Parlamento (Congreso), pasa de un 25% en 1996 al 13,5% en el año 2003, lo que evidencia también, y en guarismos más alarmantes, la pérdida de legitimidad de la expresión paradigmática que tiene la arquitectura institucional de la democracia. En tercer lugar, la satisfacción con la democracia también registra un descenso significativo (sobre todo considerando el nivel del cual se parte), pasando de un 34,11% de la población que respondía estar satisfecho, a un porcentaje del 8% en el año 2002, pero que repunta al 34% nuevamente en 2003. En cuarto lugar, el porcentaje de la población que deposita su confianza en la figura del presidente o del Poder Ejecutivo aumenta de un 19,8% en 1996 a un 44,6% en 2003; claro está, después de haber sufrido una caída estrepitosa en los años 2001-2002 (6,6%) por razones bien conocidas. Agregamos, en quinto lugar, que la abstención electoral se mantuvo más o menos constante en el tramo comprendido entre 1996 y 2003. Es importante tener en cuenta que el promedio del número efectivo de partidos (NEP) del período es de 2,5 (consideradas las dos elecciones, 1999 y 2003).

Por último, si según la perspectiva de Mainwaring y Scully, el modelo argentino podía ser incluido en la categoría de sistema institucionalizado en 1995; pensamos que las variaciones de algunos de sus rasgos definitorios podrían dibujar una tendencia a ubicarse en la misma categoría pero con menor nivel de institucionalización, principalmente en función de dos indicadores: la solidez de sus organizaciones políticas (lealtad y alineamiento) y el grado de confianza y legitimidad en los partidos políticos (aspecto que ya analizáramos).

Durante los años noventa, el movimiento sindical registra una trascendente escisión que origina la fundación de una nueva central sindical (CTA, 1992), con una importante base de apoyo, no sólo conformada por organizaciones sindicales preexistentes, sino con amplios sectores de desocupados, grupos de raíz barrial o territorial, productores y profesionales de diversa extracción socioeconómica. Muy poco después surge con vigor el Movimiento Piquetero (MTD, 1996), a partir de la conformación de múltiples organizaciones (FTV, CCC, MIJD, MTD Aníbal Verón, MTR, entre otras), que aglutinan en su interior orientaciones diversas, que convergen sin embargo en la acción social colectiva concertada de un porcentaje muy relevante de los desocupados argentinos. En ambos casos, el nivel de organicidad es medio y alto, sobre todo el de la CTA, que presenta una fuerte estructuración y anclaje a nivel territorial. Para el caso de los MTD, existe aún un grado de fragmentación y dispersión que expresa aspectos favorables (más autonomía, horizontalidad y participación) y aspectos menos ventajosos, en términos de obtener mayor eficacia y coherencia como movimiento social. Sin embargo, el Movimiento Piquetero ha tenido una alta capacidad de convocatoria y movilización social, lo mismo que la CTA, coincidiendo en un discurso político que refleja como puntos en común el rechazo al modelo neoliberal, la reivindicación de la soberanía nacional y el enfrentamiento decidido a las políticas impulsadas desde el FMI, como así también una reafirmación democratizadora, que en el caso del Movimiento Piquetero pone fuerte énfasis en la participación y autogestión (como por ejemplo, el caso de la Coordinadora de Desocupados Aníbal Verón), y una clara connotación antisistémica.

Si consideramos la autonomía como variable dependiente, observamos que los movimientos sociales emergentes en la década de los noventa presentaron un grado mayor de autonomía respecto de los partidos políticos y el Estado que en décadas anteriores (aunque corresponde destacar que la labor y el despliegue del movimiento de derechos humanos jugó un papel significativo –sobre todo en los años ochenta– y no sujeto a las orientaciones provistas de modo heterónomo por los partidos políticos, sin desconocer lógicamente la influencia de las fuerzas de izquierda en el devenir de aquellos), aun cuando para el caso del Movimiento Piquetero debe señalarse la estrecha vinculación entre diferentes corrientes de la izquierda argentina con organizaciones de desocupados y, de manera más difuminada, con la CTA. Asimismo, la lógica de la demanda y asignación de los Planes Trabajar para jefas y jefes de hogar (subsidios directos) podría presuponer la existencia de vínculos de “dependencia moderada” respecto del Estado en sus diferentes niveles (nacional, provincial y municipal). De hecho, la denuncia de la acción de los *punteros* indicaría una conciencia clara de los dirigentes y militantes más activos, tendiente a combatir ciertas prácticas neoclien-

telares dentro del movimiento de desocupados. De todos modos, la muy alta capacidad de convocatoria y movilización, tanto de la CTA como de los piqueteros, es un dato importante a la hora de establecer una conclusión acerca de las ataduras con el gobierno, y la amplitud de la capacidad de decisión y definición de estrategias sociopolíticas de los movimientos sociales emergentes.

En suma, a nuestro juicio hay suficiente evidencia para establecer una correspondencia entre la fragilidad y el debilitamiento de la confianza en las instituciones democráticas en Argentina y su efecto “promotor” de una mayor densidad de la acción social colectiva, expresada en los movimientos sociales que surgen y se consolidan en el mismo período de decaimiento del sistema político. Son movimientos sociales más autónomos, que disputan los campos de la representatividad y legitimidad a los partidos políticos, en algunos casos (aunque minoritarios) con vistas a sustituirlos o –al menos– competir con ellos en la arena propiamente política electoral (candidatura de Luis D’Elía en Buenos Aires, y el entonces anuncio de Raúl Castells para la contienda nacional del año 2004). El discurso alerta acerca de la flaqueza y degradación de la democracia, pero en clave de su recuperación, renovación o refundación, en tanto se advierte su trascendencia y su carácter de irremplazable como sistema de convivencia, resolución de conflictos y participación ciudadana. Sin embargo, se adjuntan otros conceptos a la democracia: se la adjetiva como democracia participativa y al servicio de las grandes mayorías que se encuentran ajenas a los circuitos de las elites de partido y de gobierno.

Los clivajes del conflicto social están determinados por los impactos de una política económica y un modelo excluyente, que arrojó a miles de argentinos a la condición de “innecesarios” para la producción capitalista (se reclama por trabajo digno y no tanto contra la explotación); la congregación policlasista de los movimientos obliga a redefinir la ecuación de los antagonistas, y empuja a la articulación de actores sociales de diversa naturaleza pero cuyos intereses coinciden en aspectos esenciales. Las plataformas sociales ampliadas (coordinaciones programáticas, acciones sostenidas de manera temporal, confluencia en movilizaciones sociales masivas) restablecen las confianzas entre movimientos sociales, y refuerzan las capacidades de respuesta y propuesta ante los demás actores sociales y políticos. Asimismo, los sectores o partidos políticos de centroizquierda e izquierda se asoman a una realidad mucho más dinámica y lábil, intentando constituirse como canal y vocería de las demandas sociales, al mismo tiempo que –a partir de la reconfiguración del mapa político en el año 2003– recomponen sus vínculos con los movimientos sociales desde una perspectiva común en el sentido de transformación del modelo, aunque con dife-

rencias respecto del objeto mismo del cambio (la política, la economía, la cultura) y sus alcances.

BRASIL

La evolución democrática de Brasil, también –como en otras naciones latinoamericanas– fue interrumpida por efecto de una dictadura militar en 1964, prolongándose el período autoritario hasta principios de los ochenta; sin embargo, la recomposición del sistema político no implicó la restitución plena del esquema predominante previo al golpe de Estado. Conviene traer a colación la campaña por “Directas Ya”, en 1984 –durante la etapa de transición–, en reclamo de elecciones presidenciales por votación popular y no por delegación en colegios electorales; en tal sentido, y pese a las importantes y masivas marchas por las principales ciudades de Brasil y una movilización generalizada, la oposición y los movimientos sociales emergentes no consiguieron su objetivo, aunque fueron el inicio y un estímulo a los sectores sociales y políticos de oposición para su creciente fortalecimiento. Finalmente, recién en 1989, después de veintinueve años, se llegó a la primera elección presidencial por voto popular. El triunfador en aquella ocasión fue Fernando Collor de Mello, luego acusado por corrupción y suspendido en sus funciones para dejar en su lugar al vicepresidente, Itamar Franco, cuyo ministro de Hacienda se convirtió poco tiempo después en el presidente de Brasil por dos períodos consecutivos y por una amplia mayoría. Fernando Henrique Cardoso, efectivamente, sería el primer mandatario entre 1994 y 2002, hasta la asunción de Lula da Silva en enero de 2003. El sistema político cambió de manera sustantiva en las últimas dos décadas, desde un predominio de fuerzas políticas de la derecha (algunas de las cuales aferradas al pasado autoritario) y centroderecha (con retórica convincente y eficiencia gubernativa), a una prevalencia de los sectores de centroizquierda e izquierda, encabezados por el partido mayoritario, el Partido de los Trabajadores del ex líder sindical metalúrgico Lula da Silva. Si consideramos la evolución del número efectivo de partidos, veremos que se mantiene un perfil de sistema multipartidario moderado con tendencia a la fragmentación; así, el valor NEP para 1994 era de 2,7 y para el año 2003 de 3,5, con una presencia muy fuerte del PT, pero en alianza con otros partidos y fuerzas de centro y de izquierda neta.

Respecto de los indicadores de confianza en los partidos políticos, partimos de un 16,9% en 1996, que pasa a situarse en un 15,8% en el año 2003; un descenso mínimo, lo que podría asimilarse a un valor constante en el período considerado (una media de 17,6%). En relación con la confianza en el Parlamento, los datos disponibles nos ilustran respecto de una variación positiva, esto es, un incremento importante

del nivel de confianza, que pasa del 19,4% en 1996 a un 28,5% en el año 2003. En referencia a la confianza de la ciudadanía en el Poder Ejecutivo o en la figura del presidente, identificamos un incremento que va de un 25,1% en 1996 a un 42,3% en 2003, registrándose dos saltos leves a la baja, uno en 1999 y otro en 2002, pero que pueden considerarse poco significativos. La conclusión preliminar se aproxima a una alta valoración del papel que juega la Presidencia, obviamente muy asociado a la persona que desempeña el máximo cargo de gobierno (Cardoso en sus dos períodos de gobierno y, para el año 2003, el nuevo mandatario que representa al PT, Lula da Silva).

En cuanto a los niveles de satisfacción con la democracia, los datos señalan un descenso mínimo, que va del 21,1% en 1996 a un 21% en 2002, lo que implica una variación porcentual absolutamente irrelevante, aunque consideremos ambos porcentajes bajos en la consideración del sistema democrático correlacionada con la expectativa social de la población (esto es, el desempeño del conjunto de sus instituciones y sus resultados plausibles en términos de mejora de la economía y de la calidad de vida de los ciudadanos). Por último, destacamos una alta participación electoral en el período de análisis, con un 76,85% de ciudadanos habilitados que concurren a las urnas en 1994, un 81,03% que participaron en los comicios de 1998 y un 79,53% que lo hicieron en las últimas elecciones del año 2002 (vale decir, con los registros más altos, después de Uruguay y Argentina).

Al examinar el sistema político brasileño desde la perspectiva del modelo de institucionalización de Mainwaring y Scully, observamos que para 1995 este era caracterizado en la categoría de *incoativo*, en función de su regularidad poco evidente, de las variaciones en el núcleo de lealtades y alineamientos que nutren la solidez de las organizaciones políticas, y la ausencia de raíces profundas de las colectividades partidarias en la sociedad. Estos rasgos parecieran ir modificándose en los últimos ocho años, lo que nos exige al menos establecer como hipótesis que el sistema político en Brasil se encontraría transitando una fase de creciente institucionalización.

Si bien los datos examinados en cuanto a la evolución de los indicadores de valoración de las principales instituciones democráticas no alcanzan a la década de los ochenta, razón por la cual no podemos correlacionarlos directamente con la emergencia o el surgimiento de los movimientos sociales analizados, sí establecemos comparaciones contemporáneas respecto del período comprendido en el tramo 1996-2003, coincidente con el primer y segundo gobiernos de Cardoso y con una etapa de mayor institucionalización, según nuestro marco de análisis. Conviene recordar que, para Mainwaring y Scully, el sistema *incoativo* se caracteriza por el bajo nivel de institucionalización, alto grado de fragmentación del sistema de partidos, raíces poco profun-

das y extendidas de las organizaciones políticas, e inestabilidad global del sistema político.

Los movimientos sociales que consideramos son contemporáneos en su nacimiento y primer desarrollo: tanto la CUT como el MST surgen en 1983 y 1984 respectivamente, en tiempos de la transición democrática y la reconstrucción del esquema constitucional de derecho. La CUT como central de trabajadores se constituyó como principal y casi único referente del movimiento sindical de la nueva generación renovadora, removiendo viejas prácticas de tutelaje y dependencia del sistema político (partidos y gobierno). A lo largo de su desarrollo, la CUT logró posicionarse como fuerza alternativa y genuina representante de la clase obrera brasileña, consolidando un alto grado de organicidad, convocatoria y movilización social, pese a un decaimiento en los primeros años de la década del noventa. Por su lado, el MST logró expandir su influencia a prácticamente todo el territorio, tejiendo una red inmensa de pequeños y medianos núcleos de campesinos sin tierra, acampantes, productores y colonos. Su estructura orgánica es sólida, expandida aunque no burocratizada, y comparte el discurso político con la CUT en términos de interpelar el modelo neoliberal. El eje de la reforma agraria construye un discurso que trasciende el mero reparto de tierras, para reclamar la necesidad de una profunda transformación de las estructuras productivas en el marco de un proyecto de desarrollo sustancialmente diferente. Ambos movimientos sociales se proclaman antiimperialistas y defienden la soberanía nacional; la CUT hace hincapié en la lucha de clases y en la idea de un socialismo como meta final; los dos valoran la democracia y la enmarcan en proyectos de transformaciones profundas de la sociedad y el Estado. Podríamos aseverar que tanto la CUT como el MST asumen un perfil de movimientos antisistémicos, en especial el MST, que ha generado una capacidad de articulación de base muy grande, con correlatos de prácticas sociales participativas autogestionarias.

El sistema político, según nuestra interpretación, estaría atravesando una fase de transición entre la escasa institucionalización de los ochenta (incoativo) a un modelo institucionalizado en los inicios del siglo XXI, mostrando simultáneamente una tonificación y un mayor despliegue de la acción social colectiva en dicha fase –mérito obviamente de la población y de los trabajadores, pero acicateados por un clima propicio al desarrollo y crecimiento de actores sociales mucho más contestatarios, propositivos en términos de proyectos societales de envergadura–. La clave para su posterior evolución refiere a la capacidad de mantener la autonomía social sin dejar de ejercer sus fueros en el terreno sociopolítico. De esta manera, examinando el caso del MST, coincidimos con muchos analistas que ponen de relieve su autonomía casi como un valor intrínseco y aprehendido por el conjunto de sus

dirigentes, cuadros y militantes sociales. Ello les permite obtener mayores réditos de legitimidad y credibilidad popular; al mismo tiempo que posicionarse como actor social en su relación con el Estado y los partidos políticos, en particular con el actual partido de gobierno, el PT, el cual evidentemente cuenta con una enorme base de apoyo y respaldo en aquel y en otros movimientos sociales.

No subestimamos por cierto ni la complejidad ni las contradicciones generadas por la asunción del gobierno de un partido político nacido y madurado en la faena opositora. Sobrevienen un conjunto de problemas nuevos, tanto para el PT como para los dos movimientos aquí estudiados, ambos con vínculos más que estrechos, profundamente imbricados y amasados en tiempos de la transición democrática, como en las recientes luchas en contra de la aplicación del recetario neoliberal. Aquella autonomía estaría jaqueada si desde el Estado, como desde el Partido de los Trabajadores, las presiones para el realineamiento de los actores sociales se tornaran insostenibles y lesivas a sus intereses específicos. Precisamente, el debate actual ha ocasionado algunas fricciones entre las diversas corrientes dentro del movimiento sindical, aglutinado principalmente en la CUT, y en sintonía con algunas posturas y críticas en el año 2003 provenientes del seno del PT, originando a su vez conflictos entre sus fracciones mayoritarias y minoritarias.

ECUADOR

Después del período militar en los años setenta, y tras la recuperación de la democracia, asumía en 1979 el entonces líder de la socialdemocracia, Jaime Roldós, que intentó generar una política de integración de los sectores sociales marginados o excluidos de las zonas rurales y urbanas más empobrecidas, en el marco de un relacionamiento bastante dificultoso con el Parlamento y la oposición. A su muerte, en un accidente aéreo en 1981, asumió el vicepresidente Osvaldo Hurtado, y el país ingresó en una crisis económica y social aguda, que facilitó el acceso al gobierno de los partidos más conservadores que ejercieron el poder durante la década de los noventa, entre cuyos mandatarios recordamos a Sixto Durán Ballén, quien puso en marcha un plan de privatizaciones de las principales empresas estatales y una política de ajustes fiscales y estructurales de cuño neoliberal (flexibilización y desregulación del mercado de trabajo, reformas laborales). Poco después asumía el populista Abdalá Bucaram, luego depuesto por el Congreso por razones de incompetencia intelectual (fue declarado “insano” mentalmente y luego destituido). De esta manera llegaba –tras las elecciones del año 1998– el líder socialcristiano Jamil Mahuad, quien enfrentaría también una aguda crisis económica y financiera (a la que intentó resolver con la dolarización completa de la economía ecuatoriana), con severas re-

percusiones sociales, provocando una de las revueltas populares más furibundas, y su posterior caída en el mes de enero del año 2000. Luego del período de transición aceptado por las fuerzas de oposición, se celebraron las elecciones del año 2002, en las cuales finalmente resultó triunfador el coronel Lucio Gutiérrez, con el apoyo del movimiento indígena representado por una fuerza política, el Movimiento Pachakutik (MUPP), que aceptó integrar el gabinete del novel presidente. Pocos meses después, las discrepancias visibles entre los aliados y la Sociedad Patriótica 21 de Enero (oficialista) dieron lugar al retiro del MUPP del gabinete de Gutiérrez en el año 2003.

Al analizar los indicadores de confianza en los partidos políticos, constatamos una fuerte caída, del 18,6% en 1996 (ya con registros bajos) al 8,3% en el año 2003. En la evolución de la serie no encontramos ningún momento de repunte, sino una tendencia descendente, tal vez más pronunciada entre los años 1996 a 1999. Con relación a la confianza en el Parlamento, los datos son también elocuentes: un 26,9% en 1996 y apenas un 5,8% en 2003, diferencia abrumadora que pone en evidencia la paupérrima valoración de la ciudadanía ecuatoriana respecto de una de las instituciones emblemáticas de la democracia. Si consideramos ahora el grado de satisfacción con la democracia, el porcentaje en 1996 se ubicaba en 33,2%, mientras que para el año 2003 (últimos datos disponibles del Latinobarómetro) había bajado a 16%, lo que representa una caída de más del 50% en siete años de ejercicio de las instituciones democráticas. Al examinar los resultados relativos a la confianza en el presidente, los datos arrojan también un decrecimiento notable, del 34,3% en 1996 al 9,9% en 2003. Desde la perspectiva del modelo de institucionalización, el sistema ecuatoriano se define como incoativo, con alta fragmentación del sistema de partidos (NEP = 5,8), inestabilidad en los últimos diez años, pérdida sustantiva de la legitimidad y confianza en los partidos políticos, pérdida de confianza en prácticamente todas las instituciones democráticas, degradación de la solidez de las organizaciones políticas (dislocamiento de la identificación con los partidos históricamente más representativos, desalineamiento y débil mantenimiento de las lealtades), todo lo cual contribuye a la generación de opciones nuevas y diferentes (Sociedad Patriótica 21 de Enero, MUPP).

Del lado de los movimientos sociales hemos estudiado el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), cuyo origen se remonta al año 1975, y a la CONAIE, cuya emergencia como movimiento indígena se visualiza en 1986, aun cuando otras formaciones del indigenismo autóctono pueden rastrearse en décadas anteriores. El movimiento indígena salta a la escena pública, sobre todo a partir de sucesivos levantamientos, desde el primer año de la década del noventa, para situarse claramente como un interlocutor insoslayable para el sistema político todo (parti-

dos, Parlamento, gobierno). Presenta una alta capacidad de convocatoria y movilización social, a diferencia del FUT, el cual fue perdiendo peso específico en el concierto de los movimientos sociales ecuatorianos, aunque en numerosas ocasiones ha acompañado y coordinado movilizaciones conjuntas con los indígenas y campesinos. Fuertemente organizado el movimiento indígena alrededor de la CONAIE, de arraigo social en las capas más bajas y marginadas, también a partir de su discurso y práctica se ha erigido en representante de una porción muy grande de la población ecuatoriana, más allá de las diversas agregaciones étnicas. El discurso antineoliberal, antisistémico, apunta mucho más allá de la reclamada reforma agraria y propone una transformación institucional del Estado, radical y profunda, sustentada entre otras ideas en la plurinacionalidad, el respeto a la diversidad multicultural, la autodeterminación y territorialidad, la necesaria democratización del poder y un modelo económico (de tipo comunitarista) situado en las antípodas del actual esquema capitalista individualista. Por otra parte, la autonomía de la CONAIE ha sido su rúbrica durante los años de su gestación, crecimiento y desarrollo, aun cuando subyace la incertidumbre respecto de cómo se habrá de dirimir finalmente su imbricación con el movimiento Pachakutik, hecho casi “a su medida” como instrumento político junto con otras organizaciones populares.

La controversia emanada de sus compromisos con la gestión del gobierno del presidente Lucio Gutiérrez admite varias lecturas, todas polémicas; o se interpone el movimiento indígena en la dilucidación de la autonomía reivindicando su “paternidad” (en consecuencia, la autonomía de la CONAIE prevalece ante el instrumento partidario), o bien se produce un nuevo dislocamiento a partir de la definición de autonomía en favor del movimiento político. En cualquiera de las hipótesis, la CONAIE podría preservar su autonomía como actor social, en la medida en que se distingan las lógicas de uno y otro actor en la arena sociopolítica. El FUT, en tanto, posee un historial más frondoso, pero ha perdido eficacia y parte de su equipamiento de cuadros para suscitar y movilizar apoyos masivos de la clase obrera, amén de padecer los efectos del modelo neoliberal en la reestructuración de la industria nacional, y la reinserción productiva en los circuitos de la economía mundial (lo que ha mermado notablemente su tasa de afiliación). El desmantelamiento de los factores socioculturales y económicos que favorecían una articulación de la clase obrera organizada, a lo que se agrega una normativa laboral que le resultó perjudicial y una responsabilidad propia por la dificultad de encontrar opciones innovadoras en las formas de organización, estrategias de lucha y convocatoria social, hacen del FUT un actor social débil, aunque todavía presente. Los clivajes giran en torno a la distribución del poder político y económico; a los papeles del Estado y su función de integración (Estado nacional o plurinacio-

nal), también en torno a la hegemonía de las clases dominantes en su disputa con las clases subalternas, toda vez que estas han verificado en el terreno confrontacional su capacidad de cambiar el rumbo político, al menos parcialmente.

Sostenemos la existencia de una correlación efectiva entre pérdida de confianza en las instituciones democráticas y un mayor desarrollo de la acción social colectiva; en el caso de Ecuador el ejemplo de la CONAIE nos parece ilustrativo. Asimismo, la mayor autonomía del movimiento indígena revela una capacidad de superar holgadamente las fronteras y cotas marcadas por la reivindicación particularista y las demandas singulares, para traducir un conjunto de propuestas, marcos de acción y prácticas sociales en un proyecto que restituye la esencia de la democracia: participar y decidir con tolerancia y respeto a la pluralidad. El movimiento indígena no abjura del sistema democrático, sino que reniega de “un sistema democrático” a todas luces imperfecto e incompleto, ajeno en gran medida a las vicisitudes de la enorme mayoría pauperizada. La consolidación de la CONAIE y la decisión de participar en la contienda electoral constituyen un buen argumento para demostrar que, cuando el sistema de partidos no responde las expectativas de la ciudadanía, los movimientos sociales que de ella surgen, asumen una función similar o emparentada con la de los partidos políticos.

URUGUAY

La dictadura militar abarcó más de una década, desde 1973 hasta la restauración de la democracia en 1984, dejando un lastre, en consonancia con su prédica y práctica del terror, que la heredó tristemente con sus pares en el Cono Sur. Pasada la época del autoritarismo, a partir de la resistencia civil y política se desencadenó un proceso remozado de recuperación de las aptitudes del sistema político, que representaban esperanzas en la conformación de consensos para reconstruir el país desgarrado. La vitalidad y efervescencia de la sociedad civil, fruto del empuje de movimientos sociales (el sindicalismo joven, el movimiento cooperativo de vivienda, el movimiento estudiantil, además de una miríada de organizaciones territoriales o vecinales, junto con organizaciones no gubernamentales y los movimientos por verdad y justicia), coadyuvaron de manera fundamental a la retirada de los enclaves autoritarios y posibilitaron una salida pacífica de los militares.

Luego se sucedieron de manera consecutiva cuatro períodos de gobierno de los partidos tradicionales (conservadores); el sistema de partidos se recompuso y pasó de una primera fase (hasta 1989) de neto predominio del formato bipartidista, a una fase caracterizada por el pluripartidismo moderado (en virtud del avance de la coalición de izquierda), para entrar en una tercera fase (1999-2004) signada por la

tendencia a reconfigurarse un nuevo formato bipartidista con otros actores políticos (de un lado una amplia coalición de centroizquierda y del otro un “partido conservador” desdoblado en las dos formaciones históricas, ya muy disminuidas), que intentan retener los clivajes del poder mantenidos desde los tiempos fundacionales de la nación y el Estado. Sin duda, se trata de uno de los sistemas más institucionalizados de América Latina, según el modelo de Mainwaring y Scully, por poseer rasgos de fuerte identificación partidaria, regularidad –incluso con la irrupción de las fuerzas de centroizquierda– y enraizamiento en la sociedad, y cuyas organizaciones políticas aún mantienen cierta reserva de credibilidad y confianza, pese a la reciente evolución de los indicadores que reseñamos a continuación.

En primer lugar, la confianza en los partidos políticos pasa de un 31,6% en 1996 a un 17,9% en 2003, lo que reporta variaciones importantes, explicables por el descenso abrupto a partir del año 2002 en función del colapso financiero acaecido precisamente ese año. En segundo lugar, la confianza que registra el Parlamento da cuenta de un descenso agudo, sobre todo –y en correspondencia con lo señalado para los partidos– en el año en que se desata una de las peores crisis económica y social; es así que el nivel de confianza pasó de un 37,8% en 1996 a un 26,5% en 2003. En tercer lugar, respecto de la satisfacción con la democracia, un 51,3% de la población manifestaba muy positivamente su satisfacción en 1996, mientras que para el año 2003 (últimas cifras disponibles) la proporción, sensiblemente disminuida, se ubicaba en un 43%, aun cuando el año anterior registraba un 53%. En cuarto lugar, sobre la figura del presidente, se observa que en 1996, un 35,7% expresaba confianza, en tanto que en el año 2003 esta confianza había descendido al 19,2%.

Los movimientos sociales analizados, el sindical (PIT-CNT) y el movimiento cooperativista de vivienda (FUCVAM), recobran en los años ochenta un papel protagónico, forjado en décadas anteriores durante la resistencia y la clandestinidad. Si bien es cierto que la CNT (1964) es la central sindical de origen y el PIT-CNT constituye de hecho su continuidad histórica, a los efectos de nuestro estudio consideramos un momento refundacional ubicado a principios de los ochenta (1983-1984), mientras que para el caso de FUCVAM el nacimiento formal se sitúa en 1970 y su “renacimiento” se asocia al año 1983, en tiempos de la transición democrática. Durante aquella etapa, los dos actores sociales se erigieron como baluartes no sólo de la resistencia a la dictadura, sino de la transición democrática, dando cuenta de un apego al derecho y las normas constitucionales, sobre todo en defensa de las libertades, y con capacidad de proponer alternativas plausibles para la recuperación económica y social del país. Sin embargo, el regreso al primer plano de la arena pública de los partidos políticos pareció desdibujar paulatina-

mente aquel rol protagónico de los movimientos sociales, confiriéndoles un marco de actuaciones en el territorio de las reivindicaciones sociales (muchas de ellas corporativas), al restablecerse los puentes entre los poderes del Estado y la sociedad civil.

La confianza en las instituciones democráticas tuvo su etapa de auge entre 1984 y 2001, a partir del cual identificamos un punto de inflexión que empuja dos indicadores –confianza en el Parlamento y en los partidos políticos– a la baja abrupta, aunque el grado de satisfacción con la democracia se mantuvo casi en los mismos niveles. Durante el último tramo que analizamos, 2001 a 2004, pueden observarse picos en la protesta social y sobre todo avances en la constitución de plataformas sociales amplias entre varios actores y movimientos, enfrentados a la peor crisis económica y social de los últimos treinta años. La campaña en contra de las privatizaciones que se iniciara con éxito en 1992 (que impidió la privatización de la empresa ANTEL), culminó exitosamente en el año 2003 con el referéndum que detuvo la Ley de Asociación de la empresa estatal ANCAP, con un margen de apoyo muy alto (más del 60% de la población). Ambas organizaciones sociales, FUCVAM y el PIT-CNT, jugaron un papel decisivo en la promoción, el impulso y en el resultado final de aquel plebiscito popular. A nuestro juicio, los dos movimientos sociales (trabajadores y cooperativistas) conservan un grado medio de convocatoria, aun cuando hayan perdido parte de sus reservas de movilización social en la década de los noventa.

La capacidad propositiva es alta, lo mismo que su estructura orgánica (asentada en núcleos de militantes, cuadros y dirigentes expandidos en las capas subalternas y medias). Son actores sociales ya consolidados y apanados en la lógica de la resistencia, primero al autoritarismo y luego al modelo neoliberal que intentó aplicarse a rajatabla, sobre todo a partir de 1990 (bajo el mandato de Luis Alberto Lacalle, y luego en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti). Su autonomía, permanentemente interpelada, es real y efectiva, pero mediatizada por fuertes vínculos entre los partidos de signo progresista o de izquierda, que en ocasiones generan recortes y zonas de incertidumbre respecto de la capacidad de establecer de modo autárquico las orientaciones estratégicas del movimiento sindical. El discurso tanto del PIT-CNT como de FUCVAM comparte la crítica al neoliberalismo, que reivindica la lucha de clases en el caso del movimiento sindical, y la autogestión social en el caso de FUCVAM. Ambos enfatizan la necesidad de defender la soberanía frente a los embates del neocolonialismo o imperialismo norteamericano, denostando el modelo capitalista de producción y distribución de la renta (destructor del trabajo e inequitativo), con especial acento en la idea de una democracia que implique la participación ciudadana.

En términos de correlación directa entre descenso de los niveles de confianza en los partidos políticos y en otras instituciones de la democracia, no se registran hallazgos significativos traducidos en nuevos movimientos sociales emergentes (lo que no significa subestimar la existencia de una rica y plural variedad de organizaciones sociales de raigambre popular). No obstante, el sistema político uruguayo institucionalizado, con partidos políticos enraizados en la ciudadanía, conectados fuertemente con organizaciones sociales (sobre todo los partidos de centro e izquierda), que mantuvieron durante muchas décadas las lealtades y el alineamiento de los votantes y las elites, imprescindibles para su reproducción social, nos sugiere la pervivencia de una cultura política bien desarrollada, anclada en una alta valoración de su sociedad respecto de las normas de regulación del conflicto en el ejercicio de la democracia: el lugar para los movimientos sociales permanece en la clásica diferenciación de la esfera social pública y la esfera de la política institucional (disputa por el control del Estado y los aparatos burocráticos de gestión de políticas). Así, les caben a los movimientos sociales legítimas intervenciones desde la órbita de la sociedad civil, y menos en la órbita de la contienda política que dirige los elencos de gobierno. Los partidos políticos siguen despertando la adhesión ciudadana, aunque hayan perdido legitimidad en términos globales, y el Parlamento sea enjuiciado por sus falencias. Podríamos interpretar que la brusca caída del grado de satisfacción con la democracia a partir del año 2001 se asocia directamente con la fase económica recesiva y de sensible degradación del bienestar de la población; no obstante, los altos niveles que aún se registran estarían apelando a una convicción internalizada en la mayoría de la ciudadanía del “valor de la democracia” como el mejor sistema político, más allá e independientemente de toda circunstancia.

CHILE

Los análisis de los sistemas políticos y movimientos sociales en Chile, Paraguay y Venezuela habrán de utilizarse como casos espejos de los anteriores. El nivel de profundización es menor, pero de todos modos útil para un abordaje más general y concluyente en términos de tendencias para el subcontinente latinoamericano.

La dictadura chilena fue probablemente una de las más represivas y sangrientas del Cono Sur, instalada en el poder desde el año mismo del golpe de Estado, el 11 de setiembre de 1973, hasta el regreso a la institucionalidad democrática en 1989. La recuperación fue sin duda trabajosa e intrincada, al punto que varios analistas políticos caracterizan la transición a una democracia recortada o incompleta, con incrustaciones autoritarias en la Constitución vigente. De todos modos,

el primer gobierno democrático, a cuyo frente estuvo el democristiano Patricio Aylwin, surge de un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios (socialistas y demócrata cristianos), anudados en la Concertación Democrática. El mapa político se recompone así con un formato multipartidario tripolar y un esquema bipartidista *gobierno-oposición parlamentaria*, fuerte presidencialismo y mantenimiento de un número efectivo de partidos de 4,85 (PS, PPD, DC, RN, UDI), aun cuando la división tripartita sigue existiendo bajo una competencia bipolar temporal. El sistema anterior al período autoritario presentaba un esquema caracterizado por “gobiernos minoritarios con grandes proyectos de cambio sin mayorías o coaliciones estables; pluripartidismo polarizado; presidencialismo fuerte pero minoritario y finalmente un Estado centralizado y unitario” (Mirza, 2002). Los gobiernos sucesivos en Chile desde el primer triunfo de la Concertación fueron consolidando la primacía de los dos partidos antedichos y una articulación sostenida, sobre todo en la primera fase de la transición, con los movimientos sociales y actores emergentes de la sociedad civil (movimiento obrero, campesino, indígena, vecinal o de pobladores, derechos humanos, estudiantil, entre otros). No obstante, el lastre del autoritarismo pesa en la dinámica chilena, entre otros factores por las perturbaciones provocadas por la presencia del general Augusto Pinochet, el respaldo que este aún posee en las filas del Ejército, y las dificultades en dilucidar definitivamente la cuestión de los derechos humanos.

En cuanto al sistema político, teniendo en cuenta los indicadores de confianza en las instituciones democráticas, los datos son bien interesantes. En primer lugar, en referencia a los partidos políticos, la encuesta realizada por el Latinobarómetro indicaba que en 1996 un 27,3% manifestaba su confianza en ellos, en tanto que siete años después, en el año 2003, la cifra descendía al 13,4%, diferencia bastante significativa. En lo relativo al Parlamento, los datos arrojan también una caída de un 42,3% en 1996 a un 22,3, prácticamente la mitad; vale decir que se observa un deterioro considerable en la imagen de una institución específicamente propia del sistema democrático. Por otro lado, la confianza en la figura del presidente (Poder Ejecutivo en su máxima expresión, sobre todo en un régimen presidencialista como el chileno) pasaba de un 50,7% en 1996 (bastante elevado en comparación con los otros países) a un 47,2% en 2003, lo que de hecho no implica una pérdida sustantiva de confianza. Conviene aclarar, sin embargo, que en los registros de años anteriores el nivel de confianza estuvo bien por encima del 50%, alcanzado su tope en 1999 con un valor del 60% de la ciudadanía. Por otra parte, el grado de satisfacción con la democracia se ubicaba para 1996 en un valor del 27,6%, para situarse en un 33% en el año 2003 (según los últimos datos proporcionados por el Latinobarómetro), en rigor, una variación poco significativa. Siguiendo el modelo

de institucionalización de Mainwaring y Scully, Chile corresponde típicamente, junto con Uruguay, a la categoría de sistema institucionalizado, con un nivel alto de regularidad y estabilidad política, un sistema de partidos enraizado y con fuertes conexiones con las organizaciones sociales, y cuyas organizaciones políticas asumen un perfil de solidez, sustentado por la lealtad y el alineamiento de las elites y los votantes.

Se ha mencionado el movimiento mapuche y su primigenia vinculación con los partidos políticos, lo que a nuestro juicio inhibe su despliegue genuino y su conformación como movimiento social autónomo y consolidado. Merece subrayarse, no obstante, que los mapuches expresan sus demandas y reivindicaciones a través de varias organizaciones sociales, una de las cuales colocamos como ejemplo en nuestro estudio; se trata de Ad-Mapu. No todas las formaciones mapuches responden linealmente a las orientaciones de sectores o partidos políticos; lo que intentamos demostrar es que la influencia ejercida por estos puede llegar al grado de determinar de manera exógena las estrategias, luchas y orientaciones incluso normativas de los movimientos sociales, restándoles capacidad para generar contribuciones relevantes en el sistema democrático, al tiempo que reduce su legitimidad social. Aparentemente ello aconteció con Ad-Mapu, al menos en la etapa en la cual la disputa por su control hegemónico obturó las chances de crecimiento y maduración como actor social. Otros referentes en el movimiento mapuche intentaron emerger con una fisonomía propiamente autónoma; tal el caso de la Coordinadora Arauko-Malleko, muy activa en los últimos años, o el Consejo de Todas las Tierras, que sin embargo, por sus vacilaciones y cierta ambigüedad, no se constituyó aún en actor social de fuste. Todos ellos recalcan la necesidad de considerar seriamente el problema étnico-cultural de la población mapuche en el marco de una tendencia a subsumirse en la “cultura nacional chilena”. En síntesis, el movimiento mapuche cuenta con un importante potencial de activos socioculturales y organizativos, para perfilarse como actor social de primer orden en un escenario de movilización y articulación de sus diversas organizaciones representativas, a condición de no sujetarse a designios “externos” en el diseño de sus itinerarios programáticos y estratégicos.

Por su lado, la CUT adquirió un enorme relieve en los tiempos de la resistencia a la dictadura, y durante toda la fase de transición democrática. Esta central sindical se formalizó en 1992, aunque ya estaba constituida como movimiento obrero en los primeros años de la década del ochenta, recogiendo las banderas y acumulaciones de sus precedentes organizaciones sindicales (la histórica Central Única de Trabajadores, y más adelante la Coordinadora Nacional Sindical, surgida en 1975). Encuadrada en las coordenadas de la “cultura del consenso” generalizado en Chile, la CUT formuló una política dirigida a establecer

los parámetros de recuperación de los niveles salariales y de participación y acuerdo respecto del empleo y la reestructuración productiva con los gobiernos de la Concertación, la que condujo a mantener una predisposición al diálogo con el empresariado nacional y el gobierno como mediador, sobre el supuesto de sostener una transición con el menor grado de conflictividad posible, siempre que no se vulneraran los derechos de los trabajadores. En este caso, también funcionaron los arreglos políticos e institucionales con los partidos políticos de la Concertación, que contaban con un correlato de dirigentes y líderes sindicales afines. De hecho, la continuidad del modelo neoliberal iniciado tempranamente por el gobierno autoritario fue asegurada por los pactos suscritos entre el trabajo y el capital, y las intervenciones oportunas del Estado.

El sistema político poderosamente institucionalizado preserva la centralidad de los partidos políticos en el juego democrático y tiende a tamizar los conflictos sociales canalizándolos por la vía privilegiada de la negociación política, lo que podría explicar la relativa debilidad de los movimientos sociales en su capacidad de articular y liderar un proceso de expansión de la democracia, en una etapa signada –según hemos constatado– por la caída pronunciada de la confianza en los partidos políticos y en el Parlamento. La autonomía de la CUT es media en referencia al Estado y los partidos políticos; la actual coyuntura manifiesta una intencionalidad clara de los sectores más a la izquierda, orientada a influir mucho más activamente en las orientaciones estratégicas de la central sindical, abandonando la idea de “tregua” acordada y el diálogo para el consenso, fraguadas en los inicios de la transición democrática. Las últimas declaraciones públicas de la Central insinúan un camino de confrontaciones con el gobierno y los grandes grupos empresarios.

PARAGUAY

La larga y férrea dictadura del general Alfredo Stroessner en Paraguay y la apropiación de casi todos los resortes de poder (económico, social, político y cultural) por parte del Partido Colorado parecían no dar paso a ninguna fisura, que siquiera permitiera aprovechar los finos intersticios para intentar modificar el establishment totalitario conservador. Pese a la espesura de la trama burocrático-autoritaria y el manejo discrecional arbitrado tanto por el Partido Colorado como por las Fuerzas Armadas, en alianza perfecta de intereses y cosmovisiones ideológicas compartidas, la realidad de los últimos catorce años en Paraguay se ha visto convulsionada por acontecimientos episódicos, más que determinada por procesos de auténtica democratización. La caída del dictador no culminó necesariamente en el reparto plural del poder acumulado

durante décadas, sino en la autogeneración de contradicciones en la propia fuerza hegemónica del coloradismo.

El 3 de febrero de 1989 Stroessner fue derrocado por el general Andrés Rodríguez, quien inmediatamente convocó a elecciones en las que él mismo se postularía, obteniendo finalmente el triunfo en las urnas por una diferencia abrumadora. La oposición logró lentamente abrir espacios de participación, tanto a nivel político (cuya fuerza principal estuvo en el Partido Radical Liberal Auténtico de Domingo Laino) como a nivel social, con la formación del Movimiento Intersindical de Trabajadores, agrupaciones campesinas y otras organizaciones de la sociedad civil. Es recién en 1991, en ocasión de celebrarse las primeras elecciones municipales libres en más de cuarenta años, que las fuerzas opositoras conquistaron la alcaldía de Asunción (Carlos Filizzola) y nueve años más tarde, en el año 2000, el PRLA logró vencer, cuando se eligió el vicepresidente para suplantarlo al asesinado Argaña. Enfrentamientos entre facciones del Ejército, intento de golpe de Estado de Lino Oviedo, acusaciones por corrupción al presidente González Macchi, y el actual gobierno electo en 2003, también del Partido Colorado (aunque aparentemente se trata de una corriente del coloradismo más bien renovadora y más democrática en sus componentes y discurso), dan cuenta de la evolución reciente del proceso político paraguayo.

Según el esquema de Mainwaring y Scully, nos hallamos frente a un sistema político hegemónico en transición, en el que un partido predomina en el mapa político, en la gestión de gobierno, en el control del aparato estatal y en el manejo de las clientelas que sostuvieron su poder construido durante décadas de autoritarismo *manu militari*, aun admitiendo una cierta renovación en su interior y apertura a aceptar mayores grados de pluralismo. Según los datos registrados por el Latino-barómetro, la confianza en los partidos políticos se ubicaba en un 37% en 1996, para pasar a situarse en un 11,7% en el año 2003, lo que indica una pérdida importante en el período considerado. Al tener en cuenta la confianza en el Parlamento, visualizamos también un descenso notorio, desde un 41,6% de la población que lo valoraba positivamente en 1996 hasta un 13,3% en el año 2003, baja sustancial, como decíamos, en referencia a una institución paradigmática para la democracia. Si tomamos los valores correspondientes a la figura del Presidente, partimos del 39,8% de confianza en 1996 para llegar al 14% en el año 2003, que sólo registra una suba en 1998, cuando la confianza supera el 53% de la ciudadanía. Respecto del grado de satisfacción con la democracia, la evolución es decididamente negativa: pasó del 21,41% en 1996 a un magro 7% de la población que declaraba estar satisfecha con la democracia en 2003. Sin embargo, nos parece sumamente ilustrativo el dato de la abstención electoral; el porcentaje de la ciudadanía que concurre a votar en las elecciones (tomamos la referencia de las tres últimas) pasó de un 33,38% de

votos emitidos sobre el total de habilitados en 1993 a un 59,43% en 1998; a partir de dicho incremento notable podría inferirse que se produjo una revalorización de la instancia electoral y una intención clara de por lo menos –influyendo en la selección de los elencos de gobierno– participar de ese modo en los asuntos políticos del país. Es decir, la esencia de la democracia pervive en una de sus condiciones básicas o mínimas: la posibilidad de decidir votando, o la opción de elegir. Por último, el número efectivo de partidos para el año 2003 era igual a 3,5, luego de estar ubicada entre un 2 y un 2,9 desde 1993.

En cuanto a los movimientos sociales, los rasgos característicos de fragmentación, descoordinación, atomización y desarticulación estarían subsanándose en la medida en que las dos organizaciones campesinas más importantes, la Federación Nacional Campesina y la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), han logrado converger en un ámbito común de definiciones estratégicas, de luchas y movilizaciones populares. En los últimos años, conforme el modelo neoliberal fue adquiriendo dimensiones más perjudiciales para los intereses de las clases trabajadoras (obrero y campesina), el discurso político y la protesta social se volvieron más antineoliberales; basta recordar los capítulos de la movilización paraguaya en contra de las privatizaciones (con logros importantes en su haber). Asimismo, los diversos actores sociales han jugado un papel relevante en el escenario de turbulencias político-institucionales acaecidas en los últimos diez años, sobre todo en el caso de un remozado movimiento juvenil (de variado origen). El movimiento sindical, con momentos de auge y declive (sobre todo en la década del noventa), parece estar resurgiendo, fuertemente vertebrado en organizaciones de trabajadores del sector público (movilizados para frenar las oleadas de privatizaciones).

Los dos espacios de articulación social, la Plenaria Popular y el Frente Nacional de Defensa de los Bienes Públicos y el Patrimonio Nacional, finalmente acordaron la conformación del Congreso Democrático del Pueblo en el año 2002, lo que sin duda revela una maduración de plataformas ampliadas, que integran tanto a movimientos sociales como a sectores y partidos políticos de la oposición. También atravesados por la influencia de algunas corrientes de los partidos políticos de centro e izquierda, dichos movimientos aparecen con un grado importante de autonomía, expresada en la unidad construida a partir de un cruce de intereses sectoriales que no procuran la hegemonía de unos sobre otros, preservando, pues, ese margen de actuaciones no sujetas a designios exógenos. De todos modos, el nivel de organicidad es muy variado, en tanto que la capacidad de convocatoria y movilización social, si bien es significativa, no logra aun despertar acciones sociales masivas, salvo en marchas o cortes de ruta de campesinos. Hay, en consecuencia, algunas señales desde los movimientos sociales que

denotan una intencionalidad clara en aras de ocupar los espacios de partidos políticos que perdieron una base de legitimidad en el período considerado, pero sin lograr resultados plausibles, por su carácter anti-sistémico y portador de un proyecto democratizador (aún incipiente), y alternativo al esquema dominante.

VENEZUELA

Tras cuatro décadas de relativa estabilidad democrática, fundada en el acuerdo de Punto Fijo, del cual deriva el sistema político contemporáneo que ha sido caracterizado como de bipartidismo (Acción Democrática y COPEI), Venezuela sufrió un “sacudón” en 1989, anticipando el posterior desmoronamiento del statu quo establecido en 1958. Tras la sucesión de gobiernos en que alternaron los democristianos y la socialdemocracia, a fines de los años ochenta y a consecuencia de la dureza en la aplicación de medidas de corte neoliberal, y la corrupción expandida a todos los niveles del Estado y de los actores sociales corporativos, la sociedad venezolana ingresa en un tobogán que vertiginosamente precipita una sucesión de acontecimientos: primero los intentos de golpe de Estado en 1992, luego la crisis desatada por el enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez por acusaciones de corrupción, después el colapso de ambos partidos tradicionales en las elecciones del año 1998, y finalmente la irrupción del movimiento bolivariano liderado por Hugo Chávez Frías, que inaugura un nuevo ciclo en la política nacional.

Ciertamente mucho más convulsionada, esta nueva etapa implicó una ruptura drástica con un pasado anudado a la política del consenso, así como supuso el desmantelamiento de las estructuras sociales, culturales y políticas que tuvieron como resultado la postración de la enorme mayoría de la población en la pobreza y la marginalidad, en contraste con una elite cargada de privilegios y prebendas. Los dos partidos políticos que trazaron la vida de la nación venezolana en los cuarenta años de hegemonía dieron paso a la multiplicación de fuerzas políticas, algunas sin historial, en tanto que otras, reconvertidas o reagrupadas tras el colapso del sistema de partidos, intentaron suplir los vacíos dejados por aquellos. Si consideramos el modelo de Mainwaring y Scully, habremos de constatar que de aquel sistema institucionalizado ubicado por los autores en su máximo esplendor, con las calificaciones más altas, ya no queda nada o, mejor dicho, sólo las reminiscencias y estertores propios de una agonía no muy lenta. Así, luego de haber asumido la presidencia, Hugo Chávez tuvo que enfrentar una oposición civil y luego cívico-militar que desembocó en el golpe de Estado de abril del año 2002, encabezado por las dos corporaciones más poderosas (FEDECÁMARAS y la CTV, con la connivencia del Departamento de Estado norteamericano), ambas vinculadas estrechamente a

los partidos que gobernaron durante cuarenta años en Venezuela. Tras el retorno inmediato del presidente depuesto, la oposición no cesó en su intento de derrocar al gobierno de Chávez, al mismo tiempo que se movilizaba la población a favor, pero también en contra del presidente. La polarización es hoy en día el principal rasgo del sistema político, y establece una línea demarcatoria muy nítida entre chavistas y antichavistas, ciertamente en clave clasista.

Al examinar los datos del Latinobarómetro, observamos que la confianza en los partidos políticos pasó del 11% en 1996 a un 13,8% en el año 2003, evolución que expresa una tendencia ligeramente al alza, pero desde un punto de partida muy bajo. Sin embargo, la serie examinada muestra que hasta el año 2001 la tendencia iba en aumento, hasta alcanzar un 29,6% de confianza en los partidos políticos en ese año, lo que podría revelar una recuperación de la credibilidad (recuérdese que nuevas organizaciones políticas irrumpen en la competencia electoral, como por ejemplo el MVR). En segundo lugar, respecto de la confianza en el Parlamento, los datos indican una evolución semejante a la de los partidos políticos; es decir, una tendencia a incrementar la confianza desde 1996, con un 18,8%, hasta el año 2001, con un 36,9%, para luego caer fuertemente hasta situarse en el año 2003 nuevamente en un 18% de la población que valoraba positivamente la faena parlamentaria. En tercer lugar, en cuanto a la consideración del presidente, arranca la serie en un 16,3% de confianza en 1996, para pasar al 27,6% en el año 2003, lo que implica un aumento notable habida cuenta de las turbulencias sociales y políticas verificadas en el mismo período. Corresponde acotar, sin embargo, que el máximo valor alcanzado se ubicó en 1999 con un 68,3%, que coincide con la asunción del presidente Hugo Chávez, para luego iniciar un decrecimiento hasta llegar a los valores antes mencionados. Finalmente, con relación al grado de satisfacción con la democracia, en 1996 se expresaba satisfecho un 30% de la población, en tanto que en el año 2003 la proporción era del 38%. También interesante resulta esta serie, que evidencia una subida considerable en 1999, con un 54,5% de venezolanos satisfechos con la democracia, dato consistente si se lo compara con la confianza en el presidente.

En el campo de los movimientos sociales, el *caracazo* fue un hito del año 1989, y años más tarde, más movilizaciones en contra de la corrupción, paros y marchas; luego el colapso del sistema de partidos y la inauguración de un período de creciente dualización social y política, en el que se instala la antinomia chavismo-antichavismo. Este contexto de pérdida de confianza en los partidos políticos –como se señaló, de apenas un 11% en 1996– ya se advertía en encuestas divulgadas en el año 2000, con un alto porcentaje de la población que tildaba de corruptos “a todos los adecos y copeyanos”, que contrastaba con la valoración aún muy positiva del movimiento vecinal. Si bien este movimiento,

proveniente de las zonas urbanas medias y bajas, tuvo una etapa significativamente fuerte en las décadas del setenta y ochenta, donde aparece como referente de la sociedad civil organizada para democratizar los sistemas electivos, decae a principios de los noventa, para luego resurgir de la mano de los círculos bolivarianos y del Polo Patriótico, inspirados en una regeneración del tejido urbano, pero “funcionalizados” por los aparatos políticos del oficialismo –aunque una corriente de aquel movimiento vecinal ahora aparece vertebrada alrededor de Queremos Elegir, un actor social de reciente formación y más autónomo.

Los movimientos de buhoneros (vendedores ambulantes) y de pensionados y jubilados, que transitan por procesos de protesta y movilización social de carácter más reivindicativo, aparecen más recostados a la lógica del grupo de interés, menos estructurados y organizados, con un discurso volcado al reclamo por trabajo y restitución plena de sus derechos como ciudadanos. Cuentan con una buena capacidad de convocatoria y movilización, pero sus plataformas no asumen en la práctica un sesgo antisistémico. El movimiento estudiantil, retonificado, se percibe mucho más autónomo tanto respecto del Estado y del gobierno como de los partidos políticos de oposición, entonados por un discurso focalizado en el antiimperialismo y de inequívoco contenido antineoliberal. El movimiento sindical aparece ahora mucho más fragmentado y dividido por el eje que delimita, por un lado, una central sindical (CTV) alineada con la oposición y anclada en los antiguos lazos con el partido político AD (socialdemócrata) y, por otro, sindicatos y federaciones (algunos de muy reciente conformación) que responden a la línea prochavista, dejando poco margen para las corrientes autonomistas. Algo similar acontece con los movimientos campesinos y las diversas organizaciones gremiales de pequeños productores y cooperativistas en estado embrionario, muchas de las cuales nacen al abrigo y fomento del Estado.

En síntesis, los vínculos privilegiados entre las principales corporaciones, movimientos y actores sociales (sobre todo el movimiento obrero y el campesino) con los partidos políticos que hegemonizaron la vida política durante cuarenta años (1958 a 1998), en clave de “cuasi dependencia” orgánica y estratégica, impidieron una expansión autónoma de aquellos movimientos sociales en términos de contribuciones eficaces para la consolidación y reformulación del sistema democrático, después del colapso del sistema de partidos. Pareciera que, en particular, la otrora poderosa central sindical (CTV) hubo de ser arrastrada, junto con los partidos políticos, al barranco de la deslegitimidad social. El papel de la CTV en el frustrado golpe de Estado del año 2002 la dejó muy mal parada, generando el campo propicio para su división interna y fragmentación posterior. Las ataduras actuales de los nuevos movimientos sociales –en términos generales– con otras organizacio-

nes políticas de izquierda o proclives al MVR tampoco favorecerían el desempeño de un papel central en las controversias por el poder social y político. La polarización exacerbada entre el chavismo y el antichavismo no genera espacios de desarrollo autónomos (que no es lo mismo que la indiferencia de los actores sociales en tiempos de definiciones estructurales); antes bien, empuja nuevamente a la inhibición de potenciales aportes no mediados por el sistema político. Los clivajes giran en torno al poder de la élites vinculadas al capital y la disputa por el control de los recursos estratégicos (petróleo, tierras y recursos primarios), la democratización efectiva en la designación de los elencos de gobierno, el mantenimiento de privilegios y la reestructuración de las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad civil (nueva democracia participativa, reapropiación del territorio y formas asociativas de producción, revisión de los viejos mecanismos de redistribución de la renta, ensayo de nuevos patrones de desarrollo económico).

Para 1995 Venezuela se caracterizaba por contar con un sistema político altamente institucionalizado, con alta regularidad y estabilidad (y también alternancia en el gobierno), confianza y legitimidad, bien enraizado, sobre la base de fuertes conexiones con organizaciones sociales e identificación partidaria, con estructuras políticas sólidas en virtud del alineamiento, la disciplina y lealtad de las élites y los votantes. Este sistema ingresó, hace ya más de un lustro, en una profunda depresión y crisis, que le resquebrajó totalmente las plateas y pilares fundacionales. Dicho de otra manera, a partir de 1995 (tal vez antes) ingresó en una fase marcada por un sistema político incoativo, en el cual el sistema de partidos se desfondó completamente, para ubicarse en el año 2003, según los criterios e indicadores manejados por Mainwaring y Scully, en la categoría de sistema débilmente institucionalizado. No obstante ello, el modelo de análisis utilizado –tal como hemos señalado– no da cuenta cabalmente de las transformaciones radicales que se observaron en los últimos diez años en Venezuela. En esta zona de turbulencia, los movimientos sociales retomaron impulso, pero no el suficiente como para constituirse en interlocutores decisivos en el reordenamiento de las relaciones de poder. Las expectativas siguen aún depositadas en la capacidad del Estado para autotransformarse y, por derivación, transformar las estructuras arcaicas de una sociedad política que amanecía fosilizada en las postrimerías del siglo pasado. La centralidad del Estado forma parte de la topografía del conflicto político actual.

CUADRO 13
COMPARATIVO DE SISTEMAS POLÍTICOS 2003 (EN PORCENTAJES)

Perfil del sistema político	Confianza en el Parlamento	Confianza en los partidos	Participación electoral (última elección)	Sistema de partidos (NEP, última elección)	Confianza en los presidentes o el Ejecutivo	Satisfacción con la democracia
Argentina	13,50	8,30	79,38 (1999)	2,50 (1999)	44,60	34,00
Brasil	28,50	15,80	79,53 (2002)	3,50 (2002)	42,30	28,00
Chile	22,30	13,40	72,79 (1999)	2,20 (2000)	47,20	33,00
Ecuador	5,80	5,00	72,68 (2002)	6,20 (2002)	9,90	23,00
Paraguay	13,30	11,70	59,43 (1998)	3,50 (2003)	14,00	9,00
Uruguay	26,50	17,90	94,71 (1999)	3,10 (1999)	19,20	43,00
Venezuela	18,60	13,80	56,50 (2000)	3,40 (2000)	27,60	38,00

Fuente: elaboración propia con datos electorales y de Latinobarómetro (1996-2003).

CUADRO 14
MOVIMIENTOS SOCIALES Y SISTEMAS DE PARTIDOS 2003

	Argentina	Brasil	Chile	Ecuador	Paraguay	Venezuela	Uruguay
Sistemas de partidos	Institucionalizado, inestable.	Incoativo, con tendencia a la institucionalización.	Institucionalizado.	Incoativo, fragmentado.	Hegemónico en transición.	Con bajo nivel de institucionalización.	Institucionalizado.
Movimientos sociales	Autonomía alta.	Autonomía media y alta.	Autonomía media y baja.	Autonomía alta y media.	Autonomía media.	Autonomía media y baja.	Autonomía media.

Fuente: elaboración propia.

Mirza, Christian Adel. Capítulo I. Evolución de la región en su conjunto. El subcontinente y sus desafíos democráticos y sociales. En publicación: Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina: la construcción de nuevas democracias. Christian Adel Mirza Programa Regional de Becas CLACSO, Buenos Aires, Argentina. 2006. ISBN: 987-1183-45-3. Disponible en la web:
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/mirza/partellcap1.pdf>
Fuente: Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina de la red CLACSO

<http://www.clacso.org.ar/biblioteca>

PARTE III

UNA MIRADA EN EL HORIZONTE PRÓXIMO

TENTATIVAS PROSPECTIVAS, ESCENARIOS PROBABLES

CAPÍTULO I

**EVOLUCIÓN DE LA REGIÓN
EN SU CONJUNTO**

**EL SUBCONTINENTE Y SUS DESAFÍOS
DEMOCRÁTICOS Y SOCIALES**

TRAS LOS ENSAYOS neoliberales de los años ochenta y noventa, los efectos en casi todos los países considerados han sido devastadores, tanto de las respectivas economías como en términos de acrecentamiento de la pobreza, la exclusión y fragmentación social, el aumento de la brecha de la desigualdad y la inestabilidad de los sistemas políticos. Iniciado el siglo XXI, el mapa político en las naciones que consideramos se ha modificado profundamente, marcando una tendencia hacia la prevalencia de los sectores progresistas (ubicadas en el espectro ideológico hacia posiciones más o menos hacia la izquierda) que obtuvieron el gobierno por la vía electoral: en Argentina el “sorpresivo” giro de Néstor Kirchner hacia posiciones de izquierda; el triunfo del histórico líder Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil; el afianzamiento del poder de Hugo Chávez en Venezuela; el mantenimiento de la mayoría por la Concertación liderada por el presidente socialista Ricardo Lagos en Chile; el triunfo de Lucio Gutiérrez en Ecuador, con el respaldo inicial de las fuerzas progresistas; en Uruguay, aun cuando gobierna el presidente colorado Jorge Batlle, todo indica un avance sustantivo de la coalición de izquierda liderada por Tabaré Vázquez; en Paraguay, el presidente Nicanor Duarte Frutos expresa la visión de una corriente renovadora del Partido Colorado. Por otra parte, el gobierno de Uribe en Colombia sufrió un duro revés luego del fracaso del referéndum en octubre de 2003, en el que no se alcanzó el porcentaje necesario para la reforma de

la Constitución promovida desde el gobierno, así como con el triunfo de fuerzas progresistas de oposición en Bogotá y en otras regiones de Colombia. En Perú, el gobierno de Toledo se ha visto sacudido por movilizaciones sociales que le exigen el cumplimiento de los compromisos contraídos en la campaña electoral, y le cuestionan su acercamiento al gobierno norteamericano. En Bolivia, la caída del presidente Sánchez de Lozada tras el levantamiento y la revuelta encabezada por el movimiento campesino, fue sin duda el episodio más cruento y trascendente de fines del año 2003.

En líneas generales puede afirmarse que las corrientes que se opusieron al modelo neoliberal se han hecho fuertes en casi todas las naciones del subcontinente sudamericano, expresando la voluntad de cambio de sus correspondientes ciudadanías. Asimismo, los sistemas políticos, y más particularmente los sistemas de partidos, han registrado transformaciones importantes, no obstante haber sido sometidos con suerte dispar a fuertes cuestionamientos. Si en Argentina la consigna lanzada por los movimientos sociales casi espontáneamente de “que se vayan todos” los políticos y gobernantes auguraba cambios radicales de los elencos partidarios, los resultados posteriores indicaron una reconversión rápida del sistema y un reordenamiento del mapa de fuerzas en disputa. Varios de los “viejos” dirigentes políticos y legisladores mantuvieron sus cargos y posiciones, pese a la derrota contundente del menemismo. El triunfante en las elecciones del año 2003 fue el histórico Partido Justicialista, aunque también se registró una muy buena votación de las nuevas fuerzas políticas como el ARI, liderado por la diputada nacional Elisa Carrió, y la buena *performance* del también diputado de izquierda Luis Zamora, sobre todo en la capital del país. En Ecuador, la esperanza depositada en Lucio Gutiérrez se vio en parte frustrada tras el abandono de sus aliados del MUPP y la CONAIE, seis meses después de haber asumido responsabilidades directas en varios ministerios y otros cargos públicos. En ese período se discute en la interna de los movimientos sociales la estrategia de apoyo crítico al gobierno o de franca oposición, en el marco de algunas reformas que no convencen a quienes cuatro años antes habían contribuido decididamente a la caída de Jamil Mahuad. El sistema de partidos, más fragmentado aún, generó una pérdida del peso político de la socialdemocracia y el socialcristianismo, antes fuerzas de enorme peso en la cultura cívica ecuatoriana.

El panorama venezolano a más seis años de haber colapsado el sistema de partidos refleja una profunda dualización de la sociedad, cuya línea demarcatoria divide a los prochavistas de los antichavistas. Si bien los partidos históricos han sufrido una caída estrepitosa, la oposición al actual gobierno de Chávez se ha ido fortaleciendo conforme el nuevo modelo va impregnando todas las estructuras de poder social,

político y económico. La recolección de firmas del oficialismo y de la oposición, a fines de 2003, desembocó en la realización del Referéndum Revocatorio en agosto de 2004 con un contundente resultado a favor del presidente Chávez. En Uruguay, las opciones representadas por el Encuentro Progresista-Frente Amplio, coalición de centroizquierda e izquierda a cuyo frente está el candidato recientemente proclamado Tabaré Vázquez, arrojan un manto de incertidumbre para las pretensiones del continuismo del Partido Colorado o de su aliado estratégico, el Partido Nacional (ambos unidos en una coalición de gobierno hasta el año 2002), en las elecciones presidenciales y legislativas de octubre de 2004. Lo concerniente a la dimensión económica está pautado en el subcontinente por las tensiones provocadas, entre otros factores, por el intento de Estados Unidos de imponer el ALCA como el proyecto de integración de las Américas, bajo su tutela y conducción incontrastable. A ello se antepone un proyecto alternativo levantado por Brasil y acompañado por Argentina, Venezuela, Paraguay y más tímidamente por Chile. Las economías nacionales en la mayoría de las naciones sudamericanas probablemente retomen cierto impulso al crecimiento, aunque su sostenibilidad dependerá en cierto modo de los acuerdos alcanzados en el marco de los procesos de integración regional, que evidencian señales de retonificación (el MERCOSUR vuelve a ser relevante y prioritario, hay acercamientos entre bloques, Pacto Andino con MERCOSUR, más naciones asociadas a este último, etcétera).

En este panorama regional, los movimientos sociales han recobrado su magnitud al erigirse como vertebradores de la oposición a los proyectos neoliberales, sobre todo ante la debilidad de los sistemas políticos (más precisamente de los partidos políticos históricos), que han fracasado o menguado su capacidad de respuesta ante la crisis social y económica generada, cuyos efectos habrán de perdurar aún por largo tiempo. La degradación aguda de los activos sociales repercute obviamente en los pronósticos de recuperación a mediano plazo, incluso con una perspectiva de crecimiento económico para la región, en virtud de haber impactado en las generaciones más jóvenes y vulnerables.

Hemos afirmado que en la mayoría de los países estudiados las corrientes políticas más proclives a las transformaciones estructurales han ganado terreno de manera sostenida; aun así, los condicionamientos del punto de partida para operar los cambios persisten y establecen los límites para la instrumentación de aquellos cambios. Factores que dependen de las tendencias mundiales y regionales, tanto en función de las economías más poderosas, como de los centros financieros de mayor poder, así como de aspectos geopolíticos y culturales, harán sumamente intrincados los recorridos de los estados nacionales que en América Latina han dado un golpe de timón hacia políticas marcadamente distanciadas de las implementadas en la última década del siglo

pasado. Basta una mirada al caso brasileño o al argentino, países en los cuales la dura negociación con los organismos financieros internacionales incide directamente en los programas de recuperación social y económica, a veces “coaccionando” y agregando más restricciones a las posibilidades de promover desarrollos endógenos y genuinos. El peso de las deudas externas es todavía un lastre muy pesado, y las opciones de refinanciación no aligeran sensiblemente los compromisos de amortización, tanto por los servicios anteriores como por los nuevos préstamos que tienden a cubrir las deudas pasadas, en una suerte de espiral interminable que no desata los nudos de la dependencia.

Es evidente que las demandas acumuladas tras los largos períodos de postración de la mayoría de las poblaciones seguirán presionando a los gobiernos electos; demandas y expectativas acrecentadas tanto por la propia necesidad material como por la percepción de una sensibilidad cualitativamente diferente de los responsables en la definición de las políticas públicas respectivas. Por tanto, no habrán de disiparse los núcleos del conflicto: la redistribución de la renta, la disputa por el poder, el control de los recursos naturales, la provisión de satisfactores básicos, la participación en las decisiones políticas y en la producción de hegemonías culturales, las luchas por la inclusión social de los “supernumerarios” y de los expulsados del mercado laboral, el reconocimiento de los derechos de las minorías (a veces no tan minoritarias), el antagonismo entre trabajo y capital en sus nuevas modalidades. Y habrá que responder; es decir, los nuevos elencos gubernamentales deberán dar cuenta de los reclamos y reivindicaciones sectoriales, actuando con celeridad y eficacia.

La acción social colectiva probablemente discurra por senderos multivariados, interrelacionados y no exclusivamente acotados a una problemática singular; con certeza también condicionada en los años próximos inmediatos por el sistema político que presenta cambios en la correlación de fuerzas y partidos con predominancia de las corrientes moderadamente transformadoras o renovadoras (Ecuador, Paraguay), o por sectores volcados a la izquierda del arco ideológico (Brasil, Argentina, Venezuela), con tendencias al relevo de las alianzas de derecha por una coalición de izquierda para el caso de Uruguay. Finalmente, con la incógnita en Chile por el desenlace de la confrontación electoral que ha posicionado mejor a la derecha vernácula.

Todo ello, inevitablemente, está postulando la necesidad de variar las estrategias de la lucha y la protesta social de los movimientos sociales. Los vínculos más o menos fuertes entre los partidos políticos de signo progresista con los movimientos sociales estudiados –esto es, la izquierda política y la izquierda social– que asentaron alianzas, sean virtuales o efectivas, eficaces en la articulación en clave de oposición, deberán asumir ahora (ya lo están poniendo a prueba) nuevos retos que

recompongan las relaciones con partidos políticos en el gobierno, el Estado y la sociedad civil. Las poblaciones mayoritariamente excluidas o afectadas por la acumulación de frustraciones respecto de mejoras que tardan o han sido sucesivamente postergadas, han depositado sus expectativas en los sectores que a su entender representan el cambio o al menos expresan mayor sensibilidad frente a las situaciones de marginación, desempleo, pobreza, exclusión o discriminación social. En estas circunstancias, podría pronosticarse una disminución de la polarización social y una reducción importante de la conflictividad de tipo confrontacional, no así de la movilización o la protesta social, conforme los estados nacionales arropados en gobiernos de signo progresista emitan señales contundentes en el sentido de atender las necesidades, demandas y reivindicaciones de las clases sociales más económicamente deprimidas.

Hemos registrado evidencias de esta afirmación prospectiva para el caso de Argentina, tomando en cuenta las declaraciones de voceros y dirigentes sociales del Movimiento Piquetero (particularmente de algunos más propensos al diálogo y la negociación en la actual coyuntura sociopolítica argentina), confirmados por una movilización de baja intensidad, “tolerada” o aceptada por el gobierno. Resulta interesante observar que, de un lado, el asambleísmo barrial aparentemente se ha debilitado, manteniéndose activo sólo en algunas zonas en la capital argentina y en otras ciudades de gran porte, mientras que, por otro lado, se expresa una movilización singular en torno al problema de la “seguridad ciudadana”, de reciente manifestación pública (2004), y relativamente inorgánica. Situándonos en Brasil, el MST ha otorgado una carta de crédito al gobierno de Lula, pese a la ocurrencia de nuevas ocupaciones que se explican por la necesidad de acelerar el proceso de reforma agraria, históricamente defendido por el PT, e incluido en su plataforma electoral. Algo similar acontece en Venezuela, no obstante el clima de confrontación entre los sectores de la oposición y el gobierno de Hugo Chávez; en este caso en un escenario altamente polarizado y donde la CTV asumió un papel decididamente contrario al proceso de reformas impulsado por las fracciones prevalentes del MVR. Sin embargo, otros movimientos sociales de significación, tanto a nivel urbano como campesino, no han replicado con movilizaciones de gran envergadura. En Paraguay, las movilizaciones de los últimos dos años y la creciente consolidación de un esquema de articulación entre movimientos sociales habilita a prever un incremento de la protesta social mediada por la estrategia del actual gobierno, más sensible –al menos en el discurso– a las demandas sociales, y decidido, por otro lado, a combatir la corrupción institucionalizada. En Uruguay, de confirmarse la tendencia actual de corrimiento del electorado hacia la fuerza política mayoritaria y opositora, se habrá de registrar un hecho histórico en

los próximos meses, esto es, el triunfo en las elecciones nacionales que colocará a la izquierda por vez primera en el gobierno nacional. Dados unos vínculos privilegiados entre las fuerzas de la izquierda política con la mayor parte de los movimientos sociales (proclives al cambio), puede presuponerse la instalación de un bloque o alianza estratégica que disminuya el grado de conflictividad, y modifique inclusive la naturaleza de la acción social colectiva. Exactamente lo contrario podría ocurrir en Chile si se verificara una derrota de la coalición que ha gobernado aquella nación desde hace casi dos décadas. Efectivamente, el relevo de la Concertación (democristianos y socialistas) por la derecha liderada por Joaquín Lavín implicaría tal vez no grandes cambios en términos de orientaciones de la política económica, pero sí en torno a la profundización del modelo neoliberal, y sobre todo un mayor distanciamiento de los movimientos sociales. La acción social colectiva podría alcanzar niveles de confrontación de envergadura, y el abandono definitivo de la política del consenso y la negociación (ruptura del pacto implícito), como modalidades priorizadas en los primeros años del post-autoritarismo.

Desde una vista panorámica en América Latina, la cercanía de los plazos para concretar los acuerdos impulsados por Estados Unidos vinculados al proyecto de integración de las Américas (ALCA) podría provocar un recrudecimiento de la movilización de los movimientos sociales, que en su gran mayoría se han opuesto firmemente a tales propósitos, percibidos como una suerte de “anexión”; la actitud de los gobiernos electos resultará vital para definir el cuadro de la confrontación. Hemos sostenido que uno de los clivajes del conflicto en América Latina guarda relación directa con el modelo neoliberal instrumentado en las últimas décadas en prácticamente todo el subcontinente, que ha despertado la crítica sistemática y la resistencia activa de los movimientos sociales. Indudablemente vinculado al proyecto de hegemonía norteamericana, y aun cuando las políticas de cuño neoliberal en casi todos los países considerados vienen siendo suplantadas por otras de signo heterodoxo, la aceleración del proyecto ALCA podría suscitar un clima confrontacional que lesionaría eventualmente las aproximaciones y el diálogo regenerado entre los movimientos sociales, los partidos políticos y el Estado. Desde la perspectiva institucional, la región estará aún caracterizada por la inestabilidad política, condicionada por la inclusión de la sociedad civil y los actores sociales en los procesos de reorientación estratégica (económica, social y cultural), sobre todo en aquellas naciones (Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela) en las cuales las ciudadanía abrigaron expectativas de renovación a partir de las recientes definiciones electorales. En Chile y Uruguay ello dependerá de los próximos relevos de los gobiernos aún en ejercicio, la consolidación del proceso de institucionalización fuertemente anclado en la partido-

cracia ya debilitada, y los enlaces entre el sistema de partidos con los movimientos sociales. Tanto sea por la reconfiguración de bloques o alianzas de poder, como por la fragmentación y disociación entre ambos actores, las democracias se verán fortalecidas o debilitadas. Podremos asistir en la región a la conformación de un perfil democrático incluyente, por un lado, o a la consolidación del perfil de una democracia excluyente y dual, por otro; ambos contextos sociopolíticos dependerán del papel central de los movimientos sociales, y sus posibilidades de encontrar las rutas consistentes para contribuir a la estabilidad, sobre la base de la equidad social, la participación y la reconstrucción de renovadas legitimidades para el sistema democrático.

Mirza, Christian Adel. Capítulo II. Factores inhibidores y estimuladores del desarrollo de los movimientos sociales. Bloqueos y potencialidades. En publicación: Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina: la construcción de nuevas democracias. Christian Adel Mirza

CAPÍTULO II

FACTORES INHIBIDORES Y ESTIMULADORES DEL DESARROLLO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES BLOQUEOS Y POTENCIALIDADES

Programa Regional de Becas CLACSO, Buenos Aires, Argentina. 2006. ISBN: 987-1183-45-3. Disponible en la web: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/mirza/partellcap2.pdf>

Fuente: Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la red CLACSO
<http://www.clacso.org.ar/biblioteca>

LOS CLIVAJES del nuevo conflicto social en América Latina sugieren una correspondencia con la rearticulación entre sociedad, Estado y mercado; pero más aún, informan de una realidad socioproductiva (y cultural) que ha ido transformando el panorama de las luchas por el trabajo, los derechos humanos, la distribución de la riqueza, la igualdad de género, la reivindicación de la diversidad cultural y el respeto a la pluriethnicidad, el uso y disposición de los recursos naturales (la tierra, el agua, el petróleo). En los albores del siglo XXI, los movimientos sociales parecen remozados, revigorizados y lanzados a la búsqueda de alternativas al neoliberalismo como expresión contemporánea del capitalismo finisecular. De suyo y a veces no tan sutil o subliminal, la recurrencia a un “socialismo a la latinoamericana” aparece con frecuencia en el discurso político de sus principales voceros. ¿Cuáles son los factores estimulantes para el surgimiento, desarrollo o creciente protagonismo de los movimientos sociales, y cuáles los vectores que frenan o sencillamente inhiben su emergencia, expansión y desarrollo? Ensayamos a partir del análisis precedente unas respuestas más bien provisionarias, pero anudadas en los itinerarios más recientes de los movimientos sociales reseñados y, por tanto, una tesis respecto de la posible generalización de las conclusiones, que considera además el papel de los movimientos sociales en la evolución de la democracia en el subcontinente.

FACTORES ESTIMULANTES

DE CARÁCTER POLÍTICO-INSTITUCIONAL

La pérdida de legitimidad de los partidos políticos como vehículos o depositarios de la confianza de la ciudadanía en tanto representantes de intereses diversos ha contribuido a la emergencia, o crecimiento y mayor protagonismo, de los movimientos sociales, sobre todo los de signo antisistémico. Así, puede observarse que en el período 1996-2003, la confianza en los partidos políticos descendía de un valor promedio (para los siete países considerados) del 22,7 al 12,2% en el año 2003 (ver Cuadro 2 en Anexo I).

En ese mismo período se observa una creciente movilización de tipo confrontacional, de fuerte contenido político aunque mediada por demandas sectoriales o específicas vinculadas a los intereses de los sectores sociales más organizados. La aparición en escena de los piqueteros en Argentina y la expansión de un movimiento sindical más autónomo (CTA), así como la emergencia del asambleísmo barrial, se corresponden con este tramo (1996 a 2001); lo mismo acontece con el movimiento indígena en Ecuador, agrupado sobre todo en torno a la CONAIE, que cuenta con la adhesión y el respaldo de vastos sectores sociales, en tanto que el MST en Brasil adquiere un inusitado dinamismo marcado por la oposición decidida al gobierno de Cardoso. Sin embargo, en Chile, el movimiento mapuche no emerge como actor central, aunque es evidente su mayor visibilidad, y la CUT pierde el protagonismo característico de la segunda mitad de los ochenta. Ensayamos para este caso algunas explicaciones posibles desde la perspectiva del modelo de institucionalización: alto grado de institucionalización, sistema partidario amarrado al consenso entre dos partidos que constituyen la mayoría relativa, solidez de las organizaciones políticas; todo lo cual contrasta de manera llamativa con el descenso del nivel de confianza en los partidos políticos (de aproximadamente 27,3% en 1996 a 13,4% en 2003), acompañado de una baja en la confianza en el Parlamento. En otras palabras, un sistema político apoyado en la partidocracia y fuertemente institucionalizado absorbe y canaliza buena parte del conflicto social, sin amenazar necesariamente la pervivencia simultánea de movimientos sociales relativamente autónomos.

Hemos observado, sin embargo, la enorme influencia de los partidos políticos en la formación de las elites y los dirigentes sociales, en particular en los dos casos señalados en el Informe especialmente realizado por nuestro colaborador sobre Chile: el movimiento obrero y el indígena. Para el caso uruguayo, que comparte con el chileno los perfiles de un sistema altamente institucionalizado, la acción social colectiva se redujo en los años inmediatamente posteriores a la recuperación democrática, para –sobre fines de los años noventa– volver a tonificarse, tanto a partir

del movimiento sindical, del movimiento cooperativo, como de organizaciones sociales formales e informales (estimuladas por el Foro Social Mundial), aunque con niveles confrontacionales comparativamente más bajos que en los países vecinos. También en Paraguay, a fines de los años noventa, se produce una eclosión a partir de sectores juveniles (con irrupción en la escena pública en los acontecimientos que condujeron a González Macchi al poder), del movimiento campesino y en menor medida por efecto del movimiento obrero, bastante fragmentado. Mientras tanto, en Venezuela, como se dijo, los movimientos sociales no lograron converger en acciones colectivas de manera articulada, condicionados y atravesados por la frontera entre chavistas y antichavistas, lo que no implica la inexistencia de actores sociales relativamente autónomos.

De alguna forma, el vacío institucional se expresa asimismo cuando la población percibe una perturbación en la conducción del Estado, una ausencia notoria de liderazgos o una incongruencia flagrante entre las expectativas sociales y los rumbos asumidos por los decisores y responsables directos en el manejo de los aparatos públicos. Los partidos políticos son los señalados como “culpables”, en primer término por aquella ausencia o conducción errática, también acusados de privilegiar sus propios intereses por encima del interés común. Los movimientos sociales encuentran campo propicio y fértil para construir un discurso opositor, para captar rápidamente las adhesiones, desarrollando en muchos casos alternativas sustitutivas ante situaciones signadas por la angustia y la urgencia de soluciones (redes alimentarias y de atención sanitaria, solventadas por la solidaridad de la población y las organizaciones que sostienen el movimiento social, experiencias de producción autogestoria, recuperación de talleres y fábricas, fuerte territorialización de la protesta que une los sentidos de acción desde la base de convivencia y proximidad); mientras que los contenidos de las luchas sociales adquieren una “densidad política” mucho mayor que en décadas anteriores.

Los objetivos y propósitos más inmediatos de los movimientos sociales (subsídios para desocupados, tierras para los campesinos, mantenimiento de fuentes de trabajo, freno a las privatizaciones, entre otros) no ocultan, de otra parte, las finalidades de la movilización con base en contraproyectos de largo aliento, que apuntan a redimensionar la acción propiamente política vinculada al papel del Estado (exigencia de transformaciones radicales), a los partidos políticos (transparencia y sujeción al interés colectivo), a las instituciones parlamentarias (defensa de la soberanía nacional, respeto a los mandatos populares ante los intereses de las clases dominantes, rol más fuerte en la salvaguardia de los derechos humanos y de garantía contra la corrupción), a los poderes ejecutivos (liderazgo democrático, apertura al diálogo). Los movimientos sociales examinados han sabido pues aprovechar las grietas y fracturas que colocaron a los partidos políticos en situación de debilidad institucional, sustituyéndolos sólo parcialmente en sus

funciones de representación. No obstante, las claves de recuperación de la legitimidad social de los partidos políticos podrían estar asociadas a un sensible viraje de contenido ideológico; esto es claro en Argentina, Brasil y Venezuela; en menor grado en Paraguay, Ecuador y Chile.

La correlación entre el debilitamiento del sistema de partidos –institucionalizado¹⁹ o incoativo– y el fortalecimiento de la acción social colectiva (incremento del protagonismo de los movimientos sociales) parece indicar una propensión al traslado de las lealtades ciudadanas fuera del sistema de partidos pero dentro de los márgenes de la estructura democrática, lo que parece indicar además una lealtad básica a la democracia asegurando su mantenimiento más allá de toda convulsión, turbulencia, conmoción social o estado prerrevolucionario, que algunos creyeron observar en diciembre de 2001 en Argentina o en enero de 2000 en Ecuador. Esto sin embargo no conlleva necesariamente la certeza de la estabilidad política, y deja planteados algunos desafíos en el camino de la consolidación democrática, y sobre todo en la reconstrucción de democracias inclusivas, que rompan con los ciclos perversos fundados en la dualidad (excluyente) aún prevalente, que deja a miles de ciudadanos despojados –de hecho– del ejercicio pleno de sus derechos sociales y cívicos, mientras para otros sectores sociales minoritarios se hacen mucho más accesibles aquellos mismos derechos.

Por otra parte, según los promedios de los siete países considerados, la confianza en el Parlamento (una de las instituciones democráticas por excelencia) descendía de un 30,25% de media en 1996 a un 18,6% para el año 2003 (ver Cuadro 1 en Anexo I). Este descenso expresaría una implícita responsabilización de los representantes electos por las crisis sociales y económicas de los últimos años de la década del noventa. Los fracasos y éxitos inevitablemente se depositan en los ámbitos donde la población

19 Es preciso establecer que, de acuerdo con la información disponible y procesada, identificamos dos casos en los cuales el modelo institucionalizado asentado durante décadas se tambaleó a raíz de los fuertes cuestionamientos de la ciudadanía, desembocando en una espiral de deslegitimación, pérdida de confianza en las instituciones democráticas (partidos políticos, Parlamento, Presidencia) e inestabilidad creciente. Tanto Venezuela, a mediados de los noventa, cuando asistió al colapso de su sistema de partidos, como Argentina, que ingresó en una de sus peores crisis institucionales a fines del año 2001, corrieron severos riesgos de quiebre o ruptura del sistema democrático, asumiendo rasgos bien típicos del modelo incoativo. Precisamente, estas circunstancias coyunturales dieron origen a dos rutas, a nuestro juicio cualitativamente diferentes. En Venezuela, el recambio de gobierno –en el marco de las reglas de juego electorales– dispuso unas elites en el poder que abrazaron las “causas populares” y plasmaron en el proyecto bolivariano innumerables reivindicaciones de los estratos más pobres, asumiendo, en buena medida, su representación social; mientras que en Argentina, la desconfianza en el sistema político contribuyó a la emergencia de nuevos movimientos sociales contestatarios y más volcados a desempeñar roles más activos y autónomos, aun cuando el recambio de los elencos de gobierno, encabezados por Néstor Kirchner, removió radicalmente la correlación sociopolítica, absorbiendo y canalizando parcialmente el descontento social.

visualiza que se definen las políticas públicas, esto es, en el Parlamento y la Presidencia²⁰ (Poder Ejecutivo). Además, en este contexto, los movimientos sociales ampliaron notablemente sus capacidades de lucha, protesta y movilización: los parlamentos fueron destinatarios predilectos de las acusaciones de corrupción y connivencia con el capital transnacional (al haber votado las diversas leyes de privatización y desregulación laboral), y de ser ineficaces a la hora de dar respuesta a los problemas sociales más acuciantes; por otra parte, los movimientos sociales en Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay se constituyeron con frecuencia en adalides de la defensa del patrimonio nacional, y en la oposición más dura a la oleada de reformas de corte neoliberal. No obstante, si repasamos algunos datos relativos al porcentaje de abstención electoral, registramos altos guarismos relativos, que parecen expresar una vez más la confianza en los mecanismos más elementales y básicos de todo régimen democrático.

En síntesis, el deterioro de la credibilidad y legitimidad de las instituciones democráticas abonó el terreno para que los movimientos sociales crecieran cualitativamente y recabaran apoyo, adhesión o simpatía de gran parte de las poblaciones. Cabe acotar las evoluciones peculiares en Brasil y Venezuela, que aun partiendo de indicadores muy bajos de confianza en el Parlamento, lograron mantenerlos (Venezuela) o incrementarlos de manera significativa (Brasil) en los últimos tres años.

CUADRO 15

CREDIBILIDAD Y LEGITIMIDAD DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS PROMEDIO 1996-2003 (EN PORCENTAJE)

Perfil del sistema político	Confianza en el Parlamento	Confianza en los partidos	Participación electoral (últimos 20 años)	Sistema de partidos (NEP)	Confianza en los presidentes o el Ejecutivo	Satisfacción con la democracia
Argentina	20,31	14,62	80,00	2,60	27,90	33,27
Brasil	23,62	16,60	75,00	2,90	31,85	22,55
Chile	38,04	22,92	77,00	2,30	54,25	30,94
Ecuador	14,18	11,05	65,00	5,50	23,48	24,94
Paraguay	25,50	23,80	55,00	2,80	26,00	14,21
Uruguay	39,55	37,00	95,00	3,20	40,52	57,84
Venezuela	27,22	20,10	70,00	3,20	38,78	39,25

Fuente: elaboración propia con datos electorales y de Latinobarómetro (1996-2003).

20 No obstante, resulta interesante destacar que en tres de los siete países considerados persiste un nivel de confianza importante en el presidente (Brasil, Argentina y Chile), que en Venezuela se incrementó levemente en el período 1996-2003, mientras que en Uruguay, Paraguay y Ecuador los niveles bajaron de manera aguda.

EN EL DOMINIO ECONÓMICO

La implementación de políticas de corte neoliberal con efectos regresivos de alto impacto provocó la articulación de plataformas amplias constituidas por movimientos sociales de orígenes diversos. El incremento sensible del desempleo de larga duración y la precarización de las condiciones de trabajo coadyuvaron a la “reconversión” de movimientos sociales sustentados en la reivindicación y el reclamo por trabajo (Argentina, Brasil, Uruguay). Las transformaciones profundas en el patrón de explotación agraria y la introducción de lógicas de mercado mucho más “duras” en las áreas rurales empujaron a la organización del campesinado, a partir de modalidades de lucha cimentadas en la conciencia de la exclusión a que estaba sometido, en la necesidad de sobrevivencia social, y desde la solidaridad y la cooperación. Así surgieron los Sin Tierra en Brasil (MST), que a poco de andar el camino se convirtieron en un movimiento de gran porte y arraigo social; los campesinos del Paraguay, que recientemente se aglutinaron en sendas coordinadoras que esbozan una tendencia a la unificación y convergencia de esfuerzos en sus luchas por tierras y políticas de apoyo y promoción del trabajo rural. Los buhoneros en Venezuela también dan cuenta (aunque muy tímidamente) de un proceso de creciente y lenta maduración como movimiento en construcción, en el marco de una economía altamente informalizada, mientras el movimiento obrero intenta rearticularse en torno a organizaciones “independientes”. Los desocupados en Argentina se organizaron en el Movimiento Piquetero, constituyéndose en un actor social de enorme trascendencia, más allá de sus múltiples y heterogéneas expresiones, que justamente ofrecen un crisol de formaciones de base conjugadas por el reclamo y la exigencia del respeto a sus derechos como trabajadores; también la CTA ha tenido la habilidad de acumular en los dos sentidos: trabajadores sindicalizados y desempleados organizados territorialmente. El movimiento sindical en Uruguay ha desplegado en numerosas ocasiones sus estrategias de resistencia a la implantación del modelo privatizador, configurándose en sostén mayoritario de una plataforma antineoliberal que acopió conquistas significativas a través de marchas y paros, pero sobre todo utilizando con singular éxito instrumentos jurídicos constitucionales como el referéndum. A su vez, FUCVAM ha podido desarrollar con resultados plausibles sus propuestas autogestionarias a nivel territorial.

En Argentina, la experiencia del Frente Nacional contra la Pobreza convocó a decenas de organizaciones populares, actores sociales y políticos, movimientos sociales de variada naturaleza, tras un propósito considerado éticamente irreprochable. En Uruguay, la Concertación por el Crecimiento y el Trabajo resultó un éxito de convocatoria a

miles de trabajadores (desocupados y activos), pequeños productores y empresarios. En Chile, aun con un consenso sobre la base de mutuas concesiones que permitió el despliegue de políticas de marcado tono neoliberal, trabajadores, indígenas, movimientos vecinales y estudiantiles marcaron distancia a principios de la presente década con relación a un modelo que ya presenta fisuras y notorias insuficiencias. En Paraguay, la conformación del Congreso Democrático del Pueblo resulta un mojón extremadamente significativo en la dificultosa tarea de articulación de los movimientos sociales, particularmente el movimiento campesino, junto con organizaciones sindicales, estudiantiles, vecinales, de defensa de los derechos humanos, e indígenas, entre otros. En Venezuela, aun cuando se advierte cierta atomización y debilidad para la coordinación de movimientos y actores sociales, los impactos nocivos de las políticas caracterizadas por los ajustes fiscales sucesivos han repercutido en el sentido de provocar más movilizaciones sectoriales en la última década; sin olvidar la trascendencia del *caracazo* del año 1989, como antecedente y anticipo de la resistencia a la implementación del recetario neoliberal. En Ecuador, la convergencia de la CONAIE, el FUT y otras organizaciones del campo popular en las luchas sociales contribuyó a generar un espacio más o menos formalizado y permanente en torno a la Coordinadora de Movimientos Sociales.

Las condiciones económicas en que se ven sumidas las naciones latinoamericanas nos informan de deudas externas que determinan los límites de la soberanía de los estados nacionales y exigen constricciones en términos de mantener los equilibrios fiscales, afectando desde luego no sólo las posibilidades de cubrir las necesidades básicas presentes, sino también hipotecando buena parte del futuro mediano. Si bien los datos macroeconómicos resultan para muchos países bastante alentadores, al menos en cuanto a la superación de los procesos hiperinflacionarios, la reducción del déficit fiscal, la estabilidad monetaria y cambiaria, la mejora relativa de la balanza de pagos y el incremento de las exportaciones, no hay evidencia empírica en la gran mayoría del subcontinente que confirme una modificación sustantiva de la pauta redistributiva del ingreso. En este contexto cobra validez la vinculación directa entre acción social colectiva y situación económica y financiera, sobre todo en función de las expectativas de mejoramiento de todos los estratos sociales, pero muy particularmente los de clase media y baja.

Hemos afirmado y ejemplificado la correlación entre crisis económica y pauperización, y protesta, organización y movilización social. Subrayamos el aspecto subjetivo de la percepción de cambio en las condiciones materiales; esto es, que la expectativa de mejora que tienen los diferentes sectores sociales obviamente está vinculada a los estándares de confort, disposición de bienes y grado de accesibilidad a servicios y prestaciones que presumiblemente pueden alcanzar en

determinado lapso. Ello supone que, para revertir los procesos de exclusión social, empobrecimiento y deterioro de la calidad de vida de un porcentaje muy importante de las poblaciones, los gobiernos deberían dar señales contundentes que asocien directamente los progresos en materia de crecimiento económico, incremento de la productividad (del capital y del trabajo) y estabilidad macroeconómica con la mejora sensible de los ingresos y la provisión de satisfactores esperados por aquellos sectores sociales. De otro modo, persistirán y se multiplicarán las protestas, movilizaciones y luchas sociales, con el riesgo de ahondar el carácter confrontacional de la acción social colectiva, generando la réplica represiva del Estado, la criminalización de la pobreza y la profundización del carácter dual de muchas de las democracias latinoamericanas.

DE CARÁCTER SOCIOCULTURAL

La aceleración de los procesos de integración y “apertura forzosa” de las economías y la influencia del desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones han facilitado la aproximación de actores y movimientos sociales antes aislados en sus luchas, y ahora mucho más articulados en torno a plataformas más amplias. Asuntos vinculados a la etnicidad, la defensa del patrimonio y las tradiciones ancladas en los orígenes comunitaristas de los pueblos indígenas, el respeto a la diversidad cultural y la irreverencia ante la pretendida homogeneidad de un único tipo de “ciudadano moderno”, fueron los que en buena parte de América Latina se instalaron en el pleito público, más allá de la coyuntura y la moda pasajera. La introducción y el creciente uso de los medios electrónicos, el desarrollo de las telecomunicaciones, la información al día, la expansión de la telefonía y la multiplicación de medios alternativos han facilitado enormemente los contactos, comunicaciones, encuentros e intercambios entre sociedades y comunidades.

La alta tasa de urbanización –tendencia marcada desde varias décadas atrás– ha contribuido al intercambio sociocultural y también, en cierto sentido, al desarrollo del impulso gregario; sin embargo, los últimos veinte años han estado signados por las tendencias a la segregación espacial y la fragmentación territorial. Desde la identificación de cinturones periféricos en los que se concentran los sectores sociales más carenciados y con pobreza extrema, hasta los *countries* o barrios privados, vallados y presuntamente protegidos, las ciudades latinoamericanas han perdido buena parte de su función de integración social y cultural, expulsando residentes de áreas centrales a los barrios periféricos, en concurrencia con los procesos migratorios provenientes de las zonas rurales. En este contexto, los actores sociales se han inclinado a recuperar una convivencia más solidaria, asumiendo funciones que

procuran contrarrestar los efectos de la fragmentación y la desintegración del tejido social. En Argentina, el caso de la CTA ejemplifica en su propia conformación organizativa la inclusión en pie de igualdad de los sindicatos formalmente establecidos y los grupos de piqueteros (desocupados); organizaciones de base territorial o de defensa de los derechos humanos; la realización de actividades de formación y socialización a nivel barrial o vecinal, promoviendo redes horizontales y construyendo identidades a partir de valores, normas y principios a contrapelo de los proyectos culturales dominantes. Los MTD revalorizan los aportes comunitarios y el sujeto individuo actuando en el colectivo; rescatan la familia como ámbito para la contención, donde hay lugar para los afectos y apoyos recíprocos; por otra parte, las vivencias cotidianas en varios testimonios recogidos refieren al papel importante de los jóvenes, de las mujeres, de los niños, de los ancianos, en la consolidación del movimiento social desde sus raíces.

En Chile los mapuches y en Ecuador las diversas comunidades indígenas han reconceptuado desde la movilización social y política las ricas tradiciones e identidades representadas como fórmulas alternativas a los imperativos de una integración que pretende desconocer la diversidad cultural, sea mediante la adopción de políticas represivas o a través de dispositivos de control. En Brasil, los sin tierra han sumado a sus luchas sociales por la reforma agraria, las dimensiones educativas y pedagógicas, las prácticas habituales de producción familiar se combinan y complementan con formas asociativas y cooperativas (producción colectiva, distribución equitativa, consumo equilibrado), las escuelas y centros educativos forman parte integrada de un estilo de vida bien característico en las colonias y tierras reapropiadas y en los campamentos y ocupaciones. En Uruguay, la construcción de viviendas por el sistema de ayuda mutua introduce, ciertamente, novedades, no sólo por su peculiar modalidad en la solución habitacional, sino porque el movimiento cooperativo impulsa nuevas formas de relacionamiento entre socios, entre la cooperativa de base y su entorno territorial, multiplicando experiencias culturales (de carácter solidario y participativo), y realizando aportes interesantes en la dimensiones recreativa, educativa y artística. Recrea una convivencia plural y tolerante, respetuosa de la diversidad y potencialmente democratizadora.

En la dimensión sociocultural, las repercusiones y efectos de un modelo modernizador que coloca el espejo de la cultura occidental liberal frente a una sociedad imposibilitada de extrapolar sus pautas de producción y consumo, deriva en la frustración y pasividad por un lado, y en la rebeldía y generación de alternativas por otro. El *locus* de la cultura por oposición se manifiesta en las microcélulas de la sociedad civil lanzadas al trueque, la iniciativa de una economía solidaria, el comunitarismo, la cooperación, las redes de servicios sociales prestados de

manera colectiva, la autogestión social. Es allí donde los movimientos sociales se sienten capaces de operar con lógicas de intercambio diferentes y antagónicas a la racionalidad mercantilista.

FACTORES INHIBIDORES

EN EL DOMINIO PROPIAMENTE POLÍTICO-INSTITUCIONAL

La omnipresencia del Estado en todas sus formas y modalidades, en el marco de un sistema de partidos institucionalizado, ha producido en cierto sentido, y en determinadas etapas de las naciones consideradas, una retracción o al menos una “invisibilidad” de la acción social colectiva (cooptación, represión). El Estado ha desplegado diversas modalidades de relacionamiento con los movimientos sociales; en algunas circunstancias la impronta ha sido el diálogo y la negociación, pero en otras, la represión y la criminalización de las luchas y las movilizaciones, sobre todo de los últimos años (Argentina, Ecuador, Chile y Brasil). También la cooptación y el desarrollo del “neocientelismo” han servido de reaseguro para el mantenimiento del poder (Argentina, Paraguay, Chile y Venezuela). Desde luego, no es la propia naturaleza del Estado la que condiciona fuertemente el desarrollo de los movimientos sociales, sino que, “capturado” o bajo el control de las elites políticas, este es orientado a inhibir la participación sociopolítica, a cooptar o decididamente a impedir la libre expresión de las demandas.

En los últimos veinte años hemos asistido a una gama variada de estrategias y tácticas que de alguna manera obstaculizaron o generaron contradicciones significativas en el campo social: prácticas inconfundiblemente represoras a los movimientos sociales en Ecuador, Brasil, Argentina, Paraguay, y en algunas coyunturas particulares también en Chile y Venezuela. Pero, además, debemos reconocer que se les abrieron canales de participación en planes, programas o institutos que, en el marco de la ejecución de políticas sociales, convocaron a actores y movimientos sociales a una cogestión democratizadora. Varios son los ejemplos: en Uruguay, la incorporación (reclamada por cierto desde la central sindical), del movimiento sindical en la Junta Nacional de Empleo (JUNAE²¹); en Brasil, la participación en programas de recalificación laboral; en Chile, la creación de la CONADI para el tratamiento de la cuestión mapuche; en Ecuador, la constitución del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indios con el fin de atender las demandas del movimiento indígena. Naturalmente, no estamos afirmando que detrás de todas estas modalidades hubiera intencionalidad

21 Organismo tripartito que cuenta con representantes de los sindicatos, de las cámaras empresariales y del propio Estado, para regular y diseñar la política de recalificación y reconversión laboral.

de frenar, disminuir o sofocar las reivindicaciones de los movimientos sociales; simplemente advertimos que, por un lado, la decisión de participar en dichos ámbitos no resultó nada sencilla y, por otro, que se trata de instrumentos que pueden ser mal utilizados para “apaciguar” el conflicto, y dar la sensación de cumplir con las demandas sociales.

Pero, si estos ensayos son evaluados positivamente, otros mecanismos, sobre todo en el campo de las políticas sociales compensatorias, podrían constituir un problema para los movimientos sociales. De hecho, un manejo clientelar y asistencialista de los subsidios en la mayoría de los países estudiados y en tiempos no muy lejanos, ha dado lugar a la manipulación y la intervención estatal para generar compromisos y alterar ciertos cursos de acción, distorsionando, desnaturalizando y lesionando las autonomías de movimientos y actores sociales potencialmente contestatarios. Sin embargo, más recientemente, los efectos perversos de ciertas políticas de mitigación de la pobreza han sido hábilmente revertidos y convenientemente utilizados por los movimientos sociales, como parte del stock de recursos para la transacción y la presión sobre el Estado. Claro ejemplo de ello son los Planes Trabajar en Argentina, que forman parte del paquete de políticas sociales de ingreso mínimo.

Por otra parte, en algunos casos, el sistema de partidos ha tenido la capacidad de absorber los impactos de su propio deterioro institucional, frenando, vehiculizando o revirtiendo las fuerzas de negación de la política como espacio legítimo de producción de consenso, decisiones u orientaciones estratégicas (coyunturales o no). De tal suerte, los partidos políticos, reconvertidos o readaptados, despertaron nuevamente la atención de la ciudadanía, la que les confirió la función de representación –vista como “connatural”– de intereses. El depositar nuevamente la confianza en el sistema de partidos no adquiere, sin embargo, una connotación legitimadora *sine die*, sino que es regulada por los propios márgenes de ruptura, autonomía social y suficiencia en el grado de satisfacción de las demandas (por libertad, por condiciones materiales y simbólicas de bienestar, por certezas en el rumbo de la democracia).

EN EL PLANO ECONÓMICO

El deterioro del valor Trabajo, los altos índices de desempleo, los cambios operados en el mercado laboral, la desaparición de muchos ámbitos en los que se tejieron fuertes lazos de solidaridad y mancomunidad, la desafiliación²² masiva de miles de obreros y trabajadores también han

²² Robert Castel señala que la idea de *desafiliación* implica también una disociación con los mecanismos tradicionales de integración social, provocados por la precarización laboral, y prefiere aquel vocablo frente a la denominación genérica de *exclusión social* (Castel, 1997).

influido de manera negativa, sobre todo en el movimiento sindical. La pérdida (desmantelamiento) del tejido industrial junto con la tercerización y precarización laboral dispersaron y fragmentaron las luchas de los trabajadores, en ocasiones enfrentados por demandas que se percibían como contradictorias. El peso de las reivindicaciones de empleados y obreros del sector público se contraponen al descenso en el sector industrial o manufacturero de las organizaciones sindicales de arraigo obrerista. Ello también se reflejó en las ciudades, donde numerosas zonas antes bien caracterizadas por su fisonomía fabril se han convertido en grandes áreas semiabandonadas o vaciadas, cuyas redes de soporte (comerciales, sociales, culturales), vinculadas y ligadas al devenir de la industria, también sufrieron el impacto de su degradación. Para miles de trabajadores, aquellas transformaciones implicaron concomitantemente la desaparición virtual de históricas relaciones de intercambio y organización de clase. Esto se hace evidente en la baja de las tasas de afiliación registradas en casi todos los países de tradición industrial o semiindustrial (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay), en los cuales los movimientos sindicales decayeron en términos de relevancia social y política. No obstante, hemos apuntado que algunos de estos movimientos pudieron recomponerse y reubicarse en las postrimerías del siglo pasado, especialmente cuando se articularon con otras organizaciones sociales, o cuando readaptaron sus estrategias y formas de nucleamiento organizacional.

Asimismo, el desarrollo del cuentapropismo, de la microempresa con frecuencia asumida como única estrategia de autoempleo, y del informalismo, dispersan a los trabajadores en miles de unidades económicas que dificultan la conjunción y articulación de esfuerzos organizados, y la configuración de actores sociales de significación en la arena pública. El caso de los buhoneros en Venezuela ilustra la debilidad inherente de estos movimientos nacientes; las gremiales de pequeños y medianos empresarios y productores alcanzan escasamente a erigirse en actores sociales gravitantes en la confrontación con el capital, el Estado o las grandes corporaciones económicas presentes en el subcontinente latinoamericano.

EN EL PLANO CULTURAL

Los efectos de la implantación del neoliberalismo provocaron, por un lado, el despliegue de estrategias de supervivencia de grandes contingentes de trabajadores urbanos y rurales a través de la implementación de fórmulas de articulación solidaria, así como la resignificación de valores contrahegemónicos en el marco de una cultura dominante. No obstante, también debe advertirse sobre los vectores de freno a la expansión de los movimientos sociales: de una parte, la sensación de despojo, desesperanza y desconcierto de la ciudadanía frente al avasallamiento de identidades y construcciones colectivas acuñadas desde décadas atrás; de otra, la sobrevaloración de la

competitividad individualista, la mercantilización de las relaciones sociales, la extensión de las lógicas sustentadas en el costo-beneficio, la racionalidad del “emprendedor exitoso por sus propios méritos”; la individuación negativa (estigmatización) de los excluidos y carenciados; la carrera por el triunfo personal; la importación de pautas de consumo; la globalización cultural que conlleva en ocasiones la depreciación de valores tradicionales por oposición a una pretendida modernización homogeneizante.

El control de los medios de comunicación también resulta esencial para entender cómo operan los factores culturales y discursivos en la producción de valores, opiniones, creencias, normas, sentimientos y percepciones de la población en contextos democráticos. Con frecuencia hemos observado la manipulación o sencillamente el tratamiento frívolo y superficial del conflicto y la acción social colectiva, lo que perjudica el crecimiento de movimientos sociales en aras de obtener legitimidad social, adhesión y apoyo activo. También en este plano interviene la criminalización de la protesta y la movilización social, como elemento cultural de profundidad, designando el piquete o los cortes de ruta, las marchas hacia lugares públicos, la ocupación de fábricas o tierras como “graves atentados a la propiedad”, como delitos que lesionan los derechos de otros ciudadanos. Estos vectores socioculturales calan hondo en determinadas capas de la población, probablemente cada vez menos, pero no por ello resultan menos perjudiciales a los intereses de movimientos sociales que procuran desvelar el rostro de la impunidad, del maltrato, de la injusticia y la venalidad de actos jurídicamente correctos pero éticamente reprobables, tales como el desalojo de fábricas recuperadas por sus propios trabajadores en Argentina, el asalto armado a campamentos de los Sin Tierra y el asesinato de campesinos en Brasil, el encarcelamiento de mapuches en Chile por haber intentado recuperar tierras comunitarias, la represión brutal de jóvenes piqueteros también en Argentina, entre tantas otras realidades contemporáneas a la eclosión y el despliegue de la acción colectiva de protesta social. Ciertamente, la dimensión cultural se combina e integra a otras dimensiones económicas, sociales y psicológicas, de modo que potencialmente se convierten en obstáculos reales; otras veces las representaciones simbólicas del imaginario colectivo inhiben la comunicación o el fluido diálogo entre culturas, menos distanciadas de lo que aparentan estar unas de otras.

La apelación a la unidad de la nación, la invocación de valores universales que siempre están por encima de las demandas y reivindicaciones sectoriales, el llamamiento al respeto de las cláusulas del contrato democrático y republicano, conectadas indisolublemente a la representación de intereses que las elites políticas explícitamente conjugan en los ámbitos institucionalizados, son todas expresiones que se derraman en la retórica pública para conjurar procesos de protesta confrontacional. Se dice que las libertades están por encima de los intereses específicos y,

por tanto, los gobiernos y los parlamentos electos bajo esas reglas deben siempre dirimir el conflicto cuando los actores sociales no pueden hacerlo a través de arreglos privados, de modo que el discurso apunta directamente a minimizar toda acción colectiva que no transite por dichos carriles. Estas líneas argumentativas, bien utilizadas, resultan convincentes y por ello pensamos que también pueden llegar a operar como factores desestimulantes en culturas políticas altamente institucionalizadas.

Lógicamente, los factores estimulantes e inhibidores de la acción social colectiva se imbrican, se entrecruzan, a veces cambiando de signo: en determinadas circunstancias aquellos vectores que parecen estar favoreciendo la emergencia de movimientos sociales se convierten en retardadores o amortiguadores; en otras ocasiones, los factores que supuestamente operan frenándolos desatan sorpresivamente explosiones sociales incontenibles. Pensemos una vez más en el caso argentino. El sistema de partidos institucionalizado, teóricamente, podía suponer que la acción colectiva se restringiese a demandas y protestas cerradas sobre sí mismas, corporativas o acotadas; esto es, se reclamaría por el salario, por el aumento de pensiones o jubilaciones, por más fuentes de empleo, por mejoras en el acceso a servicios e infraestructura; con picos de algidez, pero contando con actores sociales “disciplinados” en unos casos, o mediados por el sistema de partidos en otros, pero sin consecuencias de envergadura sobre el sistema político legitimado. Sin embargo, la pérdida de confianza en los partidos políticos y en el Parlamento (es decir, a partir de un cambio de signo del vector político institucional) contribuyó, a partir de mediados de los años noventa, al surgimiento del Movimiento Piquetero, retonificando la acción cada vez más fuerte de los movimientos sociales en la arena pública. Asimismo, el factor que marca un punto de inflexión en la historia reciente de aquella nación precisamente deviene del dominio político institucional: el riesgo de quiebre del orden constitucional operó decisivamente en la protesta de fines de diciembre del año 2001 y, por consiguiente, contribuyó a asentar a los actores sociales que habían tomado parte en aquellos episodios.

Obviamente, unos y otros factores intervienen simultáneamente, y son influidos por la propia acción colectiva. Los ensayos de articulación entre actores, el respaldo tácito o explícito de la ciudadanía (trátase del movimiento indígena ecuatoriano, que es apoyado no sólo por los indígenas; o los Sin Tierra, a quienes buena parte de las capas urbanas brasileñas ven con simpatía) permiten apreciar una dialéctica que abre caminos allí donde parecía que los movimientos sociales irían a toparse con un muro, revelando la capacidad de reconvertir algunos de los bloqueos en verdaderos desafíos superados arduamente, pero al fin superados. Los movimientos sociales en América Latina se encuentran tal vez en sus momentos más decisivos, cuando se trata una vez más de resguardar la democracia al mismo tiempo que de transformarla para consolidarla.

Mirza, Christian Adel. Capítulo III. Los movimientos sociales: oportunidades de expansión, contribuciones para una nueva democracia desde abajo. Los perfiles de un nuevo paradigma democrático. En publicación: Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina: la construcción de nuevas democracias.

CAPÍTULO III

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES: OPORTUNIDADES DE EXPANSIÓN, CONTRIBUCIONES PARA UNA NUEVA DEMOCRACIA DESDE ABAJO

LOS PERFILES DE UN NUEVO PARADIGMA DEMOCRÁTICO

Christian Adel Mirza Programa Regional de Becas CLACSO, Buenos Aires, Argentina. 2006. ISBN: 987-1183-45-3.

Disponible en la web:

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/mirza/partellc.ap3.pdf>

HEMOS CONVIVIDO en un cuarto de siglo de breve historia del subcontinente latinoamericano, que ha sido testigo de convulsiones, promesas, profetas y rebeliones; que vio renacer la democracia en la mayor parte de sus naciones, después de túneles de oscurantismo, caza de brujas, intrigas, desapariciones, ríos de sangre y aromas a camposantos; que asistió a nuevos partos, alumbramientos y deslumbramientos, anotó ilusiones en el carné de vida de sus gentes y creyó resucitadas las expectativas de una vida digna, con justicia y libertad. Es inevitable volver la mirada y quizá redescubrir que la tiranía del tiempo nos sirve de excusa para rememorar sin memoria, ensayar conjeturas y predicciones sobre los hilos delgados de un futuro que se teje en el presente, pero desligado momento a momento de un pasado que pronto se esfuma, desaparece en tiempos en que el tiempo nos exige una velocidad extrema, que empuja a vivir ahora con la incertidumbre del día después, pero con el olvido prematuro del ayer. Y bien, una perspectiva amplia y abarcadora de los movimientos sociales, la democracia y el poder, nos obliga a re-trazar los conductos y sinapsis que nos informan de un pasado, por cierto muy próximo, en clave de continuidad al presente, no exento de disrupciones, yuxtaposiciones y repliegues que asumimos como procesos complejos de construcción y reconstrucción social; a examinar aquellos procesos desde una perspectiva diacrónica y a la vez sincrónica.

Fuente: Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la red CLACSO

Entendemos que, si el *sujeto* ya no es el *pueblo*, que si las clases sociales ya no determinan los ejes del conflicto, que si la democracia ya no puede asegurar la igualdad social y que no hay avenidas que nos dirijan de manera certera e inexorable al mayor bienestar de todos los ciudadanos, se impone (siempre) un análisis riguroso para dar cuenta (examinando, explicando e interpretando) de los cambios políticos, sociales y culturales, desde una mirada panóptica y con un gran angular teórico, aun heterodoxo. No obstante, el abordaje analítico ha exigido realizar una selección de algunos marcos conceptuales y a considerar una pluralidad de enfoques teóricos respecto de la identificación de la acción social colectiva y sus relaciones con la democracia en América Latina, aun a riesgo de no profundizar en muchos de los ricos aportes con que numerosos autores e investigadores han nutrido –con creces– las alacenas del conocimiento desde el campo de las ciencias sociales. En ese sentido, retomamos la noción de *movimiento social* del sociólogo Alain Touraine (1998), más específicamente el concepto de *movimiento societal* (bien diferenciado de los grupos de interés). En un contexto histórico determinado estos movimientos cuestionan las orientaciones generales de la sociedad; sus rasgos específicos los colocan en el terreno de las luchas por la hegemonía sociocultural, interpelando una forma de dominación social concreta. Y en el centro del conflicto el Sujeto (ni la clase, ni la nación, ni el pueblo), que se debate en una tensión permanente entre el universo de la instrumentalidad –el mercado–, y el mundo de la cultura –identidad– asociado al comunitarismo encerrado en sí mismo.

Movimientos sociales y democracia están indisolublemente unidos. Con más precisión, esta democracia implica para el referido autor: control social de la economía, limitación del poder, representatividad de los dirigentes políticos y separación entre el poder temporal y el espiritual. Un análisis de los movimientos sociales contemporáneos en América Latina, y más particularmente de los incluidos en nuestra muestra, bien pueden ajustarse a las coordenadas enunciadas; así, tomamos tan sólo un ejemplo, el MST de Brasil, que ha desarrollado desde sus propios inicios una identidad bien específica, sin que de ello se desprenda que el movimiento de campesinos, colonos y trabajadores rurales se remita a sí mismo como “un mundo cerrado de intersubjetividades”, ajeno al resto de los movimientos sociales y sin conciencia de “clase”. Hay evidencias de un movimiento social (parte del movimiento societal o aquel que mejor lo representa) por interponer (de manera antagónica) unos modos de producción, tenencia, explotación y distribución de la riqueza radicalmente diferentes de los del capitalismo *agrobusiness* impuesto en los noventa e inspirado en el paradigma neoliberal. Más evidencias encontramos cuando el MST procura y diseña una arquitectura institucional sobre la base de la participación hori-

zonal que sobrevalora los mecanismos de consulta de nivel estadual y municipal; destacando los principios que orientan la configuración de los numerosos núcleos comunitarios y familiares para la producción agraria, la constitución de un soporte cooperativo y asociativo; la conformación de redes educativo-pedagógicas para sus integrantes; la noción de autonomía y respeto a las singularidades en cada nueva experiencia socioproductiva y una praxis que anuda su proyecto social y político al devenir de la democracia brasileña. “Queremos transformar el Estado y la sociedad” es una afirmación común en muchos de sus dirigentes, militantes, de sus miles de pequeños productores, campesinos y colonos, que de una u otra forma han nutrido en lo cotidiano de sus luchas desde la ocupación de tierras, los ayunos y las marchas, una formidable experiencia de articulación social sobre la base de un principio originariamente orientador; la reforma agraria expresa la justicia social anhelada y cuestiona el derecho a la propiedad desde la lógica y el fundamento capitalista. El involucramiento del MST en casi todos los asuntos públicos que hacen a la vida social, económica y política del Brasil le ha otorgado, por derecho ganado en la faena diaria, un sitio privilegiado que convierte al movimiento en un referente ineludible para el conjunto de la sociedad civil, para el Estado y los partidos políticos, aun también para actores de la región y el planeta. El MST es un *sujeto colectivo* (un actor central) que contribuye a la edificación de una “democracia desde abajo”, con señas de identidad, que resiste la imposición de la racionalidad del mercado y que invoca nuevos valores en la cultura del trabajo, de la producción y la distribución; en la solidaridad manifiesta entre ocupantes precarios y colonos, entre mujeres y hombres, entre sus diferentes generaciones, y entre dirigentes y militantes de base.

Desde luego que las contradicciones afloran y los conflictos por el poder no se ausentan; la intervención de los actores políticos también hace mella y no podríamos de manera insensata aventurarnos a “sacralizar” al MST, precisamente por considerarlo un movimiento en juego interactivo y no cerrado sobre sí mismo. El mito de un *movimiento societal* que soluciona y supera –con abluciones mágicas– las perversidades y tentaciones de la racionalidad capitalista, de la que también es tributario, no hace más que perjudicar (desdibujando) una imagen mucho más multifacética y policromática. El desgarramiento del *sujeto* (al cual siempre Touraine hace referencia) en el *sujeto (colectivo)* afirma una unidad inseparable que concierne tanto al sujeto individual como al colectivo. Lejos de resolver las contradicciones entre el mundo de la instrumentalidad (el mercado) y el mundo de las identidades culturales (comunidad), el MST provee de ámbitos, recursos, espacios para asumirlas crítica y no impávidamente, promoviendo *sujetos* activos en la superación de aquellas contradicciones, y no individuos pasivos, en una

dialéctica *sujeto individuo-sujeto colectivo* que construye identidades y subraya la importancia de lo cotidiano, del diálogo entre subjetividades, sin imponer lógicas autoritarias homogeneizadoras en torno a valores, normas y conductas. El legado social del MST más significativo, si se quiere, refiere más a una metodología (praxis) de superación de la alienación consumista, y la puesta en práctica de nuevas relaciones entre sujetos.

De otra parte, los formatos democráticos se verán afectados, pero también sus contenidos, siempre que se comprenda que la relación biunívoca entre Estado y sociedad no está sólo mediada por el sistema de partidos, reconociendo que hay espacios legítimos y válidos (sin presumir la sustitución de los movimientos sociales en las funciones polivalentes de los partidos políticos) para el aporte sustantivo de los movimientos sociales, en la refundación democrática en Brasil y en América Latina. Caminos de confluencia –repetimos– sin evadir los conflictos reales y no meramente simbólicos (entre clases, entre dominados y dominadores) puede haber, y de hecho los hay, entre movimientos sociales y partidos políticos de signo progresista para la construcción colectiva de nuevas relaciones de poder –insistimos– en el marco de reglas y normas de convivencia y respeto a la pluralidad. Tanto en lo atinente al control social de la economía (lo que necesariamente supone un cambio profundo de los actuales mecanismos en el control del capital, la asignación de recursos presupuestales del Estado, el control público del manejo de intercambios comerciales, la disposición y afectación de los recursos naturales, entre tantas otras dimensiones de la economía), como en cuanto a la limitación del poder y la representatividad de los dirigentes políticos, de acuerdo con las condiciones que debiera tener la democracia contemporánea (según Touraine, 1998; 1999), nos hallamos en un punto bien lejano. El panorama de las democracias latinoamericanas está alejado de las condiciones apuntadas, lo que no significa la imposibilidad de revertir las tendencias oligopólicas y monopólicas en la concentración de poder (y los recursos para ejercerlo), ni la oclusión de todas las vías para remover los obstáculos para su transformación. Si nuevamente volvemos a ejemplos concretos, la CONAIE de Ecuador nos ilustra profusamente acerca de sus posturas antisistémicas de las cuales derivan los argumentos para refundar la democracia en el sentido de Touraine. Cambiar los armazones institucionales, repensar el Estado como un todo y no exclusivamente en tanto burocracia o dispositivos de control, repensar el papel de la sociedad y las estrategias de inclusión (integración) social, la consideración de la plurinacionalidad en la cual se asentaría el nuevo esquema institucional, en fin, son todos elementos suficientes que perfilan a aquel movimiento social como la posible columna vertebral de un movimiento societal en Ecuador, luego

de haber protagonizado y liderado tres levantamientos indígenas en la última década del siglo XX.

La perspectiva temporal nos retrotrae a la década de los ochenta, cuando las democracias restauradas insuflaban esperanzas a las ciudadanías latinoamericanas. Dos décadas después se añoran los tiempos de efervescencia y emoción por el reencuentro con las libertades, por cierto no concedidas gratuitamente sino arrebatadas a fuerza de luchas populares con costos altísimos y heridas aún no totalmente restañadas. La cuestión central, a inicios de una nueva centuria, es cómo estas democracias aún frágiles, inestables y extremadamente vulnerables pueden recomponerse a partir de nuevas matrices sociopolíticas, sin someterse a turbulencias cada vez más frecuentes y desintegradoras. Precisamente, las aportaciones del sociólogo Manuel Antonio Garretón (2002) aluden a la descomposición de las matrices que históricamente determinaron o condicionaron la naturaleza de los movimientos sociales y los ejes de la acción social colectiva, selladas por la impronta nacional-popular y estadocéntrica. Las estructuras (sobre todo económicas) ya no constituyen, a su juicio, una categoría suficiente para explicar e interpretar adecuadamente los procesos sociopolíticos que se escribieron en las páginas de la historia reciente en el continente. En su lugar no se hallarían categorías sustitutivas aptas para un análisis riguroso, pero sí al menos nociones y conceptos que aluden a los cambios continuos, a la consideración de las subjetividades y la dimensión cultural y de las identidades.

Si coincidimos con Garretón en su afirmación de que las estructuras económicas ya no explicarían de manera central el conflicto y la movilización, así como que las nuevas realidades latinoamericanas nos revelan otros ejes de la acción social colectiva, debemos ir a la búsqueda de las señales, de los anuncios que los propios movimientos sociales nos ofrecen para intentar una lectura interpretativa de los fenómenos, hechos, situaciones y procesos que han marcado los itinerarios desde los años ochenta hasta los inicios del nuevo siglo. Es cierto que emergió una pluralidad de nuevos movimientos y actores sociales, no sólo con un discurso renovado, sino con unas prácticas sociales referenciadas en identidades socioculturales, a la cotidianeidad de las vivencias singulares, a la revalorización de las dimensiones subjetivas de las luchas sociales, y una reivindicación implícita –si se quiere– de una autonomía de la sociedad civil, reclamada ante la omnipresencia del Estado y de las instituciones sociopolíticas que regularon durante años la convivencia democrática (sindicatos, corporaciones empresariales, partidos políticos). Nuevas problemáticas emergieron o, más precisamente, se hicieron más visibles: los derechos de la mujer, el respeto a la diversidad cultural, la cuestión étnica y la exclusión histórica de los pueblos indígenas, los asuntos vinculados al medio ambiente y la depredación de

los recursos naturales, la participación vecinal, entre tantos otros ejes en torno a los cuales se rearticulaban viejos y nuevos conflictos. Ahora bien, el trabajo perdió terreno y el movimiento sindical se debilitó; sin embargo, los movimientos rurales y campesinos recobraron el protagonismo, el movimiento estudiantil en muchos sentidos se redefinió, el movimiento indígena se reconfiguró, la territorialización de la acción social colectiva se convirtió en una tendencia bien evidente. Los trabajadores desocupados, aquellos que parecían ya condenados al ostracismo social, despojados de sus derechos y apartados de los circuitos del mercado, irrumpieron en la escena pública con voz potente y firme.

Las limitaciones o ausencia de incentivos significativos para la acción social colectiva, según la afirmación de Garretón, no parece completamente adecuada para caracterizar las etapas de mayor turbulencia y movilización social que se vivieron en el subcontinente en los últimos diez o quince años. Tal vez aletargados durante cierto tiempo, los pueblos latinoamericanos volvieron sin embargo a cobrar impulso y protagonismo a través de sus manifestaciones orgánicas más visibles: en Argentina, durante la década menemista, la irrupción del piqueterismo y de otras expresiones novedosas del movimiento de trabajadores (caso CTA); en Brasil, el creciente desarrollo de los Sin Tierra (además de nuevos actores sociales a nivel vecinal, territorial); en Ecuador, el despliegue del indigenismo; en Paraguay, sobre todo en el último lustro, la rearticulación del movimiento campesino; en Uruguay, la confirmación de un papel relevante aún del movimiento sindical y el fortalecimiento del movimiento cooperativo de vivienda (FUCVAM).

Todo ello nos exige repensar que, en rigor, efectivamente ha habido vectores o incentivos poderosos que estimularon la acción social colectiva: la frustración de ciertas expectativas respecto de los rendimientos de las democracias restauradas, la aplicación sistemática y contundente de un conjunto de políticas económicas y sociales inspiradas todas en el paradigma neoliberal, el desencanto en alguna medida de las instituciones democráticas y de los partidos políticos, la ofensiva para implantar los proyectos de integración a la "americana" (ALCA), los intentos de criminalización de la protesta social que empujaron a vastos sectores de las clases más pauperizadas a redoblar sus acciones, la aceleración del proceso de mundialización cultural, económica y financiera. Desde luego, estas movilizaciones y sus movimientos representativos no han replicado los formatos de protesta y acción colectiva de los años sesenta o setenta; son otros mecanismos y modalidades, pero no puede negarse su regularidad y presencia no tan efímera como algunos sospecharon. La instalación de la cuestión étnico-cultural en Ecuador no culmina con la aceptación de unos dispositivos institucionales para atender la causa indígena; antes bien, el proceso sostenido y continuo de la CONAIE (principal artífice de la

protesta en la década del noventa y a partir del primer levantamiento indígena) no podría entenderse sin considerar que su foco de preocupación trasciende largamente la defensa de los derechos de las nacionalidades indígenas ecuatorianas, para situarse en el campo de la confrontación con el poder político institucional y por la redistribución de la renta, por la reestructuración del Estado y la refundación democrática sobre nuevos principios. Por tanto, no se trata exclusivamente de reclamos sectoriales, de reivindicaciones por tierras despojadas, de demandas puntuales, sino de una verdadera lucha por la hegemonía (congruente con la emancipación) en la producción de orientaciones estratégicas, valores y normas, de largo aliento y cuyo efecto se haría sentir en las instituciones de la democracia.

Los cuatro asuntos (señalados por Garretón, 2002) por los cuales habrían de transcurrir los ejes del conflicto social aluden a: la democratización política; la democratización social; la reconstitución de las economías; y la reformulación de la modernidad. La democratización ha sido y es, sin duda, un proceso lento y complejo que recorre la pampa argentina, cruza la cordillera andina y atraviesa la selva amazónica; de sur a norte en el subcontinente, va dejando las huellas aún endebles de un sentimiento colectivo que comparten los pueblos, la ciudadanía o la sociedad civil, según sea el lente teórico que utilicemos. Sea como fuere, los sistemas democráticos han reincorporado enormes contingentes de latinoamericanos al calor de la *politeia*; pero el carácter polisémico de la democracia inflige un duro revés a quienes presuponen concepciones congeladas, cristalizadas y por tanto restringidas exclusivamente a la comprensión de aquellos que pretenden ser sus especialistas, tanto en su diseño como en las formas de aplicarla.

Las democracias recortadas, acotadas a los procedimientos regulares y estandarizados, dejaron la sensación de vacío. Esto es en cierto modo lo que acaeció durante toda la etapa post-autoritaria. En casi todos los países donde hubo dictaduras, la democracia perdida y arrebatada debía ser recolocada como principal reivindicación de la ciudadanía. A fuerza de movilizaciones, resistencias, negociaciones y, sobre todo, de mucho sacrificio humano, retornaron aquellas democracias para encarnar la voluntad general de reasumir los destinos nacionales. Después sobrevino la frustración. El proceso de democratización política dejaría, poco tiempo después, la impresión de insuficiencia. Es decir, los mecanismos reinstaurados –elecciones sistemáticas, garantías para la libre competencia, participación ciudadana, libertades de expresión, canales abiertos de expresión de la protesta y el debate – fueron evaluados como insuficientes. Porque, para citar el primer ejemplo, en Argentina hubo un gran resplandor que aturdió, creando espejismos y realidades virtuales; para una proporción importante de la sociedad aquellos sueños de gloria y opulencia parecían materializarse. Sin em-

bargo, de la euforia optimista se pasó a la furia de la frustración. La democracia apenas recuperada se volvió a tambalear. En el año 2001, cuando el entonces presidente de la Rúa decretaba el estado de sitio, las multitudes salieron a la calle a preservar la democracia herida. La democratización política y su consolidación es para Argentina un asunto pendiente; mejor dicho, en construcción.

Si uno de los ejes del conflicto y de la acción social colectiva es la democratización política, queda claro que es un eje común a los siete países mencionados, ciertamente en grados bien diferentes. Sostenemos que la crisis en Argentina fue más institucional que económica, sin soslayar de ninguna manera las bases para que así lo fuera (descomposición social, pauperización, corrupción, ajustes fiscales, dismantelamiento del aparato productivo, especulación financiera, crisis de confianza política, descreimiento y pérdida de legitimidad en los institutos representativos). En efecto, los valores señalados en materia de decrecimiento de la confianza en el sistema político, y especialmente en los partidos políticos, marcan un cambio de rumbo que está en curso. Al momento de escribir estas palabras, el presidente de los argentinos, Néstor Kirchner, da muestras de querer modificar ciertos clavajes perversos que hicieron de la política –y, de hecho, del régimen democrático– un dominio donde las elites se regodearon para sacar provecho particular con desprecio por la suerte de las mayorías ahora pauperizadas. Restan todavía algunos años más para afianzar un modelo alternativo. Entre los aspectos que decidirán el futuro de aquella nación, habrá que mencionar la capacidad de articular un proyecto donde la democracia política incorpore la voz de los ciudadanos, no sólo mediada por los partidos políticos, sino por un conjunto de actores sociales, movimientos emergentes y sólidos que han reclamado ser partícipes activos en la construcción de una democracia renovada. No puede soslayarse de ninguna manera la prueba irrefutable de la vocación profundamente democrática²³ de la sociedad argentina, puesta en evidencia a fines del año 2001, cuando se opuso al estado de sitio saliendo a las calles en defensa del orden constitucional, las libertades y la democracia.

En tanto, en Uruguay, el sistema político está transitando por una fuerte transformación de las hegemonías históricas. Luego de la

23 Aun reconociendo una gama variada y matizada respecto a la conceptualización del régimen democrático que desde los movimientos sociales se expresa, algunos de nuestros interlocutores se manifestaron en abierta crítica, desprecio y menoscabo a ciertas instituciones democráticas (Parlamento, partidos políticos, Poder Judicial); para otros, en cambio, si bien anotaron las insuficiencias y la desnaturalización de la función pública en democracia, el mal ejercicio de los cargos de representación y la ausencia de mecanismos de participación ciudadana, la afirmación de la democracia como sistema de convivencia (a ser transformado o reformado) es concluyente.

restauración democrática también se vivieron etapas de frustración. Sin embargo, aun interpelado, el sistema de partidos se mostró dúctil y permeable a las variaciones de las expectativas sociales. De todos modos, los niveles que hemos examinado en referencia a los grados de confianza en las instituciones democráticas deberían constituir una señal de alerta para los actores políticos, a fin de prevenir el ahondamiento de la débil credibilidad en el sistema del partidos, exigiendo por otro lado una labor madura y persistente de los movimientos sociales en la consolidación de su papel en la construcción de los nuevos escenarios democráticos en vísperas de un posible cambio de las orientaciones gubernamentales a partir de las elecciones de octubre de 2004. En Venezuela, la fragilidad y extrema vulnerabilidad del actual formato institucional augura un tránsito aun muy dificultoso hacia una consolidación y estabilidad democrática, allí donde los movimientos sociales todavía se mantienen alineados en uno y otro campo de las fuerzas políticas en contienda. En Ecuador, la salida del movimiento indígena del gabinete del gobierno de Lucio Gutiérrez, seis meses después de asumir el mismo, pasando a la oposición, hace compleja la tarea de lograr el equilibrio constitucional mientras se mantenga una situación que no contempla las demandas genuinas de cambio para las mayorías excluidas. En Brasil se delinearon nuevos rumbos, no exentos de contradicciones entre los movimientos sociales y el gobierno liderado por su presidente Lula da Silva. En Paraguay, la hegemonía de un partido en el poder condiciona fuertemente los procesos de una democratización que suponga una mayor apertura y pluralidad política, profundizando las actuales tendencias renovadoras. Finalmente, en Chile, el acuerdo de dos partidos que hoy comparten responsabilidades en el poder podría verse en problemas si se confirmara la evolución de un lento pero firme crecimiento de la derecha, en condiciones de arrebatarle la hegemonía de casi más de una década. En todos estos países, el conflicto estará sin dudas determinado por la capacidad de ahondar los procesos de democratización, so pena de reingresar a un estado de mayor fragilidad institucional, en razón de lo cual resulta imprescindible examinar cuidadosamente la relación entre el sistema político y los movimientos sociales a largo plazo.

La democratización social, también planteada como uno de los ejes del conflicto por Manuel Garretón, refiere a la reivindicación de los derechos sociales; en ese sentido, sostuvimos la estrecha relación entre crisis económica, pauperización, desigualdad y protesta, movilización y lucha social. Resulta claro que, cuando se traspasan los límites de tolerancia que una sociedad "admite" en términos de brecha socioeconómica, y se cruza el umbral mínimo de bienestar, se produce una reacción inmediata de respuesta en clave de resistencia, de oposición y reivindicación. En estas condiciones se reducen considerablemente las

posibilidades para el consenso a partir de la negociación, empujando a la polarización social que puede generar bloqueos en el sistema político. Sin embargo, es preciso establecer que, en la mayor parte de los movimientos sociales que analizamos, el discurso y la práctica contestataria no se remiten exclusivamente a las lógicas de la demanda y negociación (aun teniendo presente que ellas son indispensables para obtener las conquistas sociales); antes bien, elaboran y formulan alternativas y opciones que sobrepasan largamente las fronteras de los intereses sectoriales y específicos o corporativos, para colocarse en el plano de los proyectos (y metaproyectos) nacionales de transformación estructural, que incluyen las dimensiones políticas, sociales, culturales, institucionales y económicas.

Si recurrimos al relevamiento de casos examinados, advertimos las similitudes de perfiles entre varios movimientos sociales de diversa naturaleza y origen, pero que cuentan en su haber con caracteres comunes: la intención de trascender los impulsos reivindicativos de corto alcance para ubicar demandas mucho más integrales; una capacidad orgánica importante en términos de estructuras y funcionamientos regulares, sistemáticos y sostenidos; discursos que incluyen asuntos públicos de interés colectivo; estrategias y tácticas combativas, así como un repertorio de modalidades innovadoras de lucha que se compatibilizan con propuestas articuladas y el despliegue de capacidades de negociación e incluso de participación en la gestación y gestión de políticas públicas. Las identidades de los movimientos sociales se construyen con relación a sí mismos y a los otros actores sociales y políticos. Los desocupados y piqueteros, las ocupaciones y los sin tierra, los trabajadores y las marchas, los cortes de ruta y los indígenas, todos defienden principios comunes: la exigencia de democratizar la sociedad, el Estado y, por qué no, el mercado, en el entendido de que esto último significa la no sumisión a los supuestos designios invisibles de la oferta y la demanda. Es desde esta perspectiva que se resignifica la defensa de los derechos humanos y particularmente los derechos sociales, el acceso a los servicios de salud, vivienda, alimentación, empleo, a las coberturas sociales múltiples que debieran dar protección social en contingencias imprevisibles (discapacidad permanente o transitoria, ancianidad, enfermedad).

Cuando ni el Estado ni el mercado aportan respuestas consistentes, los propios movimientos sociales han autogenerado las soluciones, sean de emergencia o de efecto sostenido. Esta ha sido otra manera de construir identidades socioculturales, procurando el respeto a las comunidades y envolviendo con redes solidarias a quienes buscaron o encontraron aquellas protecciones básicas que el Estado no les supo ofrecer. Las huertas comunitarias, las ollas populares, los comedores infantiles, los centros barriales, las cooperativas de vivienda, de pro-

ducción y trabajo, los talleres artesanales, las aulas pedagógicas en los campamentos de colonos, las escuelas son, entre otras, las respuestas que los movimientos sociales les han dado a sus integrantes. Esta democratización social, que continúa, se inscribe en una estrategia de democratización política; ambas dimensiones presuponen cambios sustantivos, y no soluciones mitigatorias. El proceso de contramarcha respecto de la implantación del paradigma neoliberal puede tomarse como un síntoma del restablecimiento de unas condiciones mínimas perdidas en más de una década en la mayor parte de las naciones evaluadas; pero la democratización social seguirá siendo –sin duda– uno de los ejes fundamentales de la acción social colectiva, en la medida en que los actores sociales están prevenidos respecto de las deudas pendientes y a la necesidad de una actuación eficaz, continua, ininterrumpida a efectos de obtener logros plenamente satisfactorios –por cierto, en función no sólo de las *performances* de las respectivas economías sino, y sobre todo, de la suerte que corran los procesos de inclusión e integración social fundados en nuevos contratos sociales. Nuevos fracasos en esta dirección harían revertir peligrosamente los avances políticos obtenidos en los últimos veinte años de democracia en América Latina.

La expansión de la ciudadanía y la remisión de la exclusión social (además de la superación de la pobreza) es un requisito imprescindible –*sine qua non*– para el fortalecimiento democrático, ciertamente atado –en el infortunio o en el éxito– al despliegue de capacidades sustantivas de participación ciudadana, al pleno ejercicio de los derechos políticos, económicos y sociales, a la *incorporación de sujetos* activos y no de objetos de derecho. En ese sentido, los movimientos sociales adquieren relevancia superlativa, constituyéndose también en verdaderas escuelas de democracia, de construcción y expansión de ciudadanía.

La reconstitución de las economías en su gran mayoría dañadas por efecto de las crisis de inserción en la economía mundial es otro de los desafíos que enfrentan las naciones latinoamericanas. Abandonado y perimido el modelo desarrollista, las economías nacionales se debaten entre la supervivencia en el contexto de la globalización –que realza las cualidades competitivas singulares– y la búsqueda afanosa de alternativas estratégicas novedosas (ya no de modelos sustitutivos) que recuperen los activos degradados o sencillamente perdidos, para enfrentar de manera consistente los retos de una mundialización y regionalización que favorecen la interdependencia más que las salidas unilaterales o autárquicas. En este sentido, los movimientos sociales han apreciado estos desafíos, incorporándolos explícita o implícitamente a la panoplia de núcleos del conflicto que unas veces ha reordenado y articulado actores políticos, sociales, agentes económicos en función de plataformas (forzadamente) consensuadas, y otras veces ha establecido las rígidas demarcaciones entre los actores y sus respectivos intereses de clase.

Lógicamente, las interacciones constantes no omiten las diversas racionalidades en cuestión, desde las propias del Estado débil pero no ausente (habíamos advertido que este sigue siendo el *locus* preferencial del poder, aunque haya perdido centralidad), pasando por las demandas por inclusión y participación de los movimientos sociales, y las pretensiones de mediación y representación de los partidos políticos.

Si bien debe reconocerse –tal como sugiere Garretón– “la preeminencia de las luchas defensivas, a veces en la forma de revueltas salvajes, otras a través de la movilización de actores clásicos ligados al Estado en defensa de sus conquistas previas” (Garretón, 2002), justo es reconocer otras luchas sociales que trascienden los avatares particularistas, para situarse en el plano de las “reivindicaciones” más universales en una nación o comunidad. Los levantamientos indígenas en Ecuador expresaban, al final del recorrido, no sólo los anhelos de justicia para las etnias excluidas, sino la intención evidente de una transformación radical de las reglas de juego y de la correlación de poder existente en aquella nación. Asimismo, las ocupaciones de tierras en Brasil y la exigencia de la reforma agraria resultan tan sólo la punta del iceberg de una plataforma que abarca también y sobre todo la cuestión de los modos de producción capitalista en el agro, nuevas culturas del trabajo y de apropiación del excedente, valores y normas alternativos y contrapuestos a los dominantes en la sociedad brasileña. Los piqueteros y también las asambleas barriales exigen cautela para no caer en el estereotipo y la falsa imagen de multitudes revoltosas que impiden el paso de vehículos colocando piquetes por doquier, sólo por Planes Trabajar o subsidios para desempleados. Las innumerables experiencias de trabajo, de mallas solidarias tejidas y entrelazadas por identidades compartidas, subjetividades y “sentidos de acción”, nos permiten escudriñar minuciosamente en un movimiento social que, aunque algo disperso y fragmentado, denota una voluntad integradora, tanto cultural como políticamente. El movimiento cooperativo de adscripción territorial en Uruguay cuenta a su vez con acumulaciones empíricas que han removido algunos supuestos fuertes del mercado y cuestionado (alterando) los fundamentos de la propiedad capitalista, en ensayos de autogestión social y participación ciudadana. Las disputas de los mapuches en Chile aluden también a la tenencia de la tierra, a ciertas modalidades depredadoras de la biodiversidad, al atropello de las culturas indígenas y la no consideración de valiosos aportes en materia de producción agraria en comunidad.

Ciertamente, la búsqueda de estrategias de desarrollo genuino (para muchos endógeno) necesita de la pluralidad de actores y revierte a la necesaria articulación entre sociedad, mercado y Estado. Hay quienes preferimos señalar, sobre todo, la importancia de repensar un nuevo *contrato social*, que podría implicar renunciamientos pasajeros o

sobreesfuerzos de unos sectores sociales más que otros, pero que debe anteponer ante todo los intereses de las enormes mayorías pauperizadas (por razones éticas, políticas y económicas), privilegiando a los sectores pobres, a las clases subalternas por encima de la recuperación de las capas medias, aunque en dicho contrato social se deba incluir a los trabajadores y empleados (públicos y privados, del campo y las ciudades), empresarios medianos y pequeños, productores rurales y profesionales, imputando inevitablemente el mayor costo a los sectores de mayores ingresos. Desde nuestra óptica, la recuperación de las economías nacionales y regionales no podrá seguir midiéndose exclusivamente con el indicador de crecimiento (PBI), sino especialmente en función de cómo se redistribuye el ingreso, la riqueza generada por el colectivo social. El conflicto social y la acción colectiva se refieren (aunque no de manera exclusiva) a la *distribución de la renta y del poder* (en el marco de una fase del capitalismo concentradora y más excluyente), aun admitiendo que las estructuras económicas ya no determinen los ejes principales y debamos rastrear en dimensiones socioculturales, psicológicas, de las subjetividades y los sentidos de acción –que nos propone Garretón– del mundo del sujeto desgarrado –que nos sugiere Touraine. No desconocemos la relevancia de otros asuntos que han venido a la palestra pública a recobrar validez y vigencia, tales como los derechos de las mujeres y sus luchas contra toda discriminación (es a la vez un problema vinculado al ejercicio del poder); las batallas por el reconocimiento de la diversidad de carácter étnico, con base en la cultura y los valores, con soporte territorial; la defensa del medio ambiente (que mucho tiene que ver con las formas alternativas de producción, que cuestionan el uso cada vez más extendido de los transgénicos y la destrucción de la biodiversidad).

De todos modos, el debate instalado en el campo económico no admite reduccionismos simples; ya no se trata de producir más bienes, sino sustancialmente de cómo se logra incrementar dicha producción, y principalmente cómo se la distribuye con equidad. La desafiliación masiva que se ha generado en todo el subcontinente no es producto de la casuística, ni tampoco podría afirmarse su irreversibilidad; coloca ambos dilemas –el de la recuperación económica y el de la exclusión social– en estrecha simbiosis. Las movilizaciones, las protestas y luchas sociales recorren el espinel de los reclamos y demandas por trabajo y empleo endosados a un “modelo” económico a todas luces fracasado (al menos en cuanto a resolver su continuidad y perpetuación en la lógica de acumulación capitalista y, sobre todo, en cuanto a su incapacidad para obtener impactos de mejora del bienestar), interpelando viejos paradigmas y enfoques del desarrollo en América Latina.

La reformulación de la modernidad para Garretón supone la lucha en torno a la construcción de identidades y el rescate de la diversidad

cultural; en esta dirección, la ruptura de matrices históricas instituyentes conlleva la pérdida de referencias y prefiguraciones para incursionar en nuevas combinaciones entre varias dimensiones: la racionalidad científico-tecnológica, la dimensión expresiva y subjetiva, las identidades y la memoria histórica colectiva. El despunte de los movimientos indígenas en Ecuador, México, Bolivia y Chile, entre otras naciones, replanteó precisamente los supuestos de la integración modernizadora de las décadas precedentes, que cristalizaban determinados patrones y pautas de constitución de actores y sujetos desconociendo las particularidades culturales de comunidades ya desplazadas, confinadas o aculturadas en las grandes urbes latinoamericanas. Las sublevaciones indígenas en Ecuador, lideradas principalmente por la CONAIE, subrayan la noción de pluriétnicidad en contraposición a un supuesto modelo único de ciudadano (uniformemente unificado y representado por una síntesis armónica entre aportes culturales diversos), pero despeja inmediatamente la idea de una “guetización” de comunidades. Simultáneamente, en su trayectoria desde el primer levantamiento, el movimiento indígena ha propuesto un contraproyecto plurinacional y la transformación del Estado “nacional-burgués”, que implica una profunda reestructura institucional. Pero no sólo el movimiento indígena rescata la diversidad y el respeto multicultural; también los movimientos urbanos, como el de los MTD en Argentina, remueven las pautas de convivencia y los valores hegemónicos, para producir en el discurso, en los formatos organizativos, en su capacidad de integrar experiencias innovadoras, una ética renovada, en la cual reposa su práctica de lucha y resistencia. Respecto de Brasil, hemos argumentado de manera reiterada en esta dirección. En Uruguay, las experiencias del cooperativismo de vivienda por ayuda mutua consignan, a su vez, modalidades solidarias y autogestivas. Los mapuches chilenos suman sus voces para advertir acerca de los falsos mecanismos de inclusión social, toda vez que se los prive no sólo de sus tierras enajenadas por el capital multinacional, sino también del papel fundamental en la preservación de sus identidades comunitarias.

De los movimientos de trabajadores que hemos examinado, la CTA no se ajusta al formato tradicional y asume una fisonomía también diversificada en función de los sectores que la componen (sindicatos y desocupados, comunidades barriales y vecinales, organizaciones de defensa de los derechos humanos, cooperativas), generando asimismo alternativas que procuran reconfigurar las pautas de construcción de una modernidad singular, el aliento a la revaloración del trabajo como vertebrador de las relaciones sociales y económicas, pero a partir de ensayos solidarios y de mutuo apoyo. En este contexto adquieren preponderancia los jóvenes y las mujeres, por cuanto aquellos se rearticulan ya no sólo alrededor de consignas gremiales, sino con una presencia

importante en el desarrollo de los movimientos sociales (tal vez porque, a diferencia del sistema político que los excluye con indiferencia, encuentran en el seno de los movimientos sociales oportunidades de reasumir un papel protagónico en las movilizaciones, con voz y posibilidades efectivas de participación), mientras que las mujeres gravitan de manera extraordinaria en la conformación de redes de sostén, en la presencia a la par en las luchas y protestas, así como en los niveles de conducción y liderazgo social en las comunidades y organizaciones sociales de base.

Los procesos de mundialización alcanzan a proveer de insumos culturales y comunicativos y de repertorios (de lucha, protesta y propuesta) variados y heterogéneos, tales que favorecen –aún más– los intercambios entre sociedades y comunidades latinoamericanas, acercando unos y otros actores sociales desde experiencias singulares (no necesariamente extrapolables), pero con una disposición al mutuo enriquecimiento. Efectivamente, no podría asegurarse la existencia de una ruta o itinerario común y único de modernización para el subcontinente, pero en su lugar, probablemente, sí una tendencia a la constitución de una amalgama polivalente y dinámica, en cambio permanente y sujeta a los aportes creativos de los sujetos colectivos e individuales.

Examinemos ahora sucintamente los marcos teóricos de la *teoría de la movilización política*, más precisamente, desde los intentos de conjugarla con los aportes del paradigma culturalista de los Nuevos Movimientos Sociales (incorporados como procesos enmarcadores), a partir de los señalamientos de McAdam, McCarthy y Zald (1999). Conviene recordar al respecto que dichos autores subrayan tres aspectos o dimensiones relevantes para el estudio de los movimientos sociales: la estructura de oportunidades, las estructuras de movilización y los procesos enmarcadores. En este sentido, se consideran de manera desagregada algunas variables en el primer ítem: grado de apertura del sistema político o acceso al sistema de partidos, estabilidad de las alineaciones entre elites, alianzas entre elites, capacidad represiva y de implementar políticas públicas del Estado y la estructura del conflicto (según la debilidad o fortaleza de los oponentes). Para la dimensión de estructuras de movilización se toman en cuenta las diferencias entre infraestructuras de organización (repertorios modulares), la cultura organizativa y su relación con los movimientos sociales. Finalmente, para los procesos enmarcadores se analizan los marcos culturales, la intervención de los medios de comunicación y la construcción del repertorio de argumentos, entre las temáticas más importantes.

En cuanto a las estructuras de oportunidades, convengamos que, al mismo tiempo que se consideran como datos “preexistentes”, también se ven afectadas por las actuaciones que las modifican; vale decir que los movimientos sociales crean asimismo nuevas oportunidades para la

acción colectiva. Respecto del grado de apertura del sistema político y, más específicamente, a la permeabilidad del sistema de partidos, es posible identificar en los modelos institucionalizados una menor apertura que en los modelos incoativos. Los sistemas de partidos apañados en la competencia electoral han amarrado fuertemente adhesiones y electorados a los actores *dentro* del sistema; la incorporación de nuevos competidores (movimientos o partidos políticos) en las circunscripciones institucionalizadas ha resultado difícil, al menos en escenarios de relativa estabilidad. Si registramos los ejemplos de Uruguay, Chile, Argentina (hasta fines de la década del noventa) y Venezuela (hasta mediados de los noventa), en todos los casos el sistema de partidos fue capaz de obtener mayoritariamente el apoyo de la ciudadanía, mediando y canalizando eficazmente sus intereses y demandas sectoriales. En tanto, los sistemas políticos incoativos e inestables, con niveles bajos de enraizamiento con organizaciones sociales, fueron más propensos a nuevos ingresos en sus respectivos sistemas de partidos, más permeables a la inclusión de actores políticos no tradicionales. El caso de Ecuador es tal vez el más claro –sobre todo si analizamos la evolución del número efectivo de partidos (promedio del período 1996-2003 = 5,5)– en que se ha observado la irrupción de nuevas formaciones y agregaciones políticas con relativo éxito dentro del sistema de partidos. Brasil también ha visto modificarse de manera sustantiva su mapa político, sobre todo a partir de mediados de los ochenta. Por otra parte, tanto en Argentina como en Venezuela se suscitaron eventos y procesos que los dejaron al borde de la categoría de sistemas incoativos; en el primer caso, como resultado de la debacle económica e institucional tras las repercusiones de la estrepitosa caída del Plan de Convertibilidad y las demoleadoras consecuencias sociales y económicas por la aplicación del recetario neoliberal más ortodoxo y obsecuente.

Al comparar dichos procesos con el advenimiento de nuevos movimientos sociales o el resurgimiento de los movimientos denominados “clásicos” o “históricos” (obreros, estudiantes y campesinos), observamos de una parte las dificultades para consolidar nuevos actores sociales en el período post-autoritario inmediato en Chile y Uruguay, y la debilidad para configurar movimientos autónomos en Venezuela y Argentina en el período inmediato de su restauración democrática (salvando algunas excepciones). De otra parte, tanto en Brasil como en Ecuador hay evidencia suficiente para dar cuenta de la fuerza y el protagonismo del movimiento social de raíz territorial campesina y de raíz étnico-cultural respectivamente, aun considerando los vaivenes del movimiento sindical, todavía muy poderoso en Brasil y bastante menos en Ecuador. La permeabilidad del sistema de partidos no se refiere únicamente a la entrada y salida de actores políticos, sino también a la suficiencia para absorber y captar los reclamos, reivindicaciones y pro-

puestas provenientes del campo social; vale decir que mecanismos más o menos estatuidos en los sistemas políticos institucionalizados habilitaron la incorporación de aquellas demandas de forma sistemática y, si se quiere, legitimada.

Con relación a la estabilidad de las elites y sus alianzas, cabe comentar que, en los sistemas políticos institucionalizados, el grado de estabilidad y alineamiento de las elites fue mucho mayor que en los sistemas incoativos; al menos se percibe una capacidad significativa del sistema de partidos en términos del disciplinamiento y el mantenimiento de las lealtades básicas (no se observaron corrimientos importantes, salvo en algunos casos en que la conformación de nuevos bloques políticos se nutrió parcialmente de desprendimientos de partidos históricos o de larga data, como el ejemplo uruguayo). Las alianzas entre políticos y actores económicos se sostuvieron por agrupamiento de intereses estratégicos, en clave de alianzas de clases. En la mayoría de los ejemplos que comparten los rasgos típicos de sistemas institucionalizados, las alianzas entre clases –grupos de interés– y partidos políticos de tipo *catch all* o policlasistas, u otros claramente clasistas, las coaliciones y pactos se mantuvieron más o menos consolidados durante largo tiempo. Basadas en sectores ganaderos y agroexportadores o actores empresariales (del capital industrial primero y del capital financiero después), las alianzas entre elites fueron soportes para la gobernabilidad democrática (salvo durante los períodos autoritarios en los cuales el papel esencial estuvo centrado en las Fuerzas Armadas) hasta bien entrada la década del noventa, etapa en la cual aquellas alianzas relativamente estables sufrieron también los impactos de un modelo altamente concentrador, expulsando a actores de cierto peso económico y social.

De alguna manera, la rotación de aliados puede ayudar a interpretar mejor los vacíos producidos en algunos países y el desfibramiento de pactos tácitos o explícitos. En los casos de Brasil (el debilitamiento de sectores industriales nacionales durante la implementación de políticas de cuño neoliberal en los noventa adquiere aristas singulares, empujando a las elites a reorientarse hacia partidos políticos que les aseguraban el mantenimiento de políticas acordes a sus intereses) y Ecuador (sumido en la completa dependencia y dolarización de su economía, donde los militares retomaron un rol significativo junto con sectores de la oposición política y social al menos hasta la ruptura de la alianza entre Gutiérrez y el movimiento indígena) las alianzas dejaron la sensación de ser menos estables, aunque comparten también lógicas de alineamiento relativamente similares. El caso paraguayo es bien diferente: la impronta autoritaria y militarista pervive aún, y perfila las alianzas entre el Partido Colorado hegemónico y las elites terratenientes.

En Chile, desde la restauración democrática, la Concertación refleja el acuerdo entre los dos partidos (DC y PS) que conforman la

mayoría en el gobierno. En Venezuela, hasta el colapso del sistema de partidos, predominó el acuerdo de Punto Fijo entre las elites socialdemócratas y socialcristianas. En Uruguay, también desde la recuperación de las instituciones democráticas, se asistió a la configuración de una coalición de gobierno cada vez más explícita (Partido Colorado y Partido Nacional). Dichas alianzas, que incluyeron a sectores empresariales, los medios de comunicación más potentes y en algunos casos también las elites militares, fueron apenas interrumpidas por los ciclos electorales. En Venezuela se produjo un brusco cambio y reordenamiento de las alianzas a partir del fin del puntofijismo y la victoria electoral del presidente Hugo Chávez; allí es evidente la conformación de una oposición que cuenta entre sus protagonistas a la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), al menos en su expresión oficial, y FEDECÁMARAS, la más importante asociación de empresarios. Los movimientos sociales en Uruguay, Chile y Venezuela se restringieron a los campos más específicos de las demandas y las luchas sectoriales, no obstante verificarse en algunos casos movilizaciones más abarcadoras. Deben reconocerse, de todos modos, las diferencias sustantivas entre actores más o menos autónomos, y otros más vinculados a las matrices originarias comunes con partidos políticos históricamente asociados al poder institucional. En Argentina, la emergencia y el desarrollo de nuevos movimientos sociales se verificó durante las postrimerías del gobierno menemista, aunque la CTA inició su proceso de maduración a principios de los noventa. Es interesante analizar, de otra parte, la evolución del MST, que enfrenta a la alianza entre terratenientes y latifundistas con los partidos de la derecha brasileña.

Los contextos políticos en los cuales las alianzas se solidificaron y los alineamientos se hicieron más estables estuvieron caracterizados por la constitución de movimientos consolidados en la arena pública, pero con escasa capacidad de convocar nuevas alianzas o campos alternativos de envergadura, al menos hasta los noventa. La situación se revierte sobre fines del siglo pasado, si consideramos los altos costos sociales de la aplicación de políticas económicas que afectaron de manera generalizada y extendida intereses de amplios sectores sociales (trabajadores, campesinos, pequeños y medianos empresarios, productores rurales, profesionales independientes, entre otros), facilitando la articulación de alianzas entre actores opositores al modelo hegemónico. Sin embargo, tenemos la impresión (en razón de una falta de información más precisa y afinada) de que las alianzas estables y fuertes entre elites políticas y corporativas tienden a restringir o frenar el desarrollo de movimientos sociales innovadores y más autónomos.

Con relación al Estado y su capacidad represiva y de implementar políticas públicas; más allá de la potencialidad coercitiva de los aparatos estatales en todos los países, señalamos diferencias importantes.

En Uruguay y Chile la etapa post-autoritaria dejó atrás la fisonomía de un Estado policíaco y ferozmente represivo; aunque ha habido hechos violentos durante los últimos diez años, ellos no superan el carácter de excepción (arrestos a dirigentes mapuches, represión a manifestantes estudiantiles en Chile, violencia desatada a inicios de los noventa en Uruguay, y acotada a un episodio específico). En Venezuela, la sangrienta represión durante el *caracazo* y los saldos que arrojan las manifestaciones posteriores nos informan de una impronta represiva significativamente alta (incluso considerando la intervención reciente de fuerzas policiales en Caracas que no responden totalmente a los sectores chavistas), no obstante lo cual no podría atribuírsele el rasgo de Estado represor. En Brasil y Ecuador la violencia desatada contra los movimientos sociales ha sido importante, en el primer caso en complicidad con grupos armados que responden a los *fazendeiros*, en otros, directamente por el uso de la fuerza policial (sobre todo contra las ocupaciones “ilegales” promovidas y organizadas por el MST). En Ecuador, la represión tuvo como blanco predilecto al movimiento indígena, con la intimidación, persecución, encarcelamiento de dirigentes y líderes sociales. En Argentina, la situación desencadenada por la grave crisis social y económica adquirió ribetes dramáticamente represivos: muertos y heridos, presos y perseguidos. La criminalización de la protesta se hizo mucho más patente en aquella nación. Sin embargo, tanto en Argentina, como en Brasil, Ecuador e incluso Paraguay, los movimientos sociales no se replegaron; al contrario, sus luchas violentas alimentaron la mística de la sublevación y la resistencia, haciéndolos más fuertes y otorgándoles aún más legitimidad social de la que disponían.

La capacidad de instrumentar políticas públicas desde el Estado se distingue también por la propia y particular historia de la formación de las burocracias, modernizadas o aún sujetas al clientelismo y el patrimonialismo. Uruguay y Chile vuelven a compartir rasgos comunes en este aspecto, independientemente de las orientaciones diversas. En ambos países, las políticas públicas constituyeron referencias insoslayables para el conjunto de actores sociales y políticos, formando parte constitutiva de la contienda por la asignación de recursos, beneficios e incentivos. En Argentina, las vicisitudes electorales y político-institucionales redujeron las capacidades del Estado para mantener políticas públicas coherentes y congruentes entre sí –al menos eso fue lo ocurrido entre los años 1999 y 2002–, capacidades que fueron cabalmente recuperadas en el año 2003, con un nuevo gobierno electo democráticamente.

El asunto central, obviamente, alude a los intersticios, vacíos o contradicciones ocasionados por la falta de consistencia y coherencia de parte de los gobiernos cuando asumen una de sus funciones básicas. Las políticas públicas no son tampoco unilateralmente diseñadas

y ejecutadas por el Estado, sino que recogen a su tiempo la confluencia de demandas (corrientemente opuestas, o mutuamente excluyentes) e intereses inmersos en procesos conflictivos de negociación, lobby y concesiones recíprocas. En la medida en que los actores sociales no sean escuchados y su participación se vea limitada o recortada, en tanto el Estado no responda eficaz y eficientemente, el espacio de acción para los movimientos sociales se ensancha. Resulta claro que las intervenciones fuertes, sostenidas y sistemáticas del Movimiento Sin Tierra en Brasil responden a la incapacidad (por falta de voluntad expresa o por presiones de los grupos de interés en pugna) del Estado en implementar la reforma agraria reclamada y reconocida como necesaria por la mayoría del sistema político. Actualmente, y aun con un gobierno de izquierda, el MST se moviliza activamente en nuevas ocupaciones de tierras, como respuesta a las demoras y el entencimiento del proceso. Cuando en Argentina el Estado no asume responsabilidad plena por las graves carencias alimenticias y sanitarias de su población y no despliega acciones rápidas, eficaces y acordes a la magnitud de las circunstancias, la sociedad civil, y especialmente los movimientos sociales, asumen lo que en rigor no deberían: la cobertura básica de satisfactores para los más empobrecidos, amén de tomar iniciativas en el campo laboral y educativo, razones agregadas para obtener espacios de relevancia en el escenario público.

Respecto de la debilidad y fortaleza de los actores en pugna, ya nos hemos referido a las articulaciones entre elites, asociadas a clases y sectores sociales, en función de su posición dominante o subalterna en el marco de una estructura capitalista, y en un contexto de aplicación del paradigma neoliberal. El papel decisivo de los militares tuvo un signo radicalmente diferente a los períodos autoritarios tanto en Ecuador como en Venezuela, ahora inequívocamente situados en la defensa de la democracia, demostrando mantener un poder real en la política nacional. En Chile, Argentina y Uruguay la cuestión de los derechos humanos, a más de tres lustros de haber superado las dictaduras militares, persiste como problema no completamente resuelto, aunque desde luego mucho se ha avanzado, sobre todo en el enjuiciamiento de los militares en Argentina y la labor en torno a la Comisión para la Paz en Uruguay. En diferente grado, los militares se mantienen públicamente “apartados” de la esfera política, lo que no supone su anulación como actor social institucional. En Paraguay, en cambio, el rol del Ejército es preponderante en cuanto a inclinar la balanza hacia un sector u otro del coloradismo en el poder.

Por otro lado, la disminución del peso relativo de la clase obrera en casi todos los países examinados resulta un dato ineludible para entender el surgimiento de nuevos movimientos sociales. Al mismo tiempo, algunos sectores empresariales “perdedores” en la ecuación

resultante por la apertura de las economías, la desprotección indiscriminada de las industrias y la producción nacionales, aún debilitadas, se volvieron más propensos a ensayar aproximaciones a movimientos sociales más combativos y antineoliberales. Si es cierto que el trabajo perdió terreno frente al capital, es indispensable diferenciar los grupos y sectores socioeconómicos que fueron los más beneficiados durante la aplicación ortodoxa de las recomendaciones emanadas del Consenso de Washington. Las elites tecnocráticas vinculadas al capital financiero vernáculo y multinacional (sistema bancario, administradoras de fondos previsionales), los actores económicos que concentraron aún más las propiedades agropecuarias, en algunos casos el sector exportador y en otros los representantes de grandes cadenas comerciales (hipermercado), también actores políticos de la derecha que fueron apoyados por los centros hegemónicos del capitalismo, todos fueron y son actores con poder real y simbólico. Del otro lado se encuentran los movimientos sociales sostenidos por desocupados, pequeños productores rurales empobrecidos, por trabajadores organizados en renovados movimientos sindicales, por indígenas y campesinos desplazados de sus tierras, por nuevos actores ecologistas, actores territoriales y cooperativistas, por importantes movimientos de derechos humanos, agremiaciones estudiantiles, por una miríada de organizaciones no gubernamentales de promoción, por redes locales de solidaridad; en suma, una ciudadanía expresada por un conjunto multifacético de actores que conjugaron en determinadas circunstancias y coyunturas su voluntad colectiva de resistir un modelo opresivo –cultural y económicamente–, aun a sabiendas de las asimetrías profundas entre actores.

Las oportunidades también se abrieron, todas las veces que el sistema político se fisuraba por efecto directo de las crisis prolongadas, y los fracasos económicos y sociales de las políticas de inserción mundial. De este modo, una lectura de los fenómenos y acontecimientos en Argentina, desde la articulación original de la nueva central sindical (CTA), pasando por la expansión del piqueterismo y la explosión vecinal en torno al asambleísmo de base territorial, nos permite captar la generación de oportunidades políticas como reacción a la refractaria postura de las elites partidarias, parlamentarias y estatales frente a las amenazas de caos económico y desestabilización institucional. La generación de las oportunidades para la acción social colectiva no se produce *ex nihilo*; las ciudadanías perciben las fisuras, los espacios abandonados, los campos propicios para cultivar enfoques y visiones contrahegemónicas, estrategias de lucha y resistencias, pero también una gama ancha de dispositivos de mitigación o compensación de las desigualdades provocadas por la mercantilización del bienestar. La convergencia en plataformas, coordinaciones y articulaciones amplias y abiertas compensa las debilidades intrínsecas de los movimientos sociales.

En lo relativo a la infraestructura organizativa y a la cultura organizacional (estructura de movilizaciones), parece indicado subrayar que en los países de tradición gremial y asociativa, con desarrollo importante en los movimientos denominados *clásicos*, fermentaron iniciativas orgánicas novedosas; las sociedades se tapizaron densamente de núcleos activos e innovadores. Hemos relatado con detalle las características peculiares de los movimientos sociales en la dimensión organizacional, recurriendo a una paleta simple de tres matices –grado de organicidad alto, medio y bajo– que pone a prueba sus posibilidades de pervivencia e impacto en la esfera pública. Los niveles de mayor grado de organicidad predominan en actores sociales de raíz sindical y territorial; aun así, como elemento adicional, la plasticidad (ductilidad para adaptarse a los cambios y variaciones coyunturales) puede contribuir a explicar cómo un actor social de grado medio en sus formatos y estructuras orgánicas alcanza a plasmar estrategias y acciones exitosas. Es el ejemplo de los MTD, a los cuales oportunamente les adjudicamos un nivel medio en función de su relativa dispersión y atomización, pero que sin embargo han contado con una extraordinaria fuerza de movilización y convocatoria. Inversamente, los grados más altos de organización no suponen automáticamente mejores capacidades de convocatoria y movilización, ni tampoco aseguran una autonomía plena o radical. En todos los ejemplos analizados, la disponibilidad y uso adecuado de los recursos (materiales, económicos, simbólicos, políticos) constituye un factor de éxito.

La cultura organizacional en una sociedad ejerce influencia en las modalidades asumidas. Así, las experiencias de los Centros Culturales Mapuches abrieron en Chile los canales para la organización y visibilidad del conflicto étnico-social. Las comunidades indígenas asentadas en tradiciones e identidades galvanizadas durante décadas en Ecuador sostuvieron las formas organizativas que la CONAIE construyó pacientemente para una eficaz articulación del movimiento indígena. Los Sin Tierra en Brasil (MST) rescataron buena parte de las formas familiares de producción y fueron promoviendo opciones cooperativas y formatos horizontales de participación. La CUT en Brasil anudó su estructura orgánica al espíritu asociativo en defensa de los derechos sindicales en las fábricas y grandes concentraciones industriales. El desarrollo del cooperativismo de vivienda por ayuda mutua tuvo en Uruguay anclaje territorial y se apoyó en las matrices sindicales para poner en marcha sus experiencias de autogestión, en estrecha relación con los barrios y comunidades vecinales (de profusos historiales de nucleamientos y organizaciones) donde se afincaron. En síntesis, resulta pertinente y útil una mirada desde la cultura organizacional como componente de la estructura de movilización, a condición de complementar e integrar

otros vectores (económicos, de clase, políticos y psicosociales) que integren un análisis históricamente contextualizado.

Por último, se tendrán en consideración los marcos culturales y el repertorio de argumentos (procesos enmarcadores), así como la intervención de los medios de comunicación. De acuerdo con las matrices histórico-culturales en casi todos los países incluidos en el estudio, se ha apreciado una difusión de patrones de modernidad muy semejantes: Uruguay, Chile, Argentina y Venezuela (aunque con matices) por un lado, y con diferencias importantes Brasil, Ecuador y Paraguay por otro, lo que no implica presuponer itinerarios similares.

Sin embargo, la impronta nacional, popular y estadocéntrica, que según el enfoque de Garretón ya está desestructurada, no impide rescatar y traer a colación algunos rasgos característicos del modelo de integración y modernización. Entre estos rasgos destacamos: la implantación a nivel político-institucional de democracias (relativamente débiles) de cuño liberal, con acento en un régimen presidencialista y la existencia de garantías para un sistema de partidos competitivo (todas las naciones incluidas en el presente estudio se caracterizaron por registrar alternancia en el ejercicio del gobierno, con la excepción de Paraguay, que ha transcurrido desde hace más de cuatro décadas por el andarivel de la hegemonía unipartidista), y que procuraba un equilibrio con el Parlamento.

También subrayamos la prevalencia de una racionalidad positivista liberal en materia de derechos y obligaciones cívicas, un arquetipo desarrollista que se intentó consolidar sobre la base del pacto capital-trabajo y un desarrollo científico-tecnológico más adaptativo que innovador, una educación y formación elitista pensada para cubrir los relevos de las burocracias y reproducir los profesionales y puestos de trabajo calificados o semicalificados, con frecuencia sin perspectiva estratégica; un *Welfare State* a medio camino que supuestamente daría cobertura y protección desde el Estado paternalista a los ciudadanos más desprotegidos; finalmente, una mirada demasiado focalizada en las pautas de consumo occidentales.

La ola de reformas en todos los planos –económico, social, político, cultural– que se impusiera a despecho de las acumulaciones preteritas en prácticamente todo el subcontinente coadyuvó a liquidar los basamentos de aquellos perfiles de modernidad. La reconstrucción de nuevas rutas de modernidad se asemeja actualmente a aquellos laberintos recubiertos de espejos por los cuales se avanza sin la certeza de encontrar las salidas, a veces inmovilizados por el reflejo de nuestra propia imagen (cargada de nostalgia y añoranza), en ocasiones ya francamente deformada. En este principio de siglo, los movimientos sociales vienen a ocupar un lugar esencial, porque redescubren identidades “ocultas” o invisibles en el marasmo globalizador; la estructura de oportunidades

se aprovecha cuando deja una sensación de vaciamiento y convoca a las sociedades latinoamericanas a recomponerse ellas mismas, tal vez a reinventarse, a reaccionar positivamente produciendo nuevas pautas de modernidad, más adecuadas, genuinas y creativas que imitativas. Estos grandes agujeros negros exigieron la recreación incluso de modalidades de lucha, protesta y resistencia, pero, a diferencia de sus antecesores, los movimientos sociales de fines de siglo incorporaron propuestas de la más variada naturaleza. El constructo argumental de los movimientos sociales expresado en el discurso hace referencia a una reapropiación de valores (acaso perdidos u olvidados) de la memoria colectiva, de las fuentes originarias, combinadas con orientaciones normativas que alcanzan puntos culminantes en las manifestaciones autogestionarias y más radicalmente autonomistas, que albergan la horizontalidad y la consideración de lo cotidiano, de lo subjetivo, de las emociones y sentires compartidos; que recoloca el centro de atención y preocupación en el sujeto en comunidad.

En innumerables ejemplos, los movimientos sociales han divulgado mensajes antineoliberales, anticapitalistas y antisistémicos. Los argumentos son simples: el fracaso del modelo anterior es también el fracaso de una cultura pretendidamente homogénea que ocultaba la real y verdadera diversidad y riqueza sociocultural, al mismo tiempo que subsumía los intentos de emancipación por temor a la desestabilización social y política. Los levantamientos indígenas en Ecuador y la visibilidad del conflicto mapuche abrevan en identidades sojuzgadas, en culturas a veces usurpadas y otras veces maniatadas cuando no se supo entender sus mensajes; es sobre todo el movimiento ecuatoriano indígena el que alcanza a emitir señales contundentes en la dimensión cultural, modificando efectivamente el marco cultural para exigir y trabajar en pos de la transformación radical del Estado y la sociedad. Lo mismo sucede con los Sin Tierra en Brasil, que relanzan desde la plataforma de la reforma agraria una consigna de más largo aliento exactamente en la misma dirección. Los piqueteros argentinos, los campesinos paraguayos, los cooperativistas uruguayos, en fin, buena parte de los movimientos sociales que hemos considerado apuntan a lógicas de cambio, pero tejen en su seno ensayos de lo que debería cambiar, cómo y hacia dónde. Valores de solidaridad y cooperación en lugar de competitividad, de horizontalidad y participación en lugar del burocratismo y la delegación, la autonomía en vez de las decisiones heterónomas; esto es en definitiva lo que va forjándose en el plano de los marcos culturales, en los que no puede menospreciarse el papel de los *mass media*, cuando son apreciables en ocasiones la manipulación de la información y los flujos de comunicación masiva –habida cuenta de los enormes avances tecnológicos– que son filtrados o “traducidos” por expertos, profesionales o simplemente inescrupulosos.

Los medios de comunicación no sólo juegan un rol de difusores de información sino también de formadores de opinión pública; es desde esta perspectiva que en ocasiones se percibe cierto estereotipo de los movimientos sociales, muchas veces acentuando las facetas violentas o trasgresoras, antes que ameritar el análisis más objetivo y riguroso. Queremos despejar cualquier suspicacia hacia la labor incansable de los medios, y sobre todo los periodistas; no pensamos de manera perversa que todos los medios de comunicación estén sujetos a intereses siempre mezquinos, meramente económicos o ligados a las oligarquías enquistadas en el poder. Pero ello no obsta a ponderar con seriedad y rigor sus incisivas influencias, así como su vinculación inocultable con determinados grupos económicos y corporativos. Así pueden observarse los *clusters media*, que concentran periódicos, canales de televisión, emisoras de radio y se asocian a cadenas internacionales o redes empresariales en subsectores de actividad económica no necesariamente conexos con la producción cultural e informativa. Asimismo, desempeñan un papel muy trascendente en determinadas circunstancias, como fue el caso de los principales canales de televisión privados en Venezuela durante el golpe cívico-militar al presidente Hugo Chávez, en alianza con FEDECÁMARAS y la oposición de algunos partidos políticos. No disponemos de datos fehacientes y exhaustivos de la situación en todos los países considerados; tampoco fue este nuestro foco de preocupación, aun cuando merece acotarse –a modo de ejemplo– que en el caso uruguayo las condiciones de control de los medios son casi oligopólicas: tres o cuatro grupos económicos privados son propietarios de televisoras (por aire y por cable), radios (FM y AM), periódicos y otros medios de prensa, publicidad y producción en la industria de las telecomunicaciones. El acceso a los medios depende indudablemente de los criterios empresariales, pero también de criterios vinculados a sus orientaciones políticas, en la medida en que sus lazos son más estrechos con determinados partidos, sobre todo con los dos partidos tradicionales de la derecha y centroderecha. Los movimientos sociales no cuentan con recursos suficientes para la edición masiva, pero sí utilizan medios alternativos (prensa local, radios comunitarias, Internet y boletines digitales), aunque en ocasiones ven soslayadas o minimizadas sus protestas o propuestas sociales.

Finalmente, no tenemos la certeza de que múltiples y plurales actores sociales, movimientos sociales (en plural), se encuentren en busca del Movimiento Social (en singular), tal como lo dejara planteado Garretón; tampoco la seguridad de haber identificado el *sujeto central* o los sujetos en procura de un principio central constitutivo. Coincidimos con el autor cuando señala:

[Es] improbable que haya un sólo sujeto o Movimiento Social central o actor social o político en torno al cual se genere un campo de tensiones y contradicciones único que articule los diferentes principios y orientaciones de acción que surgen de los ejes de democratización política, democratización social, reestructuración económica e identidad y modernidad (Garretón, 2002).

Sin embargo, las tendencias del cambio de siglo permiten vislumbrar desafíos y dilemas que exigen al conjunto de actores contribuciones sustantivas, desprendimientos del pasado y miradas desprejuiciadas. Las democracias han sido interpeladas, tanto por las formas que fueron definiendo sus relacionamientos con los sujetos constituyentes, como en los contenidos elitistas que se apartaron de los mandatos populares, sea por convicción o por intereses sectoriales. El análisis precedente no puede estar desprovisto de una lectura ideológica. Los conflictos que se configuraron en estos años recientes nos dan la pauta de los fallos de un determinado modelo distributivo y su dislocamiento, así como los aprendizajes para la necesaria recomposición del consenso social, pero sin desechar en nuestras interpretaciones sociológicas y políticas la consideración de la oposición de clases y grupos sociales enfrentados en el marco de una fase capitalista fuertemente concentradora, que condiciona los alineamientos de las elites, las estrategias y tácticas del enfrentamiento. Ya no cabe tampoco el fácil reduccionismo que coloca en una vereda al pueblo y en la otra a la oligarquía; las realidades y procesos contemporáneos, complejos y contradictorios, en contextos de globalización y afirmación de la hegemonía imperial de una superpotencia a nivel planetario, nos informan de marchas y contramarchas en el campo de los movimientos sociales.

Lo cierto es que, tras examinar más de una decena de casos y una variedad de situaciones que encuadraron el análisis de las relaciones entre actores sociales, sistemas políticos, Estado y democracia, arribamos a una conclusión provisoria: los movimientos sociales latinoamericanos han podido desencadenar procesos extremadamente complejos y aún vulnerables²⁴, en un sentido de afirmación democrática, que a su paso también aportaron modalidades innovadoras en materia de orga-

24 Recuérdese la defensa de la institucionalidad democrática ante el Decreto de Estado de Sitio en Argentina en el año 2001; el levantamiento indígena en Ecuador y el respeto al orden constitucional durante la caída de Mahuad en enero de 2000; más recientemente, la forzada renuncia de Sánchez de Lozada en Bolivia, en octubre de 2003, con participación protagónica del movimiento campesino y la aceptación del relevo por parte del vicepresidente; la defensa de las instituciones democráticas en Venezuela por parte de numerosas organizaciones sociales ante el golpe de Estado en abril de 2002; la resistencia en tiempos de dictaduras militares del movimiento sindical en Chile y Uruguay.

nización y gestión del conflicto social. Dichos aportes los ubican como portadores de discursos más omnicomprendidos y menos recortados o adscriptos a los lugares comunes de la demanda particularista.

Hemos aportado suficientes argumentos que realzan la perspectiva ética y deontológica que aquellos movimientos sociales les propusieron a las ciudadanías. Asimismo, pensamos que la diversidad de prácticas sociales que conjugaron la reivindicación legítima de contra-proyectos societales –más universales por definición–, con reclamos específicos, ha demostrado la enorme potencialidad que tienen los movimientos sociales en el sentido de formular proposiciones plausibles vinculadas a la renovación de las democracias en América Latina.

Finalmente, resulta fundamental rescatar el planteo de la mayoría de los movimientos sociales examinados de asociar la exigencia de una efectiva integración social de las grandes mayorías sumergidas en la pobreza y la indigencia con la condición de recrear y reformular el sentido de la política. Es por ello que con insistencia sostenemos la probabilidad (y necesidad) de construir nuevos paradigmas democráticos “desde abajo”, desde los movimientos sociales, desde la sociedad civil reencontrada con su plena y reconquistada soberanía ciudadana. Es probable que en esa ruta los movimientos sociales encuentren algún principio constitutivo central: retomar los destinos de su historia, construir democracias inclusivas, asumir plenamente el desafío de ser sujetos.

Mirza, Christian Adel. Capítulo IV. Conclusiones finales. Cinco tesis respecto de los movimientos sociales, la democracia y los sistemas políticos. En publicación: Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina: la construcción de nuevas democracias.
Christian Adel Mirza

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES FINALES

CINCO TESIS RESPECTO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, LA DEMOCRACIA Y LOS SISTEMAS POLÍTICOS

Programa Regional de Becas CLACSO, Buenos Aires, Argentina. 2006. ISBN: 987-1183-45-3. Disponible en la web: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/mirza/partellc ap4.pdf>

Fuente: Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la red CLACSO
<http://www.clacso.org.ar/biblioteca>

AL RECONSIDERAR LAS HIPÓTESIS que planteamos como punto de partida, intentamos recomponer el esquema original de análisis desde una integración de las dimensiones y variables más relevantes. Las hipótesis planteaban lo siguiente:

- La mayor autonomía de los movimientos sociales respecto de los partidos políticos habilita a generar alternativas de construcción democrática sobre nuevas bases.
- La conformación de plataformas amplias de actores y movimientos sociales contribuye a afianzar las capacidades singulares e incrementar su legitimidad social.
- La pérdida de confianza de algunas de las instituciones democráticas ha generado cierta vigorización y tonificación de la sociedad civil organizada en movimientos sociales, favoreciendo especialmente la emergencia de nuevos actores sociales.
- La implantación del modelo neoliberal provocó la convergencia de mayores agregaciones sociopolíticas, reconfigurando las relaciones entre Estado, partidos políticos y movimientos sociales.

A partir del examen realizado es posible arribar a ciertas conclusiones, refutables o discutibles, pero fundadas en una interpretación de los procesos recientes en la historia latinoamericana, y contrastados con

datos contruidos con el propósito de comparar, establecer correlaciones firmes y decodificar los vínculos entre el sistema político y la acción social colectiva, a fin de vislumbrar senderos posibles e itinerarios probables de las democracias en el subcontinente.

TESIS 1

La mayor autonomía de los movimientos sociales respecto de los partidos políticos habilita a aquellos a generar, producir y ofrecer alternativas de construcción democrática sobre nuevas bases. Ello supone que en todos los casos señalados en nuestra investigación, en el discurso y la práctica sociopolítica de los movimientos sociales, la democracia tiene valor *per se*, en tanto sus contenidos universales refieren a la posibilidad real de decidir, de confrontar y resolver los conflictos sociales desde la esfera de la política. Aquella autonomía implica la capacidad de los movimientos sociales para definir estrategias singulares en función de los intereses de sus componentes, sin que por ello se infiera que se constituyen en entidades absolutamente desconectadas de sus entornos de influencia, descontextualizadas y prefiguradas a partir –exclusivamente– de identidades e intereses específicos de sectores sociales en un territorio, en una nación y un momento particular.

Mientras que la autonomía de los movimientos sociales podría significar una lejanía o distancia respecto de los partidos políticos en general, ello parece contradecir la proximidad de aquellos movimientos sociales con algunos partidos, sobre todo de signo progresista o ideológicamente más posicionados a la izquierda. La correlación o fuerte asociación entre actores sociales relevantes en la arena pública de la confrontación y movilización social, con partidos políticos afines a sus enfoques y estrategias de acción colectiva, indicaría la intencionalidad implícita de los movimientos sociales de adquirir un protagonismo mayor en el campo de la disputa por la hegemonía en alianza con determinados sectores o fuerzas político-partidarias, pero de ninguna manera el relevo en las funciones y roles de los actores políticos. Hay indicios, sin embargo, de una prolongación hacia la esfera de la competencia típicamente electoral, de la acción de algunos movimientos sociales que han creado –o intentan hacerlo– sus propios instrumentos de intervención en el sistema de partidos (CONAIE y MUPP en Ecuador, CTA, en particular la FTV con la idea de generar un equivalente del Partido de los Trabajadores brasileño en Argentina aun cuando sea un partido provincial, entre otros). No es una práctica generalizada, aunque sí lo es la problematización de la participación a nivel de la política institucional, que los miembros de los movimientos sociales se plantean de manera paralela y contemporánea a la pérdida de la cautividad del electorado y la influencia de los partidos políticos para captar sus adhesiones. En

todo caso, la izquierda social se asocia a la izquierda política, desde un relacionamiento entre contrapartes con intereses comunes y no necesariamente idénticos, pero cada vez menos en la lógica de la subordinación o la cooptación.

TENTATIVA TIPOLOGICA

Pensamos que es posible ensayar una primera aproximación a una tipología de movimientos sociales en función de la variable *autonomía*, lo que nos ayudaría a caracterizarlos a partir de perfiles prevalentes y establecer ciertas correspondencias con los sistemas políticos. Las categorías que proponemos no encierran rasgos estructurales, fijos o inamovibles de los movimientos sociales, no establecen una condición permanente, sino sobre todo atributos dados por una coyuntura socio-política, por el origen o condiciones del entorno en su nacimiento, por los recursos culturales creados o autoproducidos, o que proporcionados exógenamente los condicionan, por factores ideológicos y/o simbólicos, por sentidos o pertenencias compartidos o identidades adscriptas a itinerarios comunes; en fin, también por la propia cultura política del país en el que se inscriben las luchas sociales. Así, si identificamos unos movimientos sociales más próximos a estar ubicados en la categoría *a*, *b* o *c*, aquellos podrían acaso cambiar por las múltiples razones que, en determinada etapa o incluso momento particular, los ubican precisamente en una u otra categoría. Hasta podríamos percibir una combinación matizada de los atributos, en un continuo devenir entre las categorías definidas. A esos efectos definimos una tipología simple de tres categorías.

A. MOVIMIENTOS SOCIALES REFLEJODEPENDIENTES

El bajo grado de autonomía se evidencia cuando el movimiento social se encuentra trabado para definir sus estrategias de lucha, en cierto sentido atrapado en sus propias contradicciones pero incapaz de soltar sus amarras o ataduras, bien con el o los partidos políticos que lo acometen para influir en una dirección u otra, bien por el Estado que establece vínculos clientelares y mediadores (en ocasiones digitando y funcionalizando, penetrando sus estructuras) entre las bases y las cúpulas, lo que agrega un distanciamiento de aquellas por falta de credibilidad y confianza. En la historia de cualquier movimiento social esta caracterización puede registrarse puntualmente, o perdurar por algún tiempo, o galvanizarse ocasionando entonces la desnaturalización del movimiento social (licuando su identidad y disolviendo su propia esencia, su sentido de ser).

Algunos ejemplos: el caso de Ad-Mapu (Chile) en el primer tramo de su trayectoria y en función de la querrela por el control de la direc-

ción del movimiento entre los comunistas, socialistas, otras corrientes de la izquierda marxista y del tronco democristiano; el caso del FUT (Ecuador) en función de su tripartismo en la conformación del consenso estratégico, sobredeterminada por los partidos políticos; el caso de la CTV (Venezuela), por su vinculación originaria y matricial con la socialdemocracia de AD que condicionó de manera significativa su papel en la oposición al chavismo.

B. MOVIMIENTOS SOCIALES MODERADAMENTE AUTÓNOMOS

En esta categoría identificamos movimientos sociales de larga trayectoria, o al menos continuadores de una acción social colectiva acumulada en un cierto sentido (en algunos casos claramente tributarios del movimiento obrero de los años setenta), relativamente consolidados, con fuerte tradición de luchas y movilizaciones, que establecen vínculos privilegiados con algunos actores políticos pero en términos de mayor autonomía respecto de las orientaciones y definiciones estratégicas. Esto es, cuentan con un amplio arco de valores, símbolos, discursos y proyectos sociopolíticos coincidentes con partidos políticos (fundamentalmente ubicados en la izquierda del sistema), que de algún modo los impregnan e intentan influir desde sus propias lógicas competitivas en el espacio de la confrontación social. En esta dinámica establecen lazos de mutua influencia con aquellos, pero mantienen un grado significativo de autonomía en tanto movimientos sociales con esferas específicas a resguardo de las determinaciones externas a sus campos de actuación en la sociedad civil. Por esta razón los caracterizamos como movimientos moderadamente autónomos, lo que de suyo reconoce vectores que de un modo u otro intervienen “desde fuera” para delimitar las coordenadas de sus tácticas y repertorios de lucha, plataformas de reivindicación y, sobre todo, del sustento ideológico que nutre los contraproyectos sociales.

Son ejemplos ilustrativos la CUT de Brasil y la CUT de Chile, el PIT-CNT y el movimiento cooperativo de FUCVAM en Uruguay.

C. MOVIMIENTOS SOCIALES RADICALMENTE AUTÓNOMOS

Alcanzamos a visualizar movimientos sociales que hacen de la autonomía un asunto esencial, anudado en una concepción radical de la participación de las bases, el respeto a la horizontalidad, una aprehensión a toda clase de desviación burocratizadora y una visión autogestionaria que incluso se plasma en la incursión en áreas no asociadas a las tradiciones e historias de la protesta social (nos referimos a los ensayos económico-productivos, investigación, educación y capacitación de los miembros de los movimientos sociales). Aun cuando tanto partidos políticos como corrientes ideológicas diversas se intersecan en

la pluralidad de ámbitos de gestión social, impregnando las estructuras internas de los movimientos sociales, la autonomía se hace visible al anteponer los intereses del propio movimiento a todo intento (tanto desde el Estado como desde los partidos políticos) de absorción e instrumentalización exógena.

Son ejemplos de este tercer tipo el MST de Brasil, los MTD o Movimiento Piquetero (Argentina), sobre todo algunas de sus expresiones orgánicas de base, y la CTA de Argentina, sobre todo a raíz de su compleja red de organizaciones, agregaciones, espacios y ámbitos de diverso grado de formalización interna, con corrientes plurales muy variadas; la CONAIE de Ecuador.

Desde esta mirada proponemos una conclusión preliminar: los sistemas políticos institucionalizados de larga duración (aun con interrupciones en sus trayectorias) estarían más asociados en el último tramo del siglo XX a los tipos *a* y *b* (por ejemplo, Venezuela durante cuarenta años, Uruguay desde la mitad del siglo y Chile desde al menos cuarenta años), mientras que los sistemas políticos incoativos (como Brasil y Ecuador) se asocian más a la categoría *c*. Incluso las variantes que se identifican cuando un sistema político pasa de ser fuertemente institucionalizado a registrar indicadores o rasgos de un sistema incoativo (Argentina a partir de mediados del noventa, Venezuela en el último lustro) o viceversa (Brasil en la última década) pueden mostrar esa tendencia. Ensayamos una explicación posible: los rasgos de fuerte arraigo en la población y las conexiones estrechas de los partidos con organizaciones sociales, la legitimidad social del sistema de partidos (balance de lealtad y alineamiento) y confiabilidad en los partidos políticos y en las instituciones democráticas perfilan un sistema fuertemente partidocrático y con efectos centrípetos de tal envergadura, que los márgenes para un desarrollo autónomo de la sociedad civil sobre la conformación de movimientos sociales laxos y expandidos son demasiado estrechos como para permitir la consolidación de aquellas autonomías radicales.

Resulta interesante examinar la evolución de movimientos sociales (en el contexto de sistemas más institucionalizados) en la fase de transición democrática y la fase de consolidación inmediata posterior: la euforia participativa, la ebullición de iniciativas en el campo social y el alto grado de movilización luego se decantan y “deprimen”, conforme el sistema político –o más precisamente el sistema de partidos– conquista espacios cada vez mayores en los cuales se producen y procesan las principales orientaciones, decisiones y mutaciones, tanto valorativas como normativas, de la política (efecto centrípeto). Al producirse el desgaste y la degradación de la confianza en los partidos políticos, el sistema de partidos se vuelve menos institucionalizado; la retonificación de la sociedad civil es un proceso que se alimenta de esta

degradación, al mismo tiempo que dialécticamente la estimula. El campo propicio para la emergencia o el desarrollo de movimientos sociales radicalmente autónomos *ceteribus paribus* se vería ensanchado por efecto de la desinstitucionalización del sistema de partidos.

La autonomía de los movimientos sociales respecto de los partidos políticos, del Estado y de cualquier otra organización económica o religiosa es lo que les ha permitido construir una identidad propia y asumir la representatividad conferida por los sectores sociales que han depositado en aquellos la legitimidad de la lucha y los reclamos. Autonomía que implica mayores grados de libertad de decidir los momentos de la lucha, sus por qué y para qué, refrendando su capacidad de construir democracia desde abajo en la medida en que los sectores sociales se integran y sostienen sus actuaciones, y democracia desde arriba en la medida en que conquistan nuevos espacios para incidir, para tener más injerencia en las grandes definiciones estratégicas. Así, la autonomía adquiere importancia en tanto los movimientos sociales (societales) se convierten en *sujetos de las historias cotidianas y sujetos de la historia nacional y regional*. Libertad para aportar sin ataduras o al menos con menores constreñimientos, sus contribuciones para que la democracia se vea reforzada al mismo tiempo que revalorizadas sus instituciones, a condición de su profunda renovación para “hacer más y mejor democracia”. La maximización de la autonomía no conllevaría en consecuencia la dualización ni la dicotomización del sistema democrático, alentando antes bien la transformación de los rituales formalistas en instancias cada vez más sustantivas. La prosecución de fines políticos no anula ni inhibe el papel de los movimientos sociales en la construcción democrática. Aquellos movimientos en los cuales la disputa por su hegemonización y control por parte de los partidos políticos ha logrado adueñarse de sus propias lógicas de decisión, han perdido no sólo autonomía sino relevancia social, peso de poder efectivo.

Por otra parte, la pluralidad de sectores o corrientes políticas, o al menos de múltiples fracciones de un mismo partido que se disputan la hegemonía o la influencia en un movimiento social, puede tener efectos de anulación recíproca, preservando finalmente su autonomía, o de lo contrario efectos entrópicos, de pérdida de las reservas energéticas, dependiendo del grado de apropiación del movimiento (varios son los ejemplos, en una dirección u otra, ya planteados: del PT con la CUT en Brasil, del EP-FA con el PIT-CNT en Uruguay, del MUPP con la CONAIE en Ecuador, del PC con Ad-Mapu en Chile, de la izquierda con la CTA o los piqueteros en Argentina, de AD con la CTV en Venezuela). Ello constituye sin duda un asunto de enorme trascendencia en el análisis de las aportaciones de los movimientos sociales, no sólo a la consolidación de las democracias, sino también a la posibilidad o no de favorecer la refundación del sistema democrático desde principios, normas y

criterios renovadores, que conjuguen tanto la dimensión participativa y la ampliación sustantiva de la ciudadanía (ejercicio activo de los derechos), como los aspectos relativos al bienestar y el desarrollo de las poblaciones involucradas. La degradación, o sencillamente la carencia de autonomía de los movimientos sociales, puede desembocar finalmente en la abulia, el carácter anodino o inocuo de estos, debilitando de manera sensible el tejido social.

TESIS 2

La conformación de plataformas y ámbitos de relativa organicidad que aglutinan un número significativo de movimientos sociales contribuye a afianzar y amplificar sus propias capacidades y aumenta su legitimidad respecto de la sociedad civil. Efectivamente, los casos estudiados dan cuenta de una sostenida acción de conjunto entre actores sociales diversos pero no antagónicos, que han logrado en ciertas circunstancias aproximarse a lo que podríamos catalogar como un mínimo denominador común que condensa los intereses de la mayoría popular. Ejemplos como el Frente Nacional contra la Pobreza en Argentina, la Concertación por el Crecimiento y el Trabajo en Uruguay, la Plataforma contra el ALCA en Brasil, la Coordinadora de Movimientos Sociales en Ecuador y el Congreso Democrático del Pueblo en Paraguay aportan argumentos de peso para imaginar futuras rutas de agregación de intereses, y sobre todo de ampliación de las intersecciones orgánicas para una acción social estratégicamente concertada. Las contribuciones de estos ensayos exitosos de articulación sociopolítica al fortalecimiento de la democracia y su reorientación normativa auguran itinerarios novedosos en la reasignación de funciones e incluso en la propia reingeniería institucional del sistema democrático. Parece bastante evidente que aquellas articulaciones y plataformas, en los que no sólo convergen movimientos sociales, sino también organizaciones y partidos políticos de signo progresista, renovadores o de izquierda, han favorecido la percepción de la fuerza y validez de la acción colectiva, sustentada de manera casi ininterrumpida por la mayoría de los movimientos sociales, contribuyendo a consolidar sus fortalezas y aumentar notablemente las capacidades de convocatoria y movilización ciudadana.

Parece necesario indicar que, tanto a nivel regional como mundial, la concurrencia de actores y movimientos sociales que tanto articulan y coordinan sus estrategias, como generan procesos y ámbitos de intercambio de visiones, prácticas y ensayos socioeconómicos, ha beneficiado enormemente la visibilidad y la eficacia de la acción social colectiva. La configuración del Foro Social Mundial, así como de otras plataformas de agregación transversal de las luchas sociales, se orienta a resignificar los procesos de globalización y mundialización

desde el lente de las corrientes antineoliberales y proclives a sustentar un discurso de carácter emancipatorio. En ese sentido puede avizorarse un posible recorrido colectivo quizás hacia la conformación de un Movimiento Social en el cual tienden a unificarse los movimientos sociales, sin perder por ello diversidad, autonomía ni especificidad. Los principios constitutivos y orientadores de la acción social colectiva podrían sintetizarse en tres ejes: la reivindicación o construcción de una democracia inclusiva y sustantiva (expansión de la ciudadanía, pleno ejercicio de los derechos sociales y políticos), la lucha por la soberanía y la emancipación latinoamericana y de todas aquellas naciones sometidas del mundo subdesarrollado (luchas contra la hegemonía imperial y el control de las corporaciones multinacionales), y la generación de nuevas modalidades de producción y distribución del poder y la riqueza (luchas contra el modelo neoliberal, interpelación a los modos contemporáneos de acumulación capitalista).

TESIS 3

La pérdida de legitimidad de algunas de las instituciones democráticas contribuye de manera significativa a la vigorización y tonificación de la sociedad civil organizada en movimientos sociales, y favorece especialmente la emergencia de nuevos movimientos sociales. Desde mediados de la década del ochenta, y tras haberse consolidado de manera relativa la democracia en casi todos los países del subcontinente latinoamericano, se inició una etapa de profundización del modelo neoliberal, que con distintos grados de aplicación y éxito en el manejo de los indicadores macroeconómicos fue impactando negativamente en la mayoría de las poblaciones involucradas. Al mismo tiempo, los sistemas políticos mostraron una tendencia a la inestabilidad y creciente fragilidad, reflejada en indicadores de insatisfacción con la democracia, pérdida de confianza en los partidos políticos y descreimiento en instituciones democráticas que, como el Parlamento, vieron decrecer también la confianza de los ciudadanos. Observamos concomitantemente un renovado protagonismo de actores y movimientos sociales y, sobre todo en algunos países con rasgos típicamente asociados a la desinstitucionalización, la aparición de nuevos movimientos sociales, muchos de ellos de anclaje socioterritorial.

Si efectivamente anotamos una fuerte correlación entre la pérdida de confianza en las instituciones democráticas (sobre todo de los partidos políticos y el Parlamento) y el mayor protagonismo de los movimientos sociales en la arena pública, en algunos países más que en otros –de manera evidente en Ecuador y Argentina, independientemente de la caracterización de sus respectivos sistemas de partidos (incoactivo o institucionalizado)–, parece plausible señalar la trascendencia

del papel que pueden jugar los movimientos sociales precisamente en la consolidación y/o reformulación de las democracias. Ahora bien, por otro lado, el análisis del sistema de partidos institucionalizado en Uruguay e incoativo en Brasil (aunque, como hemos advertido, con tendencia a la institucionalización) nos exige una mirada temporal para arribar a conclusiones primarias. En Argentina, el proceso de restauración democrática volvió a colocar a los partidos políticos en la centralidad del espacio público (confirmando su modelo institucionalizado), pero a partir de la degradación de sus indicadores de confianza nuevos movimientos sociales se hicieron presentes y protagonistas (en el tránsito por la zona de turbulencia social, económica y política); mientras que en Uruguay el alto grado de institucionalización de su sistema de partidos no se vio afectado sino hasta fines de los noventa, cuando el país ingresó también en una zona de turbulencia económica y social, con pérdida de niveles de confianza en sus instituciones democráticas (Parlamento y partidos), y aumento moderado del protagonismo de los movimientos sociales –aunque el sistema de partidos aún mantiene un alto grado de institucionalización. En Brasil, el sistema de partidos incoativo desde los años ochenta se asoció a la emergencia y el desarrollo de nuevos movimientos sociales, mientras que la tendencia a su institucionalización opera en un sentido de recuperación de la confianza en las instituciones democráticas o al menos en una caída mucho menos pronunciada de algunos indicadores. En Ecuador, como sostuvimos, el sistema de partidos incoativo se mantuvo en esta categoría y registró un descenso agudo de los niveles de confianza en sus instituciones democráticas, influyendo de manera decisiva en la irrupción y el desarrollo de nuevos movimientos sociales a partir de una reorientación del movimiento indígena. Contrastando estos cuatro países con los tres que sirven de espejo-referencia, observamos un sistema de partidos institucionalizado en Chile, con indicadores de importante pérdida de confianza en las instituciones democráticas, pero no necesariamente asociada a la emergencia de nuevos movimientos sociales fuertes y protagonistas en la arena pública. Lo mismo sucede con Venezuela, que contó históricamente con un sistema de partidos consolidado e institucionalizado, el cual, a diferencia de los de Chile y Uruguay, colapsó a mediados de los noventa, dejando un vacío que en parte han sustituido unos movimientos sociales todavía muy débiles. Paraguay es un caso excepcional, en la medida en que sigue considerándose un sistema hegemónico en transición, aunque con avances interesantes desde el punto de vista de los movimientos sociales en emergencia y consolidación orgánica.

Los sistemas de partidos con mayor grado de institucionalización aparecen asociados con una mayor proporción de movimientos sociales relativamente consolidados, mientras que los sistemas incoativos se asocian mucho más con movimientos sociales emergentes y en

la primera fase de desarrollo. La pérdida de confianza en los partidos políticos y en el Parlamento, junto con el descenso paulatino del grado de satisfacción con la democracia en América Latina, contribuyeron a trasladar el eje de la acción social colectiva a movimientos sociales más o menos innovadores, la mayoría de los cuales son portadores de discursos antisistémicos, pero no antidemocráticos. Dichos movimientos sociales tienden a ocupar espacios de actuación en la arena política, compitiendo con los partidos políticos por la representación de intereses y demandas; despliegan estrategias de movilización utilizando un repertorio de tácticas y modalidades no tradicionales, además de establecer una esfera importante de autonomía en el decurso de los conflictos sociales. La correlación entre el proceso de pérdida de confianza en los partidos políticos y desinstitucionalización, con el estímulo al desarrollo y vigorización de los movimientos sociales, es atravesada por variables económicas. Así, hemos observado que los lapsos de mayor turbulencia institucional y protesta social en Argentina estuvieron marcados por el colapso financiero (default); la caída de la confianza en los partidos políticos y el Parlamento en Uruguay coincide en buena medida con el colapso del sistema bancario, la devaluación y la recesión económica; en Ecuador, el agudo deterioro de la estabilidad institucional y la caída de la confianza en la democracia, así como el estallido social, se vincularon directamente con la crisis económica y las medidas tomadas por el gobierno entre 1999 y el año 2000.

Es en este contexto que sostenemos la necesidad de revalorizar las aportaciones de los movimientos sociales, en el sentido de ensanchar la base de apoyo y legitimidad del sistema democrático en el subcontinente, como una de las estrategias consistentes para expandir la ciudadanía y obtener en definitiva mayores grados de estabilidad institucional. No se trata, por cierto, de menoscabar o subestimar la esencialidad del sistema de partidos en una democracia, sino de considerar que a su lado es posible vislumbrar un espacio de participación y representación social –también institucionalizado– autónomo, con la finalidad de asegurar la preservación de un sistema de convivencia y resolución de conflictos aún frágil y sin duda perfectible.

TESIS 4

La implantación de un modelo neoliberal de corte hegemónico en América Latina y el Caribe ha provocado la convergencia de mayores agregaciones sociopolíticas, reconfigurando las relaciones entre el Estado, el sistema de partidos y los movimientos sociales. La constitución de frentes o plataformas de carácter sociopolítico, en las que convergen actores, movimientos sociales y partidos políticos en su mayoría de oposición y más volcados hacia la izquierda del espectro ideológico, responde por

un lado a la fragilidad e inestabilidad democráticas, pero sobre todo a la necesidad de articular en primer lugar una resistencia más eficiente al modelo neoliberal, y por otro lado, a la creciente conciencia de una unidad de estrategia y de lucha en el terreno de la defensa de la soberanía, la reivindicación de los derechos de ciudadanía y la restitución de los valores democráticos frente al avance omnipresente del mercado.

Hemos adelantado en varias oportunidades la conformación de grandes corrientes más o menos articuladas que fueron sumando actores y movimientos sociales en una estrategia concertada de oposición, resistencia y deconstrucción de los dispositivos ideológicos que el “pensamiento único” desplegó en casi todas las naciones latinoamericanas. La prevalencia del mercado como el mecanismo predilecto para la asignación de recursos y generación de oportunidades para la movilidad ascendente de los ciudadanos, suplantando al Estado en la provisión de satisfactores y servicios públicos, dejó a miles de latinoamericanos en condiciones de creciente pauperización, sin la mínima protección social. No obstante la prescindencia del Estado y la instrumentación de políticas sociales compensatorias de los estragos provocados por los ajustes fiscales sucesivos, la desestructuración del tejido social y la segregación territorial, es precisamente en estos territorios, reapropiados como espacios de articulación y recomposición de solidaridades, donde se tejieron nuevas alianzas, plataformas, asociaciones coordinadoras y encuentros cada vez más masivos y abarcadores de un conjunto amplio de actores y movimientos sociales antineoliberales. Campesinos y trabajadores rurales, pequeños productores rurales (hortifruticultores, granjeros), sindicatos del sector público y privado, indígenas, movimientos de derechos humanos y ecologistas, asociaciones de profesionales, gremiales y cámaras del empresariado nacional, organizaciones de mujeres y gremios estudiantiles y juveniles, asambleas y organizaciones barriales o vecinales, partidos políticos de signo progresista o de izquierda; en fin, una miríada de actores unidos por una vocación compartida de contraponer opciones a la hegemonía (económica, cultural e ideológica) neoliberal. Cuando analizamos los movimientos sociales en las siete naciones sudamericanas estudiadas, hallamos un hilo conductor en la mayoría de los discursos y propuestas que aluden al enfrentamiento con el neoliberalismo, al mismo tiempo que a la producción de prácticas sociales, recuperación de identidades comunitarias y redes que se construyen como sustitutivas de inexistentes o menguados mecanismos estatales de protección social.

Hemos mencionado el Frente contra la Pobreza en Argentina, la creación del Congreso Democrático del Pueblo en Paraguay (que reúne a la Plenaria Popular y al Frente Nacional de Defensa de los Bienes Públicos y el Patrimonio Nacional), la Concertación por el Crecimiento y el Trabajo en Uruguay, la Coordinadora de Movimientos Sociales en

Ecuador, la Plataforma contra el ALCA en Brasil; todos ejemplos de articulación expansiva de movimientos y actores sociales vertebrados en torno a la oposición unánime ante un modelo implantado en el campo económico y social, logrando la sumatoria y convergencia de reivindicaciones que décadas atrás parecían irreconciliables o incompatibles. El perjuicio de las políticas económicas instrumentadas sobre la base de la desprotección de las industrias locales o nacionales, la apertura indiscriminada, las privatizaciones, la ausencia casi total de control sobre el flujo de capitales, el estímulo a la especulación financiera, el desmantelamiento de sectores enteros de la industria, la enajenación del patrimonio estatal y la depredación de los recursos naturales involucraron a sectores socioeconómicos nunca antes afectados tan negativamente. Esta es una de las motivaciones y razones que explican el ensanche de las plataformas de oposición, movilización y lucha contra el neoliberalismo. Dichas circunstancias abonaron el terreno para la configuración de ámbitos más o menos formalizados, permanentes y congruentes en términos de anteponer contraproyectos de contenido plural, pero sobre premisas de integración e inclusión social, recuperación del trabajo y el empleo como eje de recomposición, y la búsqueda de nuevos mecanismos de reconstitución de la trama social severamente dañada.

Los partidos políticos también sintieron los impactos de la implantación del modelo, reconvirtiendo sus discursos y sus posturas a fin de evitar o al menos frenar, por un lado, la estrepitosa caída de sus respaldos electorales y, por otro, recomponer sus relaciones con la ciudadanía, que hubo de trasladar y depositar la confianza retraída del sistema de partidos al campo de los movimientos sociales, percibidos con frecuencia como las únicas y últimas opciones (la última línea de defensa de la sociedad civil frente a los “embates” del mercado), dotándolos de mayor impronta confrontacional, resistencia, rebeldía y sublevación. La protesta social registró una tendencia a diversificarse, pero informada de algunas claves comunes, las cuales nutrieron las aproximaciones que progresivamente se fueron constatando entre actores y movimientos sociales en una orientación opositora y a los partidos políticos que inequívocamente se posicionaron en contra de las recetas y políticas neoliberales. De esta manera se gestan agregaciones y confluencias sociopolíticas de amplio espectro, que intentan por su cuenta la búsqueda de respuestas alternativas de consenso, aunque inevitablemente consideren las lógicas del conflicto social en una fase concentradora del capitalismo financiero.

TESIS 5

Sólo la ampliación sustantiva y no formal de la participación de la sociedad civil y particularmente de los movimientos sociales en la refun-

dación de la democracia latinoamericana consolidará un modelo de convivencia y construcción de relaciones igualitarias en el plano económico y político, de modo que garantice la estabilidad de los sistemas políticos y su desarrollo sostenido. El riesgo de la inestabilidad crónica o endémica en el subcontinente, producto en buena medida de la incapacidad de los sistemas de partidos y del propio esquema democrático para enfrentar los acuciantes problemas del desarrollo y crecimiento económico con equidad, será mayor cuanto más se excluya a la sociedad civil de las definiciones cruciales relativas a los asuntos públicos aludidos (producción, crecimiento, distribución, reproducción, consumo). Los procesos de reforma operados a lo largo de dos décadas (en el plano económico, en lo atinente al Estado, a la prevalencia del mercado, a los cambios en las instituciones públicas) suscitan al menos grandes interrogantes que deberían ser abordados de un modo plenamente democrático; vale decir, con la más amplia participación ciudadana en procura de modelos alternativos, o al menos en la búsqueda de salidas transitorias pero orientadas a la superación de la crisis estructural que padece la mayor parte de las naciones del subcontinente. Es allí donde los movimientos sociales hacen sus aportaciones esenciales, no sólo como portadores de legitimidad, sino porque desde sus prácticas sociales han cultivado nuevas formas de articulación de intereses y aspiraciones. En esencia, se trata por un lado de redefinir el valor de la política y la democracia –esto es, desde el punto de vista sustantivo– y por otro, de repensar la ingeniería institucional capaz de fraguar en nuevos esquemas y formatos los canales sensibles a una participación ciudadana que deje de ser instrumentalizada, para constituirse en basamento de la estabilidad democrática de largo plazo.

Esto supone necesariamente la redefinición de la política como espacio público, como práctica cívica, como ejercicio de la democracia, en la que los ciudadanos son sujetos que forjan sus propios destinos y los destinos del colectivo, de la comunidad, de la sociedad en su conjunto. Los partidos políticos interpelados han de asumir su renovación como condición de afirmar su irrenunciable e irreemplazable carácter de mediadores de intereses diversos, asumiendo asimismo la innegable existencia de otros mecanismos y mediaciones provistos por los movimientos sociales, que expresan a su tiempo las demandas, aspiraciones, anhelos, sueños y utopías, desde el ejercicio democrático en su cotidianeidad subjetiva. La democracia necesita repensarse, tal vez hasta reinventarse. La democracia procedimental deja la sensación de un ritual formalista, del cual se ocupan los profesionales de la política, constituyendo un serio peligro para su integridad como sistema de convivencia social la perpetuación de mecanismos que implícitamente refuerzan la idea de la democracia elitista competitiva y no promueven,

al contrario, la implicación activa de los ciudadanos para dotarla de sentido sustantivo.

A la luz de los aprendizajes recogidos en los últimos veinte años en América Latina y el Caribe, es pertinente replantearse la reconceptualización de la democracia a partir de la noción de *sujeto democratizador*, que para nuestro análisis se asimila a la de movimientos sociales en movimiento democratizante. Podrá replicarse que no todos los actores y movimientos sociales son portadores de capacidades de contribución en aquella dirección, que en su mayoría defienden legítimamente sus intereses particulares o corporativos. Sin embargo, el examen minucioso y de casi disección que realizamos en el presente trabajo no nos deja duda respecto de las señas de una topografía social de construcción democrática, en el sentido de participación fecunda, respetuosa, apropiada por quienes la construyen cotidianamente en procesos complejos pero no exentos de contradicciones, fricciones, frustraciones o logros sostenidos. Democracias que se manifiestan en asambleas multitudinarias, en espacios íntimos de reflexión y debate barriales o comunales, en el ejercicio de una gestión colectiva, de una autogestión en favor de un propósito común, en el diálogo intergeneracional y a partir de culturas diversas.

Desde luego, no apelamos al misticismo de las bases populares inmaculadas, ni a reduccionismos que sumergen la realidad social y organizacional en laberintos inextricables, dejando en la superficie sólo lo aparente; actores que participan, sacrificio de los “de abajo”, pureza de la práctica social. Nada de eso. Precisamente, hemos hecho especial hincapié en los vínculos de los movimientos sociales con el sistema político y oportunamente aludimos a las disputas por el poder, la hegemonización y el control de los movimientos sociales; también argumentamos acerca de sus carencias o virtudes orgánicas, examinamos sus discursos, sus débiles o fuertes capacidades de convocatoria y movilización, sus grados de autonomía. En suma, intentamos dibujar y pintar con paleta policromática lo que desde nuestras percepciones y marcos de interpretación nos sugieren los movimientos sociales contemporáneos en América Latina. Efectivamente, nos ilustran de itinerarios y rutas a veces crispados por la sublevación, otras veces marcados por el regocijo de las conquistas sociales, en ocasiones por la apatía y el fracaso estratégico, y en otras oportunidades por el acierto de sus propuestas. Movimientos sociales que pueden –lo han demostrado reiteradamente– contribuir a reconstruir democracias incluyentes, abiertas a la participación, orientadas a la equidad, depuradas, consolidadas desde el respeto de los derechos ciudadanos y la efectiva promoción de su pleno ejercicio.

La recuperación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas, sean estas el Parlamento, los partidos políticos o

el Poder Ejecutivo, retomará un sendero seguro siempre que se abran canales, vehículos o arterias de comunicación, control y participación ciudadana en el proceso decisonal en los asuntos públicos. En esa senda, los movimientos sociales tienen inmejorables posibilidades de contribuir, de ser protagonistas en el proceso de refundación democrática, lo que asimismo le exige al sistema político innovar en términos de formatos institucionales más adecuados y aptos para captar y canalizar esa participación social. De otra parte, para incrementar la confiabilidad en las instituciones democráticas, también será requisito imprescindible la mejora sustantiva del bienestar de las poblaciones, y muy especialmente de aquellos sectores sociales que han pagado el precio más caro por la implantación del modelo neoliberal. La brecha social en América Latina y el Caribe, cuyo perfil de desigualdad es de los peores en el planeta, deberá revertirse paulatina y progresivamente, sin pausa pero con prisa, dadas las urgencias de miles de latinoamericanos sumidos en la pobreza extrema, para quienes la democracia es sólo un vocablo a veces siquiera conocido. Las democracias son también evaluadas por sus rendimientos y, habida cuenta de los resultados económicos y sociales de los últimos veinte años, el saldo pareciera negativo. Imaginarse futuros escenarios democráticos obliga a incorporar en consecuencia las variables económicas (no acotadas sólo al crecimiento del PBI), de bienestar social y personal (medidas por el grado de accesibilidad a servicios, prestaciones e infraestructura), de desarrollo social y cultural (respeto e inclusión de la diversidad étnica, de género o generacional), de solidez en las instituciones (participación, garantía de las libertades, pleno ejercicio de los derechos ciudadanos), de rutas que superen las pobrezas y reencaucen al subcontinente por caminos de igualdad y equidad social. Estos son desafíos para la sociedad toda, para las elites gobernantes y para los movimientos sociales, para los partidos políticos y para los legisladores electos; en fin, responsabilidad de todos y cada uno de los actores en el juego de la convivencia social, que no soslaye el conflicto (de clases, de sectores o actores), pero que intente al menos recomponer el marco normativo, ético y político adecuado para su dilucidación pacífica y civilizada.

Mirza, Christian Adel. Capítulo III. Sistemas políticos y movimientos sociales: dos realidades interpenetradas. En publicación: Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina: la construcción de nuevas democracias. Christian Adel Mirza

CAPÍTULO III

SISTEMAS POLÍTICOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES: DOS REALIDADES INTERPENETRADAS

Programa Regional de Becas CLACSO, Buenos Aires, Argentina. 2006. ISBN: 987-1183-45-3. Disponible en la web:
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/mirza/partellcap3.pdf>
Fuente: Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la red CLACSO
<http://www.clacso.org.ar/biblioteca>

HEMOS SUBRAYADO CON INSISTENCIA la necesidad de examinar los vínculos entre los movimientos sociales y los sistemas políticos para obtener al menos algunas pistas o señales acerca de la evolución y el desarrollo de las democracias latinoamericanas en las dos décadas pasadas. Oportunamente señalamos la conveniencia de establecer ciertas correspondencias entre la acción social colectiva y las variaciones registradas muy especialmente en los sistemas de partidos y las instituciones más típicamente democráticas, para intentar adelantar algunas opiniones y valoraciones acerca de eventuales itinerarios en los países alcanzados y por extensión en el resto del subcontinente latinoamericano. Las hipótesis que propusimos focalizaban sus argumentos en la idea de una renovación de los papeles protagónicos de los movimientos sociales y su cenit alcanzado en escenarios en los que los partidos políticos y otras instituciones de la democracia representativa precisamente se ubicaban en su nadir sociopolítico. Uno y otro fenómeno responden, a nuestro juicio, a la intersección entre la desinstitucionalización y la deslegitimidad social profunda del sistema de partidos que, al mismo tiempo, contribuyeron a la emergencia, consolidación y revigorización de la sociedad civil organizada a través de sus movimientos sociales más relevantes. Así, podría mencionarse que la fragmentación y creciente debilidad de los partidos políticos en Ecuador, junto con la escasa capacidad de las organizaciones sindicales clásicas para enfrentar

los nuevos retos, producidos principalmente a consecuencia de un modelo económico neoliberal aplicado tardíamente, produjo a mediados de los años noventa el rebrote del movimiento indígena. Así, la CONAIE se plantó en el terreno como el actor principal de la resistencia, la rebeldía e intransigencia ante los avasallamientos contenidos durante décadas por ofertas de negociación convertidas en señuelos para impedir la protesta de los indígenas, los campesinos y los sectores históricamente excluidos en Ecuador.

Por otro lado, para desmentir a quienes pensaban que el movimiento obrero argentino estaba quebrado y derrotado, surgieron las novedosas formaciones en Argentina, como la CTA, consagrando una concepción horizontal y mucho menos burocratizada, la afiliación directa como aporte novedoso a las modalidades de adhesión y organización sindical, así como una autonomía que la central sindical asociada al peronismo –la CGT– no tenía. Casi simultáneamente surgía un Movimiento Piquetero, aún disperso, multifacético y plural, que ocupó y mantiene aún hoy un espacio significativamente importante en la realidad sociopolítica argentina.

El análisis exhaustivo y desagregado por país es informado por datos de la evolución en la confianza de las instituciones democráticas (en particular partidos políticos, Parlamento y Poder Ejecutivo), así como por la evolución del grado de satisfacción con la democracia, para los cuales nos remitimos a los cuadros y gráficos incluidos en el Anexo I, construidos en base a datos del Latinobarómetro. Para los datos electorales se solicitó información al Banco de Datos de la Facultad Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Uruguay).

ARGENTINA

Durante décadas, el sistema político argentino estuvo caracterizado por el bipartidismo centrado en el Partido Justicialista (peronismo) y la Unión Cívica Radical (UCR), con un predominio claro del primero en el ejercicio del gobierno. Las sucesivas interrupciones de la democracia en varios tramos de la historia contemporánea argentina culminaron en la década de los setenta con el quiebre producido en 1976, y luego con la restauración de las instituciones democráticas y el regreso de los partidos políticos al primer plano de la reconstrucción nacional, en 1983. Más tarde, luego de la anticipada renuncia del Dr. Raúl Alfonsín (ex presidente por la UCR), sobrevino una década de hegemonía peronista, pero con la impronta del “menemismo” (en alusión al presidente Carlos S. Menem), que impulsó hasta 1999 un extenso y profundo programa de reformas estructurales, y un Plan de Convertibilidad (“un peso, un dólar”), sobre la base del recetario más ortodoxo del neoliberalismo (contradictorio, por cierto, con la tradición peronista). En ese

año, la UCR reconquistaba el gobierno de la mano de una coalición con sectores políticos de centroizquierda, que convergió en la Alianza liderada por Fernando de la Rúa. Triste final para dicho presidente, que hubo de abandonar la Casa Rosada tras los trágicos episodios de diciembre de 2001, momento a partir del cual la nación argentina ingresó en su fase más crítica desde la recuperación democrática en 1983. Cuatro presidentes en dos semanas hubieron de asumir la máxima Jefatura del Estado, para que finalmente el ex gobernador Duhalde asumiera el período de transición, culminado formalmente con la celebración de nuevas elecciones (2003), en las que resultó vencedor el ahora presidente Néstor Kirchner, representante del ala de centroizquierda o más “progresista” del Partido Justicialista.

En este contexto, la valoración de las instituciones democráticas por parte de la ciudadanía en general arroja saldos negativos. En primer lugar, la confianza en los partidos políticos pasa del 17% en 1996 al 8,3% para el año 2003, habiendo registrado su punto más bajo en el año 2002, con apenas 4,8% de valoración positiva. Vale decir que en siete años los partidos políticos redujeron de manera sensible (casi doce puntos) el grado de confianza por parte de la población. En segundo lugar, la confianza en el Parlamento (Congreso), pasa de un 25% en 1996 al 13,5% en el año 2003, lo que evidencia también, y en guarismos más alarmantes, la pérdida de legitimidad de la expresión paradigmática que tiene la arquitectura institucional de la democracia. En tercer lugar, la satisfacción con la democracia también registra un descenso significativo (sobre todo considerando el nivel del cual se parte), pasando de un 34,11% de la población que respondía estar satisfecho, a un porcentaje del 8% en el año 2002, pero que repunta al 34% nuevamente en 2003. En cuarto lugar, el porcentaje de la población que deposita su confianza en la figura del presidente o del Poder Ejecutivo aumenta de un 19,8% en 1996 a un 44,6% en 2003; claro está, después de haber sufrido una caída estrepitosa en los años 2001-2002 (6,6%) por razones bien conocidas. Agregamos, en quinto lugar, que la abstención electoral se mantuvo más o menos constante en el tramo comprendido entre 1996 y 2003. Es importante tener en cuenta que el promedio del número efectivo de partidos (NEP) del período es de 2,5 (consideradas las dos elecciones, 1999 y 2003).

Por último, si según la perspectiva de Mainwaring y Scully, el modelo argentino podía ser incluido en la categoría de sistema institucionalizado en 1995; pensamos que las variaciones de algunos de sus rasgos definitorios podrían dibujar una tendencia a ubicarse en la misma categoría pero con menor nivel de institucionalización, principalmente en función de dos indicadores: la solidez de sus organizaciones políticas (lealtad y alineamiento) y el grado de confianza y legitimidad en los partidos políticos (aspecto que ya analizáramos).

Durante los años noventa, el movimiento sindical registra una trascendente escisión que origina la fundación de una nueva central sindical (CTA, 1992), con una importante base de apoyo, no sólo conformada por organizaciones sindicales preexistentes, sino con amplios sectores de desocupados, grupos de raíz barrial o territorial, productores y profesionales de diversa extracción socioeconómica. Muy poco después surge con vigor el Movimiento Piquetero (MTD, 1996), a partir de la conformación de múltiples organizaciones (FTV, CCC, MIJD, MTD Aníbal Verón, MTR, entre otras), que aglutinan en su interior orientaciones diversas, que convergen sin embargo en la acción social colectiva concertada de un porcentaje muy relevante de los desocupados argentinos. En ambos casos, el nivel de organicidad es medio y alto, sobre todo el de la CTA, que presenta una fuerte estructuración y anclaje a nivel territorial. Para el caso de los MTD, existe aún un grado de fragmentación y dispersión que expresa aspectos favorables (más autonomía, horizontalidad y participación) y aspectos menos ventajosos, en términos de obtener mayor eficacia y coherencia como movimiento social. Sin embargo, el Movimiento Piquetero ha tenido una alta capacidad de convocatoria y movilización social, lo mismo que la CTA, coincidiendo en un discurso político que refleja como puntos en común el rechazo al modelo neoliberal, la reivindicación de la soberanía nacional y el enfrentamiento decidido a las políticas impulsadas desde el FMI, como así también una reafirmación democratizadora, que en el caso del Movimiento Piquetero pone fuerte énfasis en la participación y autogestión (como por ejemplo, el caso de la Coordinadora de Desocupados Aníbal Verón), y una clara connotación antisistémica.

Si consideramos la autonomía como variable dependiente, observamos que los movimientos sociales emergentes en la década de los noventa presentaron un grado mayor de autonomía respecto de los partidos políticos y el Estado que en décadas anteriores (aunque corresponde destacar que la labor y el despliegue del movimiento de derechos humanos jugó un papel significativo –sobre todo en los años ochenta– y no sujeto a las orientaciones provistas de modo heterónomo por los partidos políticos, sin desconocer lógicamente la influencia de las fuerzas de izquierda en el devenir de aquellos), aun cuando para el caso del Movimiento Piquetero debe señalarse la estrecha vinculación entre diferentes corrientes de la izquierda argentina con organizaciones de desocupados y, de manera más difuminada, con la CTA. Asimismo, la lógica de la demanda y asignación de los Planes Trabajar para jefas y jefes de hogar (subsidios directos) podría presuponer la existencia de vínculos de “dependencia moderada” respecto del Estado en sus diferentes niveles (nacional, provincial y municipal). De hecho, la denuncia de la acción de los *punteros* indicaría una conciencia clara de los dirigentes y militantes más activos, tendiente a combatir ciertas prácticas neoclien-

telares dentro del movimiento de desocupados. De todos modos, la muy alta capacidad de convocatoria y movilización, tanto de la CTA como de los piqueteros, es un dato importante a la hora de establecer una conclusión acerca de las ataduras con el gobierno, y la amplitud de la capacidad de decisión y definición de estrategias sociopolíticas de los movimientos sociales emergentes.

En suma, a nuestro juicio hay suficiente evidencia para establecer una correspondencia entre la fragilidad y el debilitamiento de la confianza en las instituciones democráticas en Argentina y su efecto “promotor” de una mayor densidad de la acción social colectiva, expresada en los movimientos sociales que surgen y se consolidan en el mismo período de decaimiento del sistema político. Son movimientos sociales más autónomos, que disputan los campos de la representatividad y legitimidad a los partidos políticos, en algunos casos (aunque minoritarios) con vistas a sustituirlos o –al menos– competir con ellos en la arena propiamente política electoral (candidatura de Luis D’Elía en Buenos Aires, y el entonces anuncio de Raúl Castells para la contienda nacional del año 2004). El discurso alerta acerca de la flaqueza y degradación de la democracia, pero en clave de su recuperación, renovación o refundación, en tanto se advierte su trascendencia y su carácter de irremplazable como sistema de convivencia, resolución de conflictos y participación ciudadana. Sin embargo, se adjuntan otros conceptos a la democracia: se la adjetiva como democracia participativa y al servicio de las grandes mayorías que se encuentran ajenas a los circuitos de las elites de partido y de gobierno.

Los clivajes del conflicto social están determinados por los impactos de una política económica y un modelo excluyente, que arrojó a miles de argentinos a la condición de “innecesarios” para la producción capitalista (se reclama por trabajo digno y no tanto contra la explotación); la congregación policlasista de los movimientos obliga a redefinir la ecuación de los antagonistas, y empuja a la articulación de actores sociales de diversa naturaleza pero cuyos intereses coinciden en aspectos esenciales. Las plataformas sociales ampliadas (coordinaciones programáticas, acciones sostenidas de manera temporal, confluencia en movilizaciones sociales masivas) restablecen las confianzas entre movimientos sociales, y refuerzan las capacidades de respuesta y propuesta ante los demás actores sociales y políticos. Asimismo, los sectores o partidos políticos de centroizquierda e izquierda se asoman a una realidad mucho más dinámica y lábil, intentando constituirse como canal y vocería de las demandas sociales, al mismo tiempo que –a partir de la reconfiguración del mapa político en el año 2003– recomponen sus vínculos con los movimientos sociales desde una perspectiva común en el sentido de transformación del modelo, aunque con dife-

rencias respecto del objeto mismo del cambio (la política, la economía, la cultura) y sus alcances.

BRASIL

La evolución democrática de Brasil, también –como en otras naciones latinoamericanas– fue interrumpida por efecto de una dictadura militar en 1964, prolongándose el período autoritario hasta principios de los ochenta; sin embargo, la recomposición del sistema político no implicó la restitución plena del esquema predominante previo al golpe de Estado. Conviene traer a colación la campaña por “Directas Ya”, en 1984 –durante la etapa de transición–, en reclamo de elecciones presidenciales por votación popular y no por delegación en colegios electorales; en tal sentido, y pese a las importantes y masivas marchas por las principales ciudades de Brasil y una movilización generalizada, la oposición y los movimientos sociales emergentes no consiguieron su objetivo, aunque fueron el inicio y un estímulo a los sectores sociales y políticos de oposición para su creciente fortalecimiento. Finalmente, recién en 1989, después de veintinueve años, se llegó a la primera elección presidencial por voto popular. El triunfador en aquella ocasión fue Fernando Collor de Mello, luego acusado por corrupción y suspendido en sus funciones para dejar en su lugar al vicepresidente, Itamar Franco, cuyo ministro de Hacienda se convirtió poco tiempo después en el presidente de Brasil por dos períodos consecutivos y por una amplia mayoría. Fernando Henrique Cardoso, efectivamente, sería el primer mandatario entre 1994 y 2002, hasta la asunción de Lula da Silva en enero de 2003. El sistema político cambió de manera sustantiva en las últimas dos décadas, desde un predominio de fuerzas políticas de la derecha (algunas de las cuales aferradas al pasado autoritario) y centroderecha (con retórica convincente y eficiencia gubernativa), a una prevalencia de los sectores de centroizquierda e izquierda, encabezados por el partido mayoritario, el Partido de los Trabajadores del ex líder sindical metalúrgico Lula da Silva. Si consideramos la evolución del número efectivo de partidos, veremos que se mantiene un perfil de sistema multipartidario moderado con tendencia a la fragmentación; así, el valor NEP para 1994 era de 2,7 y para el año 2003 de 3,5, con una presencia muy fuerte del PT, pero en alianza con otros partidos y fuerzas de centro y de izquierda neta.

Respecto de los indicadores de confianza en los partidos políticos, partimos de un 16,9% en 1996, que pasa a situarse en un 15,8% en el año 2003; un descenso mínimo, lo que podría asimilarse a un valor constante en el período considerado (una media de 17,6%). En relación con la confianza en el Parlamento, los datos disponibles nos ilustran respecto de una variación positiva, esto es, un incremento importante

del nivel de confianza, que pasa del 19,4% en 1996 a un 28,5% en el año 2003. En referencia a la confianza de la ciudadanía en el Poder Ejecutivo o en la figura del presidente, identificamos un incremento que va de un 25,1% en 1996 a un 42,3% en 2003, registrándose dos saltos leves a la baja, uno en 1999 y otro en 2002, pero que pueden considerarse poco significativos. La conclusión preliminar se aproxima a una alta valoración del papel que juega la Presidencia, obviamente muy asociado a la persona que desempeña el máximo cargo de gobierno (Cardoso en sus dos períodos de gobierno y, para el año 2003, el nuevo mandatario que representa al PT, Lula da Silva).

En cuanto a los niveles de satisfacción con la democracia, los datos señalan un descenso mínimo, que va del 21,1% en 1996 a un 21% en 2002, lo que implica una variación porcentual absolutamente irrelevante, aunque consideremos ambos porcentajes bajos en la consideración del sistema democrático correlacionada con la expectativa social de la población (esto es, el desempeño del conjunto de sus instituciones y sus resultados plausibles en términos de mejora de la economía y de la calidad de vida de los ciudadanos). Por último, destacamos una alta participación electoral en el período de análisis, con un 76,85% de ciudadanos habilitados que concurren a las urnas en 1994, un 81,03% que participaron en los comicios de 1998 y un 79,53% que lo hicieron en las últimas elecciones del año 2002 (vale decir, con los registros más altos, después de Uruguay y Argentina).

Al examinar el sistema político brasileño desde la perspectiva del modelo de institucionalización de Mainwaring y Scully, observamos que para 1995 este era caracterizado en la categoría de *incoativo*, en función de su regularidad poco evidente, de las variaciones en el núcleo de lealtades y alineamientos que nutren la solidez de las organizaciones políticas, y la ausencia de raíces profundas de las colectividades partidarias en la sociedad. Estos rasgos parecieran ir modificándose en los últimos ocho años, lo que nos exige al menos establecer como hipótesis que el sistema político en Brasil se encontraría transitando una fase de creciente institucionalización.

Si bien los datos examinados en cuanto a la evolución de los indicadores de valoración de las principales instituciones democráticas no alcanzan a la década de los ochenta, razón por la cual no podemos correlacionarlos directamente con la emergencia o el surgimiento de los movimientos sociales analizados, sí establecemos comparaciones contemporáneas respecto del período comprendido en el tramo 1996-2003, coincidente con el primer y segundo gobiernos de Cardoso y con una etapa de mayor institucionalización, según nuestro marco de análisis. Conviene recordar que, para Mainwaring y Scully, el sistema *incoativo* se caracteriza por el bajo nivel de institucionalización, alto grado de fragmentación del sistema de partidos, raíces poco profun-

das y extendidas de las organizaciones políticas, e inestabilidad global del sistema político.

Los movimientos sociales que consideramos son contemporáneos en su nacimiento y primer desarrollo: tanto la CUT como el MST surgen en 1983 y 1984 respectivamente, en tiempos de la transición democrática y la reconstrucción del esquema constitucional de derecho. La CUT como central de trabajadores se constituyó como principal y casi único referente del movimiento sindical de la nueva generación renovadora, removiendo viejas prácticas de tutelaje y dependencia del sistema político (partidos y gobierno). A lo largo de su desarrollo, la CUT logró posicionarse como fuerza alternativa y genuina representante de la clase obrera brasileña, consolidando un alto grado de organicidad, convocatoria y movilización social, pese a un decaimiento en los primeros años de la década del noventa. Por su lado, el MST logró expandir su influencia a prácticamente todo el territorio, tejendo una red inmensa de pequeños y medianos núcleos de campesinos sin tierra, acampantes, productores y colonos. Su estructura orgánica es sólida, expandida aunque no burocratizada, y comparte el discurso político con la CUT en términos de interpelar el modelo neoliberal. El eje de la reforma agraria construye un discurso que trasciende el mero reparto de tierras, para reclamar la necesidad de una profunda transformación de las estructuras productivas en el marco de un proyecto de desarrollo sustancialmente diferente. Ambos movimientos sociales se proclaman antiimperialistas y defienden la soberanía nacional; la CUT hace hincapié en la lucha de clases y en la idea de un socialismo como meta final; los dos valoran la democracia y la enmarcan en proyectos de transformaciones profundas de la sociedad y el Estado. Podríamos aseverar que tanto la CUT como el MST asumen un perfil de movimientos antisistémicos, en especial el MST, que ha generado una capacidad de articulación de base muy grande, con correlatos de prácticas sociales participativas autogestionarias.

El sistema político, según nuestra interpretación, estaría atravesando una fase de transición entre la escasa institucionalización de los ochenta (incoativo) a un modelo institucionalizado en los inicios del siglo XXI, mostrando simultáneamente una tonificación y un mayor despliegue de la acción social colectiva en dicha fase –mérito obviamente de la población y de los trabajadores, pero acicateados por un clima propicio al desarrollo y crecimiento de actores sociales mucho más contestatarios, propositivos en términos de proyectos societales de envergadura–. La clave para su posterior evolución refiere a la capacidad de mantener la autonomía social sin dejar de ejercer sus fueros en el terreno sociopolítico. De esta manera, examinando el caso del MST, coincidimos con muchos analistas que ponen de relieve su autonomía casi como un valor intrínseco y aprehendido por el conjunto de sus

dirigentes, cuadros y militantes sociales. Ello les permite obtener mayores réditos de legitimidad y credibilidad popular; al mismo tiempo que posicionarse como actor social en su relación con el Estado y los partidos políticos, en particular con el actual partido de gobierno, el PT, el cual evidentemente cuenta con una enorme base de apoyo y respaldo en aquel y en otros movimientos sociales.

No subestimamos por cierto ni la complejidad ni las contradicciones generadas por la asunción del gobierno de un partido político nacido y madurado en la faena opositora. Sobrevienen un conjunto de problemas nuevos, tanto para el PT como para los dos movimientos aquí estudiados, ambos con vínculos más que estrechos, profundamente imbricados y amasados en tiempos de la transición democrática, como en las recientes luchas en contra de la aplicación del recetario neoliberal. Aquella autonomía estaría jaqueada si desde el Estado, como desde el Partido de los Trabajadores, las presiones para el realineamiento de los actores sociales se tornaran insostenibles y lesivas a sus intereses específicos. Precisamente, el debate actual ha ocasionado algunas fricciones entre las diversas corrientes dentro del movimiento sindical, aglutinado principalmente en la CUT, y en sintonía con algunas posturas y críticas en el año 2003 provenientes del seno del PT, originando a su vez conflictos entre sus fracciones mayoritarias y minoritarias.

ECUADOR

Después del período militar en los años setenta, y tras la recuperación de la democracia, asumía en 1979 el entonces líder de la socialdemocracia, Jaime Roldós, que intentó generar una política de integración de los sectores sociales marginados o excluidos de las zonas rurales y urbanas más empobrecidas, en el marco de un relacionamiento bastante dificultoso con el Parlamento y la oposición. A su muerte, en un accidente aéreo en 1981, asumió el vicepresidente Osvaldo Hurtado, y el país ingresó en una crisis económica y social aguda, que facilitó el acceso al gobierno de los partidos más conservadores que ejercieron el poder durante la década de los noventa, entre cuyos mandatarios recordamos a Sixto Durán Ballén, quien puso en marcha un plan de privatizaciones de las principales empresas estatales y una política de ajustes fiscales y estructurales de cuño neoliberal (flexibilización y desregulación del mercado de trabajo, reformas laborales). Poco después asumía el populista Abdalá Bucaram, luego depuesto por el Congreso por razones de incompetencia intelectual (fue declarado “insano” mentalmente y luego destituido). De esta manera llegaba –tras las elecciones del año 1998– el líder socialcristiano Jamil Mahuad, quien enfrentaría también una aguda crisis económica y financiera (a la que intentó resolver con la dolarización completa de la economía ecuatoriana), con severas re-

percusiones sociales, provocando una de las revueltas populares más furibundas, y su posterior caída en el mes de enero del año 2000. Luego del período de transición aceptado por las fuerzas de oposición, se celebraron las elecciones del año 2002, en las cuales finalmente resultó triunfador el coronel Lucio Gutiérrez, con el apoyo del movimiento indígena representado por una fuerza política, el Movimiento Pachakutik (MUPP), que aceptó integrar el gabinete del novel presidente. Pocos meses después, las discrepancias visibles entre los aliados y la Sociedad Patriótica 21 de Enero (oficialista) dieron lugar al retiro del MUPP del gabinete de Gutiérrez en el año 2003.

Al analizar los indicadores de confianza en los partidos políticos, constatamos una fuerte caída, del 18,6% en 1996 (ya con registros bajos) al 8,3% en el año 2003. En la evolución de la serie no encontramos ningún momento de repunte, sino una tendencia descendente, tal vez más pronunciada entre los años 1996 a 1999. Con relación a la confianza en el Parlamento, los datos son también elocuentes: un 26,9% en 1996 y apenas un 5,8% en 2003, diferencia abrumadora que pone en evidencia la paupérrima valoración de la ciudadanía ecuatoriana respecto de una de las instituciones emblemáticas de la democracia. Si consideramos ahora el grado de satisfacción con la democracia, el porcentaje en 1996 se ubicaba en 33,2%, mientras que para el año 2003 (últimos datos disponibles del Latinobarómetro) había bajado a 16%, lo que representa una caída de más del 50% en siete años de ejercicio de las instituciones democráticas. Al examinar los resultados relativos a la confianza en el presidente, los datos arrojan también un decrecimiento notable, del 34,3% en 1996 al 9,9% en 2003. Desde la perspectiva del modelo de institucionalización, el sistema ecuatoriano se define como incoativo, con alta fragmentación del sistema de partidos (NEP = 5,8), inestabilidad en los últimos diez años, pérdida sustantiva de la legitimidad y confianza en los partidos políticos, pérdida de confianza en prácticamente todas las instituciones democráticas, degradación de la solidez de las organizaciones políticas (dislocamiento de la identificación con los partidos históricamente más representativos, desalineamiento y débil mantenimiento de las lealtades), todo lo cual contribuye a la generación de opciones nuevas y diferentes (Sociedad Patriótica 21 de Enero, MUPP).

Del lado de los movimientos sociales hemos estudiado el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), cuyo origen se remonta al año 1975, y a la CONAIE, cuya emergencia como movimiento indígena se visualiza en 1986, aun cuando otras formaciones del indigenismo autóctono pueden rastrearse en décadas anteriores. El movimiento indígena salta a la escena pública, sobre todo a partir de sucesivos levantamientos, desde el primer año de la década del noventa, para situarse claramente como un interlocutor insoslayable para el sistema político todo (parti-

dos, Parlamento, gobierno). Presenta una alta capacidad de convocatoria y movilización social, a diferencia del FUT, el cual fue perdiendo peso específico en el concierto de los movimientos sociales ecuatorianos, aunque en numerosas ocasiones ha acompañado y coordinado movilizaciones conjuntas con los indígenas y campesinos. Fuertemente organizado el movimiento indígena alrededor de la CONAIE, de arraigo social en las capas más bajas y marginadas, también a partir de su discurso y práctica se ha erigido en representante de una porción muy grande de la población ecuatoriana, más allá de las diversas agregaciones étnicas. El discurso antineoliberal, antisistémico, apunta mucho más allá de la reclamada reforma agraria y propone una transformación institucional del Estado, radical y profunda, sustentada entre otras ideas en la plurinacionalidad, el respeto a la diversidad multicultural, la autodeterminación y territorialidad, la necesaria democratización del poder y un modelo económico (de tipo comunitarista) situado en las antípodas del actual esquema capitalista individualista. Por otra parte, la autonomía de la CONAIE ha sido su rúbrica durante los años de su gestación, crecimiento y desarrollo, aun cuando subyace la incertidumbre respecto de cómo se habrá de dirimir finalmente su imbricación con el movimiento Pachakutik, hecho casi “a su medida” como instrumento político junto con otras organizaciones populares.

La controversia emanada de sus compromisos con la gestión del gobierno del presidente Lucio Gutiérrez admite varias lecturas, todas polémicas; o se interpone el movimiento indígena en la dilucidación de la autonomía reivindicando su “paternidad” (en consecuencia, la autonomía de la CONAIE prevalece ante el instrumento partidario), o bien se produce un nuevo dislocamiento a partir de la definición de autonomía en favor del movimiento político. En cualquiera de las hipótesis, la CONAIE podría preservar su autonomía como actor social, en la medida en que se distingan las lógicas de uno y otro actor en la arena sociopolítica. El FUT, en tanto, posee un historial más frondoso, pero ha perdido eficacia y parte de su equipamiento de cuadros para suscitar y movilizar apoyos masivos de la clase obrera, amén de padecer los efectos del modelo neoliberal en la reestructuración de la industria nacional, y la reinserción productiva en los circuitos de la economía mundial (lo que ha mermado notablemente su tasa de afiliación). El desmantelamiento de los factores socioculturales y económicos que favorecían una articulación de la clase obrera organizada, a lo que se agrega una normativa laboral que le resultó perjudicial y una responsabilidad propia por la dificultad de encontrar opciones innovadoras en las formas de organización, estrategias de lucha y convocatoria social, hacen del FUT un actor social débil, aunque todavía presente. Los clivajes giran en torno a la distribución del poder político y económico; a los papeles del Estado y su función de integración (Estado nacional o plurinacio-

nal), también en torno a la hegemonía de las clases dominantes en su disputa con las clases subalternas, toda vez que estas han verificado en el terreno confrontacional su capacidad de cambiar el rumbo político, al menos parcialmente.

Sostenemos la existencia de una correlación efectiva entre pérdida de confianza en las instituciones democráticas y un mayor desarrollo de la acción social colectiva; en el caso de Ecuador el ejemplo de la CONAIE nos parece ilustrativo. Asimismo, la mayor autonomía del movimiento indígena revela una capacidad de superar holgadamente las fronteras y cotas marcadas por la reivindicación particularista y las demandas singulares, para traducir un conjunto de propuestas, marcos de acción y prácticas sociales en un proyecto que restituye la esencia de la democracia: participar y decidir con tolerancia y respeto a la pluralidad. El movimiento indígena no abjura del sistema democrático, sino que reniega de “un sistema democrático” a todas luces imperfecto e incompleto, ajeno en gran medida a las vicisitudes de la enorme mayoría pauperizada. La consolidación de la CONAIE y la decisión de participar en la contienda electoral constituyen un buen argumento para demostrar que, cuando el sistema de partidos no responde las expectativas de la ciudadanía, los movimientos sociales que de ella surgen, asumen una función similar o emparentada con la de los partidos políticos.

URUGUAY

La dictadura militar abarcó más de una década, desde 1973 hasta la restauración de la democracia en 1984, dejando un lastre, en consonancia con su prédica y práctica del terror, que la heredó tristemente con sus pares en el Cono Sur. Pasada la época del autoritarismo, a partir de la resistencia civil y política se desencadenó un proceso remozado de recuperación de las aptitudes del sistema político, que representaban esperanzas en la conformación de consensos para reconstruir el país desgarrado. La vitalidad y efervescencia de la sociedad civil, fruto del empuje de movimientos sociales (el sindicalismo joven, el movimiento cooperativo de vivienda, el movimiento estudiantil, además de una miríada de organizaciones territoriales o vecinales, junto con organizaciones no gubernamentales y los movimientos por verdad y justicia), coadyuvaron de manera fundamental a la retirada de los enclaves autoritarios y posibilitaron una salida pacífica de los militares.

Luego se sucedieron de manera consecutiva cuatro períodos de gobierno de los partidos tradicionales (conservadores); el sistema de partidos se recompuso y pasó de una primera fase (hasta 1989) de neto predominio del formato bipartidista, a una fase caracterizada por el pluripartidismo moderado (en virtud del avance de la coalición de izquierda), para entrar en una tercera fase (1999-2004) signada por la

tendencia a reconfigurarse un nuevo formato bipartidista con otros actores políticos (de un lado una amplia coalición de centroizquierda y del otro un “partido conservador” desdoblado en las dos formaciones históricas, ya muy disminuidas), que intentan retener los clivajes del poder mantenidos desde los tiempos fundacionales de la nación y el Estado. Sin duda, se trata de uno de los sistemas más institucionalizados de América Latina, según el modelo de Mainwaring y Scully, por poseer rasgos de fuerte identificación partidaria, regularidad –incluso con la irrupción de las fuerzas de centroizquierda– y enraizamiento en la sociedad, y cuyas organizaciones políticas aún mantienen cierta reserva de credibilidad y confianza, pese a la reciente evolución de los indicadores que reseñamos a continuación.

En primer lugar, la confianza en los partidos políticos pasa de un 31,6% en 1996 a un 17,9% en 2003, lo que reporta variaciones importantes, explicables por el descenso abrupto a partir del año 2002 en función del colapso financiero acaecido precisamente ese año. En segundo lugar, la confianza que registra el Parlamento da cuenta de un descenso agudo, sobre todo –y en correspondencia con lo señalado para los partidos– en el año en que se desata una de las peores crisis económica y social; es así que el nivel de confianza pasó de un 37,8% en 1996 a un 26,5% en 2003. En tercer lugar, respecto de la satisfacción con la democracia, un 51,3% de la población manifestaba muy positivamente su satisfacción en 1996, mientras que para el año 2003 (últimas cifras disponibles) la proporción, sensiblemente disminuida, se ubicaba en un 43%, aun cuando el año anterior registraba un 53%. En cuarto lugar, sobre la figura del presidente, se observa que en 1996, un 35,7% expresaba confianza, en tanto que en el año 2003 esta confianza había descendido al 19,2%.

Los movimientos sociales analizados, el sindical (PIT-CNT) y el movimiento cooperativista de vivienda (FUCVAM), recobran en los años ochenta un papel protagónico, forjado en décadas anteriores durante la resistencia y la clandestinidad. Si bien es cierto que la CNT (1964) es la central sindical de origen y el PIT-CNT constituye de hecho su continuidad histórica, a los efectos de nuestro estudio consideramos un momento refundacional ubicado a principios de los ochenta (1983-1984), mientras que para el caso de FUCVAM el nacimiento formal se sitúa en 1970 y su “renacimiento” se asocia al año 1983, en tiempos de la transición democrática. Durante aquella etapa, los dos actores sociales se erigieron como baluartes no sólo de la resistencia a la dictadura, sino de la transición democrática, dando cuenta de un apego al derecho y las normas constitucionales, sobre todo en defensa de las libertades, y con capacidad de proponer alternativas plausibles para la recuperación económica y social del país. Sin embargo, el regreso al primer plano de la arena pública de los partidos políticos pareció desdibujar paulatina-

mente aquel rol protagónico de los movimientos sociales, confiriéndoles un marco de actuaciones en el territorio de las reivindicaciones sociales (muchas de ellas corporativas), al restablecerse los puentes entre los poderes del Estado y la sociedad civil.

La confianza en las instituciones democráticas tuvo su etapa de auge entre 1984 y 2001, a partir del cual identificamos un punto de inflexión que empuja dos indicadores –confianza en el Parlamento y en los partidos políticos– a la baja abrupta, aunque el grado de satisfacción con la democracia se mantuvo casi en los mismos niveles. Durante el último tramo que analizamos, 2001 a 2004, pueden observarse picos en la protesta social y sobre todo avances en la constitución de plataformas sociales amplias entre varios actores y movimientos, enfrentados a la peor crisis económica y social de los últimos treinta años. La campaña en contra de las privatizaciones que se iniciara con éxito en 1992 (que impidió la privatización de la empresa ANTEL), culminó exitosamente en el año 2003 con el referéndum que detuvo la Ley de Asociación de la empresa estatal ANCAP, con un margen de apoyo muy alto (más del 60% de la población). Ambas organizaciones sociales, FUCVAM y el PIT-CNT, jugaron un papel decisivo en la promoción, el impulso y en el resultado final de aquel plebiscito popular. A nuestro juicio, los dos movimientos sociales (trabajadores y cooperativistas) conservan un grado medio de convocatoria, aun cuando hayan perdido parte de sus reservas de movilización social en la década de los noventa.

La capacidad propositiva es alta, lo mismo que su estructura orgánica (asentada en núcleos de militantes, cuadros y dirigentes expandidos en las capas subalternas y medias). Son actores sociales ya consolidados y apanados en la lógica de la resistencia, primero al autoritarismo y luego al modelo neoliberal que intentó aplicarse a rajatabla, sobre todo a partir de 1990 (bajo el mandato de Luis Alberto Lacalle, y luego en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti). Su autonomía, permanentemente interpelada, es real y efectiva, pero mediatizada por fuertes vínculos entre los partidos de signo progresista o de izquierda, que en ocasiones generan recortes y zonas de incertidumbre respecto de la capacidad de establecer de modo autárquico las orientaciones estratégicas del movimiento sindical. El discurso tanto del PIT-CNT como de FUCVAM comparte la crítica al neoliberalismo, que reivindica la lucha de clases en el caso del movimiento sindical, y la autogestión social en el caso de FUCVAM. Ambos enfatizan la necesidad de defender la soberanía frente a los embates del neocolonialismo o imperialismo norteamericano, denostando el modelo capitalista de producción y distribución de la renta (destructor del trabajo e inequitativo), con especial acento en la idea de una democracia que implique la participación ciudadana.

En términos de correlación directa entre descenso de los niveles de confianza en los partidos políticos y en otras instituciones de la democracia, no se registran hallazgos significativos traducidos en nuevos movimientos sociales emergentes (lo que no significa subestimar la existencia de una rica y plural variedad de organizaciones sociales de raigambre popular). No obstante, el sistema político uruguayo institucionalizado, con partidos políticos enraizados en la ciudadanía, conectados fuertemente con organizaciones sociales (sobre todo los partidos de centro e izquierda), que mantuvieron durante muchas décadas las lealtades y el alineamiento de los votantes y las elites, imprescindibles para su reproducción social, nos sugiere la pervivencia de una cultura política bien desarrollada, anclada en una alta valoración de su sociedad respecto de las normas de regulación del conflicto en el ejercicio de la democracia: el lugar para los movimientos sociales permanece en la clásica diferenciación de la esfera social pública y la esfera de la política institucional (disputa por el control del Estado y los aparatos burocráticos de gestión de políticas). Así, les caben a los movimientos sociales legítimas intervenciones desde la órbita de la sociedad civil, y menos en la órbita de la contienda política que dirige los elencos de gobierno. Los partidos políticos siguen despertando la adhesión ciudadana, aunque hayan perdido legitimidad en términos globales, y el Parlamento sea enjuiciado por sus falencias. Podríamos interpretar que la brusca caída del grado de satisfacción con la democracia a partir del año 2001 se asocia directamente con la fase económica recesiva y de sensible degradación del bienestar de la población; no obstante, los altos niveles que aún se registran estarían apelando a una convicción internalizada en la mayoría de la ciudadanía del “valor de la democracia” como el mejor sistema político, más allá e independientemente de toda circunstancia.

CHILE

Los análisis de los sistemas políticos y movimientos sociales en Chile, Paraguay y Venezuela habrán de utilizarse como casos espejos de los anteriores. El nivel de profundización es menor, pero de todos modos útil para un abordaje más general y concluyente en términos de tendencias para el subcontinente latinoamericano.

La dictadura chilena fue probablemente una de las más represivas y sangrientas del Cono Sur, instalada en el poder desde el año mismo del golpe de Estado, el 11 de setiembre de 1973, hasta el regreso a la institucionalidad democrática en 1989. La recuperación fue sin duda trabajosa e intrincada, al punto que varios analistas políticos caracterizan la transición a una democracia recortada o incompleta, con incrustaciones autoritarias en la Constitución vigente. De todos modos,

el primer gobierno democrático, a cuyo frente estuvo el democristiano Patricio Aylwin, surge de un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios (socialistas y demócrata cristianos), anudados en la Concertación Democrática. El mapa político se recompone así con un formato multipartidario tripolar y un esquema bipartidista *gobierno-oposición parlamentaria*, fuerte presidencialismo y mantenimiento de un número efectivo de partidos de 4,85 (PS, PPD, DC, RN, UDI), aun cuando la división tripartita sigue existiendo bajo una competencia bipolar temporal. El sistema anterior al período autoritario presentaba un esquema caracterizado por “gobiernos minoritarios con grandes proyectos de cambio sin mayorías o coaliciones estables; pluripartidismo polarizado; presidencialismo fuerte pero minoritario y finalmente un Estado centralizado y unitario” (Mirza, 2002). Los gobiernos sucesivos en Chile desde el primer triunfo de la Concertación fueron consolidando la primacía de los dos partidos antedichos y una articulación sostenida, sobre todo en la primera fase de la transición, con los movimientos sociales y actores emergentes de la sociedad civil (movimiento obrero, campesino, indígena, vecinal o de pobladores, derechos humanos, estudiantil, entre otros). No obstante, el lastre del autoritarismo pesa en la dinámica chilena, entre otros factores por las perturbaciones provocadas por la presencia del general Augusto Pinochet, el respaldo que este aún posee en las filas del Ejército, y las dificultades en dilucidar definitivamente la cuestión de los derechos humanos.

En cuanto al sistema político, teniendo en cuenta los indicadores de confianza en las instituciones democráticas, los datos son bien interesantes. En primer lugar, en referencia a los partidos políticos, la encuesta realizada por el Latinobarómetro indicaba que en 1996 un 27,3% manifestaba su confianza en ellos, en tanto que siete años después, en el año 2003, la cifra descendía al 13,4%, diferencia bastante significativa. En lo relativo al Parlamento, los datos arrojan también una caída de un 42,3% en 1996 a un 22,3, prácticamente la mitad; vale decir que se observa un deterioro considerable en la imagen de una institución específicamente propia del sistema democrático. Por otro lado, la confianza en la figura del presidente (Poder Ejecutivo en su máxima expresión, sobre todo en un régimen presidencialista como el chileno) pasaba de un 50,7% en 1996 (bastante elevado en comparación con los otros países) a un 47,2% en 2003, lo que de hecho no implica una pérdida sustantiva de confianza. Conviene aclarar, sin embargo, que en los registros de años anteriores el nivel de confianza estuvo bien por encima del 50%, alcanzado su tope en 1999 con un valor del 60% de la ciudadanía. Por otra parte, el grado de satisfacción con la democracia se ubicaba para 1996 en un valor del 27,6%, para situarse en un 33% en el año 2003 (según los últimos datos proporcionados por el Latinobarómetro), en rigor, una variación poco significativa. Siguiendo el modelo

de institucionalización de Mainwaring y Scully, Chile corresponde típicamente, junto con Uruguay, a la categoría de sistema institucionalizado, con un nivel alto de regularidad y estabilidad política, un sistema de partidos enraizado y con fuertes conexiones con las organizaciones sociales, y cuyas organizaciones políticas asumen un perfil de solidez, sustentado por la lealtad y el alineamiento de las elites y los votantes.

Se ha mencionado el movimiento mapuche y su primigenia vinculación con los partidos políticos, lo que a nuestro juicio inhibe su despliegue genuino y su conformación como movimiento social autónomo y consolidado. Merece subrayarse, no obstante, que los mapuches expresan sus demandas y reivindicaciones a través de varias organizaciones sociales, una de las cuales colocamos como ejemplo en nuestro estudio; se trata de Ad-Mapu. No todas las formaciones mapuches responden linealmente a las orientaciones de sectores o partidos políticos; lo que intentamos demostrar es que la influencia ejercida por estos puede llegar al grado de determinar de manera exógena las estrategias, luchas y orientaciones incluso normativas de los movimientos sociales, restándoles capacidad para generar contribuciones relevantes en el sistema democrático, al tiempo que reduce su legitimidad social. Aparentemente ello aconteció con Ad-Mapu, al menos en la etapa en la cual la disputa por su control hegemónico obturó las chances de crecimiento y maduración como actor social. Otros referentes en el movimiento mapuche intentaron emerger con una fisonomía propiamente autónoma; tal el caso de la Coordinadora Arauko-Malleko, muy activa en los últimos años, o el Consejo de Todas las Tierras, que sin embargo, por sus vacilaciones y cierta ambigüedad, no se constituyó aún en actor social de fuste. Todos ellos recalcan la necesidad de considerar seriamente el problema étnico-cultural de la población mapuche en el marco de una tendencia a subsumirse en la “cultura nacional chilena”. En síntesis, el movimiento mapuche cuenta con un importante potencial de activos socioculturales y organizativos, para perfilarse como actor social de primer orden en un escenario de movilización y articulación de sus diversas organizaciones representativas, a condición de no sujetarse a designios “externos” en el diseño de sus itinerarios programáticos y estratégicos.

Por su lado, la CUT adquirió un enorme relieve en los tiempos de la resistencia a la dictadura, y durante toda la fase de transición democrática. Esta central sindical se formalizó en 1992, aunque ya estaba constituida como movimiento obrero en los primeros años de la década del ochenta, recogiendo las banderas y acumulaciones de sus precedentes organizaciones sindicales (la histórica Central Única de Trabajadores, y más adelante la Coordinadora Nacional Sindical, surgida en 1975). Encuadrada en las coordenadas de la “cultura del consenso” generalizado en Chile, la CUT formuló una política dirigida a establecer

los parámetros de recuperación de los niveles salariales y de participación y acuerdo respecto del empleo y la reestructuración productiva con los gobiernos de la Concertación, la que condujo a mantener una predisposición al diálogo con el empresariado nacional y el gobierno como mediador, sobre el supuesto de sostener una transición con el menor grado de conflictividad posible, siempre que no se vulneraran los derechos de los trabajadores. En este caso, también funcionaron los arreglos políticos e institucionales con los partidos políticos de la Concertación, que contaban con un correlato de dirigentes y líderes sindicales afines. De hecho, la continuidad del modelo neoliberal iniciado tempranamente por el gobierno autoritario fue asegurada por los pactos suscritos entre el trabajo y el capital, y las intervenciones oportunas del Estado.

El sistema político poderosamente institucionalizado preserva la centralidad de los partidos políticos en el juego democrático y tiende a tamizar los conflictos sociales canalizándolos por la vía privilegiada de la negociación política, lo que podría explicar la relativa debilidad de los movimientos sociales en su capacidad de articular y liderar un proceso de expansión de la democracia, en una etapa signada –según hemos constatado– por la caída pronunciada de la confianza en los partidos políticos y en el Parlamento. La autonomía de la CUT es media en referencia al Estado y los partidos políticos; la actual coyuntura manifiesta una intencionalidad clara de los sectores más a la izquierda, orientada a influir mucho más activamente en las orientaciones estratégicas de la central sindical, abandonando la idea de “tregua” acordada y el diálogo para el consenso, fraguadas en los inicios de la transición democrática. Las últimas declaraciones públicas de la Central insinúan un camino de confrontaciones con el gobierno y los grandes grupos empresarios.

PARAGUAY

La larga y férrea dictadura del general Alfredo Stroessner en Paraguay y la apropiación de casi todos los resortes de poder (económico, social, político y cultural) por parte del Partido Colorado parecían no dar paso a ninguna fisura, que siquiera permitiera aprovechar los finos intersticios para intentar modificar el establishment totalitario conservador. Pese a la espesura de la trama burocrático-autoritaria y el manejo discrecional arbitrado tanto por el Partido Colorado como por las Fuerzas Armadas, en alianza perfecta de intereses y cosmovisiones ideológicas compartidas, la realidad de los últimos catorce años en Paraguay se ha visto convulsionada por acontecimientos episódicos, más que determinada por procesos de auténtica democratización. La caída del dictador no culminó necesariamente en el reparto plural del poder acumulado

durante décadas, sino en la autogeneración de contradicciones en la propia fuerza hegemónica del coloradismo.

El 3 de febrero de 1989 Stroessner fue derrocado por el general Andrés Rodríguez, quien inmediatamente convocó a elecciones en las que él mismo se postularía, obteniendo finalmente el triunfo en las urnas por una diferencia abrumadora. La oposición logró lentamente abrir espacios de participación, tanto a nivel político (cuya fuerza principal estuvo en el Partido Radical Liberal Auténtico de Domingo Laino) como a nivel social, con la formación del Movimiento Intersindical de Trabajadores, agrupaciones campesinas y otras organizaciones de la sociedad civil. Es recién en 1991, en ocasión de celebrarse las primeras elecciones municipales libres en más de cuarenta años, que las fuerzas opositoras conquistaron la alcaldía de Asunción (Carlos Filizzola) y nueve años más tarde, en el año 2000, el PRLA logró vencer, cuando se eligió el vicepresidente para suplantar al asesinado Argaña. Enfrentamientos entre facciones del Ejército, intento de golpe de Estado de Lino Oviedo, acusaciones por corrupción al presidente González Macchi, y el actual gobierno electo en 2003, también del Partido Colorado (aunque aparentemente se trata de una corriente del coloradismo más bien renovadora y más democrática en sus componentes y discurso), dan cuenta de la evolución reciente del proceso político paraguayo.

Según el esquema de Mainwaring y Scully, nos hallamos frente a un sistema político hegemónico en transición, en el que un partido predomina en el mapa político, en la gestión de gobierno, en el control del aparato estatal y en el manejo de las clientelas que sostuvieron su poder construido durante décadas de autoritarismo *manu militari*, aun admitiendo una cierta renovación en su interior y apertura a aceptar mayores grados de pluralismo. Según los datos registrados por el Latino-barómetro, la confianza en los partidos políticos se ubicaba en un 37% en 1996, para pasar a situarse en un 11,7% en el año 2003, lo que indica una pérdida importante en el período considerado. Al tener en cuenta la confianza en el Parlamento, visualizamos también un descenso notorio, desde un 41,6% de la población que lo valoraba positivamente en 1996 hasta un 13,3% en el año 2003, baja sustancial, como decíamos, en referencia a una institución paradigmática para la democracia. Si tomamos los valores correspondientes a la figura del Presidente, partimos del 39,8% de confianza en 1996 para llegar al 14% en el año 2003, que sólo registra una suba en 1998, cuando la confianza supera el 53% de la ciudadanía. Respecto del grado de satisfacción con la democracia, la evolución es decididamente negativa: pasó del 21,41% en 1996 a un magro 7% de la población que declaraba estar satisfecha con la democracia en 2003. Sin embargo, nos parece sumamente ilustrativo el dato de la abstención electoral; el porcentaje de la ciudadanía que concurre a votar en las elecciones (tomamos la referencia de las tres últimas) pasó de un 33,38% de

votos emitidos sobre el total de habilitados en 1993 a un 59,43% en 1998; a partir de dicho incremento notable podría inferirse que se produjo una revalorización de la instancia electoral y una intención clara de por lo menos –influyendo en la selección de los elencos de gobierno– participar de ese modo en los asuntos políticos del país. Es decir, la esencia de la democracia pervive en una de sus condiciones básicas o mínimas: la posibilidad de decidir votando, o la opción de elegir. Por último, el número efectivo de partidos para el año 2003 era igual a 3,5, luego de estar ubicada entre un 2 y un 2,9 desde 1993.

En cuanto a los movimientos sociales, los rasgos característicos de fragmentación, descoordinación, atomización y desarticulación estarían subsanándose en la medida en que las dos organizaciones campesinas más importantes, la Federación Nacional Campesina y la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), han logrado converger en un ámbito común de definiciones estratégicas, de luchas y movilizaciones populares. En los últimos años, conforme el modelo neoliberal fue adquiriendo dimensiones más perjudiciales para los intereses de las clases trabajadoras (obrero y campesina), el discurso político y la protesta social se volvieron más antineoliberales; basta recordar los capítulos de la movilización paraguaya en contra de las privatizaciones (con logros importantes en su haber). Asimismo, los diversos actores sociales han jugado un papel relevante en el escenario de turbulencias político-institucionales acaecidas en los últimos diez años, sobre todo en el caso de un remozado movimiento juvenil (de variado origen). El movimiento sindical, con momentos de auge y declive (sobre todo en la década del noventa), parece estar resurgiendo, fuertemente vertebrado en organizaciones de trabajadores del sector público (movilizados para frenar las oleadas de privatizaciones).

Los dos espacios de articulación social, la Plenaria Popular y el Frente Nacional de Defensa de los Bienes Públicos y el Patrimonio Nacional, finalmente acordaron la conformación del Congreso Democrático del Pueblo en el año 2002, lo que sin duda revela una maduración de plataformas ampliadas, que integran tanto a movimientos sociales como a sectores y partidos políticos de la oposición. También atravesados por la influencia de algunas corrientes de los partidos políticos de centro e izquierda, dichos movimientos aparecen con un grado importante de autonomía, expresada en la unidad construida a partir de un cruce de intereses sectoriales que no procuran la hegemonía de unos sobre otros, preservando, pues, ese margen de actuaciones no sujetas a designios exógenos. De todos modos, el nivel de organicidad es muy variado, en tanto que la capacidad de convocatoria y movilización social, si bien es significativa, no logra aun despertar acciones sociales masivas, salvo en marchas o cortes de ruta de campesinos. Hay, en consecuencia, algunas señales desde los movimientos sociales que

denotan una intencionalidad clara en aras de ocupar los espacios de partidos políticos que perdieron una base de legitimidad en el período considerado, pero sin lograr resultados plausibles, por su carácter anti-sistémico y portador de un proyecto democratizador (aún incipiente), y alternativo al esquema dominante.

VENEZUELA

Tras cuatro décadas de relativa estabilidad democrática, fundada en el acuerdo de Punto Fijo, del cual deriva el sistema político contemporáneo que ha sido caracterizado como de bipartidismo (Acción Democrática y COPEI), Venezuela sufrió un “sacudón” en 1989, anticipando el posterior desmoronamiento del statu quo establecido en 1958. Tras la sucesión de gobiernos en que alternaron los democristianos y la socialdemocracia, a fines de los años ochenta y a consecuencia de la dureza en la aplicación de medidas de corte neoliberal, y la corrupción expandida a todos los niveles del Estado y de los actores sociales corporativos, la sociedad venezolana ingresa en un tobogán que vertiginosamente precipita una sucesión de acontecimientos: primero los intentos de golpe de Estado en 1992, luego la crisis desatada por el enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez por acusaciones de corrupción, después el colapso de ambos partidos tradicionales en las elecciones del año 1998, y finalmente la irrupción del movimiento bolivariano liderado por Hugo Chávez Frías, que inaugura un nuevo ciclo en la política nacional.

Ciertamente mucho más convulsionada, esta nueva etapa implicó una ruptura drástica con un pasado anudado a la política del consenso, así como supuso el desmantelamiento de las estructuras sociales, culturales y políticas que tuvieron como resultado la postración de la enorme mayoría de la población en la pobreza y la marginalidad, en contraste con una elite cargada de privilegios y prebendas. Los dos partidos políticos que trazaron la vida de la nación venezolana en los cuarenta años de hegemonía dieron paso a la multiplicación de fuerzas políticas, algunas sin historial, en tanto que otras, reconvertidas o reagrupadas tras el colapso del sistema de partidos, intentaron suplir los vacíos dejados por aquellos. Si consideramos el modelo de Mainwaring y Scully, habremos de constatar que de aquel sistema institucionalizado ubicado por los autores en su máximo esplendor, con las calificaciones más altas, ya no queda nada o, mejor dicho, sólo las reminiscencias y estertores propios de una agonía no muy lenta. Así, luego de haber asumido la presidencia, Hugo Chávez tuvo que enfrentar una oposición civil y luego cívico-militar que desembocó en el golpe de Estado de abril del año 2002, encabezado por las dos corporaciones más poderosas (FEDECÁMARAS y la CTV, con la connivencia del Departamento de Estado norteamericano), ambas vinculadas estrechamente a

los partidos que gobernaron durante cuarenta años en Venezuela. Tras el retorno inmediato del presidente depuesto, la oposición no cesó en su intento de derrocar al gobierno de Chávez, al mismo tiempo que se movilizaba la población a favor, pero también en contra del presidente. La polarización es hoy en día el principal rasgo del sistema político, y establece una línea demarcatoria muy nítida entre chavistas y antichavistas, ciertamente en clave clasista.

Al examinar los datos del Latinobarómetro, observamos que la confianza en los partidos políticos pasó del 11% en 1996 a un 13,8% en el año 2003, evolución que expresa una tendencia ligeramente al alza, pero desde un punto de partida muy bajo. Sin embargo, la serie examinada muestra que hasta el año 2001 la tendencia iba en aumento, hasta alcanzar un 29,6% de confianza en los partidos políticos en ese año, lo que podría revelar una recuperación de la credibilidad (recuérdese que nuevas organizaciones políticas irrumpen en la competencia electoral, como por ejemplo el MVR). En segundo lugar, respecto de la confianza en el Parlamento, los datos indican una evolución semejante a la de los partidos políticos; es decir, una tendencia a incrementar la confianza desde 1996, con un 18,8%, hasta el año 2001, con un 36,9%, para luego caer fuertemente hasta situarse en el año 2003 nuevamente en un 18% de la población que valoraba positivamente la faena parlamentaria. En tercer lugar, en cuanto a la consideración del presidente, arranca la serie en un 16,3% de confianza en 1996, para pasar al 27,6% en el año 2003, lo que implica un aumento notable habida cuenta de las turbulencias sociales y políticas verificadas en el mismo período. Corresponde acotar, sin embargo, que el máximo valor alcanzado se ubicó en 1999 con un 68,3%, que coincide con la asunción del presidente Hugo Chávez, para luego iniciar un decrecimiento hasta llegar a los valores antes mencionados. Finalmente, con relación al grado de satisfacción con la democracia, en 1996 se expresaba satisfecho un 30% de la población, en tanto que en el año 2003 la proporción era del 38%. También interesante resulta esta serie, que evidencia una subida considerable en 1999, con un 54,5% de venezolanos satisfechos con la democracia, dato consistente si se lo compara con la confianza en el presidente.

En el campo de los movimientos sociales, el *caracazo* fue un hito del año 1989, y años más tarde, más movilizaciones en contra de la corrupción, paros y marchas; luego el colapso del sistema de partidos y la inauguración de un período de creciente dualización social y política, en el que se instala la antinomia chavismo-antichavismo. Este contexto de pérdida de confianza en los partidos políticos –como se señaló, de apenas un 11% en 1996– ya se advertía en encuestas divulgadas en el año 2000, con un alto porcentaje de la población que tildaba de corruptos “a todos los adecos y copeyanos”, que contrastaba con la valoración aún muy positiva del movimiento vecinal. Si bien este movimiento,

proveniente de las zonas urbanas medias y bajas, tuvo una etapa significativamente fuerte en las décadas del setenta y ochenta, donde aparece como referente de la sociedad civil organizada para democratizar los sistemas electivos, decae a principios de los noventa, para luego resurgir de la mano de los círculos bolivarianos y del Polo Patriótico, inspirados en una regeneración del tejido urbano, pero “funcionalizados” por los aparatos políticos del oficialismo –aunque una corriente de aquel movimiento vecinal ahora aparece vertebrada alrededor de Queremos Elegir, un actor social de reciente formación y más autónomo.

Los movimientos de buhoneros (vendedores ambulantes) y de pensionados y jubilados, que transitan por procesos de protesta y movilización social de carácter más reivindicativo, aparecen más recostados a la lógica del grupo de interés, menos estructurados y organizados, con un discurso volcado al reclamo por trabajo y restitución plena de sus derechos como ciudadanos. Cuentan con una buena capacidad de convocatoria y movilización, pero sus plataformas no asumen en la práctica un sesgo antisistémico. El movimiento estudiantil, retonificado, se percibe mucho más autónomo tanto respecto del Estado y del gobierno como de los partidos políticos de oposición, entonados por un discurso focalizado en el antiimperialismo y de inequívoco contenido antineoliberal. El movimiento sindical aparece ahora mucho más fragmentado y dividido por el eje que delimita, por un lado, una central sindical (CTV) alineada con la oposición y anclada en los antiguos lazos con el partido político AD (socialdemócrata) y, por otro, sindicatos y federaciones (algunos de muy reciente conformación) que responden a la línea prochavista, dejando poco margen para las corrientes autonomistas. Algo similar acontece con los movimientos campesinos y las diversas organizaciones gremiales de pequeños productores y cooperativistas en estado embrionario, muchas de las cuales nacen al abrigo y fomento del Estado.

En síntesis, los vínculos privilegiados entre las principales corporaciones, movimientos y actores sociales (sobre todo el movimiento obrero y el campesino) con los partidos políticos que hegemonizaron la vida política durante cuarenta años (1958 a 1998), en clave de “cuasi dependencia” orgánica y estratégica, impidieron una expansión autónoma de aquellos movimientos sociales en términos de contribuciones eficaces para la consolidación y reformulación del sistema democrático, después del colapso del sistema de partidos. Pareciera que, en particular, la otrora poderosa central sindical (CTV) hubo de ser arrastrada, junto con los partidos políticos, al barranco de la deslegitimidad social. El papel de la CTV en el frustrado golpe de Estado del año 2002 la dejó muy mal parada, generando el campo propicio para su división interna y fragmentación posterior. Las ataduras actuales de los nuevos movimientos sociales –en términos generales– con otras organizacio-

nes políticas de izquierda o proclives al MVR tampoco favorecerían el desempeño de un papel central en las controversias por el poder social y político. La polarización exacerbada entre el chavismo y el antichavismo no genera espacios de desarrollo autónomos (que no es lo mismo que la indiferencia de los actores sociales en tiempos de definiciones estructurales); antes bien, empuja nuevamente a la inhibición de potenciales aportes no mediados por el sistema político. Los clivajes giran en torno al poder de la élites vinculadas al capital y la disputa por el control de los recursos estratégicos (petróleo, tierras y recursos primarios), la democratización efectiva en la designación de los elencos de gobierno, el mantenimiento de privilegios y la reestructuración de las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad civil (nueva democracia participativa, reapropiación del territorio y formas asociativas de producción, revisión de los viejos mecanismos de redistribución de la renta, ensayo de nuevos patrones de desarrollo económico).

Para 1995 Venezuela se caracterizaba por contar con un sistema político altamente institucionalizado, con alta regularidad y estabilidad (y también alternancia en el gobierno), confianza y legitimidad, bien enraizado, sobre la base de fuertes conexiones con organizaciones sociales e identificación partidaria, con estructuras políticas sólidas en virtud del alineamiento, la disciplina y lealtad de las élites y los votantes. Este sistema ingresó, hace ya más de un lustro, en una profunda depresión y crisis, que le resquebrajó totalmente las plateas y pilares fundacionales. Dicho de otra manera, a partir de 1995 (tal vez antes) ingresó en una fase marcada por un sistema político incoativo, en el cual el sistema de partidos se desfondó completamente, para ubicarse en el año 2003, según los criterios e indicadores manejados por Mainwaring y Scully, en la categoría de sistema débilmente institucionalizado. No obstante ello, el modelo de análisis utilizado –tal como hemos señalado– no da cuenta cabalmente de las transformaciones radicales que se observaron en los últimos diez años en Venezuela. En esta zona de turbulencia, los movimientos sociales retomaron impulso, pero no el suficiente como para constituirse en interlocutores decisivos en el reordenamiento de las relaciones de poder. Las expectativas siguen aún depositadas en la capacidad del Estado para autotransformarse y, por derivación, transformar las estructuras arcaicas de una sociedad política que amanecía fosilizada en las postrimerías del siglo pasado. La centralidad del Estado forma parte de la topografía del conflicto político actual.

CUADRO 13
COMPARATIVO DE SISTEMAS POLÍTICOS 2003 (EN PORCENTAJES)

Perfil del sistema político	Confianza en el Parlamento	Confianza en los partidos	Participación electoral (última elección)	Sistema de partidos (NEP, última elección)	Confianza en los presidentes o el Ejecutivo	Satisfacción con la democracia
Argentina	13,50	8,30	79,38 (1999)	2,50 (1999)	44,60	34,00
Brasil	28,50	15,80	79,53 (2002)	3,50 (2002)	42,30	28,00
Chile	22,30	13,40	72,79 (1999)	2,20 (2000)	47,20	33,00
Ecuador	5,80	5,00	72,68 (2002)	6,20 (2002)	9,90	23,00
Paraguay	13,30	11,70	59,43 (1998)	3,50 (2003)	14,00	9,00
Uruguay	26,50	17,90	94,71 (1999)	3,10 (1999)	19,20	43,00
Venezuela	18,60	13,80	56,50 (2000)	3,40 (2000)	27,60	38,00

Fuente: elaboración propia con datos electorales y de Latinobarómetro (1996-2003).

CUADRO 14
MOVIMIENTOS SOCIALES Y SISTEMAS DE PARTIDOS 2003

	Argentina	Brasil	Chile	Ecuador	Paraguay	Venezuela	Uruguay
Sistemas de partidos	Institucionalizado, inestable.	Incoativo, con tendencia a la institucionalización.	Institucionalizado.	Incoativo, fragmentado.	Hegemónico en transición.	Con bajo nivel de institucionalización.	Institucionalizado.
Movimientos sociales	Autonomía alta.	Autonomía media y alta.	Autonomía media y baja.	Autonomía alta y media.	Autonomía media.	Autonomía media y baja.	Autonomía media.

Fuente: elaboración propia.

Mirza, Christian Adel. Bibliografía. En publicación: Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina: la construcción de nuevas democracias. Christian Adel Mirza Programa Regional de Becas CLACSO, Buenos Aires, Argentina. 2006. ISBN: 987-1183-45-3.

BIBLIOGRAFÍA

Disponible en la web:

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/mirza/bibliografia.pdf>

Fuente: Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la red CLACSO

<http://www.clacso.org.ar/biblioteca>

- Alcántara Sáez, Manuel 1999 *Sistemas Políticos de América Latina* (Madrid: Tecnos) Vol. I y II.
- Alcántara Sáez, Manuel y Freidenberg, Flavio 2001 *Estructura y Funcionamiento de los partidos políticos en América Latina* (Salamanca: Universidad de Salamanca).
- Amin, Samir 2001 "Capitalismo, imperialismo, mundialización" en Seoane, José y Taddei, Emilio (comps.) *Resistencias mundiales. De Seattle a Porto Alegre* (Buenos Aires: CLACSO).
- Anderson, Perry 1999 "Neoliberalismo: un balance provisorio" en Sader, Emir y Gentili, Pablo (comps.) *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social* (Buenos Aires: CLACSO/ EUDEBA).
- Antunes, Ricardo 1995 *O Novo Sindicalismo no Brasil* (Campinas: Pontes).
- Antunes, Ricardo 2001 *¿Adiós al trabajo? Ensayo sobre las metamorfosis y la centralidad del mundo del trabajo* (São Paulo: Cortez).
- Arellano, Nelson 2003 "Informe sobre Chile", mimeo.
- Barrera Guarderas, Augusto 2000 "Ecuador, o cuando la crisis se hace cotidiana. Reflexiones sobre los episodios del 21 y 22 de enero de 2000" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 1, junio.
- Barrera Guarderas, Augusto 2001 *Acción colectiva y crisis política. El movimiento indígena ecuatoriano en la década de los noventa* (Quito: Centro de Investigaciones CIUDAD/Abya Yala/OSAL-CLACSO).

- Bielsa, Rafael et al. 2002 *Qué son las asambleas populares* (Buenos Aires: Continente).
- Bilbao, Andrés 1993 *Obreros y ciudadanos. La desestructuración de la clase obrera* (Madrid: Trotta).
- Blondel, Jean and Cotta, Mauricio (eds.) 1996 *Party and Government. An Inquiry into the Relationship between Governments and Supporting Parties in Liberal Democracies* (London: Macmillan Press).
- Boito Jr., Armando 1991 "Reforma e persistência da estrutura sindical" em Boito Jr., Armando et al. *O sindicalismo brasileiro nos anos 80* (São Paulo: Paz e Terra).
- Boito Jr., Armando 1999 *Política neoliberal e sindicalismo no Brasil* (São Paulo: Fora da Ordem).
- Boron, Atilio 1999 "La sociedad civil después del diluvio neoliberal" en Sader, Emir y Gentili, Pablo (comps.) *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social* (Buenos Aires: CLACSO/ EUDEBA).
- Buendía, Mauricio s/f "Chile: El pueblo mapuche y el golpe militar". En <www.rebellion.org/chile/030912buendia.htm>.
- Calderón Gutiérrez, Fernando 1986 "Los movimientos sociales ante la crisis" en Calderón Gutiérrez, Fernando (comp.) *Los movimientos sociales ante la crisis* (Buenos Aires: UNU/CLACSO/IISUNAM).
- Camacho, Daniel y Menjívar, Rafael 1989 *Los movimientos populares en América Latina* (México: Universidad de las Naciones Unidas/Siglo XXI).
- Casas, Alejandro 1999 "Sociedad civil, movimientos sociales y redes de ONGs. Estudios en el Uruguay contemporáneo". Tesis de maestría, UFRJ, Río de Janeiro.
- Castagnola, José Luis 1987 "Problemática y alternativas culturales de los nuevos movimientos sociales" en *Cuadernos del CLAEH* (Montevideo: CLAEH) N° 42, octubre.
- Castel, Robert 1997 *Metamorfosis de la cuestión social* (Buenos Aires: Paidós).
- Castoriadis, Cornelius 1996 "La democracia como procedimiento y como régimen" en *Iniciativa Socialista*, N° 38. En <www.inisoc.org/Castor.htm>.
- Cavarozzi, Marcelo y Abal Medina (h.), Juan (comps.) 2003 *El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal* (Buenos Aires: Homo Sapiens/Konrad Adenauer Stiftung).
- Ceceña, Ana Esther 1997 "Neoliberalismo e insubordinación" en *Chiapas* (México DF: ERA/Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM) N° 4. En <<http://www.multimania.com/revistachiapas>>.
- Ceceña, Ana Esther 2000 "Revuelta y territorialidad" en *Actuel Marx: La hegemonía americana* (Kohen & Asociados Internacional) N°

- 3/2000. En <<http://xnet2.u-paris10.fr/pls/portal30/docs/folder/intranet/cdr/revues/amarx/hegesp.htm>>.
- Céspedes, Roberto Luis 1987 “Recesión económica y reconstitución del actor sindical” en *Revista Paraguaya de Sociología*, Año 24, N° 68, enero-abril.
- Ciriza, Alejandra 2000 “21 de enero del 2000. ¿Golpe de estado o revuelta india en el Ecuador?” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 1, junio.
- Coutrot, Thomas 1999 “Trabajo, empleo y actividad” en *Espacios de reflexión* (Buenos Aires: Área de Investigación UTPBA) N° 9, diciembre.
- CTA-Central de los Trabajadores Argentinos 1996 “Documentos 1° Congreso Nacional de Delegados”, Buenos Aires, 4 y 5 de noviembre. En <<http://www.cta.org.ar>>.
- CTA-Central de los Trabajadores Argentinos 2003 “Documento de presentación institucional”. En <<http://www.cta.org.ar>>.
- Chasot, Attico Inácio 2000 “Sem Terra (aínda), mas com muita Educação” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 2, septiembre.
- Chaves, Daniel 1990 *FUCVAM, la historia viva. Testimonios de organización y lucha: el cooperativismo de vivienda por ayuda mutua en el Uruguay* (Montevideo: FUCVAM/Nordan/Comunidad).
- Dávalos, Pablo 2000 “Ecuador: las transformaciones políticas del movimiento indígena ecuatoriano” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 1, junio.
- Dávalos, Pablo 2003 “Plurinacionalidad y poder político en el movimiento indígena ecuatoriano” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 9, enero.
- De la Cuadra, Fernando Marcelo 2001 “Conflicto mapuche: génesis, actores y perspectivas” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 5, septiembre.
- De la Garza Toledo, Enrique 2001 “Las transiciones políticas en América Latina, entre el corporativismo sindical y la pérdida de imaginarios colectivos” en De la Garza Toledo, Enrique (comp.) *Los sindicatos frente a los procesos de transición política* (Buenos Aires: CLACSO).
- Delamata, Gabriela 2002 “De los estallidos provinciales a la generalización de las protestas en Argentina” en *Nueva Sociedad* (Caracas: Nueva Sociedad) N° 182, noviembre-diciembre.
- Díaz Polanco, Héctor 2001 “La autonomía indígena y la reforma constitucional en México” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 4, junio.
- Duverger, Maurice 1992 (1951) *Los partidos políticos* (México DF: Fondo de Cultura Económica).

- Equipo de Coyuntura (Centro Andino de Acción Popular) 2000 “Ecuador, enero 21: de la movilización indígena al golpe militar” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 1, junio.
- Evers, Tilman 1984 “Identidad: el lado oculto de los nuevos movimientos sociales” en *Novos Estudos CEBRAP* (São Paulo: CEBRAP) Vol. 2, N° 4, abril.
- Executiva Nacional da CUT 1999 *Estatuto da Central Única dos Trabalhadores* (São Paulo: CUT).
- Feijóo, Cristina y Salas Oroño, Lucio 2002 “Las asambleas y el movimiento social” en *Qué son las asambleas populares* (Buenos Aires: Peña Lillo/Continente).
- Fernández Buey, Francisco 2002 “Los movimientos sociales alternativos: un balance”, mimeo.
- Fernández, Carmen Beatriz 2003 “Partidos políticos y sociedad civil en Venezuela: una historia de amor y odio” en *Societatis (Revista Electrónica de Ciencias Sociales)*. En <www.ufg.edu.sv/ufg/societatis>.
- Fiori, José Luís 2001 *60 lições dos 90: uma década de neoliberalismo* (Rio de Janeiro: Record).
- Fogel, Ramón 2001 “La estructura y la coyuntura en las luchas del movimiento campesino paraguayo” en Giarracca, Norma (comp.) *¿Una nueva ruralidad en América Latina?* (Buenos Aires: CLACSO).
- Fontana, E.; Fontana, N.; Gago, V.; Santucho, M.; Scolnik, S. y Sztulwark, D. 2002 *19 y 20. Apuntes para el nuevo protagonismo social* (Buenos Aires: Colectivo Situaciones/De Mano en Mano).
- Foucault, Michael 1998 *La verdad y las formas jurídicas* (Barcelona: Gedisa).
- Freire, Rafael 2002 “O sindicalismo e os movimentos de luta contra a globalização neoliberal” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 6, enero.
- Galeano, Luis A. y Barrios, Federico 1999 “El rol de los actores sociales en la superación de la exclusión social: el caso de Paraguay” en *Revista Paraguaya de Sociología*, Año 36, N° 105, mayo-agosto.
- García Linera, Álvaro 2001 “La estructura de los movimientos sociales en Bolivia” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 5, septiembre.
- García-Guadilla, María Pilar 2001 “Institucionalización de nuevas ciudadanías y reestructuración de los conflictos socioambientales en Venezuela”. Ponencia presentada en el XIII International Congress of The Latin American Studies Association, Washington, setiembre.
- García-Guadilla, María Pilar y Roa Carrero, Ernesto 1997 “Sociedad civil, democracia liberal y economía de mercado: las organizaciones sociales liberales en Venezuela”. Ponencia presentada en Latin American Studies Association, Guadalajara, abril.

- Garretón, Manuel Antonio 2002 “La transformación de la acción colectiva en América Latina” en *Revista de la CEPAL* (Santiago: CEPAL) N° 76, abril.
- Godoy, Raúl 2002 “Crisis del neoliberalismo, movimientos sociales y alternativas en América Latina”, mimeo.
- Gohn, Maria da Glória 1997 *Teorias dos Movimentos Sociais. Paradigmas clássicos e contemporâneos* (São Paulo: Loyola).
- Harnecker, Marta 2002 *Sin Tierra. Construyendo movimiento social* (Madrid: Siglo XXI).
- Hernández Navarro, Luis 1997 “La autonomía indígena como ideal. Notas a ‘La rebelión zapatista y la autonomía’ de Héctor Díaz Polanco” en *Chiapas* (México: ERA/Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM) N° 5. En <<http://www.multimania.com/revistachiapas>>.
- Hofmeister, Wilhelm y Thesing, Josef (eds.) 1995 *Transformación de los sistemas políticos en América Latina* (Buenos Aires: CIEDLA/Konrad Adenauer Stiftung).
- Holloway, John 2002 *Cambiar el mundo sin tomar el poder* (Buenos Aires: Universidad Autónoma de Puebla/Herramienta).
- Instituto del Tercer Mundo 2003 *Guía del mundo. El mundo visto desde el sur* (Madrid: IEPALA/Instituto del Tercer Mundo/Fundación Santa María).
- Kuechler, Manfred y Dalton, Russell J. 1992 “Los nuevos movimientos sociales y el orden político o la posibilidad de que los cambios producidos preparen una estabilidad a largo plazo” en Kuechler, Manfred y Dalton, Russell J. (eds.) *Los nuevos movimientos sociales* (Valencia: Alfons El Magnànim).
- Laakso, Markku y Taagepera, Rein 1979 “Effective number of parties. A measure with application to West Europe” in *Comparative Political Studies*, Vol. 12, N° 1.
- Laranjeira, Sonia 1990 (org.) *Classes e Movimentos Sociais na América Latina* (São Paulo: Hucitec).
- Latinobarómetro 1996-2003 (Santiago de Chile). En <www.latinobarometro.org>.
- Livieres, Benjamín 1994 “Apuntes sobre la sindicalización en el sector público. De las jornadas de Nov. 93 a la huelga general de mayo 94”, Biblioteca Virtual de CLACSO. En <<http://www.clacso.org>>.
- Lopes de Almeida, Adhemar 2001 “Transição política e reconstrução sindical no Brasil” en De la Garza Toledo, Enrique (comp.) *Los sindicatos frente a los procesos de transición política* (Buenos Aires: CLACSO).
- López Maya, Margarita (coord.) 2002 *Protesta y cultura en Venezuela: los marcos de acción colectiva en 1999* (Buenos Aires: CLACSO).
- Lozano, Claudio 1994 *Los niveles de sindicalización y la propuesta del CTA* (Buenos Aires: ATE-CTA).

- Lucas, Kintto 2000 *La rebelión de los indios* (Quito: Abya Yala).
- Mainwaring, Scott y Scully, Timothy R. (eds.) 1995 *La construcción de instituciones democráticas. Sistemas de partidos en América Latina* (Santiago de Chile: CIEPLAN).
- Mañano Fernández, Bernardo 2000a *A formação do MST no Brasil* (São Paulo: Vozes).
- Mañano Fernández, Bernardo 2000b "O MST e a luta pela reforma agrária no Brasil" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 2, septiembre.
- Marimán, José 1995 "La organización mapuche Aukiñ Wallmapu Ngulam" en *Proyecto de Documentación Ñuke Mapu*. En <www.linux.soc.uu.se/mapuche>.
- Marin, Gonzalo s/f "La situación actual del pueblo mapuche" en Arellano, Nelson y Núñez, David "Ad-mapu: el movimiento mapuche y los partidos políticos chilenos", mimeo.
- Markoff, John 1999 *Olas de democracia. Movimientos sociales y cambio político* (Madrid: Tecnos).
- Massal, Julie 2000 "Movimientos sociales, democratización y multiculturalismo" en Pico, Amaranta "Informe sobre Ecuador", mimeo.
- McAdam, Dough; McCarthy, John D. y Zald, Mayer N. (eds.) 1999 (1996) *Movimientos sociales: perspectivas comparadas* (Madrid: Istmo).
- McCarthy, John D. 1999 "Adoptar, adaptar e inventar límites y oportunidades" en McAdam, Dough; McCarthy, John D. y Zald, Mayer N. (eds.) *Movimientos sociales: perspectivas comparadas* (Madrid: Istmo).
- McCoy, Jennifer y Smith, William C. 1995 "Desconsolidación o reequilibrio democrático en Venezuela" en *Nueva Sociedad* (Caracas: Nueva Sociedad) N° 140, noviembre-diciembre.
- Meiksins Wood, Ellen 2000 (1995) *Democracia contra capitalismo* (México: Siglo XXI).
- Melucci, Alberto 1994 "¿Qué hay de nuevo en los 'nuevos movimientos sociales'?" en Laraña, Enrique y Gusfield, Joseph 1994 *Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad* (Madrid: CIS).
- Mendes de Almeida, Angela 2000 "Muita terra e pouco dono. Análise histórico-estrutural da questão agrária no Brasil" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 2, septiembre.
- Mesa Cuadros, Gregorio (ed.) 2001 *Participación popular, conflictos sociales y paz. Memorias. Primer Seminario Internacional* (Bogotá: Planeta Paz).
- Mirza, Christian Adel 2002 "Alcances, ventajas y debilidades del presidencialismo: análisis comparado entre los casos de Chile y Uruguay", mimeo.

- Morínigo, José Nicolás 1999 “La Plaza, el Congreso y la Corte: claves de la legitimidad del Presidente González Macchi” en *Revista Paraguaya de Sociología*, Año 36, N° 105, mayo-agosto.
- Moulián, Tomás 1995 “Chile, las condiciones de la democracia” en *Nueva Sociedad* (Caracas: Nueva Sociedad) N° 140, noviembre-diciembre.
- Mouriaux, René y Bérout, Sophie 2000 “Para una definición del concepto de ‘movimiento social’ ” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 1, junio.
- MTD Solano y Colectivo Situaciones 2002 *La hipótesis 891. Más allá de los piquetes* (Buenos Aires: De Mano en Mano).
- Nueva Sociedad* 2002 “Protestas, resistencias y movimientos sociales” (Caracas: Nueva Sociedad) N° 182, noviembre-diciembre.
- Offe, Claus 1988 *Partidos políticos y nuevos movimientos sociales* (Madrid: Sistema).
- Olesker, Daniel 2002 “La movilización social en Uruguay: crecimiento y convergencia” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 8, setiembre.
- OSAL* 2001 (Buenos Aires: CLACSO) N° 5, setiembre.
- OSAL* 2002 “CTA-Central de los Trabajadores Argentinos” (Buenos Aires: CLACSO) Ficha Informativa, mimeo.
- Ospina, Pablo 2000 “La vuelta a un día de ochenta mundos” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 1, junio.
- Palau, Marielle 1997 “Movimientos Sociales: sus demandas en la transición. (El caso de los movimientos de Trabajadores y de Mujeres)”, Biblioteca Virtual de CLACSO. En <<http://www.clacso.org>>.
- Pérez, Romeo 1987 “Lo social y lo político en la dinámica de los movimientos sociales urbanos” en *Cuadernos del CLAEH* (Montevideo: CLAEH) N° 42, octubre.
- Petras, James 2000 *La izquierda contraataca. Conflicto de clases en América Latina en la era del neoliberalismo* (Madrid: Akal).
- Petras, James 2001 “Movimiento de Trabajadores Desocupados en Argentina” en *La Maza* (Buenos Aires) noviembre.
- Picchetti, Valentina 2002 “Fábricas tomadas, fábricas de esperanzas. Las experiencias de Zanón y Brukman” en Carpintero, Enrique y Hernández, Mario (comps.) *Produciendo realidad. Las empresas comunitarias* (Buenos Aires: Topia).
- Pico, Amaranta 2003 “Informe sobre Ecuador”, mimeo.
- Pilz, Dania; Riquelme, Quintín y Villalba, Verónica 2002 “Los movimientos sociales en el contexto actual del Paraguay” en *OSAL* (Buenos Aires, CLACSO) N° 8, setiembre.
- Porto Gonçalves, Carlos Walter 2003 “A geograficidade do social: uma contribuição para o debate metodológico sobre estudos de conflito e movimentos sociais na América Latina”, mimeo.

- Quijano, Aníbal 2000 “Los movimientos campesinos contemporáneos en América Latina” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 2, setiembre.
- Ramos Jiménez, Alfredo 2003 “Partidos y sistemas de partidos en Venezuela” en Cavarozzi, Marcelo y Abal Medina (h), Juan (comps.) *El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal* (Buenos Aires: Homo Sapiens/Konrad Adenauer Stiftung).
- Rauber, Isabel 1998 *Una historia silenciada* (Buenos Aires: Pensamiento Jurídico).
- Rauber, Isabel 2000 *Tiempo de herejías. Nuevas construcciones, debates y búsqueda de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)* (Buenos Aires: Instituto de Estudios y Formación de la CTA).
- Riechmann, Jorge y Fernández Buey, Francisco 1994 *Redes que dan libertad. Introducción a los nuevos movimientos sociales* (Barcelona: Paidós).
- Riquelme, Quintín 1997 “Derecho a la asociación, participación y reunión en organizaciones campesinas” en *Informe sobre los Derechos Humanos en Paraguay 1996* (Equipo Nizkor y Derechos Human Rights). En <www.derechos.org/nizkor/paraguay/1997>.
- Romero Jiménez, Juan Eduardo 2003 *El dilema democrático en Venezuela* (Universidad del Zulia: Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias del Espacio Público-LITEP). En <www.sincronia.cucsh.mx>.
- Roth Deubel, André-Noël 2002 *Pensar en la política. Entrevistas a Samir Amin, Andre Gorz, Pierre Bourdieu y Cornelius Castoriadis* (Colombia: Universidad de Cauca).
- Rubin, Gayle 1986 “El tráfico de mujeres: notas sobre la ‘economía política’ del sexo” en *Nueva Antropología* (México DF) Vol. VIII, N° 30.
- Rucht, Dieter 1999 “El impacto de los contextos nacionales sobre la estructura de los movimientos sociales: un estudio comparado transnacional y entre movimientos” en McAdam, Dough; McCarthy, John D. y Zald, Mayer N. (eds.) *Movimientos sociales: perspectivas comparadas* (Madrid: Istmo).
- Salinas Cañas, Sergio 2003 “En búsqueda de la identidad del pueblo Mapuche” en Arellano, Nelson y Núñez, David “Ad-Mapu: el movimiento mapuche y los partidos políticos chilenos”, mimeo.
- Salto Galarza, Napoleón 2001 “Movimiento indígena y movimientos sociales: encuentros y desencuentros” en *Boletín ICCI “RIMAY”* (Quito) Año 3, N° 27.
- Sartori, Giovanni 1992 (1976) *Partidos y sistemas de partidos* (Madrid: Alianza).
- Saúl, Ana María et al. 2003 *A intervenção da CUT nas políticas públicas de geração de trabalho, emprego, renda e educação dos trabalhadores:*

- avaliação, resultados e ampliação de perspectivas* (São Paulo: CUT/Unitrabalho).
- Scherer-Warren, Ilse e Krischke, Paulo (orgs.) 1987 *Uma revolução no cotidiano? Os novos movimentos sociais na América do Sul* (São Paulo: Brasiliense).
- Secretaría Nacional de Formación CUT 2001 *Diretrizes e estratégia da PNF/ CUT para o período de 2001-2003* (São Paulo: CUT).
- Seoane, José 2001 "La protesta social en América Latina" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 3, enero.
- Seoane, José y Taddei, Emilio 2000 "La conflictividad social en América Latina" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 2, septiembre.
- Seoane, José y Taddei, Emilio 2003 "Movimientos sociales, conflicto y cambios políticos en América Latina" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 9, enero.
- Seoane, José; Taddei, Emilio y Algranati, Clara 2002 "Tras el 11 de septiembre: conflicto social y hegemonía norteamericana en América Latina" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 6, enero.
- Servolo de Medeiros, Leonilde 2000 "Conflictos sociales rurales en el Brasil contemporáneo" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 2, septiembre.
- Sousa Santos, Boaventura de 2001 "Los nuevos movimientos sociales" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 5, septiembre.
- Spaltenberg, Ricardo y Maceira, Verónica 2001 "Una aproximación al movimiento de desocupados en el marco de las transformaciones de la clase obrera en Argentina" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 5, septiembre.
- Stedile, João Pedro y Mançano Fernandes, Bernardo 2000 *Brava gente* (Buenos Aires: Asociación Madres de Plaza de Mayo/Revista América Libre/Barbarroja).
- Tarrow, Sidney 1999 "Estado y oportunidades: la estructuración política de los movimientos sociales" en McAdam, Dough; McCarthy, John D. y Zald, Mayer N. (eds.) *Movimientos sociales: perspectivas comparadas* (Madrid: Istmo).
- Tenti Fanfani, Emilio 2000 "Exclusión social y acción colectiva en la Argentina de hoy" en *Punto de Vista* (Buenos Aires) N° 67.
- Terra, Juan Pablo 1995 "Proceso y significado del cooperativismo uruguayo" en Terra, Juan Pablo *Obras* (Montevideo: CLAEH) Tomo 2.
- Teubal, Miguel 2001 "Globalización y nueva ruralidad en América Latina" en Giarraca, Norma (comp.) *¿Una nueva ruralidad en América Latina?* (Buenos Aires: CLACSO).
- Touraine, Alain 1987a *Actores sociales y sistemas políticos en América Latina* (Santiago de Chile: PREALC/OIT).
- Touraine, Alain 1987b *El regreso del actor* (Buenos Aires: EUDEBA).

- Touraine, Alain 1998 *¿Podremos vivir juntos?* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).
- Touraine, Alain 1999 *¿Cómo salir del liberalismo?* (Barcelona: Paidós).
- Vakaloulis, Michel 1999 "Antagonismo social y acción colectiva" en *Travail salarié et conflit social. Actuel Marx confrontation* (Paris: PUF).
- Vakaloulis, Michel 2002 "Problemas de la acción colectiva hoy" en Andreani, Toni y Vakaloulis, Michel (comps.) *Refaire la politique* (Paris: Syllepse).
- Varese, Stefano 1996 "Parroquianismo y globalización. Las etnicidades indígenas ante el tercer milenio" en Varese, Stefano (coord.) *Pueblos indios, soberanía y globalismo* (Quito: Abya-Yala).
- Villasante, Tomás R. 2002 *Sujetos en movimiento. Redes y procesos creativos en la complejidad social* (Montevideo: Nordan/Comunidad/CIMAS).
- Zald, Mayer N. 1999 "Cultura, ideología y creación de marcos estratégicos" en McAdam, Dough; McCarthy, John D. y Zald, Mayer N. (eds.) *Movimientos sociales: perspectivas comparadas* (Madrid: Istmo).
- Zibechi, Raúl 1999 *La mirada horizontal. Movimientos sociales y emancipación* (Montevideo: Nordan/Comunidad).
- Zibechi, Raúl 2003a *Genealogía de la revuelta. Argentina: la sociedad en movimiento* (Buenos Aires: Letra Libre/Nordan/Comunidad).
- Zibechi, Raúl 2003b "Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 9, enero.

Mirza, Christian Adel. Anexos. En publicacion: Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina: la construcción de nuevas democracias. Christian Adel Mirza Programa Regional de Becas CLACSO, Buenos Aires, Argentina. 2006. ISBN: 987-1183-45-3.

ANEXO I

CONFIANZA EN INSTITUCIONES, DEMOCRACIA Y VOTO PARTIDARIO

Disponible en la web:

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/mirza/anexos.pdf>

Fuente: Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la red CLACSO

<http://www.clacso.org.ar/biblioteca>

LOS CUADROS Y GRÁFICOS han sido elaborados, como muchos de los incluidos en el texto, a partir de datos del Latinobarómetro, cuya ficha técnica es la siguiente:

Latinobarómetro es una encuesta de opinión pública que se realiza anualmente desde 1995. Esta encuesta representa las opiniones, actitudes, comportamientos y valores de 17 países de América Latina, representando aproximadamente a 400 millones de habitantes desde Río Grande hasta la Antártida.

Año 1995, 9.070 casos, con un margen de error de entre 2,8 y 4%.

Año 1996, 18.717 casos, con un margen de error de entre 2,8 y 5%.

Año 1997, 17.767 casos, con un margen de error de entre 2,8 y 5%.

Año 1998, 17.901 casos, con un margen de error de entre 2,8 y 5%.

Año 1999-2000, 18.038 casos, con un margen de error de entre 2,8 y 5%.

Año 2001, 18.135 casos, con un margen de error de entre 2,8 y 5%.

Año 2002, 18.522 casos, con un margen de error de entre 2,8 y 4,16%.

Año 2003, 18.638 casos, con un margen de error de entre 2,8 y 4,16%.

La encuesta Latinobarómetro es realizada por la Corporación Latinobarómetro, corporación de derecho privado sin fines de lucro, con sede en Santiago de Chile <www.latinobarometro.org>.

CUADRO 1
CONFIANZA EN EL PARLAMENTO

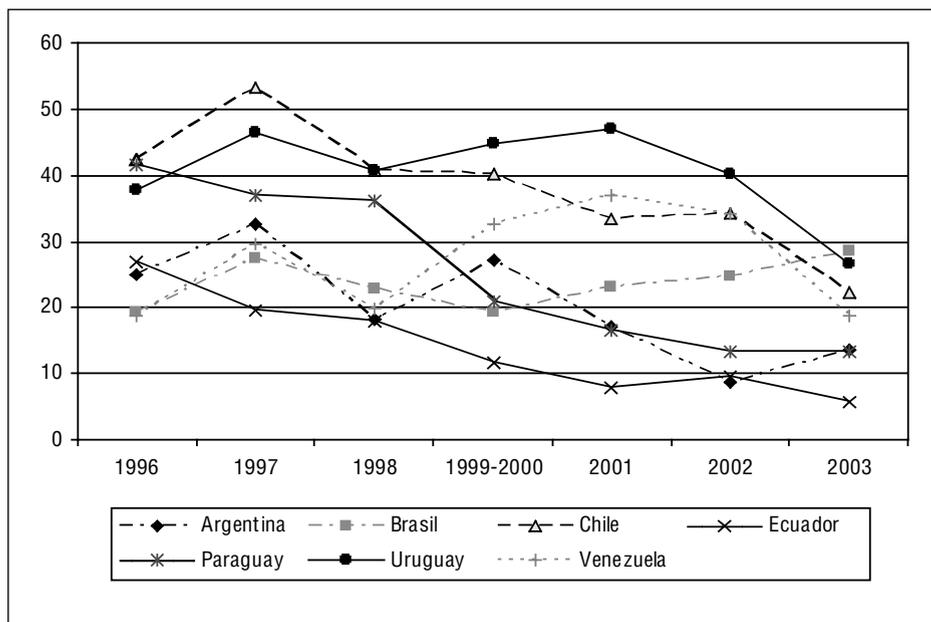
	1996	1997	1998	1999-2000	2001	2002	2003
Argentina	25,0	32,7	18,1	27,1	17,1	8,7	13,5
Brasil	19,4	27,4	22,8	19,3	23,2	24,8	28,5
Chile	42,3	53,1	40,6	40,3	33,4	34,3	22,3
Ecuador	26,9	19,5	18,0	11,6	7,9	9,6	5,8
Paraguay	41,6	36,9	36,0	20,8	16,6	13,3	13,3
Uruguay	37,8	46,3	40,6	44,7	46,9	40,3	26,5
Venezuela	18,8	29,6	19,8	32,6	36,9	34,3	18,6

Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro (1996-2003).

Nota: Porcentajes que expresan la suma de las alternativas *mucho* y *algo* obtenidos según la siguiente pregunta:

Por favor, mire esta tarjeta y dígame cuánta confianza tiene en cada uno de estos grupos/instituciones. ¿Diría que tiene mucha, algo, poca o ninguna confianza en...?

GRÁFICO 1
CONFIANZA EN EL PARLAMENTO



CUADRO 2
CONFIANZA EN LOS PARTIDOS

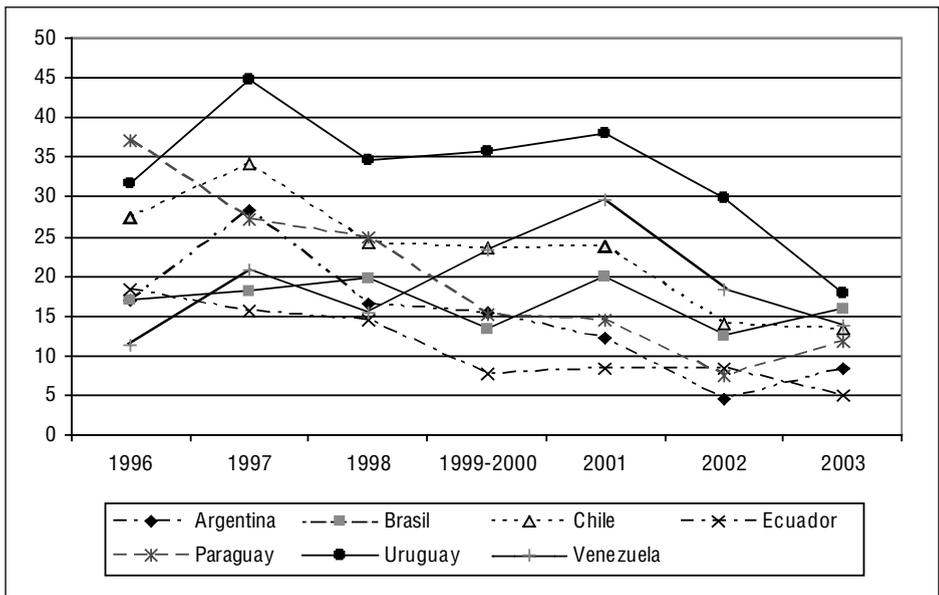
	1996	1997	1998	1999-2000	2001	2002	2003
Argentina	17,0	28,3	16,6	15,3	12,3	4,6	8,3
Brasil	16,9	18,0	19,7	13,4	20,0	12,4	15,8
Chile	27,3	34,1	24,3	23,6	23,8	14,0	13,4
Ecuador	18,3	15,5	14,4	7,6	8,3	8,3	5,0
Paraguay	37,0	27,2	25,0	15,1	14,4	7,4	11,7
Uruguay	31,6	44,8	34,6	35,7	38,1	29,8	17,9
Venezuela	11,3	20,9	15,4	23,2	29,6	18,3	13,8

Fuente: Elaboración propia con datos electorales y de Latinobarómetro (1996-2003).

Nota: Porcentajes que expresan la suma de las alternativas *mucho* y *algo* obtenidos según la siguiente pregunta:

Por favor, mire esta tarjeta y dígame cuánta confianza tiene en cada uno de estos grupos/instituciones. ¿Diría que tiene mucha, algo, poca o ninguna confianza en...?

GRÁFICO 2
CONFIANZA EN LOS PARTIDOS



CUADRO 3

CONFIANZA EN EL PRESIDENTE O EL PODER EJECUTIVO

	1996	1997	1998	1999-2000	2001	2002	2003
Argentina	19,8	23,5	21,5	53,1	26,2	6,6	44,6
Brasil	25,1	35,5	39,3	24,8	32,0	24,0	42,3
Chile	50,7	60,7	55,4	61,0	53,8	51,0	47,2
Ecuador	34,3	28,0	35,2	24,0	19,6	13,4	9,9
Paraguay	39,8	26,0	53,1	25,7	16,3	7,1	14,0
Uruguay	35,7	52,8	47,6	49,3	45,9	33,2	19,2
Venezuela	16,3	35,3	36,8	68,3	49,4	37,8	27,6

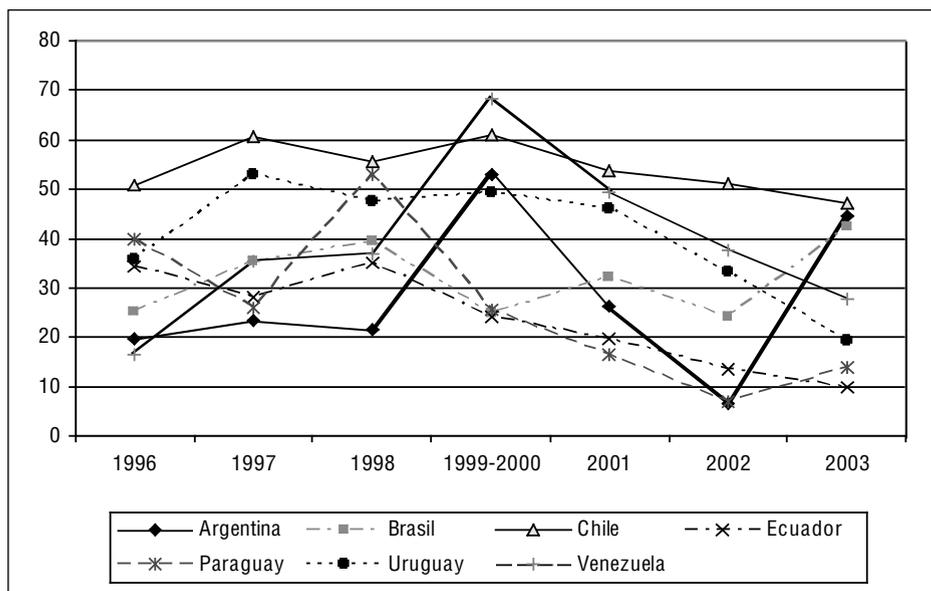
Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro (1996-2003).

Nota: Porcentajes que expresan la suma de las alternativas *mucho* y *algo* obtenidos según la siguiente pregunta:

Por favor, mire esta tarjeta y dígame cuánta confianza tiene en cada uno de estos grupos/instituciones. ¿Diría que tiene mucha, algo, poca o ninguna confianza en...?

GRÁFICO 3

CONFIANZA EN EL PRESIDENTE



CUADRO 4
CONFIANZA COMBINADA EN INSTITUCIONES POLÍTICAS

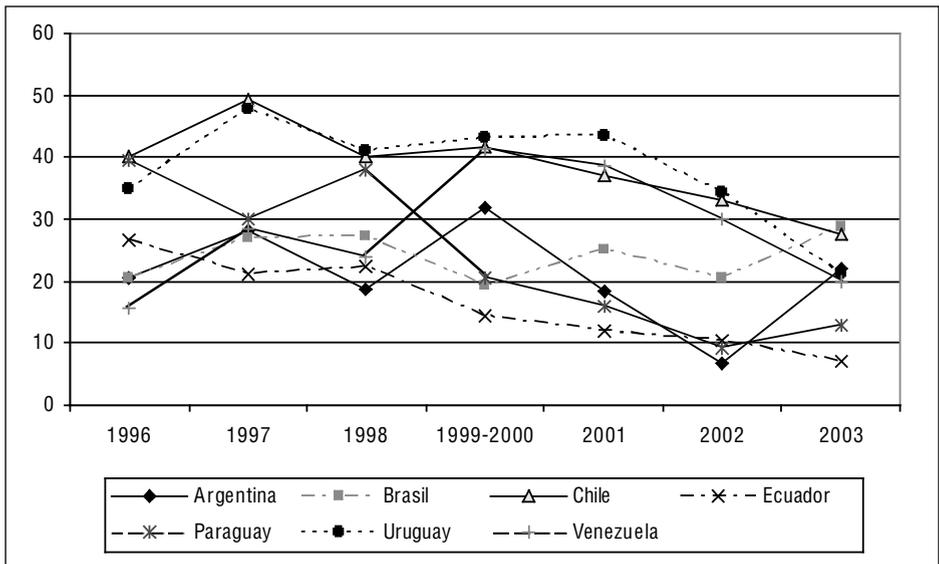
	1996	1997	1998	1999-2000	2001	2002	2003
Argentina	20,6	28,2	18,7	31,8	18,5	6,6	22,1
Brasil	20,5	26,9	27,3	19,2	25,1	20,4	28,9
Chile	40,1	49,3	40,1	41,6	37,0	33,1	27,6
Ecuador	26,5	21,0	22,5	14,4	11,9	10,4	6,9
Paraguay	39,5	30,0	38,0	20,5	15,8	9,3	13,0
Uruguay	35,0	47,9	40,9	43,2	43,6	34,4	21,2
Venezuela	15,5	28,6	24,0	41,4	38,6	30,1	20,0

Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro (1996-2003).

Nota: Porcentajes que expresan el promedio de las sumas de las alternativas *mucho* y *algo* correspondientes a parlamentos, partidos políticos y presidente obtenidos según la siguiente pregunta:

Por favor, mire esta tarjeta y dígame cuánta confianza tiene en cada uno de estos grupos/instituciones. ¿Diría que tiene mucha, algo, poca o ninguna confianza en...?

GRÁFICO 4
CONFIANZA COMBINADA



CUADRO 5
SATISFACCIÓN CON LA DEMOCRACIA

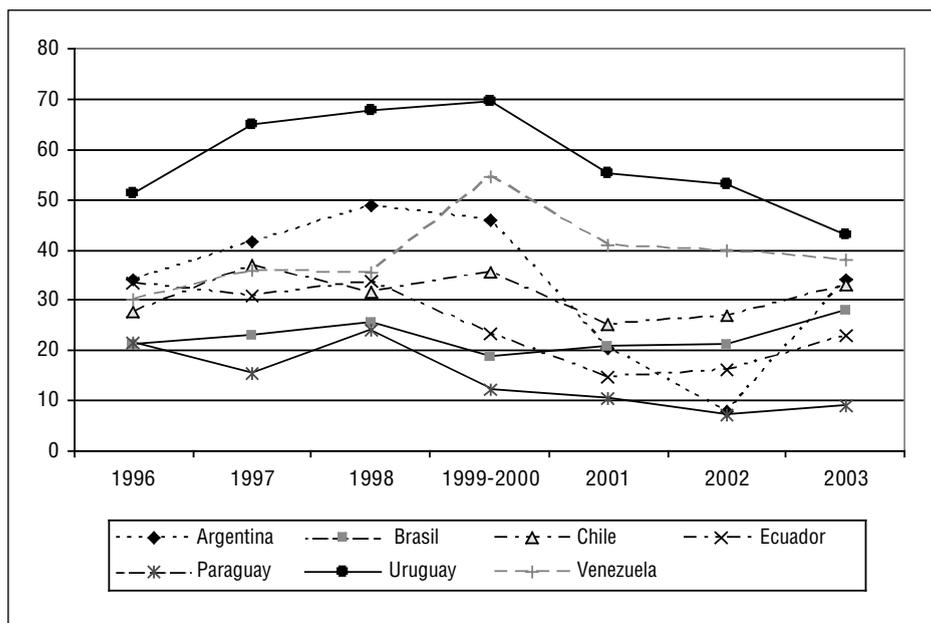
	1996	1997	1998	1999-2000	2001	2002	2003
Argentina	34,11	41,72	48,75	45,84	20,50	8,00	34,00
Brasil	21,11	22,98	25,30	18,60	20,90	21,00	28,00
Chile	27,66	37,00	31,59	35,34	25,00	27,00	33,00
Ecuador	33,25	30,75	33,75	23,25	14,60	16,00	23,00
Paraguay	21,41	15,30	24,16	12,30	10,30	7,00	9,00
Uruguay	51,33	64,76	67,67	69,75	55,40	53,00	43,00
Venezuela	30,00	35,84	35,41	54,58	40,90	40,00	38,00

Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro (1996-2003).

Nota: Porcentajes que expresan la suma de las alternativas *muy* y *bastante* obtenidos según la siguiente pregunta:

En general, ¿diría usted que está muy satisfecho, bastante satisfecho, no muy satisfecho o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia en (país)?

GRÁFICO 5
SATISFACCIÓN CON LA DEMOCRACIA



CUADRO 6
EVOLUCIÓN DE LA CONFIANZA (1996-2003)

	1996	2003
Argentina	10,2	9,7
Brasil	31,9	39,1
Chile	42,1	34,3
Ecuador	27,5	15,9
Paraguay	47,7	21,8
Uruguay	33,6	31,0
Venezuela	18,6	17,4

Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro (1996-2003).

Nota: Porcentajes que expresan la suma de las alternativas *mucho* y *algo* obtenidos según la siguiente pregunta:

Por favor, mire esta tarjeta y dígame cuánta confianza tiene en cada uno de estos grupos/instituciones. ¿Diría que tiene mucha, algo, poca o ninguna confianza en...?

CUADRO 7
EVOLUCIÓN DE INTENCIÓN VOTO PARTIDARIO

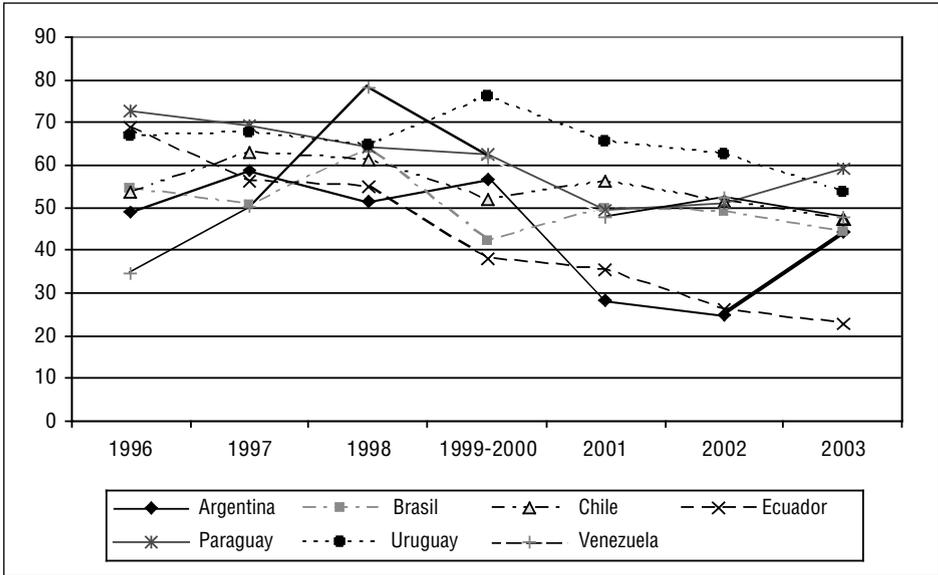
	1996	1997	1998	1999-2000	2001	2002	2003
Argentina	49,0	58,7	51,5	56,7	28,3	24,9	44,3
Brasil	54,7	50,6	63,6	42,2	49,8	48,9	44,2
Chile	53,8	63,0	61,2	51,8	56,0	51,7	47,5
Ecuador	68,8	56,0	55,0	38,0	35,7	26,4	22,8
Paraguay	72,6	69,2	64,4	62,5	49,3	51,3	59,2
Uruguay	66,6	67,4	64,8	76,0	65,3	62,4	53,6
Venezuela	34,7	50,2	78,2	61,9	47,7	52,2	47,9

Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro (1996-2003).

Nota: Porcentajes que expresan la suma de los que optaron por algún partido obtenidos según la siguiente pregunta:

Si este domingo hubiera elecciones, ¿por qué partido votaría usted?

GRÁFICO 6
INTENCIÓN DEL VOTO PARTIDARIO (1996-2003)



ANEXO II

**PAUTA DE RELEVAMIENTO
DE INFORMACIÓN**

PROYECTO CLACSO-ASDI

Identificación del movimiento social:
Fecha: Países:
Ciudad:

1. ORGANICIDAD

- 1.1. Estructura organizativa del movimiento social/grado de formalización/organigrama
- 1.2. Autoridades del movimiento social/formas de elección o designación de dirigentes
- 1.3. Caracterización del proceso decisional
- 1.4. Grupos informales dentro del movimiento social/reconocidos por sus integrantes
- 1.5. Coordinación/articulación con otros movimientos sociales/organizaciones sociales, culturales y políticas

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

- 2.1. Orígenes fundacionales, cómo nace el movimiento social, cuándo y en qué circunstancias, respondiendo a qué necesidades y demandas
- 2.2. Principales hitos, cronología básica de eventos, hechos significativos
- 2.3. Continuidad o discontinuidad del movimiento social desde sus inicios a la fecha/reorganización, refundación o reconstrucción

2.4. Puntos de inflexión en las luchas sociales, movilizaciones

3. CAPACIDAD PROPOSITIVA

3.1. Plataformas reivindicativas

3.2. Objetivos y metas propuestas (explícitas e implícitas)

3.3. Documentos institucionales

3.4. Proyectos de reforma presentados (ante quiénes, contenidos), propuestas formuladas

3.5. Logros alcanzados (esperados, no buscados explícitamente, en función de metas)

3.6. Afinidad con otros actores y movimientos sociales/puntos de convergencia y acuerdo/capacidad de negociación

4. DISCURSO POLÍTICO DEL MOVIMIENTO SOCIAL

4.1. Ejes temáticos principales/principios fundacionales/proclamas que lo identifican

4.2. Especificidad del discurso/autorreferencia/universalidad/amplitud

4.3. Perfil sociocultural: urbano/rural

5. CAPACIDAD DE CONVOCATORIA Y MOVILIZACIÓN

5.1. Tipos de acciones desplegadas (huelgas, manifestaciones callejeras, piquetes, cortes de ruta, ocupaciones, marchas, otras)

5.2. Número de acciones por año/mes/semana

5.3. Cantidad aproximada de personas que participaron en las acciones mencionadas

5.4. Tasa de afiliación (si se poseen registros)

5.5. Respaldo popular (si hubiera encuestas de opinión, referéndum, plebiscitos, testimonios, recolección de firmas, fotos, otra documentación)

6. CONQUISTAS SOCIALES

6.1. Logros significativos obtenidos a partir de las reivindicaciones históricas

6.2. Reconocimiento institucional de los demás actores

7. GRADO DE AUTONOMÍA

7.1. Establecer correspondencia entre discursos de dirigentes políticos y sociales

7.2. Adscripciones partidarias de los principales dirigentes sociales

7.3. Procedencia sociopolítica e institucional de los dirigentes, líderes políticos y parlamentarios (han sido militantes de movimientos sociales antes de asumir el rol y la función en el sistema de partidos)

7.4. Coincidencia/divergencia en el discurso y la plataforma entre los movimientos sociales y los partidos políticos

7.5. Coincidencia en las acciones de movilización (por ejemplo si hubo una marcha conjunta, una ocupación de tierras respaldada por uno o más partidos, etcétera)

ANEXO III

**PAUTA DE ENTREVISTA A DIRIGENTES
SOCIALES**

PROYECTO CLACSO-ASDI

1. ¿Cómo se autodefine su movimiento (de reivindicación, de propuesta, corporativo)?
2. ¿Desde cuándo puede considerarse un movimiento consolidado? ¿Podría destacar algunas fechas o momentos históricos, etapas en su desarrollo, fundación?
3. ¿Qué objetivos persigue?
4. ¿Cómo se organiza internamente?
5. ¿Cuáles son sus estrategias y formas concretas de lucha?
6. En cuanto al relacionamiento con los partidos políticos, ¿cómo lo caracterizaría? ¿Tienen más afinidad con algunos partidos que con otros?
7. ¿Y en cuanto al relacionamiento con el Estado?
8. Con referencia a otras organizaciones sociales, ¿cómo define su relación? ¿De coordinación, de oposición, de confrontación, de articulación permanente o esporádica?
9. ¿Qué comentarios podría hacer respecto de la democracia en su país? (Instituciones democráticas como el Parlamento, los partidos políticos, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, las libertades públicas y el ejercicio del voto, entre otras).

10. ¿Qué papel le parece que deben tener los movimientos sociales en general, y en particular aquel al que usted pertenece?
11. ¿Cómo se expresa el apoyo popular a su convocatoria? ¿Tasa de afiliación?
12. ¿Cuáles han sido las últimas movilizaciones realizadas y cómo evalúa sus resultados?
13. ¿Qué alcance territorial tiene su movimiento? ¿Cobertura nacional o regional? ¿Urbano o rural? ¿Es más fuerte en algunas zonas?
14. ¿Usted cree que su organización es autónoma? ¿Qué grado de libertad cree usted que tienen para tomar las decisiones?
15. ¿Cómo es percibida su organización por la sociedad, por la gente en general?
16. ¿Ha sido o es dirigente de un partido político o de alguna otra organización social? ¿Ha ocupado algún cargo público? ¿Se lo han ofrecido alguna vez?
17. ¿Cómo se financian las actividades de su organización?
18. ¿A qué apunta su organización a largo plazo (metas, fines últimos)?
19. ¿Usted cree que puede existir algún sistema político mejor que el democrático? ¿Por qué, cómo sería? ¿Qué papel jugarían los movimientos sociales en ese sistema?
20. ¿Qué peso piensa usted que tienen los movimientos sociales en su país?

ANEXO IV

**DIRIGENTES SOCIALES E
INFORMANTES ENTREVISTADOS**

PROYECTO CLACSO-ASDI

Aguayo, Luis. Secretario general de la MCNOC, Paraguay
Bagnati, Marcelo. Antropólogo, Argentina
Cardoso, João. Integrante del Sector Producción del MST, Brasil
Castillo, Juan. Secretario de Organización PIT-CNT, Uruguay
Chancoso, Blanca. Dirigente de ECUARUNARI-CONAIE durante 30 años, Ecuador
D'Elía, Luis. Presidente de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat-CTA, Argentina
Dután, Fausto. Dirigente de FUT durante 20 años, Ecuador
Eduardo. Integrante de MTD Lanús, Argentina
Erwin. Integrante de MTD 23 de Julio de la ciudad de Allen, Argentina
González, Juan. Secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado-CTA, Argentina
Jorajuría, Daniel. Secretario administrativo de la Mesa Ejecutiva de la CTA, Argentina
Millalén Paillal, José. Departamento juvenil (1986-1988) y miembro de la directiva nacional (1989-1991) de Ad-Mapu, Chile
Pastor De Luca. Miembro Fundador del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (vinculado con la CTA), Argentina
Porley, José. Secretario general de FUCVAM, Uruguay
Quintino, Severo. Presidente de la CUT de Rio Grande do Sul, Brasil.

OTRAS PUBLICACIONES DE CLACSO

- Mirza [comp.]
*Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina:
la construcción de nuevas democracias*
- Correa y Girón [comps.]
Reforma financiera en América Latina
- Boron y Lechini [comps.]
*Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico
Lecciones desde Asia, África y América Latina*
- *Problemas del Desarrollo* [Edición Cono Sur] Vol. 1 N° 1
Revista latinoamericana de economía
- *Nómadas* N° 24
Género y políticas públicas: desafíos de la equidad
- Alimonda [comp.]
*Los tormentos de la materia
Aportes para una ecología política latinoamericana*
- de Grammont [comp.]
La construcción de la democracia en el campo latinoamericano
- Sotolongo Codina y Delgado Díaz
*La revolución contemporánea del saber y la complejidad social
Hacia unas ciencias sociales de nuevo tipo*

- Fernández Retamar
Pensamiento de nuestra América
Autorreflexiones y propuestas
- Ceceña [coord.]
Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado
- OSAL N° 18
Los movimientos sociales. De Porto Alegre a Caracas
Dominación imperial y alternativas
Revista del Programa del Observatorio Social de América Latina de CLACSO
- Sautu, Boniolo, Dalle y Elbert
Manual de metodología
Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología
- *Socialist Register* 2005
El imperio recargado
- Mato [comp.]
Cultura, política y sociedad
Perspectivas latinoamericanas
- Cimadamore, Dean and Siqueira [eds.]
The poverty of the state
Reconsidering the role of the state in the struggle against global poverty
- Gentili y Levy [comps.]
Espacio público y privatización del conocimiento
Estudios sobre políticas universitarias en América Latina
- Hemer and Tufte [eds.]
Media and Glocal Change
Rethinking Communication for Development
- Alvarez Leguizamón [comp.]
Trabajo y producción de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe
Estructuras, discursos y actores
- de la Garza Toledo [comp.]
Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina
- Boron and Lechini [eds.]
Politics and Social Movements in an Hegemonic World
Lessons from Africa, Asia and Latin America

- Sastre
La Batalla de los Intelectuales
O Nuevo Discurso de las Armas y las Letras
- CTERA, CNTE, Colegio de Profesores, AFUTU-FENAPES y LPP
Las reformas educativas en los países del Cono Sur
Un balance crítico
- Dávalos [comp.]
Pueblos indígenas, estado y democracia
- Estay y Sánchez [coords.]
El ALCA y sus peligros para América Latina
- Sousa Santos
Reinventar la democracia. Reinventar el estado
- Estay Reyno [comp.]
La economía mundial y América Latina
Tendencias, problemas y desafíos
- Schuster
Explicación y predicción
La validez del conocimiento en ciencias sociales [reedición]
- Piñeiro
En busca de la identidad
La Acción Colectiva en los conflictos agrarios de América Latina
- Giarracca y Levy [comps.]
Ruralidades latinoamericanas
Identities and social struggles
- Fernández Retamar
Todo Caliban
- Toussaint
La bolsa o la vida
Las finanzas contra los pueblos
- Golbert
¿Hay opciones en el campo de las políticas sociales?
El caso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Grimson [comp.]
La cultura en las crisis latinoamericanas

- Babini y Fraga
Bibliotecas Virtuales para las Ciencias Sociales
- Boron [comp.]
Nueva Hegemonía Mundial
Alternativas de cambio y movimientos sociales
- Ceceña [comp.]
Hegemonías y emancipaciones en el siglo XXI
- Sader
La Venganza de la Historia
Hegemonía y contra-hegemonía en la construcción de un nuevo mundo posible
- Boron, Gambina y Minsburg [comps.]
Tiempos violentos
Neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina
- Gómez [comp.]
América Latina y el (des)orden global neoliberal
Hegemonía, contrahegemonía, perspectivas
- Chiapas N° 16
[Edición Argentina]
- Torres Ribeiro [comp.]
El rostro urbano de América Latina
- Guerrero Cazar y Ospina Peralta
El poder de la comunidad
Ajuste estructural y movimiento indígena en los Andes ecuatorianos
- Riquelme
Los sin tierra en Paraguay
Conflictos agrarios y movimiento campesino
- Seoane [comp.]
Movimientos sociales y conflicto en América Latina
- De Barbieri
Género en el trabajo parlamentario
La legislatura mexicana a fines del siglo XX
- de la Garza Toledo y Salas [comp.]
Nafta y Mercosur
Procesos de apertura económica y trabajo

- Boron
Estado, capitalismo y democracia en América Latina
- Sader y Gentili [comps.]
La trama del neoliberalismo
Mercado, crisis y exclusión social
- Boron [comp.]
Filosofía política contemporánea
Controversias sobre civilización, imperio y ciudadanía
- Alabarces [comp.]
Futbologías
Fútbol, identidad y violencia en América Latina
- Ayerbe
O Occidente e o “Resto”
A América Latina e o Caribe na cultura do Império
- Mollis [comp.]
Las universidades en América Latina:
¿reformadas o alteradas? La cosmética del poder financiero
- Gadotti, Gómez y Freire [comps.]
Lecciones de Paulo Freire
Cruzando fronteras: experiencias que se completan
- Briceño-León [comp.]
Violencia, sociedad y justicia en América Latina
- Levy [comp.]
Crisis y conflicto en el capitalismo latinoamericano:
lecturas políticas
- Schorr, Castellani, Duarte y Debrott Sánchez
Más allá del pensamiento único
Hacia una renovación de las ideas económicas en América Latina
y el Caribe
- Singer
Izquierda y derecha en el electorado brasileño:
la identificación ideológica en las disputas presidenciales de 1989 y 1994
- López Maya
Protesta y cultura en Venezuela:
los marcos de acción colectiva en 1999

- Mato [comp.]
Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas en cultura y poder
- Boron
Imperio & Imperialismo
Una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri
- Boron y de Vita [comps.]
Teoría y filosofía política
La recuperación de los clásicos en el debate latinoamericano
- Alimonda [comp.]
Ecología política
Naturaleza, sociedad y utopía
- Gambina [comp.]
La globalización económico-financiera
Su impacto en América Latina
- Ceceña y Sader [comp.]
La guerra infinita
Hegemonía y terror mundial
- Ivo
Metamorfoses da questão democrática
Governabilidade e pobreza
- de la Garza Toledo y Neffa [comp.]
El futuro del trabajo. El trabajo del futuro
- de la Garza Toledo [comp.]
Los sindicatos frente a los procesos de transición política
- Barrig
El mundo al revés:
imágenes de la mujer indígena
- Torres [comp.]
Paulo Freire y la agenda de la educación latinoamericana en el siglo XXI
- Lanzaro [comp.]
Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina
- Mato [comp.]
Estudios latinoamericanos sobre cultura y transformaciones sociales en tiempos de globalización 2

- Mato [comp.]
Estudios latinoamericanos sobre cultura y transformaciones sociales en tiempos de globalización
- de Sierra [comp.]
Los rostros del Mercosur
El difícil camino de lo comercial a lo societal
- Seoane y Taddei [comp.]
Resistencias mundiales
De Seattle a Porto Alegre
- Sader [comp.]
El ajuste estructural en América Latina
Costos sociales y alternativas
- Ziccardi [comp.]
Pobreza, desigualdad social y ciudadanía
Los límites de las políticas sociales en América Latina
- Midaglia
Alternativas de protección a la infancia carenciada
La peculiar convivencia de lo público y privado en el Uruguay
- Giarracca [comp.]
¿Una nueva ruralidad en América Latina?
- Boron [comp.]
Teoría y filosofía política
La tradición clásica y las nuevas fronteras
- Boron
Tras el búho de Minerva
Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo
- Balardini [comp.]
La participación social y política de los jóvenes en el horizonte del nuevo siglo
- Boron [comp.]
La filosofía política clásica
De la antigüedad al renacimiento
- Boron [comp.]
La filosofía política moderna
De Hobbes a Marx

- Várnagy [comp.]
Fortuna y virtud en la república democrática
Ensayos sobre Maquiavelo
- Torres Ribeiro [comp.]
Repensando la experiencia urbana en América Latina:
cuestiones, conceptos y valores
- de la Garza Toledo [comp.]
Los retos teóricos de los estudios de trabajo hacia el siglo XXI
- Gentili y Frigotto [comps.]
La ciudadanía negada
Políticas de exclusión en la educación y el trabajo
- de la Garza Toledo [comp.]
Reestructuración productiva, mercado de trabajo y sindicatos en
América Latina
- Alabarces [comp.]
Peligro de gol
Estudios sobre deporte y sociedad en América Latina
- Lander [comp.]
La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales
Perspectivas latinoamericanas
- Strasser
Democracia & desigualdad
Sobre la “democracia real” a fines del siglo XX

Se terminó de imprimir en el mes de junio de 2006
en los talleres de Gráficas y Servicios S. R. L.
Sta. María del Buen Aire 347 (1277)
Primera impresión, 2.500 ejemplares

Impreso en Argentina